

# **Competencia cívica y actitudes hacia el Estado del Bienestar:**

La opinión pública de los ciudadanos españoles

TESIS DOCTORAL

Sergi Blancafort Alias

Julio 2012



# **Competencia cívica y actitudes hacia el Estado del Bienestar:**

La opinión pública de los ciudadanos españoles

TESIS DOCTORAL

Sergi Blancafort Alias

Directores:

Dr. Josep Lluís Espluga Trenc  
Dr. Albert Jorge Jovell Fernández

Programa de Doctorado en Sociología  
Departament de Sociologia  
Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia  
Universitat Autònoma de Barcelona

Julio 2012



*A la meva família*

*“Life is better in the high-civic-literacy society”*

(Henry Milner: “Civic literacy”, pg. 147)



---

1.	PRESENTACIÓN .....	1
2.	ESTADO DE LA CUESTIÓN .....	5
2.1.	La competencia cívica .....	5
2.1.1.	Competencias para el siglo XXI.....	5
2.1.2.	La cultura cívica: el compromiso con la vida pública .....	6
2.1.3.	Un mapa conceptual.....	9
2.1.4.	¿Cómo se mide la competencia cívica?.....	21
2.1.5.	Dimensiones e indicadores de competencia cívica.....	26
2.1.6.	El desarrollo de la competencia cívica .....	38
2.1.7.	Nivel educativo, estado de salud y competencia cívica .....	43
2.2.	Actitudes hacia el Estado del Bienestar .....	49
2.2.1.	Del “Estado del Bienestar” a los “Estados del Bienestar” .....	49
2.2.2.	El EB y la percepción de riesgo e inseguridad de la ciudadanía .....	52
2.2.3.	Las actitudes de la ciudadanía hacia el EB.....	54
2.2.4.	Dimensiones e indicadores de apoyo a las políticas de bienestar .....	60
2.2.5.	La intensidad del EB: impuestos y gasto social .....	62
2.2.6.	EB, desigualdad y gasto público .....	66
2.2.7.	Las consecuencias de la desigualdad .....	69
2.2.8.	Desigualdad, confianza y actitudes hacia el EB.....	72
2.2.9.	Desigualdad, competencia cívica y actitudes hacia el EB.....	75
3.	OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y MODELO DE ANÁLISIS .....	81
3.1.	Objetivo general y objetivos específicos .....	81
3.2.	Justificación teórica de los conceptos y construcción del modelo de análisis....	82
3.2.1.	Justificación teórica del concepto de competencia cívica .....	82

3.2.2. Justificación teórica de las actitudes y expectativas de futuro hacia el EB..	84
3.2.3. Modelo de análisis propuesto .....	86
3.3. Hipótesis de trabajo.....	88
4. METODOLOGÍA.....	91
4.1. Elección del método de recogida de datos .....	91
4.2. Diseño del cuestionario .....	93
4.3. Selección de la muestra.....	95
4.4. Desarrollo del trabajo de campo .....	97
4.5. Análisis .....	99
4.5.1. Descripción, categorización y operacionalización de las variables de análisis .....	99
4.5.2. Método de análisis .....	103
5. RESULTADOS.....	111
5.1. Relación entre el nivel educativo y el estado de salud, y el nivel de competencia cívica .....	113
5.1.1. Participación en organizaciones de voluntariado .....	113
5.1.2. Valores cívicos .....	114
5.1.3. Participación política no convencional.....	119
5.1.4. Participación electoral.....	120
5.1.5. Interés en asuntos políticos y sociales .....	122
5.1.6. Eficacia política interna .....	123
5.1.7. Confianza institucional .....	125
5.2. Actitudes hacia el EB.....	133
5.2.1. Actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales .....	133
5.2.2. Percepción de inseguridad socioeconómica en el futuro .....	141



---

5.2.2. Percepción de riesgo en el futuro .....	146
5.3. Una tipología de los ciudadanos españoles en base a las variables de análisis	153
5.3.1. Análisis de correspondencias múltiples .....	153
5.3.2. Análisis de clústers .....	157
6. DISCUSIÓN .....	163
6.1. Influencia del nivel educativo y el estado de salud en la competencia cívica ..	163
6.1.1. Las dimensiones de la competencia cívica: comentarios generales .....	163
6.1.2. Influencia del nivel educativo.....	167
6.1.3. Influencia del estado de salud .....	170
6.1.4. Influencia de las características sociodemográficas.....	171
6.2. Actitudes hacia el Estado del Bienestar .....	175
6.2.1. Actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales .....	175
6.2.2. Expectativas de futuro hacia el Estado del Bienestar .....	179
6.3. Una tipología de ciudadanos españoles en base a su competencia cívica .....	182
7. CONCLUSIONES.....	185
7.1. Respecto a los objetivos marcados .....	185
7.2. Implicaciones para las políticas públicas .....	188
7.2.1. La desafección política y la participación ciudadana .....	188
7.2.2. El discurso político de la corresponsabilidad .....	191
7.2.3. La “brecha” de la competencia cívica.....	193
7.2.4. La competencia cívica y el apoyo al Estado del Bienestar .....	194
7.2.5. Las políticas públicas en educación y salud: ¿gasto o inversión? .....	196
7.3. Aportaciones y limitaciones del estudio .....	200
7.3.1. Aportaciones del estudio.....	200

7.3.2. Limitaciones del estudio .....	201
7.4. Líneas futuras de investigación .....	202
8. BIBLIOGRAFIA .....	205
9. ANEXOS.....	227
9.1. Cuestionario sobre alfabetización sanitaria y competencia cívica.....	227
9.2. Resultados del análisis de correspondencias múltiples para la competencia cívica y las variables sociodemográficas.....	239

# 1. PRESENTACIÓN

Durante los últimos años, la mayor parte de países europeos está sufriendo una grave crisis económica. Los datos del Eurostat del año 2009 –publicados en el 2011- indican que España es uno de los países de Europa donde la desigualdad es mayor. La crisis ha tenido como consecuencias un aumento de las situaciones de pobreza y exclusión social, y la implementación de medidas que suponen importantes recortes en servicios públicos como la educación y la sanidad.

Estos factores, junto a la velocidad y complejidad de los cambios que han afectado y transformado nuestra sociedad, el debilitamiento de los vínculos sociales y familiares, y la creciente desafección política y pérdida de confianza en las instituciones públicas, han promovido un aumento de la percepción de la inseguridad social y económica.

Según François Audigier, la necesidad de promover la educación cívica se invoca generalmente en tiempos de crisis. Por parte de las instituciones se viene realizando desde hace tiempo un discurso de la corresponsabilidad, que demanda un mayor compromiso de los ciudadanos hacia la vida pública, pero que también puede ser utilizado para legitimar programas de reforma y reestructuración de servicios públicos y de bienestar.

Diferentes estudios han evidenciado la relación entre el nivel educativo y la competencia cívica, así como entre aspectos vinculados al capital social y el estado de salud. Otras investigaciones también han mostrado los efectos de los recortes en la creación de desigualdades en el acceso a la educación y a la asistencia sanitaria. Sin embargo, la relación entre las desigualdades en el nivel de competencia cívica y las actitudes hacia el Estado del Bienestar (EB), no ha sido generalmente objeto de la investigación académica.

Por otro lado, el nivel de desarrollo del EB tiene una gran relevancia en la percepción de seguridad por parte de la ciudadanía. Por ello, en un momento en el que la educación y la sanidad se ven afectadas por amplios recortes del gasto público, resulta de interés analizar una posible relación entre el nivel educativo, el estado de salud y el

nivel de competencia cívica, así como la influencia que éstos elementos pueden tener en las actitudes de la ciudadanía y sus expectativas de futuro hacia el EB.

De manera específica, esta tesis doctoral pretende responder a las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es relación que existe entre el nivel educativo y el estado de salud de los ciudadanos españoles, y su nivel de competencia cívica?
- ¿Cómo influyen el nivel educativo, el estado de salud y la competencia cívica, en las actitudes y expectativas de futuro de los ciudadanos hacia el Estado del Bienestar?
- ¿Es posible identificar grupos o perfiles de ciudadanos españoles en base a su nivel de competencia cívica y a sus actitudes y expectativas de futuro hacia el Estado del Bienestar?

Como valor añadido de cara a la realización de esta tesis doctoral, el autor quiere destacar su vinculación profesional con la Fundación Josep Laporte, una institución de la Universidad Autónoma de Barcelona cuyo principal objetivo es la gestión del conocimiento en ciencias de la salud. A lo largo de su trayectoria, esta institución ha desarrollado diferentes proyectos de investigación con pacientes y usuarios de la sanidad. La Fundación Josep Laporte también ha promovido iniciativas como la Universidad de los Pacientes, un proyecto creado en el 2006 con la finalidad de atender las necesidades de información y conocimiento de pacientes y ciudadanos sobre temas relacionados con la salud, y el Foro Español de Pacientes, una organización creada en el 2004 para actuar como interlocutor de las organizaciones de pacientes españoles ante el resto de agentes sanitarios. La vinculación profesional del autor de esta tesis doctoral con la Fundación Josep Laporte ha permitido el acceso a trabajo de campo mediante la realización de proyectos de investigación con diferentes instituciones. Concretamente, el presente trabajo se ha desarrollado a partir de una encuesta sobre “Alfabetización sanitaria y competencia cívica” realizada por la Fundación Josep Laporte y el Foro Español de Pacientes, con la colaboración de MSD España.

Esta tesis doctoral se organiza en seis bloques principales. En primer lugar se presenta el marco teórico, en el que se ha realizado una extensa revisión de la literatura sobre la competencia cívica y las actitudes hacia el Estado del Bienestar. A continuación se construyen, a partir de esta revisión, el marco conceptual y analítico, los objetivos generales y específicos del estudio, y se formulan las hipótesis de trabajo. En el siguiente apartado se presenta el método de campo y de análisis utilizados. Posteriormente se presentan los resultados obtenidos y se realiza un análisis comparado en base a anteriores investigaciones. Finalmente, en el último apartado se presentan las conclusiones obtenidas, las principales implicaciones para las políticas sociales, las aportaciones y limitaciones del estudio, y posibles líneas futuras de investigación.

El autor desea agradecer a la Fundación Josep Laporte la oportunidad de realizar esta tesis doctoral, así como al Dr. Josep Espluga y al Dr. Albert J. Jovell, el soporte y el asesoramiento recibidos.



## **2. ESTADO DE LA CUESTIÓN**

Este apartado está dividido en dos bloques principales: el primero está centrado en la competencia cívica y el segundo en las actitudes hacia el EB.

En el primer bloque, se ha realizado una extensa revisión de la literatura para analizar y entender el concepto de competencia cívica y otros términos relacionados como el compromiso cívico, el capital social o la alfabetización cívica. También se describen las dimensiones e indicadores de la competencia cívica, y cómo se han medido a través de diferentes proyectos y programas de ámbito europeo e internacional. Finalmente, se dedica un amplio espacio a analizar cómo los diferentes autores explican el desarrollo de la competencia cívica, y cuáles son los principales factores explicativos, con un énfasis especial –de acuerdo a los objetivos de la tesis– en el nivel educativo y el estado de salud.

El segundo bloque se inicia con un breve repaso a la evolución del EB, las principales líneas de investigación sobre las actitudes de los ciudadanos hacia el EB, y los principales factores explicativos. Se realiza un análisis detallado de aquellos aspectos relacionados con la intensidad del EB, y de manera especial con la actitud de la ciudadanía hacia los impuestos y el gasto social. Finalmente, se exploran las causas y consecuencias de la desigualdad, así como su relación con el gasto público y con la competencia cívica.

### **2.1. La competencia cívica**

#### **2.1.1. Competencias para el siglo XXI**

Nuestra sociedad ha experimentado una transformación enorme en poco tiempo. Los cambios de los últimos 25 años han comportado avances de mayor calado y magnitud que los registrados antes durante un siglo. Dejamos atrás la era de la revolución industrial y post-industrial para situarnos en la era de la información. La globalización y la modernización han creado un mundo en el que los datos y las comunicaciones fluyen a diario de manera vertiginosa. Y las personas necesitan adquirir y desarrollar

una serie de competencias que les permitan adaptarse a un entorno caracterizado por el cambio, la complejidad y la interdependencia, en el que la tecnología cambia rápida y continuamente y las sociedades se transforman hacia nuevas formas más diversas y fragmentadas.

Durante los últimos años, diferentes expertos e instituciones han intentado sistematizar las principales competencias que los ciudadanos deben adquirir y desarrollar para afrontar la complejidad de la sociedad actual (Trilling y Fadel, 2009; Leitch Review of Skills, 2006). El proyecto “Definición y Selección de competencias: Fundamentos Teóricos y Conceptuales” (DeSeCo), auspiciado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2005), sistematizó las competencias clave que deben adquirir las personas en tres grandes categorías: la capacidad de utilizar un amplio número de herramientas para interactuar de manera adecuada con el entorno; la capacidad de comunicarse con personas de orígenes muy diversos; y la capacidad de actuar de manera autónoma, tomando la responsabilidad de manejar sus propias vidas. Rychen y Salganik (2001:43), en el marco del proyecto DeSeCo, habían definido una competencia como “la capacidad de afrontar de una manera adecuada demandas complejas en un contexto particular, mediante la movilización de prerrequisitos psicosociales que incluyen aspectos cognitivos y no cognitivos”. Sin embargo, establecer los componentes de una determinada competencia no resulta fácil, puesto que las definiciones de conocimientos, habilidades, actitudes y valores no están consensuadas y habitualmente se solapan (Weinert, 2001). En cualquier caso, la adquisición de conocimientos y habilidades son las condiciones fundamentales para una ciudadanía comprometida y beneficiosa para el conjunto de la sociedad (Galston, 2001).

### **2.1.2. La cultura cívica: el compromiso con la vida pública**

Alexis de Tocqueville, en su clásico “Democracia en América” (1989), señala que la democracia y el bienestar de cualquier sociedad están fundamentadas, independientemente de su estructura política, en la participación ciudadana y en las acciones cívicas individuales y colectivas.



Las concepciones sobre lo que es ser un buen ciudadano reflejan los valores sociales y las normas internalizadas por los individuos, y moldean previsiblemente sus actuaciones en la esfera pública (Conover, Crewe y Searing, 1991). Westheimer y Kahne (2003) diferencian entre tres tipos de ciudadanos en función de su orientación cívica: el ciudadano responsable, que participa en la sociedad mediante acciones de tipo individual, como por ejemplo el voluntariado en una asociación; el ciudadano participativo, que se implica en el proceso político con el objetivo de tratar asuntos que afectan a la comunidad; y el ciudadano orientado a la justicia, que asume un rol de liderazgo para luchar contra aspectos relacionados con la injusticia social.

Jovell (2007) señala que ser miembros de una comunidad otorga derechos que llevan asociadas obligaciones hacia los demás y hacia el bien público, y considera que una parte importante de la crisis de confianza que afecta a las sociedades contemporáneas deriva de la huida hacia el individualismo y del abandono de las obligaciones mutuas colectivas. En el primer caso, la primacía de lo individual sobre lo colectivo dificulta la visión de los bienes públicos como algo que se debe compartir y cuidar, y que además otorga derechos y obligaciones compartidas. Por otro lado, el abandono de las obligaciones mutuas colectivas vendría determinado por la ausencia de una educación en valores cívicos, y por una transferencia de la responsabilidad cívica hacia la política.

Ciertamente, durante los últimos años se ha observado un descenso de las tasas de participación política y social, expresado a través del declive de una serie de actitudes y comportamientos directamente asociados a ella: niveles crecientes de abstención electoral y descenso de afiliaciones en organizaciones políticas tradicionales como partidos políticos o sindicatos, etc. Estos fenómenos se enmarcan en la denominada desafección política, caracterizada por el distanciamiento, la pérdida de interés y/o la indiferencia hacia la política y la esfera pública por parte de muchos ciudadanos, la pérdida de la confianza en las instituciones públicas, menores niveles de participación política, sentimientos de ineficacia política, evaluaciones negativas de las instituciones políticas y sus representantes, y menores tasas de asociacionismo (Pharr y Putnam, 2000; Torcal y Montero, 2006; De la Torre, 2007).

Esta desafección política ha sido interpretada como una consecuencia del individualismo y el denominado “privatismo cívico” (Ackerman y Fishkin, 2003; Bellah, 1999), mientras que para otros es una consecuencia de la crisis de la política elitista, que da lugar a nuevas formas de participación política impulsadas desde la base (Inglehart, 1997).

Según Audigier (1993), la necesidad de promover la educación cívica se invoca generalmente en tiempos de crisis. El interés por la educación cívica o la educación para la ciudadanía ha aumentado durante los últimos años, como un elemento que, según Naval y Jover (2006), puede contribuir a la resolución de problemas relacionados y derivados de la globalización, la diversidad étnica, la falta de compromiso cívico, el debilitamiento de los lazos sociales y familiares, y la falta de responsabilidad hacia los bienes y recursos públicos, entre otros.

En su clásico estudio sobre la cultura política, Almond y Verba (1963:5) definen la cultura cívica de un país como “la manera como los dirigentes políticos toman sus decisiones, así como las normas y actitudes del ciudadano corriente, sus relaciones con el gobierno y con los demás ciudadanos”. La cultura cívica de un país influye en el desarrollo de la competencia cívica. A su vez, en la cultura cívica influyen factores ligados a la historia sociopolítica y a los años de democracia transcurridos ininterrumpidamente. Este último factor está asociado a niveles más altos de participación democrática y a una mayor tolerancia (Van Deth, Montero y Westholm, 2007), y permiten explicar la diferencia que existe en el grado de participación ciudadana entre España (y otros países del Sur o del Este de Europa) y los países nórdicos y de Europa Central (Montero, Westholm y Van Deth, 2007).

Diferentes estudios también han mostrado que la educación cívica ha contribuido a desarrollar conocimientos y habilidades relacionados con la competencia cívica en diferentes países (Niemi y Junn, 1998; Slomczynski y Shabad, 1998). En España, el desarrollo de la investigación en el área de la educación para la ciudadanía ha estado tradicionalmente asociada a su presencia como asignatura en el sistema educativo, lo cual ha sido considerado frecuentemente un tema de controversia política (Jover y Naval, 2008).

### 2.1.3. Un mapa conceptual

La competencia cívica, la alfabetización cívica, el compromiso cívico, la ciudadanía activa o el capital social son términos utilizados frecuentemente en la literatura internacional sobre sociología política y educación. A menudo, los mismos términos son definidos de manera distinta por parte de diferentes autores. Y en otras ocasiones, los autores utilizan diferentes términos para referirse a los mismos conceptos, lo cual genera cierta confusión. Además, la compleja traducción e interpretación de algunos de estos términos a partir del idioma original también ha dificultado su denominación en castellano.

#### *La competencia cívica*

Tal y como se muestra en la Tabla 1, la competencia cívica ha sido considerada por la Unión Europea (2006) como una de las 8 competencias necesarias para promover el desarrollo económico y conseguir una mayor inclusión social.

Tabla 1: Competencias clave para el aprendizaje permanente

Comunicación en la lengua materna
Comunicación en lenguas extranjeras
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
Competencia digital
Aprender a aprender
Competencias sociales y cívicas
Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa
Conciencia y expresión culturales

*Fuente: Unión Europea (2006)*

En su recomendación del 18 de diciembre de 2006, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea establecieron la siguiente definición de competencia cívica:

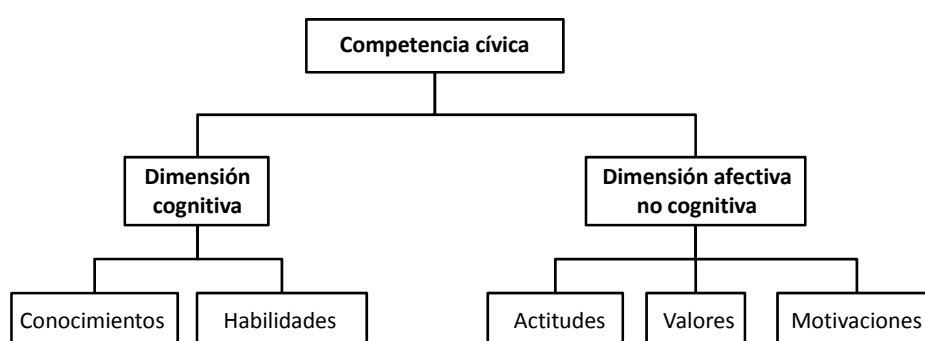
*“La competencia cívica se basa en el conocimiento de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, así como de su formulación en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, y de su*

*aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Ello incluye el conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así como de los acontecimientos más destacados y de las principales tendencias en la historia nacional, europea y mundial. También debería desarrollarse la conciencia de los objetivos, valores y políticas de los movimientos sociales y políticos. El conocimiento de la integración europea y de las estructuras de la UE y sus principales objetivos y valores es asimismo esencial, así como la conciencia de la diversidad e identidades culturales de Europa. [...] Las capacidades de competencia cívica están relacionadas con la habilidad para interactuar eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los problemas que afecten a la comunidad, ya sea local o más amplia. Conlleva la reflexión crítica y creativa, y la participación constructiva en las actividades de la comunidad o del vecindario, así como la toma de decisiones a todos los niveles, local, nacional o europeo, en particular mediante el ejercicio del voto”.*

Según el *Partnership for 21st century skills* (Trilling y Fadel, 2009), la competencia cívica hace referencia a un conjunto de actividades que incluyen participar e implicarse en la vida civil y comunitaria, mantenerse informado y entender los procesos políticos y administrativos, ejercer derechos y obligaciones como ciudadanos y entender las implicaciones locales y globales de las decisiones cívicas. Otros autores han definido la competencia cívica como “el conjunto de conocimientos, valores, actitudes y prácticas que las personas adquieren a lo largo de su vida para convertirse en ciudadanos que participan de una manera efectiva en las sociedades democráticas” (Mainguet y Baye, 2006), “la capacidad de los ciudadanos para realizar un uso justificado y adecuado de los recursos públicos” (Jovell, 2006a), o “el conjunto de habilidades que permite tomar conciencia y discutir sobre asuntos públicos, así como participar en los procesos de toma de decisiones” (Zarcadoolas, Pleasant y Greer, 2006).

Utilizando la definición de competencia establecida por Rychen y Sagalnik (2001) y mencionada anteriormente, Hoskins, Villalba, Nijlen, et al (2008) han desarrollado y clasificado la competencia cívica en cinco dimensiones: conocimientos, habilidades, actitudes, valores y motivaciones o comportamientos (ver Gráfico 1). Estas dimensiones se relacionan con los ámbitos de la ciudadanía, la justicia social, la participación y el conocimiento de instituciones democráticas.

Gráfico 1: Dimensiones de la competencia cívica



Fuente: Modificado de Hoskins, Villalba, Nijlen, et al (2008)

### *La ciudadanía activa*

La ciudadanía activa ha sido definida por parte de diferentes autores desde una perspectiva política. Así, para Weerd, Gemmeke, Richter et al (2005), es “un conjunto ecléctico de actividades participativas, entre las que se incluye la participación política”. Otras definiciones, en cambio, han dado mayor peso a la acción voluntaria o comunitaria (Irish Government Taskforce, 2007).

Otros autores han integrado la perspectiva comunitaria y política en el concepto de ciudadanía activa. Crick (2003) define la educación para la ciudadanía activa como “el aprendizaje de la responsabilidad social y moral, la implicación en la comunidad y la alfabetización política”. En el ámbito anglosajón, el informe Crick (QCA, 1998) -en el Reino Unido-, y el documento elaborado por el *National Center for Learning and Citizenship* (Torney-Purta y Vermeer Lopez, 2006) -en los Estados Unidos- han

establecido los parámetros conceptuales de la educación para la ciudadanía democrática.

En el ámbito institucional europeo, la utilización del término “ciudadanía activa” es anterior a la de “competencia cívica”, y ha estado tradicionalmente más relacionada con el ámbito educativo. El Consejo Europeo promovió el desarrollo de la ciudadanía activa (“*Active Citizenship*”) como uno de los objetivos de futuro de los sistemas educativos (Education Council, 2001), así como su monitorización a través del desarrollo de indicadores (Council of Europe, 2005). La adición del término “*active*” refuerza la acción individual para referirse a diversas formas de participación que deberían ser promovidas con el fin de asegurar el mantenimiento de la democracia representativa y participativa, reducir la distancia entre la ciudadanía y las instituciones gubernamentales, y aumentar la cohesión social (Hoskins y Mascherini, 2009).

Autores como Veldhuis (1997) y Audigiers (2000) han desarrollado trabajos para el Consejo Europeo centrados en la educación para la ciudadanía democrática. A partir de estos trabajos previos, y en el marco del proyecto “*Active Citizenship for Democracy*”, Hoskins (2006), por un lado, y Abs y Veldhuis (2006), por otro lado, crearon un inventario de competencias necesarias para ejercer la ciudadanía activa (ver Tabla nº2).

Tabla 2: Competencias para el desarrollo de una ciudadanía activa

	<b>Hoskins (2006)</b>	<b>Abs y Veldhuis (2006)</b>
<b>Conocimientos</b>	Derechos humanos y responsabilidades; Alfabetización política; Conocimientos históricos; Asuntos de actualidad; Diversidad; Patrimonio cultural; Asuntos legales; Cómo influir en la política y en la sociedad	Sistema legal y político; Democracia; Rol de los medios de comunicación; Función de las asociaciones de voluntariado; Historia; Cultura; Asuntos de actualidad
<b>Habilidades</b>	Resolución de conflictos; Competencia intercultural; Toma de decisiones informadas; Creatividad; Cómo influir en la política y en la sociedad; Capacidad para investigar; Representación; Autonomía; Reflexión crítica; Comunicación; Debate; Escucha activa; Resolución de problemas; Afrontar la ambigüedad; Trabajo en equipo; Valoración del riesgo.	Reflexión crítica; Comunicación; Capacidad de persuasión y de construir alianzas; Resolución de conflictos; Interculturalidad
<b>Actitudes</b>	Confianza política; Interés político; Eficacia política; Autonomía e independencia; Resiliencia; Respeto por otras culturas; Apertura al cambio y a las diferencias de opinión; Responsabilidad y apertura hacia el compromiso como ciudadanos activos; Influencia en la política y en la sociedad.	Responsabilidad; Auto-eficacia; Confianza; Apertura al cambio
<b>Valores</b>	Derechos humanos: Democracia; Igualdad de género; Sostenibilidad; Paz/rechazo a la violencia; Justicia e igualdad; Compromiso como ciudadanos activos.	Creencia en la democracia y en las normas legales; igualdad; Justicia social; Derechos humanos; Libertad; Transparencia; Desarrollo sostenible; Respeto por las diferencias

*Fuente: Elaboración propia a partir de Hoskins (2006) y Abs y Veldhuis (2006)*

Por su parte, Hoskins y Mascherini (2009) proponen un modelo de ciudadanía activa formado por cuatro dimensiones. La Tabla 3 muestra los indicadores que integran cada una de estas cuatro dimensiones.

Tabla 3: Dimensiones e indicadores de ciudadanía activa

Dimensiones	Indicadores
Protesta y cambio social	Participación en actividades de protesta Participación en organizaciones sindicales, medioambientales o pro-derechos humanos.
Vida comunitaria	Ayuda benéfica no organizada Participación en organizaciones de tipo religioso, corporativo, deportivo, cultural, etc.
Democracia representativa	Participación en partidos políticos Participación en las elecciones mediante el voto Representación de mujeres en el parlamento.
Valores democráticos	Tolerancia intercultural Respeto hacia los derechos humanos Importancia de participar en la vida democrática y/o comunitaria

*Fuente: Hoskins y Mascherini, 2009*

En la primera dimensión se incluyen actividades orientadas a la protesta y el cambio social. Según Ogris y Westphal (2006), este tipo de actividades corresponden a formas no convencionales de participación que tienen como objetivo influir en el desarrollo de las políticas públicas (manifestaciones, huelgas o boicots), así como la participación en algunas organizaciones del tercer sector orientadas a promover la rendición de cuentas y el cambio social.

En la segunda dimensión se incluyen aquellas actividades relacionadas con valores como la solidaridad y la beneficiencia, así como la participación en organizaciones del tercer sector que contribuyen a promover diferentes aspectos relacionados con la vida comunitaria.



En la dimensión de la democracia representativa se incluyen aquellas actividades que representan formas convencionales de participación política, como la participación en las elecciones o la afiliación a partidos políticos. Los autores incluyen en esta dimensión la representación de mujeres en el parlamento, debido a su relación con el valor de la igualdad de género.

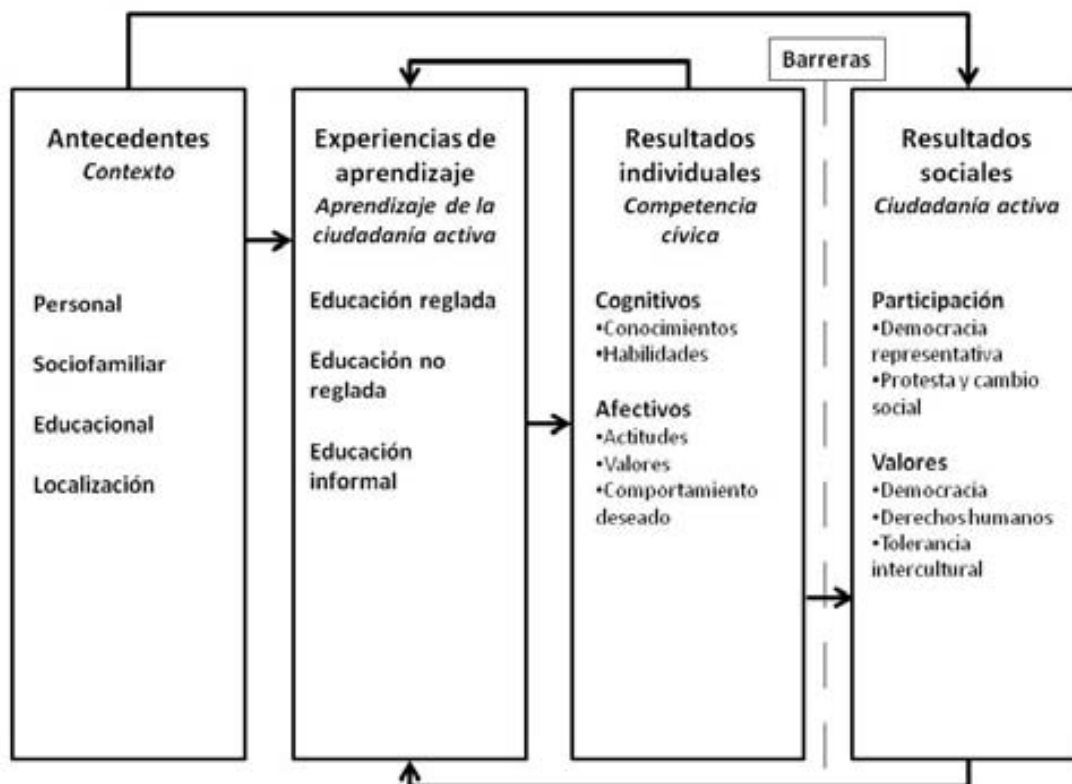
Finalmente, la cuarta dimensión de este modelo hace referencia a los valores cívicos y democráticos. En este apartado se incluyen indicadores relacionados con el respeto a los derechos humanos, la tolerancia y la participación en la vida democrática. Este último aspecto representa valores relacionados con la importancia que tiene para un ciudadano participar en las elecciones, en actividades de voluntariado o desarrollar una opinión independiente.

La relación entre los conceptos de competencia cívica y ciudadanía activa está claramente establecida en diversos trabajos realizados por Bryony L. Hoskins (Hoskins, Barber, Van Nijlen et al, 2011; Hoskins y Deakin Crick, 2010; Hoskins y Mascherini, 2009; Hoskins, Villalba, Van Nijlen et al, 2008). Este autor define la competencia cívica como “el conocimiento, las habilidades, las actitudes y los valores necesarios que permiten a las personas ser ciudadanos activos”, mientras que el término “ciudadanía activa” hace referencia a “la participación en la sociedad civil, en la comunidad y/o en la vida política, caracterizada por el respeto mutuo y la no violencia, y de acuerdo a los derechos humanos y a la democracia”.

El modelo de Hoskins, Villalba, Van Nijlen et al (2008), descrito en el Gráfico 2, muestra la relación entre aprendizaje, competencia cívica y ciudadanía activa. Tal y como se describe en otro apartado, el proceso de aprendizaje que configura la competencia cívica depende de una serie de variables entre las que se encuentran las oportunidades educativas, las características personales o el entorno socio-familiar. Por lo tanto, la competencia cívica es entendida como un resultado del proceso de aprendizaje, mientras que la ciudadanía activa es entendida como resultado de la competencia cívica. Sin embargo, la competencia cívica sería para Hoskins una condición necesaria pero no suficiente para ejercer una ciudadanía activa. Así, existen ciertas barreras que pueden impedir el ejercicio de una acción o compromiso cívico a aquellas personas

que tienen los conocimientos, habilidades, actitudes y valores necesarios relacionados con la competencia cívica.

Gráfico 2: Relación entre competencia cívica y ciudadanía



Fuente: Modificado de Hoskins, Villalba, Van Nijlen et al (2008)

### El compromiso cívico

En el ámbito anglosajón, diferentes autores como David E. Campbell o Jonathan Zaff utilizan el término “compromiso cívico” para referirse a un conjunto de acciones o comportamientos que están relacionados con la competencia cívica o la ciudadanía activa. Así, David E. Campbell (2006) se refiere al “compromiso cívico y social” como un concepto integrado por siete dimensiones (ver Tabla 4).

Tabla 4: Dimensiones del compromiso cívico

<b>Dimensión</b>	<b>Definición/descripción</b>
Compromiso político	Actividad que tiene como objetivo influir en las políticas públicas.
Compromiso cívico	Actividad comunitaria que no tiene como objetivo principal influir en las políticas públicas.
Participación electoral	Voto en las elecciones
Confianza interpersonal	Confianza en otras personas
Confianza institucional	Confianza en las instituciones, el gobierno y los partidos políticos.
Tolerancia	Predisposición a reconocer los derechos civiles de todos los grupos poblacionales
Conocimiento político	Conocimiento sobre instituciones y procesos democráticos.

*Fuente: Modificado de Campbell (2006)*

La distinción realizada por Campbell entre “compromiso político” y “compromiso cívico”, es similar a la establecida en el estudio clásico de Verba, Scholzman y Nie (1995) entre participación política y participación cívica, que será analizada más adelante. Por su parte, Zaff, Kawashima-Ginsberg y Lin (2011), distinguen entre participación cívica y compromiso cívico. La participación cívica se limita al comportamiento del individuo, y se expresa en acciones como la participación en una actividad de voluntariado o en una actividad política. En el compromiso cívico confluyen, además de la participación cívica, una serie de elementos adicionales que definen a un ciudadano activo y comprometido tal y como ha sido definido por diferentes autores (Bobek, Zaff, Li et al, 2009; Zaff, Boyd, Li et al, 2010; Zaff, Hart, Flanagan et al, 2010): la autoeficacia cívica, el deber cívico y la relación con la comunidad.

### *El capital social*

El concepto de capital social ha adquirido en las dos últimas décadas una gran relevancia a partir de las aportaciones pioneras realizadas por Bourdieu (1986) y Coleman (1988), quienes lo consideran como un recurso propio del individuo o de la estructura social, respectivamente. Sin embargo, la popularización de este término ha

venido de la mano de Robert J. Putnam, quien sobre la base del estudio clásico de Alexis de Tocqueville sobre la democracia en América, realizó estudios sobre el capital social como factor clave de prosperidad en una región italiana (Putnam, 1993) y sobre su declive en Estados Unidos como consecuencia del debilitamiento de los vínculos comunitarios (Putnam, 2000). Putnam entiende el capital social como “el conjunto de características de la organización social, tales como las redes, las normas y la confianza, que facilitan la coordinación y la cooperación para un mutuo beneficio”.

Los indicadores más habituales del capital social suelen referirse a las tasas de asociacionismo y a ciertos niveles de confianza (Font, Montero y Torcal, 2006). Para Putnam, la participación en redes sociales formales o informales constituye el núcleo del concepto de capital social, mientras que la confianza social sería una consecuencia del capital social. En cambio, Fukuyama (1996) considera a la confianza social como el elemento principal del capital social.

En función de las relaciones que se establecen entre los miembros de los diferentes niveles de la estructura social, Woolcock (1998) distingue entre capital social de vínculo (“bonding social capital”), capital social de puente (“bridging social capital”) y capital social vinculante (“linking social capital”). Así, el capital social de vínculo correspondería a las relaciones que se establecen entre miembros próximos de una comunidad. En cambio, el capital social de puente se refiere a las relaciones entre miembros de grupos o comunidades distintas pero situadas en el mismo nivel. Finalmente, el capital social vinculante se refiere a las relaciones entre personas que se sitúan en diferentes niveles de la estructura social, e incluye las conexiones verticales con instituciones o personas que están en puestos de responsabilidad. Este último concepto está más próximo a la confianza vertical de Rothstein, que será analizada más adelante.

Por su parte, Van Oorschot y Finsveen (2010) afirman que el capital social es un concepto multidimensional que incluye tres aspectos: las redes sociales, las normas sociales y la confianza social. Las redes sociales comprenden las relaciones entre los miembros de una comunidad, la participación en la vida comunitaria y en actividades de voluntariado, y el compromiso público a través de actividades como el voto en las

elecciones. Las normas sociales incluyen valores cívicos compartidos, normas y hábitos de cooperación. Y la confianza social comprende tanto la confianza en otras personas como la confianza en instituciones. Diferentes estudios (Putnam, 2000; Narayan y Cassidy, 2001; OECD, 2001; Rothstein, 2001) han mostrado que aunque estos aspectos tienden a correlacionar entre sí de manera positiva, el grado de correlación es generalmente bajo. Por ello, a la hora de realizar cualquier análisis se debería distinguir entre diferentes aspectos relacionados con el capital social.

Según Hoskins y Mascherini (2009), aunque existen similitudes entre los términos “ciudadanía activa” y “capital social”, se puede establecer una diferencia fundamental entre ellos. Así, la función principal de la ciudadanía activa es promover valores relacionados con la democracia, los derechos humanos y el bien común. El compromiso individual reporta, de esta manera, beneficios para el conjunto de la sociedad. En cambio, y según estos mismos autores, el capital social de Putnam se centra en los beneficios individuales que obtiene un ciudadano a través de su implicación y su participación en la comunidad y en las redes sociales. El mismo Putnam utilizó, en su estudio sobre el capital social en Italia (Putnam 1993) el término “competencia cívica” para referirse a “las virtudes de los ciudadanos que integran una comunidad cívica”, identificando entre ellas la participación activa en asuntos de la comunidad, la igualdad entre ciudadanos, la solidaridad, la tolerancia y la habilidad para colaborar con otras personas.

Finalmente, algunos autores también han señalado que los recursos derivados del capital social pueden (por ejemplo, en el caso de las organizaciones con finalidades racistas o extremistas) no estar dirigidos a promover el bien colectivo o los valores relacionados con la democracia o los derechos humanos, en lo que se ha denominado “la cara oculta del capital social” (Baron, Field y Schuller, 2000).

### *La alfabetización cívica*

Henry Milner (2002) utiliza en su libro “Civic Literacy” el término “alfabetización cívica” para referirse al tipo de conocimiento e información relevante para que los ciudadanos puedan ejercer su rol como miembros activos de una comunidad. El concepto de “alfabetización cívica” está integrado por dos dimensiones: la primera corresponde a la

denominada “dimensión cívica” y tendría como indicador principal el nivel de participación política, que Milner mide a través del porcentaje de voto en las elecciones municipales. La segunda dimensión estaría relacionada con el nivel de alfabetización, que puede medirse a través de indicadores objetivos como los utilizados en la *International Adult Literacy Survey* (IALS) o el grado de conocimiento político. Milner también se refiere a la alfabetización cívica como un atributo o característica propia de la comunidad, que puede ser utilizado para la comparación entre sociedades atendiendo a la proporción de personas que tienen la información y el conocimiento necesarios para escoger entre diversas opciones políticas (Milner, 2002). Esta definición, que será analizada y ampliada más adelante, hace referencia de manera implícita a la manera en cómo se distribuye esta información y este conocimiento entre los ciudadanos.

Por lo tanto, tanto el capital social (en el caso de Putnam) como la alfabetización cívica (en el caso de Milner) pueden ser considerados como elementos propios de una sociedad o una comunidad. Una de las críticas realizadas por Milner al concepto de capital social de Putnam es la utilización de indicadores subjetivos. Por ello, Milner utiliza como indicadores de alfabetización cívica datos objetivos procedentes de estudios de alfabetización en adultos (el estudio IALS), así como datos relativos a la participación electoral (Milner, 2002:55).

En este apartado se han analizado una serie de términos estrechamente relacionados entre sí y con el tema principal de la tesis doctoral: la competencia cívica. La Tabla 5 resume algunas de las aportaciones más significativas de cara a los objetivos del presente trabajo. Para Hoskins, la competencia cívica es un atributo individual, resultado del proceso de aprendizaje y que a su vez determina la ciudadanía activa. Según Putnam, la competencia cívica es el conjunto de virtudes propias de los ciudadanos que integran una comunidad cívica. Un enfoque similar es utilizado por Campbell para referirse al compromiso cívico. Y finalmente, Milner limita el concepto de alfabetización cívica al conocimiento que permite a los individuos escoger entre opciones políticas, pero a la vez considera que también es un atributo propio de la comunidad –y en este sentido similar al capital social de Putnam-.

Tabla 5: Conceptualización de la competencia cívica y otros términos similares

Término	Autor	Conceptualización
Competencia cívica	Bryony Hoskins	Conocimientos, habilidades, actitudes y valores que permiten a las personas ser ciudadanos activos
	Robert Putnam	Virtudes propias de los ciudadanos que integran una comunidad cívica
Compromiso cívico	David Campbell	Conjunto de acciones o comportamientos propios de un ciudadano comprometido con la comunidad
Alfabetización cívica	Henry Milner	Información y conocimiento necesarios para ejercer un rol como miembro activo de una comunidad y escoger entre diversas opciones políticas

*Fuente: Elaboración propia*

#### 2.1.4. ¿Cómo se mide la competencia cívica?

La disponibilidad de datos constituye una limitación a la hora de realizar una investigación en el ámbito de la competencia cívica. Al igual que ocurre con las definiciones de términos similares, existen algunos aspectos relacionados con la competencia cívica que aparecen como indicadores en diferentes encuestas internacionales. En cambio, otros aspectos cuya relevancia ha incrementado durante los últimos años (por ejemplo, las formas no convencionales de participación) no están extensamente recogidos en las encuestas nacionales e internacionales dirigidas a la población adulta. Debido a ello, no existe ninguna encuesta que pueda recoger todas las dimensiones e indicadores relacionadas con la competencia cívica, y que haya sido desarrollada en la población adulta.

El Estudio Europeo de Valores ([www.europeanvaluesstudy.eu](http://www.europeanvaluesstudy.eu)) es un programa de investigación centrado en los valores humanos que se desarrolla mediante una encuesta longitudinal que se realiza cada nueve años desde el año 1981, y en la cual participan todos los miembros de la Unión Europea, además de otros países del ámbito europeo (Turquía, Islandia, Hungría, Ucrania, etc) y algunas regiones y autonomías como Catalunya, Euskadi o Flandes. En la última encuesta, llevada a cabo en el año 2008, han participado más de 45 países y/o regiones de Europa y aproximadamente unas 70.000 personas. La Encuesta Europea de Valores analiza los valores, ideas, creencias, preferencias, actitudes y opiniones de la ciudadanía sobre diferentes aspectos relacionados con la vida, la familia, el trabajo, la religión, la política y la

sociedad. Su periodicidad en el tiempo permite, además, conocer la evolución y las tendencias de cambio en la consideración de los principales aspectos que configuran la estructura de una sociedad. Desde 1985 un equipo de investigación multidisciplinar de la Universidad de Deusto analiza los resultados de este estudio para el conjunto de la sociedad española.

Por su parte, la Encuesta Social Europea ([www.europeansocialsurvey.org](http://www.europeansocialsurvey.org)) es una encuesta que recoge información sobre las opiniones y actitudes de los ciudadanos europeos en relación a diferentes temas (confianza en las instituciones, implicación política, valores morales y sociales, capital social, bienestar, ciudadanía, participación, democracia, etc). España ha participado en todas las ediciones de esta encuesta que se desarrolla de manera periódica cada dos años. La primera edición de la Encuesta Social Europea se realizó en 2002 y la más reciente (quinta ronda) se ha llevado a cabo entre los años 2010 y 2011. Actualmente se está preparando la sexta ronda del estudio. Un equipo de investigadores de la Universidad Pompeu Fabra forma parte del equipo científico coordinador del estudio, integrado por siete instituciones europeas. La Encuesta Social Europea contiene un módulo central que se incorpora en todas las rondas del estudio. Además, cada una de las rondas suele incorporar un módulo específico que incluye elementos relacionados con la coyuntura social y económica. Así, en el año 2002 se incluyó el módulo específico “Citizenship, Involvement and Democracy” (CID), desarrollado en España por el CIS y la UAM bajo el nombre de “Ciudadanía, Implicación y Democracia en España” (CIDE). Por otro lado, en el año 2008 se incluyó el módulo específico “Welfare attitudes in a Changing Europe” (WAE, 2011); las actitudes de la ciudadanía hacia el EB son un elemento central de esta tesis doctoral, y serán analizadas ampliamente en la siguiente bloque de este marco teórico.

Finalmente, el Estudio Internacional de Educación Cívica y para la Ciudadanía (“International Civic and Citizenship Education Study-ICCS”) es un estudio realizado por la *International Association for the Evaluation of Educational Achievement* (IEA). El ICCS se desarrolló a partir de dos estudios previos llevados a cabo en 1971 con 9 países, y en 1999 con 28 países (estudio CIVED) (Torney-Purta, Schwille, y Amadeo, 1999; Torney-Purta, Lehmann, Oswald et al, 2001; Amadeo, Torney-Purta, Lehmann et al,



2002). En el último estudio, llevado a cabo entre los años 2008 y 2009, han participado más de 140.000 estudiantes, 62.000 profesores y 5.300 escuelas procedentes de 38 países, entre ellos España. El objetivo del ICCS es conocer y comparar el modo en que se lleva a cabo la educación en el ámbito de los valores relacionados con la ciudadanía, así como analizar el impacto que tienen la escolarización y el contexto (por ejemplo, el estatus socioeconómico familiar) en el conocimiento y actitudes cívicas de los estudiantes de los países participantes en el estudio. Los resultados de este estudio han sido publicados en un informe desarrollado por Schulz, Ainley, Fraillon et al (2010).

Las instituciones europeas han promovido durante los últimos años el desarrollo de indicadores relacionados con la ciudadanía activa y con la competencia cívica. Así, en el mes de septiembre de 2005, el Centro para la Investigación en el Aprendizaje Permanente de la Comisión Europea (*Centre for Research on Lifelong Learning-CRELL*), en cooperación con el Consejo Europeo, inició un proyecto para el desarrollo de indicadores específicos en el ámbito de la ciudadanía activa. Posteriormente, en el 2007, el mismo Consejo Europeo (Education Council, 2007) identificó la competencia cívica como uno de los 16 indicadores que deben ser utilizados para medir el progreso realizado en el ámbito educativo de la Estrategia de Lisboa, que tiene como objetivo promover la competitividad y la cohesión social en el seno de la Unión Europea.

La investigadora Bryony Hoskins ha llevado a cabo una intensa actividad dirigida al desarrollo de indicadores relacionados con la competencia cívica y la ciudadanía activa. A partir de datos obtenidos de la Encuesta Social Europea del año 2002, Hoskins y Mascherini (2009) desarrollaron un indicador compuesto de ciudadanía activa (*Active Citizenship Composite Indicator-ACCI*). De manera paralela, Hoskins ha desarrollado dos indicadores compuestos de competencia cívica: el Civic Competence Composite Indicator (CCCI), a partir de los datos del estudio CIVED de 1999 (Hoskins et al, 2008) y más recientemente, el Civic Competence Composite Indicator (ICCS-2), a partir del estudio ICCS de 2009 (Hoskins, Villalba, y Saisana, 2012). Además de la distinción que Hoskins realiza entre competencia cívica y ciudadanía activa, - a la cual nos hemos referido anteriormente- la diferencia principal entre los dos tipos de indicadores desarrollados radica en que mientras el ACCI se ha desarrollado a partir de datos de la

Encuesta Social Europea, y por lo tanto correspondientes a población adulta, el CCCI y el CCCI-2 se han desarrollado a partir de los estudios CIVED y ICCS, llevados a cabo con población de entre 13 y 14 años de edad.

En el ámbito de los Estados Unidos, el *America's Civic Health Assessment* es una iniciativa de la *National Conference on Citizenship* (NCoC) que cuenta con la colaboración de destacadas instituciones universitarias y grupos de trabajo (NCoC, 2012). Esta iniciativa elabora informes anuales denominados "Índices de Salud Cívica" (*Civic Health Index*) de ámbito local y estatal, que miden una amplia variedad de indicadores cívicos.

Diferentes estudios llevados a cabo durante los últimas décadas también han evaluado el nivel de alfabetización general en la población adulta. En este sentido, resulta obligado mencionar el *International Adult Literacy Survey* (IALS) (OECD, 2000), desarrollado durante la década de los 90, y el *Adult Literacy and Lifeskills Survey* (ALL) (Lemke y Gonzales, 2006) desarrollado en 2003 y 2006. Los principales resultados obtenidos en estos dos estudios ponen de relieve el bajo nivel de alfabetización que muestran un porcentaje significativo de personas adultas en los países participantes – incluso en los países desarrollados-, y el problema que ello representa para los ciudadanos que deben afrontar las crecientes demandas y exigencias de las sociedades modernas. Recientemente se ha iniciado el *Programme for the International Assessment of Adult Competencies* (PIAAC) (OECD, 2012), desarrollado por la OCDE en 25 países (incluido España) y cuyos resultados serán publicados en el 2013.

La Tabla 6 muestra las principales encuestas que se han desarrollado durante los últimos años que incluyen aspectos relacionados de manera directa o indirecta con la competencia cívica. Como puede observarse, existe un elevado grado de heterogeneidad respecto al ámbito de desarrollo, los principales aspectos incluidos y la población de estudio. Por otro lado, también se pone de manifiesto que en el ámbito europeo no se dispone de un instrumento diseñado de manera específica para evaluar el nivel de competencia cívica en la población adulta. Por lo tanto, cualquier estudio que se desee realizar en este área debe considerar, en función de sus objetivos, los distintos elementos y dimensiones que se incluyen en las diferentes encuestas.

En el marco de esta tesis doctoral, y en base a los objetivos planteados, se van a utilizar diferentes elementos de análisis procedentes del Estudio Internacional de Educación Cívica y para la Ciudadanía, del Estudio Europeo de Valores y de la Encuesta Social Europea.

Tabla 6: Principales encuestas internacionales sobre ámbitos relacionados con la competencia cívica

Encuesta	Ámbito	Principales aspectos incluidos	Población
Encuesta Europea de Valores (EVS)	Europeo	Valores, preferencias, actitudes y opiniones de la ciudadanía sobre diferentes temas sociales.	Población adulta
Encuesta Social Europea (ESS)	Europeo	Opiniones y actitudes sobre diferentes temas sociales	Población adulta
Estudio Internacional de Educación Cívica y para la Ciudadanía (ICCS)	Internacional	Elementos relacionados con la competencia cívica	Población adolescente (13-14 años)
America's Civic Health Assessment	Estados Unidos	Elementos relacionados con la competencia cívica	Población adulta
International Adult Literacy Survey (IALS)	Internacional	Alfabetización general	Población adulta
Adult Literacy and Lifeskills Survey (ALL)	Internacional	Alfabetización y competencias generales	Población adulta
Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC)	Internacional	Competencias generales	Población adulta

*Fuente: Elaboración propia*

### **2.1.5. Dimensiones e indicadores de competencia cívica**

Los conceptos descritos en el apartado anterior (competencia cívica, ciudadanía activa, compromiso cívico, capital social y alfabetización cívica) incluyen dimensiones relacionadas con el asociacionismo, la participación en la vida política y en la vida comunitaria, la implicación política y la confianza. A continuación se va a analizar con más detalle cada una de estas dimensiones y cómo se relacionan entre ellas.

#### *Asociacionismo y participación en la vida comunitaria*

La sociedad civil ha sido definida como el conjunto de instituciones y organizaciones que están situadas entre la familia, el estado y el mercado, y en las cuales los individuos se asocian de manera voluntaria para conseguir intereses comunes (Anheier, 2004). Otros autores la han definido como el espacio público situado entre las actividades del gobierno y del mercado, al cual se ha denominado como tercer sector (Howell y Pearce, 2002).

La importancia de la actividad comunitaria en una sociedad ha sido subrayada por parte de diferentes autores. Tocqueville, en su clásico “Democracia en América”, afirma que es principalmente a través de las organizaciones de voluntariado que los ciudadanos aprenden habilidades relacionadas con la democracia participativa y virtudes cívicas relacionadas con la confianza y la reciprocidad. Robert Putnam, a través de sus trabajos centrados en el capital social, también concede una gran importancia a la participación en organizaciones de voluntariado, puesto que contribuye a generar confianza social y, de manera indirecta, a promover una mejora del funcionamiento democrático. Otros autores también consideran que la participación en este tipo de organizaciones suele ser conceptualizada como un mecanismo básico de integración política y social (Font, Montero y Torcal, 2006), que genera un sentimiento de pertenencia a la comunidad y contribuye a la cohesión social (Subirats, 1999). Por su parte, Verba, Schlozman y Brady (1995) se refieren a la participación cívica como “aquellas actividades comunitarias no remuneradas que no están motivadas por un deseo de influir en la política pública”, lo cual incluye

actividades como la pertenencia a una asociación de voluntariado, o la colaboración en acciones de voluntariado dentro de la comunidad.

Diferentes autores también han destacado la importancia del contexto geopolítico de un país en la evolución y las características de su sociedad civil. Así, Milner considera que organizaciones de voluntariado similares pueden tener efectos distintos en el capital social de una población, en función del país en el que desarrollan su actividad. Putman afirma –en el marco de su trabajo desarrollado en Italia- que las regiones con un elevado capital social son aquellas que han heredado una tradición de compromiso cívico desde los gremios medievales y el asociacionismo. Por contra, las regiones con bajo capital social son aquellas que han sido gobernadas por una autoridad fuerte durante siglos. Para Subirats (1999), las sociedades con mayor solidez y tradición en el tejido asociativo, y que han acumulado mayor capital social, son las que mejor pueden responder a las nuevas exigencias y a los nuevos problemas sociales. En este sentido, Howard (2003) señala que el nivel de participación en la vida asociativa es menor en los países del Este y del Sur de Europa –como España- que han sufrido las consecuencias de diversos regímenes autoritarios.

El asociacionismo en España ha tenido un desarrollo rápido y tardío que se inició en los años 80. En este proceso, las prácticas de orientación grupal o categorial han ido ganando terreno en el diseño de las políticas sociales, en la línea de lo que algunos autores han denominado “particularismo social” (Adelantado, Noguera y Rambla, 2000). Una crítica realizada a este tipo de prácticas es que, si bien amplían el campo de desarrollo de las políticas sociales, también contribuyen a su segmentación a causa de la competencia por los recursos y de la distinta capacidad de movilización y presión de los grupos sociales y sus organizaciones, originando con ello conflictos de intereses y una cierta jerarquía de poder a la hora de expresar, defender y negociar la satisfacción de las necesidades específicas. Además, gran parte de las organizaciones sociales tienen una elevada dependencia financiera, burocrática y política de la Administración, que les hace requerir su apoyo a la hora de emprender cualquier iniciativa (Gutiérrez Sastre, 2006).

Si bien durante los últimos años se han publicado diferentes estudios sobre el sector no lucrativo (Casado, 1995; Rodríguez Cabrero y Codorníu, 1996; Mota, 1999; Ruiz Olabuénaga, 2001), su enorme dispersión, y una serie de ambigüedades relativas a su indefinición conceptual, su desarrollo histórico, su ambivalencia jurídica, y su desconocimiento estadístico, dificultan la realización de un análisis preciso.

Una buena parte del rol ejercido por la sociedad civil ha sido tradicionalmente asumido en España y otros países del sur de Europa por la familia, que ha tenido una gran importancia como red de protección y cohesión social. Algunos autores (Naval y Jover, 2006) sugieren que los indicadores relacionados con la ayuda benéfica o no-organizada que recogen algunas encuestas internacionales, no son suficientes para representar la importancia de las redes de apoyo informales basadas en la familia que tradicionalmente han caracterizado a nuestro país.

Otros autores se preguntan si el valor que aportan la sociedad civil y el asociacionismo pueden variar según el tipo de asociación que se considere (por ejemplo, entre una asociación que desarrolla una actividad en defensa de los derechos humanos y una asociación deportiva) y según el grado de implicación requerido por parte de sus miembros, que puede variar desde el simple pago de una cuota anual hasta la implicación voluntaria en las actividades de la organización. Van Oorschot y Finsveen (2010), por ejemplo, distinguen, como uno de los tres aspectos del capital social, entre participación pasiva y participación activa en organizaciones de voluntariado. Algunos autores han afirmado que las sociedades son mejores cuando existe una sociedad civil extensa en la que los ciudadanos participan de manera intensiva y activa, no únicamente como miembros inactivos o pasivos (Wallace y Pichler, 2009; Hoskins y Mascherini, 2009). Por su parte, Morales y Mota (2006) consideran que solamente aquellas personas que participan activamente en las actividades de las asociaciones, o bien realizan una actividad de voluntariado, pueden ser considerados miembros activos de la sociedad civil.

Sin embargo, diferentes autores (Norris, 1999; Putnam, 1993 y 2000) afirman que los ciudadanos son, en general, cada vez más pasivos en su vida asociativa (“participantes de talonario”), donde ejercen un rol de “clientes” o “usuarios” pasivos de los servicios

que prestan las asociaciones. Morales y Mota (2006) han construido una escala de implicación asociativa que permite distinguir entre formas de implicación activas y pasivas, y han constatado que los ciudadanos españoles tienen en general un grado de implicación bajo en las asociaciones. Aquellas personas que consideran que la buena ciudadanía pasa por la contribución personal a lo público o tienen una visión participativa y activa de la ciudadanía, serán más proclives a colaborar con asociaciones que aquellos que, por el contrario, dan un mayor peso a otros valores (Sniderman, Fletcher y Russell, 1996).

### *Las valores cívicos*

En palabras de Javier Elzo, el término “valor” comprende “la definición de lo bueno y de lo malo, de lo aceptable y de lo rechazable, de lo admitido y de lo prohibido, de lo que hay que hacer y de lo que hay que evitar”, y “cabe entenderse como un criterio de acción social al cual un individuo se adhiere de forma más emocional que meramente racional” (Elzo, 2010:254).

Según Jaime Castillo (2009), el debate contemporáneo sobre el concepto normativo de ciudadanía gira en torno a la división entre democracia liberal y democracia deliberativa, y está relacionado con las características que definen al buen ciudadano. Éste autor considera que una concepción de la ciudadanía como el conjunto de normas que define, a juicio de los individuos, el concepto de “buen ciudadano”, está condicionado por las expectativas que cada sujeto tiene sobre las consecuencias del comportamiento de los miembros de la comunidad política. Así, y según la democracia liberal, el buen ciudadano es aquel que hace de sus derechos deberes, de manera que el ejercicio de los derechos se convierte en un deber cívico. En cambio, según el modelo de democracia deliberativa, el buen ciudadano es aquel que se implica y participa activamente en el proceso político, y entiende la participación como un derecho-deber (a diferencia del liberalismo clásico, que la entiende como un derecho individual). La tradición liberal se basa en la teoría de la acción racional, y asumiendo que los ciudadanos son individuos con intereses, entiende la política como un mecanismo de resolución de conflictos de intereses. En cambio, el objetivo de la democracia deliberativa es llegar al consenso a través de la razón, y asume que los

individuos anteponen el bien público al interés individual. Una de las principales críticas del filósofo Michael Sandel (2008) al modelo liberal es que elimina cualquier posibilidad de una vida pública en la que estén en juego tanto la identidad como los intereses de los participantes.

Por su parte, Araujo (2000) distingue entre tres ideales normativos dentro del concepto de ciudadanía moderna: el civismo, que se corresponde con la tradición del republicanismo, y que ensalza las virtudes del ciudadano como base de la comunidad política; el pluralismo, que se corresponde con la tradición liberal clásica, en la que el ciudadano persigue sus fines individuales dentro de los límites de la justicia; y el igualitarismo, que se corresponde con la teoría democrática, y considera ciudadanos en igualdad de condiciones a todos los miembros de la comunidad.

### *La participación política*

Las diferentes aproximaciones que ha realizado la sociología política al concepto de participación permiten establecer diferentes clasificaciones y nomenclaturas. Arnstein (1969) propuso una “escalera” de ocho posibles niveles de participación en función del nivel o grado de implicación de la ciudadanía, que agrupa en tres planos. Así, en un primer plano de la *no-participación* se situarían la *manipulación* y la *terapia*, que consisten en incorporar a los ciudadanos a consejos asesores o directivos, pero no con el objetivo de hacerles partícipes del diseño y gestión de los programas públicos, sino para obtener su apoyo. En un segundo plano de *participación simbólica* se situarían los niveles de *información*, *consulta* y *conciliación*, en los que se permite a la ciudadanía escuchar, tener voz y ser escuchada, si bien no se garantiza que sus perspectivas e intereses sean tenidos en cuenta. Por último, en el plano del *poder ciudadano* se situarían los niveles de *consenso*, *delegación de poder* y *control ciudadano*, en los que la ciudadanía participa en la toma de decisiones mediante diferentes mecanismos. La complejidad del modelo propuesto por Arnstein ha sido reducida posteriormente por autores como Feingold (1977), Charles y DeMaio (1993), y Gyford (1991).

La participación política es uno de los pilares básicos de la vida política democrática (Font, Montero y Torcal, 2006). Una de las deficiencias clásicas de participación política



se refiere al “conjunto de actividades realizadas por ciudadanos a título individual que están más o menos dirigidas a influir en la selección de representantes gubernamentales y/o de las políticas que éstos llevan a cabo” (Verba y Nie, 1972). La importancia de ésta aportación se puede valorar mejor si se tiene en cuenta que cualquier análisis anterior de la participación política tenía solamente en cuenta la participación electoral. Verba y Nie establecieron una tipología de participación política con cuatro componentes: el voto, la actividad de campaña electoral, la actividad comunitaria y los contactos particularizados.

Uno de los modelos conceptuales y analíticos de referencia en el ámbito de la participación política de la ciudadanía corresponde al desarrollado por Verba, Scholzman y Brady (1995). Para estos autores, la participación política depende de tres conjuntos básicos de factores, que están relacionados con la capacidad, la motivación y los incentivos. La capacidad depende de los recursos o las oportunidades que permiten o impiden a los ciudadanos participar (económicos, educativos, sociales o de tiempo). La motivación está ligada al deseo o la percepción de los ciudadanos hacia la participación, y se relaciona con el carácter voluntario que la participación ciudadana tiene en las sociedades democráticas. Finalmente, los incentivos estarían relacionados con la existencia de posibles dificultades para participar, y está ligada al fenómeno de la movilización por parte de las propias asociaciones (Morales, Mota y Pérez-Nievas, 2006). El concepto de “estructura de oportunidades políticas” definido por Tarrow (1997), es un intento de sistematizar la influencia que tienen los factores vinculados al contexto político en la decisión de participar, y que se pueden situar en tres dimensiones: el grado de apertura/clausura del acceso político formal, el grado de estabilidad/inestabilidad de las preferencias políticas, y la disponibilidad y posición estratégica de los potenciales socios o aliados.

Otra aportación fundamental es la de Mancur Olson (1971), quien a través de su clásico “La lógica de la acción colectiva” defiende que la decisión de participar por parte de un individuo se adopta a partir del cálculo –no necesariamente explícito– de los costes y beneficios individuales que reporta. Por lo tanto, los individuos actuarían colectivamente para conseguir bienes que en último término son privados y no

públicos. La teoría de la acción colectiva refleja las dificultades de promover la participación individual en la defensa de intereses de tipo colectivo, y los riesgos de que la acción colectiva promovida por la multiplicidad de intereses individuales no acabe reflejando el interés de la mayoría.

Por su parte, Hirschmann (1970) plantea la participación como una disyuntiva entre dos opciones ante una situación de insatisfacción en el seno de una comunidad, que corresponden a los mecanismos basados en la *voz* (que expresan la insatisfacción de forma explícita y con una mayor implicación personal) o en la *salida*, que exigen una menor implicación y se limitan al abandono de la comunidad. La decisión de optar por una u otra alternativa depende tanto de las posibilidades de éxito como de los costes que supongan.

Torcal, Montero y Teorell (2006) han establecido una tipología de la participación política basada en dos distinciones a lo largo de dos dimensiones. La primera dimensión, relativa al canal de expresión, diferencia entre la acción política desarrollada dentro del marco representativo democrático y aquellas actividades extra-representativas. La segunda dimensión, relativa a los mecanismos de influencia, diferencia entre actividades basadas en mecanismos anónimos de autorregulación del sistema y mecanismos de participación personal activa, de un modo similar a la distinción utilizada por Hirschman entre “salida” y “voz”. Así, en base a su estructura, éstos autores diferencian entre cinco modos distintos de participación política: el voto, la actividad de partido, la participación de consumo, el contacto y la actividad de protesta.

Gutiérrez-Sastre (2005) señala que desde las instituciones se ha fomentado un tipo de participación que deriva de la extensión del modelo de democracia formal y representativa, y que consiste en integrar a representantes de los ciudadanos y de distintos agentes sociales en el funcionamiento organizativo público, con el objetivo de legitimar las instituciones, responder a los objetivos del Estado Social, e incluir diferentes percepciones e intereses, obteniendo así una mayor integración y corresponsabilidad de la ciudadanía y la sociedad civil con los asuntos públicos. Para este autor, la incorporación de las preferencias de los ciudadanos en todos los pasos

previos a la toma de decisiones es la base de una participación efectiva y realmente democrática. Por su parte, Martí (2006) ha señalado que las personas hacen suyo un discurso colectivo en la medida en que ven recogidos sus puntos de vista, y que es en la medida que ha sido discutido que se pueden tomar decisiones más conscientemente y formar parte de la sociedad como actores activos.

Así, mientras que la apatía de los ciudadanos por los asuntos de gobierno y su ausencia de compromiso y responsabilidad han sido algunos de los recursos más utilizados para explicar el escaso peso de la participación comunitaria en el funcionamiento institucional (Gutiérrez Sastre, 2005), también se ha señalado que este desinterés está motivado precisamente por la falta de participación (Barber, 1984).

Otros autores consideran que el grado de desafección institucional discrimina principalmente entre modos de participación representativos y extra-representativos (Torcal y Lago, 2006). Así, las personas que confían en las instituciones y creen que son escuchadas por sus representantes tenderán a utilizar mecanismos de representación política (como el voto, la realización de actividades de partido o el contacto con autoridades y políticos). Por contra, quienes mantienen actitudes contrarias al respecto preferirán otras vías de participación menos convencionales, como la protesta y/o la participación de consumo. En cambio, Milner (2002) afirma que el compromiso cívico está íntimamente relacionado con la participación electoral, y que las personas que no participan de manera habitual en las elecciones, no están implicados generalmente en otras formas más activas de participación política, las cuales estarían limitadas a una pequeña minoría de la población.

Diferentes autores afirman que la participación electoral en diferentes países europeos ha disminuido desde los años 80 (Norris, 2002; Franklin, 2004), de la misma manera que también lo ha hecho la afiliación a partidos políticos (Schmitter, 2001). Pharr, Putnam y Dalton (2000) han relacionado esta tendencia con la creciente desconfianza en parlamentos, gobiernos y partidos políticos. Otros autores (Bennett, 1988; Howe, 2002) han relacionado esta crisis de las formas tradicionales de participación política con una disminución del conocimiento sobre temas políticos en ciertos países europeos.

### *La implicación personal hacia la política*

Las actitudes y la implicación personales hacia la política son algunos de los factores que en mayor medida influyen sobre la participación (Morales, Mota, y Pérez-Nievas, 2006; Bonet, Martín, y Montero, 2006). Éstos últimos autores afirman que en la perspectiva clásica de la cultura política se ha considerado al interés de los ciudadanos por la política y a la eficacia política interna como componentes sustanciales de la implicación política de los ciudadanos. El interés y la eficacia política tienen como objeto al propio ciudadano y reflejan la percepción de uno mismo como actor político y la predisposición a participar (Verba, Schlozman y Brady, 1995; Torcal y Montero, 2006).

El interés por la política ha sido explicada a partir de la curiosidad que los ciudadanos manifiestan hacia los asuntos políticos. Esta curiosidad lleva a los individuos a estar atentos a lo que ocurre en el ámbito de la política, y condiciona la manera en que éstos procesan la información del contexto político (Van Deth, 1990; Fiske y Taylor, 1991; Zaller, 1992; Gabriel y Van Deth, 1995). Galais (2012) ha afirmado que el interés por la política es probablemente una de las orientaciones hacia lo público, y lo define como “el grado en que el ciudadano está dispuesto a recibir y procesar información relacionada con la política”. Otros autores han asociado la falta de interés a fenómenos como la alienación política, el cinismo político o la desafección política institucional (Torcal, 2006; Jackman, 1987; Campbell, 1962).

En relación a la eficacia política, la literatura realiza una distinción entre eficacia política interna y eficacia política externa. La eficacia política interna ha sido considerada como un indicador de “sofisticación política” de la ciudadanía, y ha sido definida como la percepción por parte del ciudadano de su propia capacidad para entender, participar e influir en el curso de la acción política (Bonet, Martín y Montero, 2006), o bien como la capacidad de los individuos para juzgar y reclamar responsabilidades al Estado sobre las políticas o *outputs* del sistema político (Anderson y Guillory, 1997). Otros autores (Westholm, Lindquist y Niemi, 1989) se han referido en cambio a la “alfabetización política”, como condición necesaria para entender los contenidos del debate político. Finalmente, para Listhaug (1995) las cuestiones

relacionadas con la eficacia política hacen referencia a la importancia que tiene la política para los ciudadanos, y el interés que los individuos tienen en ella. La eficacia política externa, por su parte, hace referencia a la percepción del ciudadano sobre la receptividad de las instituciones y de los principales actores políticos (Gabriel, 1995).

Tanto el interés como la eficacia política están, de manera general, relacionados con la participación política. Sin embargo, esta relación no es siempre directa, ni tiene la misma intensidad para todos los tipos de participación política, tal como han descrito diferentes autores (Barnes, Kaase, et al, 1979; Bennett, 1986; Van Deth, 1990; Topf, 1995; Torcal y Lago, 2006). Así, el impacto que tienen el interés y la eficacia política es mayor en las actividades participativas que suponen costes para el individuo (Verba, Schlozman y Brady, 1995).

Los niveles de interés y eficacia política interna de los españoles se encuentran entre los más bajos de Europa (Bonet, Martín y Montero, 2006; Galais, 2008). El interés por la política pareció aumentar a finales de la década de los sesenta y durante la época de la transición, para disminuir a partir de entonces. Algunos autores como Benedicto (1997) o Sanz (2002) han atribuido este hecho al legado del franquismo y su efecto despolitizador durante los casi cuarenta años de duración de su dictadura.

### *La confianza institucional*

La confianza es un factor esencial para entender el comportamiento político (Subirats, 1999). La literatura distingue generalmente entre confianza social o confianza interpersonal, por un lado, y la confianza institucional, por otro. Algunos autores afirman que ambos tipos de confianza son, junto al interés en asuntos políticos, elementos que favorecen la participación política (Font, Montero y Torcal, 2006). Por su parte, Milner (2002) señala que la confianza institucional ha centrado tradicionalmente el interés de la ciencia política, y que solamente durante los últimos años, y de la mano de las aportaciones sobre el capital social, la literatura ha virado su enfoque hacia la confianza interpersonal.

En el ámbito de la confianza social o interpersonal, son especialmente relevantes las aportaciones realizadas por Robert Putnam (1993, 2000) y Eric Uslaner (2002), que

muestran que la confianza interpersonal lleva a la colaboración mutua entre los individuos y permite, según Fukuyama (1996), crear unas expectativas sobre el comportamiento honesto de los ciudadanos. Uslaner, al igual que Rothstein y Flanagan, afirma que la confianza moral promueve el desarrollo del compromiso cívico. Al contrario que Putnam, que sugería una relación bidireccional, Uslaner considera que esta relación es causal. Y las ciudades, regiones y países en los cuales existe un nivel más elevado de confianza social, corresponden a aquellos con un mejor funcionamiento de las instituciones democráticas, un mayor crecimiento económico y menores índices de corrupción y criminalidad (Flanagan, 2003; Rothstein y Uslaner, 2005). Otros autores también han subrayado que las comunidades que tienen un nivel elevado de confianza interpersonal permiten a sus ciudadanos beneficiarse del hecho de vivir en un entorno social más solidario (Subramanian, Kim y Kawachi, 2002).

Una de las principales referencias en el ámbito de la confianza institucional es Bo Rothstein (2000), quien se refiere a la confianza institucional o “vertical” (para distinguirla de la confianza social o “horizontal”) como la confianza en las instituciones políticas, el gobierno y/o los partidos políticos. Otros autores como Citrin y Muste (1999) han definido la confianza política como “la creencia del ciudadano de que las instituciones políticas cumplirán su función correctamente aún cuando aquel no esté vigilando permanentemente su actuación”, y la entienden como un indicador de los sentimientos generales de los ciudadanos sobre las instituciones de su país (Newton y Norris, 2000). Por su parte, Brehm y Rahn (1997) han argumentado que la confianza en el gobierno es uno de los determinantes más potentes de la confianza generalizada.

De esta manera, la confianza en el parlamento, el gobierno y los partidos políticos sería un indicador del apoyo a las instituciones, que se considera un tipo de apoyo político. Este concepto, creado por David Easton (1965) y citado en Bartolomé (2010), se define como “la forma en la que un individuo se orienta evaluativamente hacia un objeto a través de sus actitudes o comportamientos”. El uso de indicadores concretos como el apoyo a las autoridades –el gobierno- resulta de utilidad para analizar el apoyo político en nuestras sociedades.

Autores como Wallace y Pichler (2009) han destacado la importancia que tiene para una sociedad la confianza en las instituciones públicas. Sin embargo, existe un consenso importante en la literatura acerca del declive de la confianza institucional en prácticamente todos los países de nuestro entorno (Milner, 2002). Este declive es uno de los factores que han contribuido a poner en duda los modelos tradicionales de representación política, lo cual se ha traducido en fenómenos como la abstención. En este sentido, Jovell (2007) ha señalado que gran parte de la población percibe a los partidos políticos o los sindicatos como instituciones con finalidades reproductivas más que como organizaciones orientadas hacia el progreso social.

Algunos autores han señalado que la desconfianza en las instituciones reduce la eficacia del sistema político mediante el aumento de los costes transaccionales entre ciudadanos y élites, haciendo disminuir la participación política (Bonet, Martín y Montero, 2006). Otros autores han expresado su preocupación por los efectos que niveles elevados de desconfianza política pueden tener para el rendimiento de las instituciones políticas, la capacidad integradora de los sistemas políticos y para la calidad de las democracias (Pharr, Putnam y Dalton, 2000).

Aunque existe consenso sobre la relación entre el capital social –medido a través de la participación en asociaciones- y la confianza social o interpersonal, esta relación no está tan establecida en el caso de la confianza institucional (Kaase, 1999; Milner, 2002). Por su parte, otros autores han considerado la participación electoral como un componente de la confianza institucional, y a su vez, como un buen indicador del capital social vinculante (Sundquist y Yang, 2007).

En este apartado se han analizado diferentes dimensiones que están relacionadas con la competencia cívica. Así, se ha puesto de manifiesto la importancia que algunos autores atribuyen al rol del contexto geopolítico e histórico en la evolución y características del asociacionismo, y el valor que éste aporta a la sociedad en función del grado de implicación de sus miembros. En relación a la participación política, se observa una distinción entre formas tradicionales o convencionales de participación - como el voto en las elecciones-, y otras formas no convencionales, cuya creciente relevancia se ha relacionado con fenómenos como la desafección política o la desconfianza en las instituciones. La participación política está también relacionada con el interés y la eficacia política, dos elementos que contribuyen a definir el grado de implicación política de los ciudadanos. Finalmente, también se ha realizado una clara distinción entre dos formas de confianza que han sido ampliamente tratadas en la literatura: la confianza interpersonal y la confianza institucional.

En el marco de esta tesis doctoral se van a utilizar las siguientes cinco dimensiones de la competencia cívica: la participación en organizaciones de voluntariado, los valores cívicos, la participación política, la implicación personal hacia la política y la confianza institucional.

#### **2.1.6. El desarrollo de la competencia cívica**

El proceso que conduce al desarrollo de la conciencia cívica en los individuos ha sido un tema de interés relevante para diferentes investigadores. La mayoría de modelos tienen en cuenta aspectos relacionados con las características individuales y con el contexto, aunque la importancia relativa de cada uno de estos dos factores puede variar en función del modelo considerado. A continuación se presentan algunos de los principales modelos descritos en la literatura. Debido a su relación con los objetivos de esta tesis doctoral, la relación de la competencia cívica con el nivel educativo y con el estado de salud se analizará en apartados específicos más adelante.



Zaff, Kawashima-Ginsberg y Lin (2011) describen un modelo que incorpora tanto la influencia de factores individuales como del contexto, que ya habían sido descritos previamente por Zaff, Youniss y Gibson (2009) y Jennings y Stoker (2004). Así, aunque todos los individuos están capacitados para desarrollar una conciencia y un compromiso cívicos, para que este potencial se desarrolle deben existir las oportunidades y los recursos adecuados, que están relacionados con el contexto social, económico y político.

En función del momento en el que se desarrolla la competencia cívica del individuo, Flanagan (2004) distingue entre el modelo de socialización política y el modelo generacional. Según el primer modelo, la actitud cívica de un individuo se desarrolla durante el proceso de crecimiento personal, a partir de la influencia que ejercen la familia y las personas adultas que están en contacto con él. En cambio, el modelo generacional considera que la actitud cívica se desarrolla en el momento de transición a la fase adulta, y no considera la influencia previa que puedan tener la familia, la escuela o el contexto. Jennings y Stoker (2004) señalan que aquellas personas que desarrollan un compromiso cívico en una fase temprana de su ciclo vital, tienen más estabilidad a lo largo de sus vidas.

### *La influencia de las características sociodemográficas*

Las desigualdades sociales y económicas que existen en nuestra sociedad tienen una enorme influencia en el contexto y en las vías que definen el desarrollo de la identidad cívica, la participación ciudadana y la confianza en las instituciones (Abu El-Haj, 2009; Levinson, 2009).

Morales, Mota y Pérez-Nievas (2006) clasifican las características sociodemográficas de los individuos en tres tipos de factores posibilitadores de la participación: los recursos socioeconómicos (educación e ingresos), las características que determinan su posición social y sus experiencias vitales (clase social, ocupación, edad, género, situación familiar, etc), y el grado en que están socialmente integrados en su comunidad. Lijphart (1997), por su parte, afirma que las características demográficas y socioeconómicas de los individuos actúan como determinantes de su posición en la sociedad e indirectamente afectan a las distintas formas de participación política.

Los estudios clásicos sobre la participación de los ciudadanos en el ámbito público han analizado la relación y la influencia que tienen determinadas características individuales (Verba y Nie, 1972; Verba, Nie y Kim, 1978; Barnes y Kaase, 1979; Jennings, Van Deth, et al, 1990; Kaase, 1990; Parry, Moyser y Day, 1992; Verba, Schlozman y Brady, 1995). Entre ellos, los estudios realizados por Sidney Verba muestran que las personas que disponen de mayores recursos en términos de tiempo, prestigio y capacidades políticas, y aquellas con mayor estatus social y económico, presentan índices de participación más elevados.

Posteriormente, un gran número de investigadores también han mostrado la importancia que tienen los diferentes recursos socioeconómicos en las variables relacionadas con la competencia cívica. Así, Inglehart y Welzel (2005) señalan que las personas con una posición económica acomodada y cierta seguridad en el nivel de bienestar tienden a desarrollar valores relacionados con la competencia cívica. Por contra, aquellas personas que han crecido en condiciones de escasez e inseguridad tienden a desarrollar valores relacionados con la supervivencia. Lutkus y Weiss (2007) observan, en el caso de estudiantes de los Estados Unidos, una correlación positiva entre el nivel de conocimiento cívico y variables socioeconómicas como el nivel educativo de los progenitores y el nivel de ingresos de la unidad familiar. Niemi y Junn (1998) han señalado diferencias en el nivel de conocimiento cívico entre estudiantes procedentes de distintos contextos socio-económicos. Y Pacheco y Plutzer (2007) consideran que el nivel de ingresos y la existencia de dificultades económicas son predictores independientes de la participación cívica.

Otra línea de investigación desarrollada a través de estudios cualitativos (Obradovic y Master, 2007; Safrit y López, 2001; Smetana y Metzger, 2005) muestra que factores económicos relacionados con el trabajo, los ingresos o la posibilidad de contar con un cuidador externo de los hijos pequeños, pueden actuar como una barrera para la participación de los padres en actividades cívicas, y esto acaba afectando el compromiso cívico de los individuos.

De acuerdo a las teorías de la elección racional, el acceso a la información es una condición necesaria para la participación. Y el coste que tiene para un ciudadano

adquirir esta información es inversamente proporcional a sus recursos económicos, tal y como han señalado economistas clásicos como Anthony Downs (1957). Por lo tanto, los ciudadanos mejor informados y con más recursos económicos son los que más participan. En cualquier caso, el impacto de estos recursos individuales varía en función del tipo de participación. Así, la influencia del nivel socioeconómico debería ser mayor en aquellas actividades que requieren un coste más elevado en términos de conocimientos, habilidades, tiempo y/o dinero. En cambio, el efecto de los mismos recursos sobre una actividad que representa un coste menor, como el voto, debería ser menor o a veces incluso nulo (Ferrer, Medina y Torcal, 2006). En cambio, otros autores (Grönlund, 2003; Grönlund y Milner, 2006) creen que la participación electoral como un acto informado no depende únicamente del interés y de las preferencias políticas de los ciudadanos, sino también de sus recursos económicos. En este sentido, Popkin y Dimock (1999) afirman que la falta de conocimiento afecta a la calidad de las decisiones individuales sobre política, puesto que los ciudadanos no informados tienden a basarse en las características personales y sociales de los líderes políticos, en lugar del contenido de los programas.

Por otro lado, la tradicional desigualdad en el acceso a diferentes tipos de recursos en función del género, hace que éste sea también un aspecto a tener en cuenta en el análisis de las variables relacionadas con la competencia cívica.

### *La importancia del contexto familiar y social*

Diferentes investigadores han analizado la importancia del contexto familiar en el desarrollo de la competencia cívica, y han descrito diferentes mecanismos a través de los cuales se produce esta influencia.

Verba, Schlozman y Brady (1995) afirman que además del impacto que tiene el nivel socioeconómico del contexto familiar (descrito en la anterior sección), existe una vía cognitiva que se traduce en determinadas pautas de comportamiento (conversaciones, información, prácticas cotidianas, etc) que tienen lugar en el seno de la familia, y que estimulan el interés de los hijos hacia la vida pública, condicionan su interés por la política y las prácticas de tipo cooperativo, e inciden en su comportamiento durante la vida adulta. Janoski y Wilson (1995) también consideran que los padres constituyen un

modelo para el comportamiento cívico de los hijos. El hecho de que los progenitores promuevan la socialización política, junto a la identificación y transmisión de valores, es un potente predictor de interés y participación en la política y en la comunidad, particularmente a través de la conversación sobre estos temas en el seno de la familia, tal y como han señalado diferentes autores (Lauglo y Oia, 2008; Kahne y Sporte, 2008; Delli Carpini y Keeter, 1996).

El uso de los medios de comunicación también parece estar relacionado con la competencia cívica -tal y como han mostrado las investigaciones de Milner-, con el nivel de conciencia cívica (Dee, 2003), con el nivel de conocimiento sobre temas políticos (Bennett, Flickinger, Baker et al, 1996), y con el capital social (Norris, 1996; Putnam, 1996). Éste último autor, junto a Milner (2002), ha señalado el efecto negativo de la televisión comercial en diversas variables relacionadas con el capital social y la alfabetización funcional y cívica, como el nivel de conocimiento sobre instituciones políticas y el porcentaje de voto en las elecciones.

También la escuela tiene una elevada influencia, puesto que se convierte en un contexto clave para la transmisión de las reglas del juego y de determinadas habilidades participativas a través de las pautas cotidianas de interacción (Merelman, 1986). En este sentido, Schulz, Ainley, Fraillon et al (2010), en su estudio en población de 14 años de edad, muestran que el interés por asuntos políticos y sociales, la frecuencia con la que se discute sobre ellos, y la frecuencia con la que se utilizan medios de comunicación para obtener información son predictores del nivel de conocimiento cívico.

Centrándose en el ámbito asociativo, Funes (1994) afirma que este proceso de socialización, ya sea a través de la familia o de la escuela, puede producirse por medio de dos mecanismos. En primer lugar, mediante la transmisión de valores relacionados con el interés por la vida pública, el compromiso, la solidaridad o la cooperación. Y en segundo lugar, mediante el aprendizaje y posterior desarrollo de pautas cooperativas a partir de las actividades realizadas por figuras de referencia como pueden ser los padres, los compañeros de escuela o los profesores. Por su parte, Hyman (1959) y Smith (1999) señalan que la transmisión de prácticas asociativas entre padres e hijos es

muy elevada, de manera que la implicación de los progenitores en la vida comunitaria tiene un efecto notable sobre la socialización de los hijos y su posterior participación en los asuntos públicos.

Por otro lado, y al hilo de las aportaciones realizadas al debate sobre el capital social por parte de Putnam o Uslaner, también se considera que en la comunidad existen una serie de recursos que se encuentran a disposición de los ciudadanos en base a su pertenencia a redes sociales y asociativas. En este sentido, diversos autores han señalado que las actitudes cívicas que se desarrollan a través de esta vía son elementos que no influyen únicamente en la predisposición a participar en la vida pública, sino también en la forma a través de la cual se participa (Huckfeldt, 1979 y 1986; Knoke, 1990; Leighley, 1990; Van Deth, 1997).

En este apartado se ha descrito la influencia que tienen algunas características sociodemográficas en el desarrollo de la competencia cívica. Así, diferentes autores han resaltado su relación con los recursos socioeconómicos o los medios de comunicación, así como la influencia de las desigualdades sociales y económicas en el contexto y en las vías que definen el desarrollo de la identidad cívica.

Un buen número de investigadores han analizado también la importancia del contexto familiar y del proceso de escolarización en el desarrollo de diversas formas de compromiso cívico. El siguiente apartado analiza de manera detallada diferentes mecanismos a través de los cuales se produce la relación entre el nivel educativo y la competencia cívica, uno de los objetivos específicos de esta tesis doctoral.

### **2.1.7. Nivel educativo, estado de salud y competencia cívica**

#### *Relación entre nivel educativo y competencia cívica*

El sistema educativo es un agente de socialización política de gran importancia, como pusieron de manifiesto las primeras investigaciones sobre esta cuestión (Hess y Torney-Purta, 1967). Posteriormente, estudios clásicos realizados en el ámbito de la literatura sobre ciencias políticas y sociales muestran una evidente relación entre el nivel educativo de los individuos y diferentes formas de competencia cívica (Converse,

1972; Nie, Junn y Stehlik-Barry, Putnam, 1993 y 2000). En general, se considera que la educación es un componente esencial de una sociedad democrática estable, porque promueve una participación informada de la ciudadanía en los procesos democráticos. Este “retorno cívico” de la educación continúa siendo hoy en día una de las justificaciones más importantes para que muchas políticas públicas e instituciones promuevan el acceso a todos los niveles educativos (Dee, 2003). En esta línea, Zaff, Kawashima-Ginsberg y Lin (2011) consideran que la escuela tiene un papel importante en el desarrollo del compromiso cívico, proporcionando el conocimiento, las habilidades, los valores y las actitudes necesarias.

Dee (2003) considera que el nivel educativo promueve la participación cívica a través de dos vías. Por un lado, reduce el coste que representan ciertas formas de participación cívica (por ejemplo, permite entender y procesar más fácilmente información sobre temas políticos de cierta complejidad, tomar decisiones y superar las barreras burocráticas y tecnológicas que dificultan la participación cívica). Por otro lado, aumenta los beneficios percibidos del compromiso cívico promoviendo lo que se ha denominado “ilustración democrática”. En otras palabras, el nivel educativo ejercería un rol social importante a través de la promoción de los valores democráticos.

Uno de los argumentos de Dee (2003) es apoyado por otros autores que consideran que mayores niveles educativos promueven la participación, porque disminuyen las barreras cognitivas y aportan elementos de información que son útiles en la esfera pública. Además, las personas con mayores niveles educativos se encuentran más expuestas a los estímulos que promueven su participación en la vida pública, debido a que interactúan de manera más frecuente con otras personas de un perfil socioeconómico similar (Morales, Mota y Pérez-Nievas, 2006).

Si bien la relación entre el nivel educativo y la competencia cívica parece generar un amplio consenso entre la mayor parte de investigadores, ha sido más debatida la posible relación de causalidad entre ambos factores. David Campbell (2006) señala que el efecto del nivel educativo sobre las diferentes formas de competencia cívica puede ser absoluto o relativo. Así, la educación puede tener un impacto directo en el

aumento del compromiso cívico de la ciudadanía, o bien puede servir para mejorar el estatus social de los individuos, lo cual posibilita que las personas tengan los recursos y las oportunidades suficientes para poder ejercer este compromiso cívico y social. Por su parte, Dee (2003) argumenta que puede resultar más complicado establecer una relación de causalidad entre ambos factores, debido a la existencia de factores ligados al contexto familiar y de la comunidad que ejercen una influencia positiva tanto en la conciencia cívica como en la incentivación de la escolarización.

De esta manera, tanto el éxito en la escolarización como el comportamiento cívico están influenciados por las características individuales y por el contexto familiar y social. Las personas que crecen en familias y comunidades con un alto grado de cohesión y en las que existe una fuerte sentimiento de responsabilidad cívica, tienden a aumentar su nivel de escolarización. Por lo tanto, la motivación necesaria para estudiar y para desarrollar un compromiso cívico podría ser el resultado del impacto que tiene el aprendizaje informal dentro del ámbito familiar. Este es el argumento principal de las investigaciones desarrolladas por Touya (2006). Por su parte, Luskin (1990), y Cassel y Lo (1997) creen también que la influencia aparente de la educación en el compromiso cívico podría ser una consecuencia de otros factores individuales o ligados al contexto familiar o socioeconómico de los progenitores.

Hoskins y D'Hombres (2008) también señalan la posible existencia de factores de confusión no observados que estén simultáneamente correlacionados con el nivel educativo y con el grado de compromiso cívico. De hecho, en el modelo de ciudadanía activa descrito en el Gráfico 2, Hoskins, Villalba, Van Nijlen et al (2008) señalan la existencia de barreras que dificultan el desarrollo del compromiso cívico, relacionadas con dificultades económicas, la falta de tiempo, la localización geográfica y la falta de acceso a información. Por ello, Hoskins y D'Hombres (2008) señalan la necesidad de controlar el efecto de diferentes factores sociodemográficos, y concluyen en su investigación que el nivel educativo tiene una relación causal y directa sobre la competencia cívica.

Estos mismos investigadores afirman que los beneficios asociados al efecto de la educación se derivan, en parte, del retorno económico que representa tanto a nivel

individual como para el conjunto de la sociedad. Pero, como bien señalan, esta relación entre nivel educativo y compromiso cívico a nivel individual, no explica la paradoja consistente en que el incremento general de los niveles educativos en los países europeos no han ido acompañados de un aumento en el nivel del compromiso cívico en el conjunto de la sociedad. Este aspecto es especialmente relevante en un aspecto como la participación electoral (Wattenberg, 2002). Además, se produce la paradoja consistente en que éste descenso en la participación electoral se produce sobretodo en la generaciones más jóvenes, que son generalmente las que tienen un mayor nivel educativo (Campbell, 2006). Finalmente, y en relación a la participación en organizaciones de voluntariado, algunos autores (Morales, Mota y Pérez-Nievas, 2006) señalan que los recursos educativos tienen una influencia desigual en función del tipo de asociación. Así, el nivel educativo sería más importante y determinante para la colaboración en asociaciones recreativas y de perfil político-institucional, en comparación con el resto de asociaciones.

#### *Relación entre el estado de salud y la competencia cívica*

Investigadores como Ichiro Kawachi (Kawachi, Kennedy y Glass, 1999; Kawachi y Berkman, 2000) o Robert Putnam (2000) han examinado la relación entre el capital social y el estado de salud. Como ejemplo, los resultados de los estudios de Putnam muestran que la realización de actividades de voluntariado es un importante indicador asociado a la tasa de mortalidad. Kawachi et al (1997) muestran una elevada correlación entre la desconfianza social y las tasas de mortalidad. Por otro lado, el hecho de pertenecer a alguna asociación cívica o contar con una red social de apoyo son factores que están también asociados a un mejor estado de salud (Berkman y Glass, 2000; Stansfeld, 1999).

En la línea de Coleman y Putnam, una buena parte de la literatura que ha analizado la relación entre el capital social y el estado de salud ha considerado el primero como como una característica propia de la estructura social y no como un recurso individual. Ello implica que todos los miembros de una determinada área o comunidad están expuestos al mismo nivel de capital social, pero el efecto en el estado de salud varía según el individuo.



El estado de salud autopercebido ha sido considerado como un buen indicador del estado de salud y un buen predictor de mortalidad por parte de diferentes autores (Mossey y Shapiro, 1982; Miilunpulo, Vuori, Oja et al, 1997; Idler y Benyamini, 1997; McGee, Liao, Cao, et al, 1999; Burstrom y Freudlund, 2001). Según una revisión realizada por Sundquist y Yang (2007), numerosos estudios previos han mostrado una asociación positiva entre el capital social y el estado de salud autopercebido (Kawachi, Kennedy y Glass, 1999; Blakely, Kennedy y Kawachi, 2001; Subramanian, Kawachi y Kennedy, 2001; Subramanian, Kim y Kawachi, 2002; Veenstra, 2002; Carlson, 2004; Lindstrom, 2004). Sin embargo, la mayoría de estos estudios han utilizado pocos indicadores de capital social.

Otros estudios han analizado de manera simultánea la asociación entre el nivel socioeconómico y el capital social, por un lado, y el estado de salud, por otro. Así, Carlsson (2004) muestra que ambos factores (el nivel socioeconómico y el capital social) son importantes a la hora de explicar las diferencias en el estado de salud autopercebido. Por su parte, en un estudio realizado en Rusia, Rose (2000) mostró que el nivel de ingresos en el hogar y algunos aspectos relacionados con el capital social están relacionados de manera independiente con el estado de salud. Y Sun, Rehnberg u Meng (2009) muestran, en un estudio en el ámbito rural en China, una asociación entre el nivel de pobreza y el capital social, así como un efecto sinérgico entre la falta de capital social y la pobreza, que se traduce en un efecto negativo sobre el estado de salud autopercebido.

Buena parte de los estudios mencionados sugieren una relación causal entre el nivel socioeconómico y el capital social, por un lado, y el estado de salud, por otro. Ahnquist, Wamala y Lindstrom (2012) señalan, no obstante, la posibilidad de que esta relación funcione de manera inversa.

En este apartado se ha analizado la relación que existe entre el nivel educativo y el estado de salud, por un lado, y el desarrollo de la competencia cívica. Ya se ha comentado previamente que éste es uno de los objetivos específicos del presente estudio. En este sentido, parece existir un consenso general acerca de la relación entre nivel educativo y competencia cívica. Sin embargo, la aparente relación de causalidad entre ambos ha sido objeto de un intenso debate por parte de diversos autores. En cambio, el posible impacto que puede tener el estado de salud en el nivel de competencia cívica no ha sido un tema ampliamente tratado en la literatura.

## **2.2. Actitudes hacia el Estado del Bienestar**

### **2.2.1. Del “Estado del Bienestar” a los “Estados del Bienestar”**

El término “Estado del Bienestar” (EB) se refiere a una combinación de elementos económicos, sociales, tecnológicos, productivos y políticos que, una vez sumados y oportunamente mezclados, generaron un crecimiento económico y estabilidad social sin precedentes en el entorno occidental durante tres décadas (Brugué, Font y Gomà, 2003), y cuyo elemento central para los países europeos fue la provisión de un sistema de pensiones, seguros de desempleo y asistencia sanitaria como derechos sociales desmercantilizados para el conjunto de la población (Esping-Andersen, 1993). Uno de los pilares de su construcción fue el establecimiento de políticas keynesianas, que supusieron un cambio en la interpretación del funcionamiento de la economía de mercado, y la justificación de la intervención pública para garantizar la consecución del pleno empleo (Muñoz de Bustillo, 2000).

A finales de los años 70, la ralentización del crecimiento económico y la intensificación de los conflictos sociales pusieron en entredicho la intervención estatal a través de programas de provisión y protección social. Como afirma Pierson (1995), las políticas de Ronald Reagan y Margaret Thatcher estuvieron centradas en reformas macroeconómicas de corte neoliberal y favorables a la reducción drástica del EB. Con el final de la Guerra Fría, un elevado número de investigadores señalaron que factores como la globalización, la integración europea, y las iniciativas neoliberales de instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estaban intensificando la presión hacia la reducción del EB (Levy, 2010). Autores como Glennerster (2010) y el mismo Levy han reflexionado sobre la resiliencia de los EB frente a las diferentes crisis que ha atravesado a lo largo de su historia, y sobre las predicciones realizadas por los denominados –en su propias palabras- “profetas de la muerte” del EB.

Una buena parte de la literatura sobre el EB está centrada en el establecimiento de diferentes tipologías, familias o grupos de países con una serie de características comunes que han persistido a lo largo del tiempo (Arts y Gelissen, 2010). Aunque no

fue la primera contribución, el clásico de Esping-Andersen “Los tres mundos del Estado del Bienestar” (1993) se considera el modelo teórico que más influencia ha ejercido sobre este debate. En esta obra, Esping-Andersen recuperó y sintetizó los estudios comparativos sobre el EB disponibles en 1990 para dibujar tres modelos o “régimenes”, término que hace referencia al conjunto de rasgos legales y organizativos que se entremezclan de manera sistemática en la relación entre el Estado y la economía.

Al crear esta tipología, Esping-Andersen evaluó básicamente el nivel de “desmercantilización”: es decir, el grado de independencia que tienen las prestaciones sociales del EB respecto al mercado. De esta manera, en los sistemas desmercantilizados, los servicios sociales son facilitados por el Estado y no dependen de los recursos económicos propios del individuo. En cambio, en un sistema totalmente mercantilizado, éstas prestaciones son ofrecidas a través del mercado como cualquier otro servicio. Mediante la comparación de políticas de servicios sociales existentes en diferentes países, Esping-Andersen identificó los tres tipos siguientes de EB que se describen en la Tabla 7:

Tabla 7: Tipología de los EB

	Régimen “socialdemócrata”	Régimen “conservador-corporativista”	Régimen “liberal”
<b>Característica principal</b>	Desmercantilización y universalización de las prestaciones sociales	Prestaciones sociales en función de la posición social y cobertura no necesariamente universal	Prestaciones sociales mercantilizadas y cobertura solamente para los más necesitados
<b>Ejemplos</b>	Países nórdicos	Francia, Alemania	Estados Unidos

*Fuente: Elaboración propia a partir de Esping-Andersen (1993)*

En el régimen “socialdemócrata”, la principal característica es la universalización de los derechos sociales a través de la desmercantilización. Los servicios de bienestar son proporcionados por el Estado y están disponibles para todos los ciudadanos. El modelo de EB socialdemócrata es el que ha sido adoptado por la mayoría de países escandinavos. En cambio, en el régimen “conservador-corporativista”, los servicios de bienestar pueden estar desmercantilizados pero su cobertura no es necesariamente

universal y depende de su posición social. Por lo tanto, el objetivo final de este tipo de régimen puede no ser la reducción de las desigualdades, sino el mantenimiento de la estabilidad social, la lealtad hacia el Estado y la fortaleza de las familias. Ejemplos de países con un régimen conservador-corporativista son Francia o Alemania. Finalmente, en el régimen “liberal” las prestaciones sociales están mercantilizadas y se ofrecen a través del mercado. Existen una serie de prestaciones sociales que el Estado ofrece a los más necesitados, pero con un elevado grado de estigmatización por parte de la sociedad. Estados Unidos es el ejemplo clásico de este tipo de modelo.

Según Espina (2002), con esta tipología Esping-Andersen trataba de dar respuesta a las distintas formas en que el Estado, la familia y el mercado asumen, comparten o se reparten el riesgo individual. En opinión de Giddens (2007), Gran Bretaña no se ajusta a ninguno de estos tres regímenes, puesto que si antes se situaba más cerca del modelo socialdemócrata, a partir de las reformas del EB introducidas en la década de los 70 se ha acercado más a un régimen de tipo liberal, con elevados niveles de mercantilización. Por otro lado, algunos autores (Bonoli, 1997; Ferrera, 1996; Leibfried, 1992) han añadido a la tipología de Esping-Andersen un cuarto tipo denominado “Estado del Bienestar mediterráneo” y que incluye a Italia, Grecia, Portugal y España.

Los sistemas de asistencia social y de lucha contra la pobreza han sido considerados tradicionalmente como el punto más débil de las políticas que han configurado el EB en los países del sur de Europa. El rol tradicional ejercido por la familia, la alta tasa de economía sumergida y la escasa capacidad administrativa contribuyen a explicar el papel marginal que ha tenido la asistencia social en las políticas de bienestar desarrolladas en estos países (Ferrera, 2010). En España, y debido a la dictadura, éste fenómeno se retrasó hasta los años ochenta, época en la que el país construye y consolida su particular Estado del Bienestar. En sus inicios, los sistemas de protección social se fueron configurando alrededor de una amalgama fragmentada y poco estructurada de sistemas de beneficiencia dirigidos a los más desfavorecidos. El papel relevante que tradicionalmente ha desempeñado la familia para suplir la insuficiencia de servicios públicos también ha sido destacada por otros autores como una característica del modelo de Bienestar en España (Ferrera, 1995; Moreno, 2000).

Una buena parte de la literatura sobre el EB ha estado centrada en el debate sobre su viabilidad futura, así como en el establecimiento y discusión de tipologías de países que representan diferentes modelos de EB a partir del estudio clásico de Esping-Andersen, y que en buena parte responden a las distintas formas a través de las que el Estado, la familia y el mercado asumen o comparten el riesgo individual.

### **2.2.2. El EB y la percepción de riesgo e inseguridad de la ciudadanía**

Los aspectos relacionados con el EB tienen una gran relevancia de cara a las principales preocupaciones de la ciudadanía (WAE, 2011). Algunos investigadores han sugerido que el nivel de desarrollo del EB no solamente tiene un impacto en las condiciones de vida de la población y en la reducción de las desigualdades, sino que también afecta a la percepción de seguridad o inseguridad, y a dimensiones subjetivas relacionadas con la calidad de vida o la felicidad personal (Radcliff, 2001; Pacek y Radcliff, 2008). Así, las políticas de bienestar pueden ser vistas como una de las vías a través de las que la sociedad se organiza para afrontar la vulnerabilidad común y las necesidades de protección social.

Durante los últimos 35 años, las sociedades occidentales han vivido la propagación y extensión de la inseguridad socioeconómica (Mau, Mewes y Schöneck, 2012). Nuevos riesgos e incertidumbres amenazan con debilitar la capacidad de los individuos para conseguir una estabilidad a lo largo de sus vidas y mantener un determinado estatus socioeconómico (Hacker, 2006; Kalleberg, 2009; Ranci, 2010). Diferentes investigadores han atribuido este incremento de la inseguridad socioeconómica a cambios en el mercado laboral, la reducción del EB y las presiones competitivas derivadas de la globalización económica (Esping-Andersen, 2002; Gilbert, 2002; Brown, Eichengreen y Reich, 2010; Gautié and Schmitt, 2010). Este último aspecto ha sido considerado en la literatura sobre ciencias sociales como un fuente importante de inseguridad y vulnerabilidad (Garrett, 1998; Alderson y Nielsen, 2002; Blossfeld, Buchholz, Hofäcker, et al 2007; Brady et al, 2007; Milberg y Winkler, 2010). Según Bonet (2006), los recientes cambios estructurales asociados al proceso de globalización (auge de las tecnologías de la información y la comunicación; transformación de la

estructura productiva; intensificación de los flujos migratorios sur-norte; alteración de la pirámide poblacional; y transformación de las estructuras familiares) han alterado las rigideces del modelo de estratificación social dando lugar a una socialización del riesgo y un incremento de los factores, dimensiones y poblaciones que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social.

Además, la limitación de los recursos y prestaciones que tradicionalmente se han asociado al modelo mediterráneo de bienestar (Ferrera, 1995) conlleva una mayor vulnerabilidad y riesgo de transitar de las situaciones de integración a situaciones de exclusión, respecto a aquellos modelos que mantienen criterios universalistas (modelo social-demócrata o nórdico) o aquellos centrados en el mercado de empleo (modelo conservador o continental) (IGOP, 2006). En este sentido, algunos autores han señalado que la percepción de inseguridad socioeconómica está directamente relacionada con el gasto público en políticas de bienestar. Mau, Mewes y Schöneck (2012) muestran que aquellas personas que viven en países con altos nivel de gasto público en políticas sociales están menos preocupadas por su futuro, en relación a aquellas personas que viven en países cuyo nivel de intervención del EB es más bajo.

Por otra parte, diferentes análisis comparativos muestran que los países menos desarrollados y aquellos que se encuentran en una fase de transición económica experimentan los mayores niveles de inseguridad subjetiva, mientras que esta percepción es más baja en países desarrollados y economías relativamente prósperas (Haller y Hadler, 2006; Böhnke, 2008; Chung y Van Oorschot, 2011). Algunos autores también defienden que el nivel de desempleo de un país influye en la percepción de inseguridad, tanto en las personas que están trabajando como en aquellas que se encuentran en paro (Burchell, 1993; Mendenhall et al, 2008). Y finalmente, otros autores también han señalado que esta percepción de inseguridad depende no solamente de aspectos económicos sino también de elementos relacionados con la diversidad cultural (Stephan y Stephan, 2000; Douglas y Wildavsky, 1982; Furedi, 2006) –por ejemplo, la percepción de una competencia creciente entre inmigrantes y población autóctona (Quillian, 1995; Scheepers, Gijsberts, y Coenders, 2002)-; de la manera a través de la que los individuos se acostumbran a ésta percepción de

inseguridad; y de su capacidad de hacer frente a ella (Tulloch y Lupton, 2003; Gerhold, 2009).

Si bien gran parte de la investigación académica se ha centrado en las condiciones objetivas que determinan la inseguridad económica, se conoce relativamente poco acerca del impacto que tienen estas condiciones en la percepción individual y subjetiva de la inseguridad (Mau, Mewes y Schöneck, 2012).

### **2.2.3. Las actitudes de la ciudadanía hacia el EB**

Del Pino (2004) justifica la necesidad de estudiar las actitudes de los ciudadanos hacia las Administraciones y las políticas públicas, en base al intenso debate académico y político sobre cuál debe ser el papel del Estado en las sociedades contemporáneas. Las preferencias y percepciones ciudadanas son, en este sentido, relevantes no sólo para las instituciones, sino también para el sistema político, puesto que reflejan juicios sobre su receptividad, representatividad, su legitimidad y su eficacia.

#### *La investigación sobre las actitudes hacia el EB*

Algunos elementos recientemente mencionados, como la creciente preocupación acerca de la sostenibilidad del EB -debido a los cambios demográficos y a la globalización-, o el aumento del desempleo y de la diversidad de la población (tanto en composición étnica, como en modelos familiares), afectan, entre otros, la visión de la ciudadanía hacia el EB, así como su nivel de confianza y su actitud hacia los agentes e instituciones políticas (WAE, 2011).

Las actitudes hacia el EB se entienden como la expresión de la opinión de los ciudadanos sobre el grado en el que el gobierno debería intervenir en la economía de mercado y en la redistribución de recursos (Kumlin, 2007b). La investigación académica sobre las actitudes de la población hacia el EB ha surgido durante las últimas décadas debido a diferentes motivos (Svallfors, 2010). En primer lugar, las actitudes de la población ejercen una función de contrapunto a la acción política, de manera que pueden dificultar, impedir o por el contrario, ser utilizadas como un recurso o una oportunidad para poner en marcha reformas estructurales de las políticas de bienestar. En segundo lugar, contribuyen a poner en cuestión las



estrategias, discursos y opiniones de las élites políticas y económicas que afirman estar fundamentadas en la opinión pública de la mayoría de ciudadanos. Y finalmente, permiten analizar las políticas de bienestar no sólo en base a criterios de redistribución y eficiencia económica, sino también por sus consecuencias en aspectos relacionados con la solidaridad, la tolerancia y la conciencia cívica de la ciudadanía.

Tradicionalmente, la limitación de datos disponibles relacionados con la movilidad social, la distribución de ingresos y distintos indicadores económicos, ha dificultado el desarrollo de estudios comparativos. Los primeros estudios realizados sobre las actitudes hacia el EB fueron realizados mediante la recopilación de datos correspondientes a encuestas nacionales de ocho países desarrollados (Coughlin, 1979) y de la Gran Bretaña (Taylor-Gooby, 1985). Posteriormente, diferentes autores han analizado, a través de encuestas nacionales, diferentes aspectos y actitudes hacia el EB en la misma Gran Bretaña (Saunders, 1990), Estados Unidos (Cook y Barrett, 1992), Alemania (Roller, 1992) o Suecia (Svallfors, 1989). A partir de los años 90, el desarrollo de proyectos, estudios y programas como los Eurobarómetros, la Encuesta Europea de Valores, la Encuesta Social Internacional y la Encuesta Social Europea han permitido la realización de estudios comparativos. Una buena parte de estos estudios han analizado la correspondencia entre las actitudes de la ciudadanía y la clásica tipología de EB desarrollada por Esping-Andersen (1993). Los resultados de estos estudios muestran, de manera general, un soporte decreciente hacia aspectos relacionados con la igualdad, la redistribución y la intervención del Estado, y pone de manifiesto el elevado grado de heterogeneidad en los indicadores utilizados para medir el apoyo hacia el EB. Así, algunos investigadores han utilizado medidas únicas creadas a partir de múltiples indicadores individuales, o bien medidas sobre el apoyo a políticas específicas de bienestar o a políticas genéricas de redistribución de recursos (Svallfors, 2010).

Más allá de la aproximación comparativa, la investigación sobre las actitudes hacia el EB se puede dividir en dos grandes líneas. Una aproximación político-económica considera las actitudes hacia el EB como un reflejo del interés individual (Iversen y Soskice, 2001; Cusack, Iversen y Rehm, 2006). En este sentido, un elemento clave es

analizar cuales son las preferencias de la ciudadanía sobre cómo deben financiarse y gestionarse las políticas de bienestar, y si éstas han cambiado durante los últimos años, tal y como afirman algunos autores (Taylor-Gooby, 1999 y 2001; Van Kersbergen 2000). Una segunda aproximación política-sociológica relaciona las actitudes hacia el EB con las consideraciones individuales sobre aspectos relacionados con la justicia social, los derechos sociales y la reciprocidad (Mau, 2003; Brooks y Manza, 2007; Svallfors, 2007).

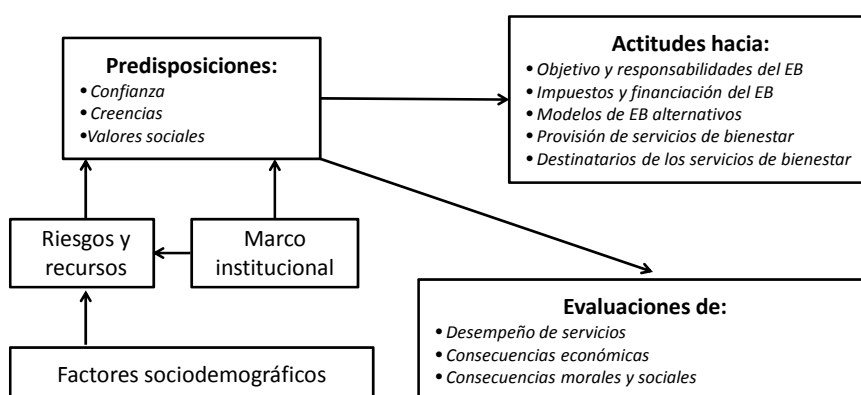
Una de las corrientes actuales en la investigación académica, es el análisis del impacto que tiene el nivel de competencia de los ciudadanos en las actitudes hacia la redistribución de prestaciones sociales. Así, las personas con competencias muy específicas asociadas a una posición laboral determinada tienden a ser más favorables a políticas de protección social y redistribución, en comparación con las personas que desarrollan competencias más genéricas (Iversen y Soskice, 2001; Kitschelt y Rehm, 2006; Tahlin, 2008). Otra de las actuales líneas de investigación está centrada en el efecto que tienen las políticas de bienestar en los intereses y percepciones de la ciudadanía, y de manera concreta, en cómo los individuos entienden sus derechos y obligaciones como miembros de una comunidad política (Mettler y Soss, 2004). Finalmente, uno de los elementos que requiere mayor consideración teórica y analítica es la importancia relativa que ejercen los factores individuales, las circunstancias personales actuales y las expectativas de futuro en la configuración de las actitudes hacia el EB (Kulin y Svallfors, 2011).

### *Actitudes hacia el EB: factores explicativos*

En un apartado anterior de esta tesis doctoral ya se ha mencionado que la Encuesta Social Europea del año 2008 incorporó el módulo específico “Welfare attitudes in a Changing Europe” (WAE, 2011). Este módulo utiliza un marco conceptual –ver Gráfico 3- que tiene como punto de partida los recursos de los que disponen los individuos y grupos sociales -en función de su estatus socioeconómico-, y los riesgos a los cuales se enfrentan. Como medida subjetiva de clase social y vulnerabilidad percibida, la percepción de riesgo es uno de los factores que más influyen en las actitudes de la ciudadanía hacia el EB. Esta sensación de vulnerabilidad y riesgo socioeconómico

puede contribuir al apoyo de políticas de bienestar colectivas -como una respuesta al riesgo colectivo-, pero también puede promover el desarrollo de actitudes excluyentes que prefieren restringir la provisión de servicios de bienestar a colectivos específicos. De esta manera, los valores sociales y otras predisposiciones actuarían en este marco conceptual como mediadores entre los riesgos, los recursos y el marco institucional, por un lado, y las actitudes y evaluaciones del EB por parte de la ciudadanía.

Gráfico 3: Marco conceptual del módulo “Welfare attitudes in a changing Europe”



Fuente: Modificado de WAE (2011)

Diferentes estudios (Hasenfeld y Rafferty, 1989; Elster, 1990; Mansbridge, 1990; Chong, Citrin y Conley, 2001; Blekesauane y Quadagno, 2003; Van Oorschot, 2006a) han clasificado en dos grandes grupos las características individuales y relacionadas con el contexto socioeconómico que influyen en la actitud de la población hacia el EB. Por un lado, variables sociodemográficas como la edad, el nivel de ingresos y la situación laboral, que indican el grado de interés personal hacia las provisiones y servicios proporcionados por la Administración. Desde éste punto de vista, varios autores han señalado que aquellos ciudadanos que dependen de las prestaciones públicas apoyarían en mayor medida el Estado del Bienestar (Arriba, Calzada y Del Pino, 2006). El segundo grupo de características individuales está relacionado con la posición ideológica. Una ideología orientada hacia posiciones de izquierda tiende generalmente

a ser menos crítica y más favorable hacia el EB. De todas maneras, y tal y como señalan Van Oorschot y Meuleman (2012), éstas actitudes pueden variar a lo largo del tiempo como resultado de cambios estructurales en la sociedad (por ejemplo, el incremento de nuevos riesgos sociales) o en el mismo sistema de bienestar.

La ciudadanía española ha sido definida tradicionalmente como defensora de un modelo de bienestar estatista-universalista, en el que el Estado es el principal responsable del bienestar de los individuos (Del Pino, 2007). Esta atribución de responsabilidad hacia el Estado se refuerza de manera continua desde el año 1991, y llega a sus valores máximos en el 2005 -en plena “burbuja inmobiliaria” y poco antes de que se iniciara la crisis económica y financiera que afecta hoy en día a toda Europa-. Concretamente, 68 de cada 100 ciudadanos consideraban en el 2005 que el Estado “debe ser el responsable del bienestar de todos los ciudadanos y tiene la obligación de ayudarles a solucionar sus problemas”. Otros autores como Noya (1999), han afirmado que en España se produce el fenómeno denominado “estatismo ambivalente”, que resulta especialmente relevante en aquello que hace referencia a la inconsistencia contextual relacionada con los medios para el recorte del EB.

Las encuestas desarrolladas por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) durante el período comprendido entre 1989 y 2005 muestran que la población española es generalmente partidaria de una intervención estatal extensa e intensiva (Arriba, Calzada y Del Pino, 2006). Calzada (2007) destaca que una de las argumentaciones más extendidas para explicar este amplio apoyo a la responsabilidad del Estado, considera ésta actitud como un reflejo del modelo paternalista desarrollado durante la época de la dictadura. Sin embargo, la autora afirma que, de ser cierto este argumento, las personas de más edad serían las más favorables a la responsabilidad estatal en la provisión de servicios públicos y, en cambio, los datos empíricos señalan que es precisamente la generación más joven (de 18 a 29 años) la que apoya en mayor medida el intervencionismo estatal en el bienestar.

En este apartado se ha señalado que los cambios sociales y económicos afectan a la actitud y la confianza de la ciudadanía hacia los agentes e instituciones del EB. Una buena parte de la investigación académica sobre las actitudes de la población hacia el EB se ha centrado en la realización de estudios comparativos que han analizado su correspondencia con las diferentes tipologías desarrolladas a partir del modelo clásico de Esping-Andersen. Estos estudios han evidenciado el elevado grado de heterogeneidad en los indicadores utilizados para medir el apoyo hacia el EB. Una perspectiva distinta divide la investigación sobre las actitudes hacia el EB en una primera aproximación centrada en las actitudes como reflejo del interés individual, y una segunda relacionada con las consideraciones individuales sobre aspectos ligados al bien común. Algunas de las corrientes actuales en la investigación académica sobre actitudes hacia el EB centran su atención en el análisis del impacto que tiene el nivel de competencia de los ciudadanos en su actitud hacia el EB, así como la importancia de los factores individuales, las circunstancias personales y las expectativas de futuro en la configuración de las actitudes hacia el EB.

### *Actitudes hacia la reforma de los EB*

La investigación sobre las actitudes de la ciudadanía hacia las políticas del Estado tiene un interés también relacionado con los intentos de reformar la administración pública (Del Pino, 2004). La exigencia de una mayor responsabilidad cívica ha sido utilizada para legitimar programas de reforma y reestructuración de servicios públicos y de bienestar (Michailakis y Schirmer, 2010). Algunos autores (Pierson, 2001; Taylor-Gooby, 2001; Van Kersbergen, 2000) afirman que las reformas más profundas en las políticas del bienestar han sido posibles debido a las estrategias llevadas a cabo por parte de los gobiernos para evitar el castigo electoral, así como a una opinión pública más sensibilizada hacia el nuevo contexto económico y social, lo cual habría modificado los intereses y valores de muchos ciudadanos hacia el EB. En este sentido,

Del Pino (2007, 2009) señala que los gobiernos suelen aprovechar los períodos de crisis para introducir reformas y recortes sociales que en una coyuntura económica distinta pueden ser ampliamente rechazados por parte de la ciudadanía. Diversos autores también han señalado que los gobiernos han aprovechado un cierto cambio en las actitudes hacia el EB, y la existencia de determinadas fracturas sociodemográficas y políticas, para superar la resistencia de los ciudadanos a las reformas del EB (Svallfors y Taylor-Gooby, 1999; Goul Andersen, 1999; Van Kersbergen, 2000; Taylor-Gooby, 2001; Van Oorschot, 2006b).

Arriba, Calzada y Del Pino (2006) han afirmado que en el caso de países mediterráneos como España –y por lo tanto con una importante tradición cristiana de beneficiencia-, una cultura política estatalista reduce el margen de maniobra de los gobiernos, los cuales tienen dificultades –independientemente de la ideología- para transmitir a la ciudadanía la necesidad de introducir recortes en servicios públicos o bien aumentar impuestos, a fin de mantener el EB.

Por otro lado, la resistencia de los ciudadanos hacia la reducción en el EB, y las dificultades que han encontrado los sucesivos gobiernos para poner en marcha políticas de recortes sociales, han sido explicadas por Pierson en base a tres motivos principales: por motivos socio-psicológicos (los ciudadanos se mobilizan rápidamente ante una pérdida potencial de los beneficios derivados de los sistemas de protección social); debido a la lógica de la acción colectiva (los recortes sociales suponen costes inmediatos a determinados grupos de la población en virtud de inciertos beneficios a largo plazo para el conjunto de la población); y finalmente por motivos históricos (el legado político que han dejado varias décadas de desarrollo del EB).

#### **2.2.4. Dimensiones e indicadores de apoyo a las políticas de bienestar**

Van Oorschot y Meuleman (2012) señalan que la mayoría de estudios realizados sobre la legitimidad de las políticas de bienestar tienden a reducir las actitudes de la ciudadanía a una única dimensión -la responsabilidad del Estado en la provisión de bienes y servicios-, ante la cual la población tiende a contestar afirmativamente (Jacoby, 2000; Pettersen, 2001). Durante los últimos años, diferentes autores han

realizado estudios centrados en la multidimensionalidad de las políticas de bienestar y su legitimidad (ver Tabla 8).

Tabla 8: Dimensiones de las políticas de bienestar

<b>Svallfors (1991)</b>	<b>Sihvo y Uusitalo (1995)</b>	<b>Sabbagh y Vanhuyse (2006)</b>	<b>Van Oorschot y Meuleman (2012)</b>
Distribución de las políticas de bienestar	Responsabilidad de las políticas de bienestar	Individualismo	Apoyo a los principios del EB
Administración o implementación de las políticas de bienestar	Financiación pública	Ética del trabajo	Extensión del EB
Financiación de los servicios de bienestar	Utilización de los servicios de bienestar	Atribución interna de la desigualdad	Intensidad del gasto público
Abuso de los servicios de bienestar	Adecuación de las prestaciones sociales	Redistribución igualitaria	Evaluación de la implementación de las políticas de bienestar
	Consecuencias de las políticas de bienestar	Extensión de los servicios de bienestar	Evaluación de los resultados del EB
		Atribución externa de la desigualdad	Consecuencias percibidas

*Fuente: Elaboración propia a partir de Svallfors (1991), Sihvo y Uusitalo (1995), Sabbagh y Vanhuyse (2006) y Van Oorschot y Meuleman (2012)*

Svallfors (1991) establece cuatro dimensiones relacionadas con la provisión de servicios de bienestar. La primera dimensión hace referencia a cómo se distribuye el gasto social en áreas concretas de bienestar, como la salud, la educación, la familia, los servicios sociales o el apoyo a los mayores. La segunda dimensión se refiere a la actitud de la ciudadanía hacia las instituciones y procesos que administran, implementan y desarrollan los servicios de bienestar. La tercera dimensión se centra en las actitudes hacia la financiación del EB. La cuarta y última dimensión hace referencia al posible abuso de servicios de bienestar, y concretamente a la actitud general de la ciudadanía hacia las demandas realizadas por parte de colectivos específicos.

Por su parte, Sihvo y Uusitalo (1995) establecen cinco dimensiones: la responsabilidad de los servicios de bienestar (pública, privada o civil); la financiación por parte del Estado –el gasto público–; la utilización de los servicios por parte de la ciudadanía (sobreutilización e infrautilización); la adecuación de las prestaciones sociales del

Estado (suficiencia de ingresos y servicios) y los efectos del EB (reducción de la desigualdad y dependencia/pasividad de la población).

Sabbagh y Vanhuysse (2006) defienden la existencia de seis dimensiones distintas que se pueden agrupar en dos grupos de actitudes. Un primer grupo incluiría una serie de actitudes centradas en el mercado, como el individualismo, la ética del trabajo y la atribución interna de la desigualdad. El segundo grupo, en cambio incluiría actitudes centradas en el Estado como proveedor de bienestar: la redistribución igualitaria, la extensión de los servicios de bienestar y la atribución externa de la desigualdad social.

Finalmente, Van Oorschot y Meuleman (2012) señalan que las actitudes hacia el EB pueden dividirse en las seis dimensiones siguientes: apoyo a los principios del EB; extensión del EB; intensidad del gasto público; evaluación de la implementación de las políticas de bienestar; evaluación de los resultados del EB; y consecuencias percibidas del EB.

Estos últimos autores también afirman, sin embargo, que es posible medir la legitimidad del EB utilizando un número limitado de preguntas centradas en la opinión de la ciudadanía sobre la extensión y la intensidad de las políticas de bienestar. El nivel de extensión se refiere a cuáles son las áreas de provisión que deberían ser responsabilidad del gobierno, mientras que el grado de intensidad se refiere a cuánto debería gastar el gobierno en determinadas políticas sociales. Éstos dos indicadores están, en opinión de Gelissen (2000), interrelacionados y son los más utilizados en los estudios sobre la responsabilidad del Estado en la provisión de servicios.

### **2.2.5. La intensidad del EB: impuestos y gasto social**

Una de las líneas prioritarias desarrolladas en los estudios sobre las actitudes de la ciudadanía hacia el EB tiene como objetivo analizar hasta qué punto los ciudadanos se muestran dispuestos a pagar más impuestos para poder mejorar los servicios y prestaciones sociales. De hecho, la asignación de recursos a las políticas públicas ha sido el trasfondo explícito o implícito de una gran parte de los debates políticos que se han producido en las democracias avanzadas (Obinger y Wagschal, 2010).



Arriba, Calzada y Del Pino (2006) han señalado que el grado de acuerdo con la reducción de servicios públicos, al mismo tiempo que se reducen los impuestos, es un buen indicador porque permite contrastar el grado de solidez de las actitudes hacia la provisión pública de servicios y enfrenta a los ciudadanos no sólo con los beneficios que reciben, sino también con lo que pagan. Así, el predominio de una actitud favorable a la reducción de impuestos se puede interpretar como un cuestionamiento del EB, mientras que la opción contraria (más impuestos y más servicios sociales) mostraría una actitud de apoyo al EB.

El gasto social expresado como porcentaje del Producto Interior Bruto (PIB) es una de las medidas utilizadas de manera más habitual para dimensionar el tamaño del EB de un país determinado (Van Oorschot y Finsveen, 2010). Francis Castles considera, por ejemplo, que el gasto social permite entender “qué es lo que hacen los EB” y cómo se organizan (Castles, 1994). En cambio, autores como Esping-Andersen (1993) señalan que el nivel de gasto social proporciona poca o ninguna información sobre la manera en cómo se distribuye el dinero público, y ha recomendado, al igual que otros investigadores, centrarse en el grado en el que los derechos sociales están garantizados por los sistemas de bienestar de cada país.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) proporciona a partir de la mitad de los años 90 una base de datos sobre gasto social que ha facilitado la realización de estudios comparativos en el ámbito internacional. La Tabla 9 muestra una serie de indicadores sobre el gasto social en España, en comparación con la media de los distintos regímenes del EB, y con la media de 21 países miembros de la OCDE. De manera general, el gasto social y los ingresos a partir de impuestos han aumentado en todos los países desde 1980. A partir de éstos datos, Castles (1993) agrupó a los países en cuatro grupos que coinciden con la tipología sugerida por Esping-Andersen, con la inclusión adicional de un régimen mediterráneo de bienestar. En cualquier, y como señalan Obinger y Wagschal (2010), el aumento del gasto social no refleja la inexistencia de recortes sociales, sino el hecho de que las necesidades han aumentado más rápidamente que los niveles de gasto social. La Tabla 9 muestra también los niveles de ingresos a través de impuestos para el año 1990 y el 2006. Un análisis de

clusters realizado por Wagschal (2005) basado en 144 indicadores relacionados con los impuestos permite establecer una tipología de los 21 países incluidos en esta tabla, cuyos resultados son similares a la clasificación realizada por Castles en función del gasto social.

España ha experimentado, según Arriba, Calzada y Del Pino (2006), dos fases distintas en un período reducido de tiempo. Así, la década de los ochenta y los primeros años de la década de los noventa se caracterizaron por el crecimiento del gasto público, de la presión fiscal y de la extensión e intensidad de los servicios de bienestar. Posteriormente, y hasta el año 2005 (último año del citado estudio) se han venido aplicando políticas de contención del gasto público.

Obinger y Wagschal (2010) también han relacionado la posición ideológica con la actitud hacia los impuestos. Así, en una escala de 5 posiciones ideológicas, cuanto más a la derecha se sitúa un individuo, más favorable es su actitud hacia unos impuestos bajos. Sin embargo, las personas que se autclasifican como “muy de derechas” manifiestan una mayor preferencia por políticas intervencionistas, así como impuestos no demasiado altos para las personas que tienen bajos ingresos económicos.

El papel de los partidos políticos en la configuración del EB también se puede analizar mediante su actitud hacia el gasto social y los impuestos. Benoit y Laver (2006) han creado una escala numerada entre el 1 y 20 (en la que 1 indica la posición más cercana al aumento de impuestos y al incremento de servicios públicos, y 20 indica la posición más cercana al recorte de servicios sociales y a la disminución de impuestos). Los datos de su estudio indican la posición que ocupan en esta escala los dos partidos mayoritarios (uno de izquierdas y otro de derechas) de 18 países europeos, más Japón, Estados Unidos y Canadá. En el caso de España, los datos muestran que el mayor partido situado a la izquierda (PSOE) ocupa una posición de 7,4 (la media para el conjunto de todos los países incluidos es de 7,9), mientras que el mayor partido situado a la derecha (PP) ocupa una posición de 16,7 (la media es de 13,7). La diferencia entre ambos partidos es de 9.3 puntos, solamente superada por Italia, Suecia, Suiza y Estados Unidos.

Tabla 9: Gasto público e impuestos en España y en los diferentes regímenes del EB (fuente: OCDE)

	Gasto público (bruto) (1980) <sup>1</sup>	Gasto público (bruto) (2005) <sup>1</sup>	Gasto público (bruto)/gasto total del gobierno (1980) <sup>1</sup>	Gasto público (bruto)/gasto total del gobierno (2005) <sup>1</sup>	Gasto público per cápita (1980) <sup>2</sup>	Gasto público per cápita (2005) <sup>2</sup>	Ingresos total por impuestos (1990) <sup>1</sup>	Ingresos totales por impuestos (2006) <sup>1</sup>
<b>España</b>	15.5	21.2	45.9	55.2	2011	4927	32.5	36.6
<b>Regimen mediterráneo</b>	13.5	22.4	38.7	51.1	1919	4994	31.1	36.4
<b>Regimen liberal</b>	14.7	17.7	33.9	51.6	2522	5372	33.1	32.9
<b>Régimen conservador corporativista</b>	22.9	26.1	44.4	52.6	4172	7428	40.3	41.1
<b>Régimen socialdemócrata</b>	21.7	26.0	42.6	51.8	4165	8286	45.8	46.4
<b>Media OCDE 21</b>	17.5	22.4	39.0	52.7	3124	6385	36.3	37.7

Fuente: OCDE

<sup>1</sup>Datos expresados en porcentaje del PIB; Fuente: The OECD Social Expenditure Database 1980-2005<sup>2</sup>Datos expresados en Euros

El grado de acuerdo con la reducción de servicios públicos al mismo tiempo que se bajan los impuestos ha sido considerado un buen indicador de las actitudes de la ciudadanía. Por su parte, el gasto social expresado como porcentaje del PIB es uno de los indicadores más habituales para dimensionar el tamaño del EB. Los datos de diversos indicadores relacionados con los impuestos y el gasto social permiten establecer una tipología de países similar a la establecida por Esping-Andersen, con la inclusión adicional del régimen mediterráneo de bienestar.

### **2.2.6. EB, desigualdad y gasto público**

El desarrollo del EB ha tenido como objetivos principales la reducción de las desigualdades y de los índices de pobreza de la población, así como conseguir un incremento en el nivel de bienestar de los ciudadanos. Gosta Esping-Andersen (1993) afirma que el principio de igualdad es generalmente la principal referencia que guía las acciones del EB.

El nivel de bienestar, progreso y desarrollo de un país ha sido tradicionalmente medido por indicadores como la renta *per cápita* (relación entre el PIB de un país y su número de habitantes). Existe consenso acerca de la utilidad de este indicador para aquellos países con bajos niveles de desarrollo, en los que un aumento del PIB supone un incremento del bienestar general de la población (Inglehart, 1997). Sin embargo, en los países con un mayor PIB, la relación entre la renta *per cápita* y el bienestar general de la población es cada vez menor.

De hecho, durante los últimos años han surgido diferentes críticas al uso de la renta *per cápita* como indicador de bienestar de la población (Layard, 2005). Una de las principales críticas hace referencia al hecho de que éste indicador no tiene en cuenta las desigualdades en la distribución de recursos entre los ciudadanos. Así, durante las últimas décadas se han desarrollado otros indicadores para medir la distribución uniforme de la renta en un país -como el coeficiente de Gini o el índice de Atkinson-, o el nivel de bienestar. Entre estos últimos figuran el Índice de Bienestar Económico Sostenible (IBES), el Índice de Progreso Real (IPR) el Índice de Desarrollo Humano

(IDH), el Índice Forham de Salud Social (IFSS) o el Índice de Bienestar Económico (IBE). Saunders (2010) afirma que los dos indicadores de desigualdad más utilizados en los estudios sobre el impacto de las políticas públicas son el coeficiente de Gini y el ratio percentil P90/P10.

Wilkinson y Pickett (2009a) señalan que los indicadores relacionados con la salud, el bienestar o la felicidad de la población correlacionan de manera positiva con el PIB durante las fases iniciales de crecimiento económico, pero esta correlación disminuye a medida que el PIB de un país aumenta. Milner (2002) también ha señalado que el PIB es un indicador poco adecuado para medir el progreso socioeconómico de un país, y que no existe una correlación entre el PIB y el índice de desigualdad de Gini.

En cambio, y según este último autor, la elevada correlación del gasto público de un país (expresado como porcentaje del PIB) con el coeficiente de Gini permite afirmar que aquellos países que destinan más recursos al gasto social son también aquellos más igualitarios. Y, tal y como señalan Obinger y Wagschal (2010), el gasto público - uno de los indicadores más utilizados para medir la fortaleza y extensión de los EB- tiene un efecto mayor que el gasto privado en la reducción de los niveles de desigualdad económica y en los índices de pobreza.

Así, la reducción de los índices de desigualdad y pobreza se puede conseguir a través de la provisión de una política de provisión de servicios sociales y subsidios, o bien mediante los impuestos. Los datos de la OCDE (OECD, 2008a y 2009) muestran una fuerte correlación entre el coeficiente de Gini y los ingresos de un país a través de impuestos. Sin embargo, Obinger y Wagschal matizan que en el grado de igualdad alcanzado influyen elementos adicionales como el tipo de impuestos, la progresividad o las exenciones. Además, algunos autores han señalado que los sistemas de provisión y protección social centrados en los grupos socioeconómicos más desfavorecidos pueden tener un efecto redistributivo menor que las sistemas de provisión universal. Los datos de estudios realizados por Swank (2002) o Korpi y Palme (1998) muestran que son las políticas universales, que proporcionan a todo el mundo los mismos servicios de bienestar, las que en mayor medida contribuyen a reducir la desigualdad.

Rothstein y Uslaner (2005) afirman que esto es debido a motivos tanto de tipo económico como político. En el primer caso, argumentan que los impuestos son generalmente proporcionales o progresivos en función de la renta, mientras que los servicios son iguales para todo el mundo. En el segundo caso, los autores consideran que en general los ciudadanos de clase alta y –sobretudo- los de clase media tienen la percepción de pagar impuestos y no recibir en cambio un retorno suficiente en forma de servicios de bienestar. Por otra parte, también señalan que mientras los programas universales tratan de la misma manera a todas las personas, los programas selectivos tienden a la estigmatización de ciertos colectivos. Y finalmente, afirman que los programas universales necesitan un control administrativo menor que los programas selectivos, contribuyen al aumento de la cohesión y de la confianza social, y son apoyados por colectivos muy amplios de la población, incluyendo la clase media y personas con un elevado nivel educativo (Svallfors, 1997). En este sentido, muestran el ejemplo de Estados Unidos como un país en el que la desigualdad ha aumentado pese al funcionamiento de programas de bienestar específicos dirigidos a colectivos desfavorecidos. Otros autores también han afirmado que los programas sociales de carácter universal tienen un apoyo político más elevado puesto que sus beneficios son repartidos de manera más amplia entre la población (Saunders, 2010).

Por su parte, Wilkinson y Pickett (2009a) afirman que no siempre se precisa una gran intervención pública a través del gasto social para conseguir que una sociedad sea más igualitaria. Así, pone como ejemplos a los Estados Unidos y el Japón. Ambos países están situados en extremos opuestos en todos los análisis de desigualdad, pero la proporción de PIB que sus gobiernos destinan a gasto social es muy pequeña. Según estos autores, el nivel de desigualdad puede reducirse mediante impuestos y prestaciones sociales para redistribuir rentas muy desiguales, o bien igualando las rentas brutas antes de impuestos y deducciones, lo cual hace innecesaria la redistribución posterior. Japón y Suecia son ejemplos de estas dos posibles vías para conseguir una sociedad más igualitaria: en el caso de Suecia, mediante una política fiscal redistributiva y un EB con amplias prestaciones; en el caso de Japón -uno de los países con menor gasto público en bienestar social-, mediante la igualdad de la renta

bruta. Otro ejemplo lo podemos encontrar en los dos estados con mayor nivel de igualdad en los Estados Unidos: Vermont y New Hampshire. El primero de ellos tiene los impuestos más altos del país, mientras que New Hampshire tiene impuestos muy bajos y el porcentaje de gasto público más bajo de todo el país.

En este apartado se ha destacado que uno de los objetivos principales del EB es la reducción de las desigualdades sociales y económicas, y que la utilización de la renta *per capita* como indicador del bienestar de una población ha sido criticada debido a que no tiene en cuenta las desigualdades en la distribución de recursos entre los ciudadanos.

Se ha subrayado también la tesis defendida por Henry Milner, quien considera que los países con un menor índice de desigualdad son aquellos que dedican más recursos a las políticas sociales de carácter universal. Otros autores, en cambio, han señalado que la reducción de los índices de desigualdad y pobreza se puede conseguir también a través de la provisión de subsidios o de una política impositiva adecuada. El distinto efecto redistributivo que pueden tener las políticas sociales universales o aquellas dirigidas a los grupos más desfavorecidos, así como el apoyo que éstas pueden tener por parte de la ciudadanía, han sido objeto de un amplio debate en la literatura.

### **2.2.7. Las consecuencias de la desigualdad**

Van Oorschot y Finsveen (2010) consideran que las desigualdades en capital humano y cultural son en buena parte una consecuencia de las políticas educativas. La inversión en políticas educativas genera beneficios para la sociedad. Un mayor nivel educativo general aumenta la productividad y el bienestar económico de la sociedad, y puede ser asimismo un potente instrumento para promover la igualdad de oportunidades y reducir las desigualdades sociales (Allmendinger y Leibfried, 2003). Algunos estudios relativos al gasto público en educación (Iversen y Stephens, 2008) revelan un patrón similar a las tipologías de EB expuestas anteriormente (Castles, 1993; Esping-Andersen, 1993, y configuran un grupo de países mediterráneos que se caracterizan por bajos niveles de gasto público en educación. La importancia de invertir en políticas

educativas como garantía de desarrollo en la denominada “economía global del conocimiento” no ha sido suficientemente reconocida en el sur de Europa (Ferrera, 2010), cuyos países comparten una serie de aspectos históricos y culturales: una industrialización tardía, un proceso de democratización también tardío y/o fragmentado, y una larga tradición católica. Los datos de la OCDE (2008b) muestran que el nivel de gasto público en educación en España es bajo (alrededor del 4%, únicamente por encima de Japón y Grecia), en comparación a lo que se debería esperar en base a su nivel de gasto social.

Diferentes estudios realizados durante los últimos años ponen de manifiesto la relación entre la desigualdad y diferentes tipos de problemas económicos, sociales y relacionados con la salud. Una extensa revisión de Wilkinson y Pickett (2006) que examina casi ciento setenta artículos académicos concluye que los ciudadanos de las sociedades más igualitarias disfrutaban generalmente de un mejor estado de salud. Estos mismos autores también han mostrado una correlación positiva y significativa entre el índice de problemas sociales y de salud de una población y el nivel de desigualdad en la renta, pero no entre este índice y la renta media *per capita*. El conocido estudio *Whitehall*, liderado por Wilkinson y Marmot (2006), muestra que la posición que ocupamos respecto a los demás en la escala social tiene una influencia muy importante en el estado de salud. Por otro lado, los datos procedentes de la *International Adult Literacy Survey* muestran una estrecha relación entre la desigualdad en el nivel de renta y en el nivel de cultura general (OCDE, 2000). Las diferencias de renta dentro de una población también están relacionadas con la salud y la felicidad de los ciudadanos. Esto es especialmente significativo en los países desarrollados, en los que gran parte de los problemas son consecuencia de que las diferencias materiales entre las personas son excesivamente grandes.

Wilkinson y Pickett (2009a) también afirman que vivir en entornos menos igualitarios perjudica a todas las clases sociales -y no solamente a las clases más desfavorecidas-. De la misma forma, diferentes estudios (Banks, Marmot, Oldfield et al, 2006; Vaguero y Lundberg, 1989; Leon, Vaguero y Olausson, 1992; Babones, 2008; Sidiqqi, Kawachi,



Berkman, et al, 2007) muestran que los beneficios de una mayor igualdad se ven reflejados en todas las capas sociales. Por lo tanto, la reducción de los índices de desigualdad contribuye al aumento del bienestar y de la calidad de vida de toda la población. Por ello, varios autores señalan la importancia y la utilidad de disponer de diferentes indicadores para poder comparar desigualdades no sólo en la renta, sino también en otras variables como la educación. En este sentido, Milner (2002) ha establecido una elevada correlación entre el coeficiente de Gini –indicador utilizado habitualmente para medir la desigualdad en la renta- y otros indicadores relacionados con la redistribución de recursos no materiales-, especialmente en los niveles educativos más bajos.

Las desigualdades existentes en la sociedad reflejan el paralelismo entre el estatus socioeconómico y el grado de incidencia de numerosos problemas sociales. Wilkinson y Pickett (2009a) señalan que, en muchos casos, las dificultades económicas a las que se ven abocadas muchas personas suelen ser consecuencia del deseo de vivir de acuerdo a los estándares dominantes y de mantener las apariencias. El crecimiento continuado del nivel de ingresos crearía así un círculo vicioso según el cual, cuanto más se tiene, más se cree que se necesita, y más tiempo se dedica a conseguir bienes materiales, en detrimento de la vida familiar, las relaciones personales y la calidad de vida.

Así, la posición relativa en la jerarquía social respecto a las demás personas adquiere una gran importancia, y constituye el marco de las normas y convenciones que son consideradas socialmente diferenciadoras. La percepción de una cierta *evaluación del estatus social* por parte del resto de individuos ha promovido un fenómeno que diferentes autores han denominado como “ansiedad por el estatus” (Botton, 2004), el “virus de la abundancia” (Oliver, 2007), la “fiebre del lujo” (Frank, 1999) o la “adicción a los ingresos” (Layard, 2005). Los factores anteriormente señalados, y el aumento en el grado de desigualdad que se ha producido en la mayor parte de países desarrollados durante las últimas décadas ha ido acompañado de un espectacular auge de los valores ligados al ocio y al consumo. Todo ello, unido al debilitamiento de los vínculos sociales y familiares, pueden constituir la base del aumento de la percepción de la

inseguridad social y económica que se describe en la “sociedad del riesgo” de Beck (1986), la “modernidad líquida” de Bauman (2002) o la “modernización reflexiva” de Giddens (1999). Éste último autor denomina *confiabilidad* a la gestión de los riesgos generados por la ignorancia y la incertidumbre. Según Giddens, ante la ansiedad generada por la pérdida de referentes de pertenencia y vinculación que se encontraban tradicionalmente en la comunidad, las personas necesitan confiar en que aquello que no pueden controlar y que perciben como una amenaza, se encuentre bajo control.

Al inicio de este apartado se ha señalado que las desigualdades en capital humano y cultural son en buena parte una consecuencia de las políticas educativas, y que los ciudadanos de las sociedades más igualitarias disfrutaban generalmente de un mejor estado de salud. Un mayor nivel educativo general puede promover la igualdad de oportunidades y contribuir a la reducción de las desigualdades sociales. Asimismo, se ha apuntado que los países mediterráneos –y España en particular- se han caracterizado tradicionalmente por un nivel bajo de gasto público en educación.

Por otro lado, diferentes estudios muestran que la desigualdad perjudica también a todas las clases sociales -no solamente a las clases más desfavorecidas-, y que los beneficios de una mayor igualdad se ven reflejados en toda la sociedad.

### **2.2.8. Desigualdad, confianza y actitudes hacia el EB**

Diversos autores como Eric Uslaner y Bo Rothstein han mostrado una relación causal entre la desigualdad y la confianza interpersonal, de manera que sería la desigualdad la que afectaría a la confianza, y no al revés (Uslaner, 2002; Rothstein y Uslaner, 2005). Éstos autores han tratado el concepto de igualdad desde una doble perspectiva: la igualdad económica y la igualdad de oportunidades, y relacionan estas dos perspectivas con la confianza social en base a dos motivos principales. En primer lugar, las desigualdades económicas contribuyen a disminuir el optimismo hacia el futuro. En este sentido, el mismo Uslaner (2008) señala que la confianza “moral” - que considera que la mayor parte de la gente comparte los mismos valores fundamentales- es una

válvula de seguridad psicológica contra el miedo asociado al riesgo. En cambio, la confianza particularizada –no generalizada- es más prevalente entre las personas que son pesimistas hacia el futuro, las personas temerosas de ser víctimas de algún tipo de violencia o crimen, las personas solitarias o con una red de apoyo social pequeña, y las personas con un nivel educativo más bajo.

La confianza social o confianza generalizada contribuye a una sociedad más igualitaria. Y cuando los recursos se distribuyen de una manera más igualitaria, los ciudadanos tienden a percibir un interés compartido con el resto de la sociedad. En aquellas sociedades con elevados niveles de confianza social y mayores niveles de igualdad económica, la búsqueda del interés común lleva al apoyo de políticas sociales universales –y no simplemente redistributivas- que contribuyen a aumentar el sentido de solidaridad social y a reducir las disparidades en el bienestar y en el acceso a las oportunidades que tiene cualquier individuo en la sociedad (Rothstein y Uslaner, 2005). Según Wilkinson y Pickett (2009a), la confianza es un indicador de la forma en que una mayor igualdad en los recursos materiales puede contribuir a crear una comunidad más cohesionada y colaboradora, en beneficio de todos los ciudadanos.

Van Oorschot y Finsveen (2010) han considerado que las intervenciones del EB pueden tener un impacto indirecto en el capital social, mediante la creación de un contexto de seguridad básica que permita aumentar el nivel de confianza social e institucional de la población más desfavorecida, así como un contexto de solidaridad que facilita la adherencia a las normas sociales de cooperación y ayuda mutua. Por su parte, Rothstein y Uslaner (2005) se preguntan si los bajos niveles de confianza y capital social que existen en muchos países están causados por la falta de acción política para reducir las desigualdades. En este sentido, señalan que los países con un mayor nivel de confianza social -como los países nórdicos, Holanda o el Canadá- son aquellos con menores desigualdades económicas. También afirman que estos mismos países han dedicado muchos recursos a la igualdad de oportunidades en las políticas de educación pública, el mercado laboral o el género.

Diferentes investigadores han desarrollado una amplia literatura sobre la importancia de la confianza en las instituciones públicas para entender las diferencias en el apoyo

de la ciudadanía al EB (Steinmo, 1994; Rothstein, 1998; Rose 1991; Rothstein y Steinmo, 2002). La confianza institucional –que ya ha sido analizada en un apartado anterior de este marco teórico- está basada en las percepciones de la ciudadanía sobre el funcionamiento de las instituciones públicas, en términos de eficiencia e imparcialidad (Uslaner, 2002 y 2010; Newton, 2007). Una buena disposición a ceder recursos y responsabilidades a las instituciones públicas, implica unas elevadas expectativas en el sentido de que éstas instituciones llevarán a cabo esta responsabilidad de manera transparente y eficiente (Nye, Zelikow y King, 1997).

Sin embargo, aunque existen diferentes estudios teóricos que describen los potenciales efectos del declive de la confianza institucional en la actitud hacia el EB, pocos de éstos estudios contienen datos empíricos (Edlund, 2006; Kumlin, 2007a, Svallfors, 2011). Y entre ellos, únicamente el estudio realizado por Svallfors apoya la base teórica mencionada anteriormente. Por su parte, Backström y Edlund (2012) han señalado que la relación entre la confianza institucional y las preferencias sobre las políticas de bienestar, están condicionadas por la confianza que los ciudadanos tienen en instituciones privadas.

Otros autores han señalado que este efecto de la confianza institucional en el apoyo al EB está en función de determinadas variables sociodemográficas y de la percepción que tienen los ciudadanos acerca del tipo de prestaciones sociales. De esta manera, el grupo de trabajadores no cualificados, mujeres, jóvenes y personas mayores tendrían un nivel de confianza mayor en las instituciones que son percibidas como redistributivas, y que asignan recursos a los grupos de población más vulnerables. En cambio, si las instituciones son percibidas como proveedoras de sistemas de protección de carácter universal, no se observarían diferencias significativas en el grado de confianza institucional, en función de variables socioeconómicas, la edad o el género (Rothstein y Teorell, 2008; Rothstein, 2011).

También para Rothstein y Uslaner (2005), el apoyo a los programas de bienestar universales depende de la confianza en el gobierno para distribuir los recursos de una manera transparente y honesta. De esta manera, en aquellos países cuyo nivel de

confianza en el gobierno es bajo, la población consideraría que el gobierno no está capacitado para gestionar de manera adecuada estas políticas de bienestar, y en consecuencia la población no se mostraría dispuesta a pagar impuestos por obtener unos determinados servicios de bienestar proporcionados por un gobierno en el cual la sociedad no confía. Por lo tanto, se genera el siguiente círculo vicioso: la desigualdad hace disminuir la confianza social e institucional, y las políticas públicas que podrían contribuir a reducir el nivel de desigualdad no pueden llevarse a cabo, precisamente por la falta de confianza en la acción del gobierno. En consecuencia, las demandas de políticas de redistribución contribuyen a exacerbar las tensiones sociales entre las clases más y menos favorecidas.

En este apartado se ha analizado la relación entre la desigualdad y la confianza. Diferentes estudios señalan que las desigualdades económicas contribuyen a disminuir el optimismo hacia el futuro, y a disminuir la confianza social. Algunos autores han considerado que las intervenciones del EB pueden tener un impacto indirecto en el capital social y la reducción de la desigualdades, mediante el incremento del nivel de confianza social e institucional.

En relación a la confianza institucional, se ha destacado su importancia a la hora de promover una actitud favorable al incremento del gasto en políticas sociales. La confianza es una de las dimensiones incluidas en el análisis previo de la competencia cívica. Por lo tanto, éste punto será un elemento importante a tener en cuenta a la hora de evaluar cuál es su influencia en las actitudes y expectativas de futuro hacia el Estado del Bienestar, uno de los objetivos específicos de esta tesis doctoral.

### **2.2.9. Desigualdad, competencia cívica y actitudes hacia el EB**

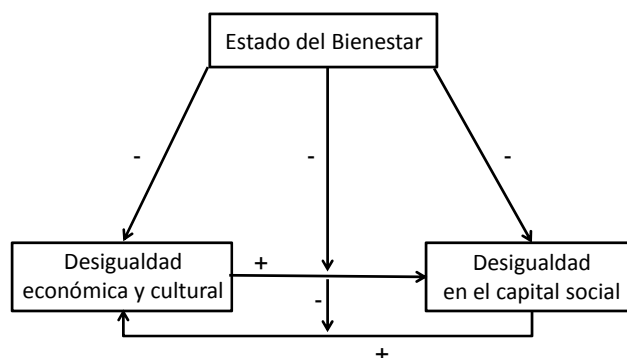
Tal y como se ha comentado, los EB intentan reducir las desigualdades a través de la provisión de servicios públicos. Sin embargo, la reducción de las desigualdades en los elementos que definen el capital social o la competencia cívica no han sido generalmente un objetivo explícito del EB. Quizás por ello, la relación entre las políticas de bienestar y las desigualdades en el capital social no ha sido objeto habitual de la investigación académica (Van Oorschot y Finsveen, 2010). Ha sido únicamente a

partir de la popularización del concepto de capital social, y de la idea de que éste reporta beneficios en el bienestar y la economía de una población determinada, que las políticas dirigidas a mejorar el capital social de los grupos más desfavorecidos han conseguido cierta aceptación.

Lin (2000) y Bourdieu (1986) consideran que la creación y reproducción de capital social se produce a través de círculos virtuosos o viciosos que están relacionados con las desigualdades socioeconómicas. Bourdieu considera que la creación de capital social requiere una inversión de capital cultural y económico. Así, en aquellas personas con un elevado nivel de capital económico y cultural resulta más fácil la creación de capital social, lo cual a su vez, retroalimenta su capital cultural y económico, en una suerte de círculo virtuoso. En cambio, las personas con un nivel bajo de capital económico y cultural pueden verse atrapadas en un círculo vicioso que produce la disminución de su nivel de capital social a lo largo del tiempo. Por su parte, Lin considera que los procesos históricos e institucionales crean desigualdades estructurales de tipo socioeconómico entre diferentes grupos sociales, que acaban generando desigualdades en la cantidad y la calidad del capital social, lo cual se traduce un mayores desigualdades socioeconómicas.

Según Van Oorschot y Finsveen (2010), el impacto del EB en este círculo se puede producir a tres niveles distintos (ver Gráfico 4): en primer lugar, mediante la reducción de las desigualdades económicas (a través de políticas de protección social, condiciones laborales, educación, salud, etc). En segundo lugar, mediante un efecto directo en la reducción de las desigualdades en el capital humano. Y en tercer lugar, reduciendo los mecanismos de retroalimentación entre las desigualdades en el capital cultural-económico y el capital social.

Gráfico 4: Impacto del EB en las desigualdades en el capital social, económico y cultural



Fuente: Modificado de Van Oorschot y Finsveen (2010)

En los últimos años, diversos autores han analizado la relación entre el nivel de desigualdad y diferentes variables relacionadas con la competencia cívica. Un elemento central en el trabajo de Bourdieu se centra en el hecho de que el capital social, al igual que el capital económico o el capital humano, está distribuido de manera desigual entre las distintas categorías sociales. Putnam, en su clásico “Solo en la bolera”, también considera que la reducción de las desigualdades y el capital social se refuerzan mutuamente. Así, en comunidades con un elevado capital social los ciudadanos contribuirán a la reducción de las desigualdades, y esta reducción contribuirá al aumento del capital social, en una suerte de *círculo virtuoso*. Y Van Oorschot y Finsveen (2010) se preguntan si las desigualdades en el capital social son menores en los EB más desarrollados, sin llegar a conclusiones claras en su investigación.

La distribución de recursos intelectuales o no materiales entre los miembros de una población es un tema central en la investigación desarrollada por Henry Milner (2002). Su trabajo, mencionado en anteriores apartados de este trabajo, establece una relación entre las políticas e instituciones que promueven la competencia cívica en los países nórdicos y la sostenibilidad de sus modelos de bienestar. Milner considera que los países más igualitarios corresponden a aquellos que tienen un nivel de redistribución mayor tanto de recursos materiales como de recursos no materiales.

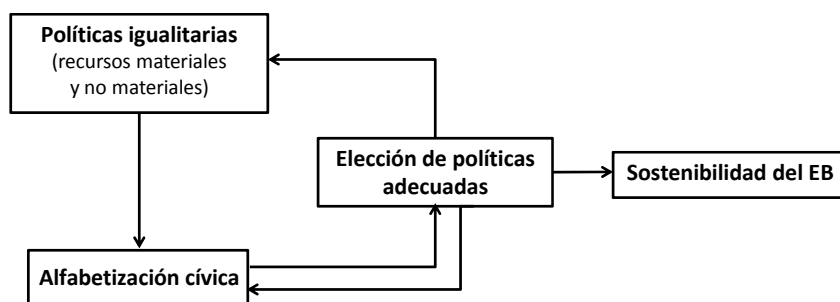
Tal y como se ha señalado anteriormente, Milner considera que el nivel de alfabetización cívica de una población refleja la proporción de ciudadanos que tienen las competencias necesarias para ejercer una ciudadanía informada y activa. Por lo tanto, aquellas políticas que promueven la redistribución de recursos -tanto materiales como no materiales o intelectuales- son el elemento principal que diferencia a las sociedades con un nivel elevado de alfabetización cívica. Entre estas políticas estarían, por ejemplo, todas aquellas que promueven y facilitan el acceso a fuentes de información y conocimiento por parte de la ciudadanía.

La conclusión de Milner tiene importantes repercusiones. En otro apartado de esta tesis doctoral ya se ha puesto de manifiesto la relación que existe entre el nivel educativo y el desarrollo de la competencia cívica, y uno de los objetivos específicos del presente estudio es el análisis de esta relación. Una interpretación de la tesis de Milner sería que el nivel educativo medio de una población no proporciona excesiva información sobre el nivel de competencia cívica. Aquello que es realmente importante es conocer cómo se distribuyen los recursos educativos entre los ciudadanos de dicha población. Algunos autores ya han señalado que la diferencia entre niveles educativos dentro de una misma población puede variar de manera significativa (Grönlund y Milner, 2006).

Milner (2002) considera que la alfabetización cívica es el elemento principal que distingue a las sociedades más igualitarias, y que éstas corresponden a las que dedican un mayor porcentaje del PIB al gasto público -y de manera particular al gasto en políticas sociales-. En estos países, el elevado nivel de información y conocimiento sobre aspectos relacionados con la competencia cívica promovería el apoyo mayoritario de políticas que reducen la desigualdad y permiten el desarrollo de un modelo de EB sostenible en el tiempo (ver Gráfico 5). Estas mismas sociedades corresponden también a las que consiguen unos niveles más elevados de participación política, medidos -en el caso de Milner- a través de la participación en las elecciones municipales.



Gráfico 5: Relación entre alfabetización cívica y el desarrollo del EB



Fuente: Modificado de Milner (2002)



## 3.OBJETIVOS, HIPÓTESIS Y MODELO DE ANÁLISIS

El marco teórico desarrollado hasta ahora ha sido dividido en dos grandes bloques, el primero relacionado con la competencia cívica y el segundo con las actitudes hacia el EB. A partir de esta revisión de la literatura, y en base a los objetivos planteados, se construirá un modelo de análisis que permitirá formular las hipótesis que van a ser objeto de estudio.

### 3.1. Objetivo general y objetivos específicos

El **objetivo general** de esta tesis doctoral es analizar en qué medida la competencia cívica de una población está relacionada con su nivel educativo y con su estado de salud, y en qué medida su grado de competencia cívica influye en sus actitudes y expectativas de futuro hacia el EB.

De manera más concreta, los **objetivos específicos** de este trabajo son:

1. Analizar la relación que existe entre el nivel educativo y el estado de salud de los ciudadanos españoles, y su nivel de competencia cívica.
2. Determinar cómo influyen el nivel educativo, el estado de salud y la competencia cívica, en las actitudes y expectativas de futuro de los ciudadanos hacia el EB.
3. Identificar grupos o perfiles de ciudadanos españoles en base a su nivel de competencia cívica y a sus actitudes y expectativas de futuro hacia el EB.

## **3.2. Justificación teórica de los conceptos y construcción del modelo de análisis**

### **3.2.1. Justificación teórica del concepto de competencia cívica**

En la primera parte del marco teórico se han analizado una serie de términos como compromiso cívico, ciudadanía activa, capital social o alfabetización cívica, que son utilizados frecuentemente en la literatura y que están relacionados con el tema central de esta tesis doctoral: la competencia cívica. Ya se ha comentado que, a menudo, los mismos términos son definidos de manera distinta por parte de diferentes autores mientras que, en otras ocasiones, los autores utilizan diferentes términos para referirse a los mismos conceptos.

En el presente trabajo se van a tener muy en cuenta las definiciones conceptuales de David Campbell o Bryony Hoskins, para quienes el término compromiso o competencia cívica hace referencia al conjunto de características que definen a un ciudadano que participa activamente en la vida política y comunitaria. También Henry Milner aporta una perspectiva interesante para este estudio –y en cierta manera similar a la de Putnam en el caso del capital social- al considerar la competencia cívica como un atributo individual pero también de la sociedad.

Por otro lado, las diferentes encuestas de ámbito nacional o internacional que miden aspectos total o parcialmente relacionados con la competencia cívica, tienen un elevado grado de heterogeneidad respecto a las variables analizadas y la población de estudio. La falta de un instrumento diseñado de manera específica para evaluar el nivel de competencia cívica en la población adulta, hace necesario que cualquier estudio deba tener en cuenta los distintos elementos y dimensiones que se incluyen en las diferentes encuestas.

En el marco de esta tesis doctoral se van a utilizar como dimensiones clave de la competencia cívica aspectos relacionados con la participación en organizaciones de voluntariado, los valores cívicos, la participación política, la implicación personal hacia la política y la confianza institucional. Algunos de los elementos que se han tratado en

el marco teórico hacen referencia al rol del contexto geopolítico e histórico en la evolución y características del asociacionismo, el grado de implicación de sus miembros en organizaciones de voluntariado, o la distinción entre formas convencionales y no convencionales de participación. Éste último aspecto se ha relacionado con el interés y la eficacia política de la ciudadanía, y con fenómenos como la desafección política o el declive de la confianza institucional.

Uno de los elementos de mayor interés, en el contexto del presente estudio, está centrado en la influencia de las actuales desigualdades sociales y económicas en el desarrollo de la competencia cívica. En este sentido, la importancia que tienen el contexto familiar y el proceso de escolarización ha sido objeto de estudio y debate por parte de un buen número de investigadores.

De manera más concreta, como se ha dicho, uno de los objetivos específicos de esta tesis doctoral es analizar la relación entre el nivel educativo y el estado de salud de los ciudadanos españoles, y su nivel de competencia cívica. Respecto al nivel educativo, el marco teórico ha mostrado que existe un consenso general sobre la evidente relación que existe entre nivel educativo y competencia cívica, Sin embargo, la aparente relación de causalidad entre ambos ha sido puesta en duda por parte de diferentes autores que defienden la importancia del contexto tanto en la consecución de un nivel educativo determinado, como en el desarrollo de la competencia cívica.

En cuanto al estado de salud, los estudios previos que han mostrado una relación entre éste y el capital social han utilizado un número limitado de indicadores y han sugerido una relación causal entre ellos, de manera que el capital social influiría en el estado de salud. Algunos autores también han señalado la posibilidad de que ésta relación funcione de manera inversa, por lo que resulta de interés analizar la influencia del estado de salud en el nivel de competencia cívica –un aspecto que no ha sido tan tratado en la literatura-.

Por último, y pese a no constituir uno de los objetivos específicos de este estudio, se ha considerado que un análisis desde una perspectiva sociológica debe tener necesariamente en cuenta algunas características individuales como la edad o el sexo,

cuya influencia en la configuración de la competencia cívica ha sido ampliamente descrita en la literatura.

### **3.2.2. Justificación teórica de las actitudes y expectativas de futuro hacia el EB**

La segunda parte del marco teórico se inicia con un breve repaso a la evolución del EB y a la tipología clásica de Esping-Andersen, que esquematiza las diferentes vías a través de las que el Estado, la familia y el mercado asumen o comparten el riesgo individual. Desde el punto de vista del presente estudio, el nivel de desarrollo del EB tiene una gran relevancia en las condiciones de vida de la población y en la reducción de las desigualdades, así como en la percepción de seguridad o inseguridad por parte de la ciudadanía. Sin embargo, los elementos subjetivos subyacentes a ésta inseguridad no han sido demasiado tratados en la literatura. Por otro lado, los cambios sociales y económicos también afectan a la actitud y la confianza de la ciudadanía hacia los agentes e instituciones del EB. En este sentido, la revisión de la literatura ha puesto de manifiesto una elevada heterogeneidad en la utilización de indicadores para medir la actitud de la ciudadanía hacia el EB. Asimismo, algunas líneas de investigación actuales señalan el interés de analizar el impacto que tiene el nivel de competencia de los ciudadanos en su actitud hacia el EB, así como la importancia de los factores individuales y las expectativas de futuro en la configuración de las actitudes hacia el EB.

Por lo tanto, las características personales, los valores sociales, los recursos y riesgos individuales relacionados con el contexto socioeconómico, y el grado de interés personal hacia las prestaciones sociales, pueden contribuir de manera importante a configurar las actitudes de la población hacia el EB. Diferentes estudios han mostrado que la ciudadanía española se muestra, en general, favorable a un modelo de EB intervencionista. Sin embargo, la velocidad de los cambios sociales acontecidos durante los últimos años, y la magnitud de la crisis económica hacen que resulte de especial interés explorar -en el contexto actual- las actitudes y expectativas de futuro que tienen los ciudadanos españoles hacia el EB. De esta manera, uno de los *objetivos*

*específicos de esta tesis doctoral es analizar de qué manera influyen el nivel educativo, el estado de salud, y el nivel de competencia cívica en éstas actitudes y expectativas de futuro.*

Autores como Van Oorschot y Finsveen han señalado que es posible medir el apoyo al EB considerando únicamente indicadores relacionados con la opinión que tienen los ciudadanos sobre la extensión y la intensidad de las políticas sociales. El grado de intensidad de un EB hace referencia al gasto en políticas sociales. Por lo tanto, un elemento central es analizar *hasta qué punto los ciudadanos se muestran dispuestos a pagar más impuestos para poder mejorar los servicios y prestaciones sociales.*

Dado que uno de los objetivos principales del EB es la reducción de la desigualdad, al margen del debate sobre cuál debería ser la vía más efectiva para conseguirlo, en este estudio se partirá de la perspectiva defendida por Milner, quien considera que los países con un menor índice de desigualdad son aquellos que dedican más recursos a las políticas sociales de carácter universal. Diferentes estudios han puesto de manifiesto que las políticas educativas pueden promover o –por el contrario- reducir las desigualdades, y que los ciudadanos de las sociedades con mayor nivel de igualdad disfrutaban generalmente de un mejor estado de salud. Wilkinson y Pickett han mostrado que los efectos negativos de la desigualdad –y también los beneficios de una mayor igualdad- se trasladan a todas las clases sociales, y no únicamente a las más desfavorecidas. Por otro lado, la desigualdad también está relacionada con la confianza social e institucional, y con el grado de optimismo que tienen los ciudadanos respecto al futuro. Y la confianza –tanto la social como la institucional- contribuye de manera esencial a una actitud favorable por parte de la ciudadanía hacia las políticas sociales.

La reducción de las desigualdades en los elementos que definen el capital social o la competencia cívica no ha sido generalmente un objetivo explícito del EB. Quizás por ello, la relación entre las políticas de bienestar y las desigualdades en el capital social no ha sido objeto habitual de la investigación académica. Algunos autores sí han establecido, sin embargo, una clara relación entre el capital social y las desigualdades socioeconómicas, y otros consideran que las políticas de bienestar pueden contribuir a

la reducción de las desigualdades económico-culturales, las desigualdades en el capital social, o bien a interrumpir el “círculo vicioso” que se establece entre ambos tipos de desigualdades.

Para el presente trabajo, resulta de especial interés el concepto de alfabetización cívica de Milner, que hace referencia a cómo se distribuyen los recursos intelectuales o no materiales entre sus miembros. Según este autor, los países cuyas políticas promueven la distribución igualitaria de recursos materiales y no materiales son el elemento principal que diferencia a las sociedades con un nivel elevado de alfabetización cívica. Y éstas sociedades corresponden –bajo su punto de vista- a las que dedican un mayor porcentaje del PIB al gasto en políticas sociales.

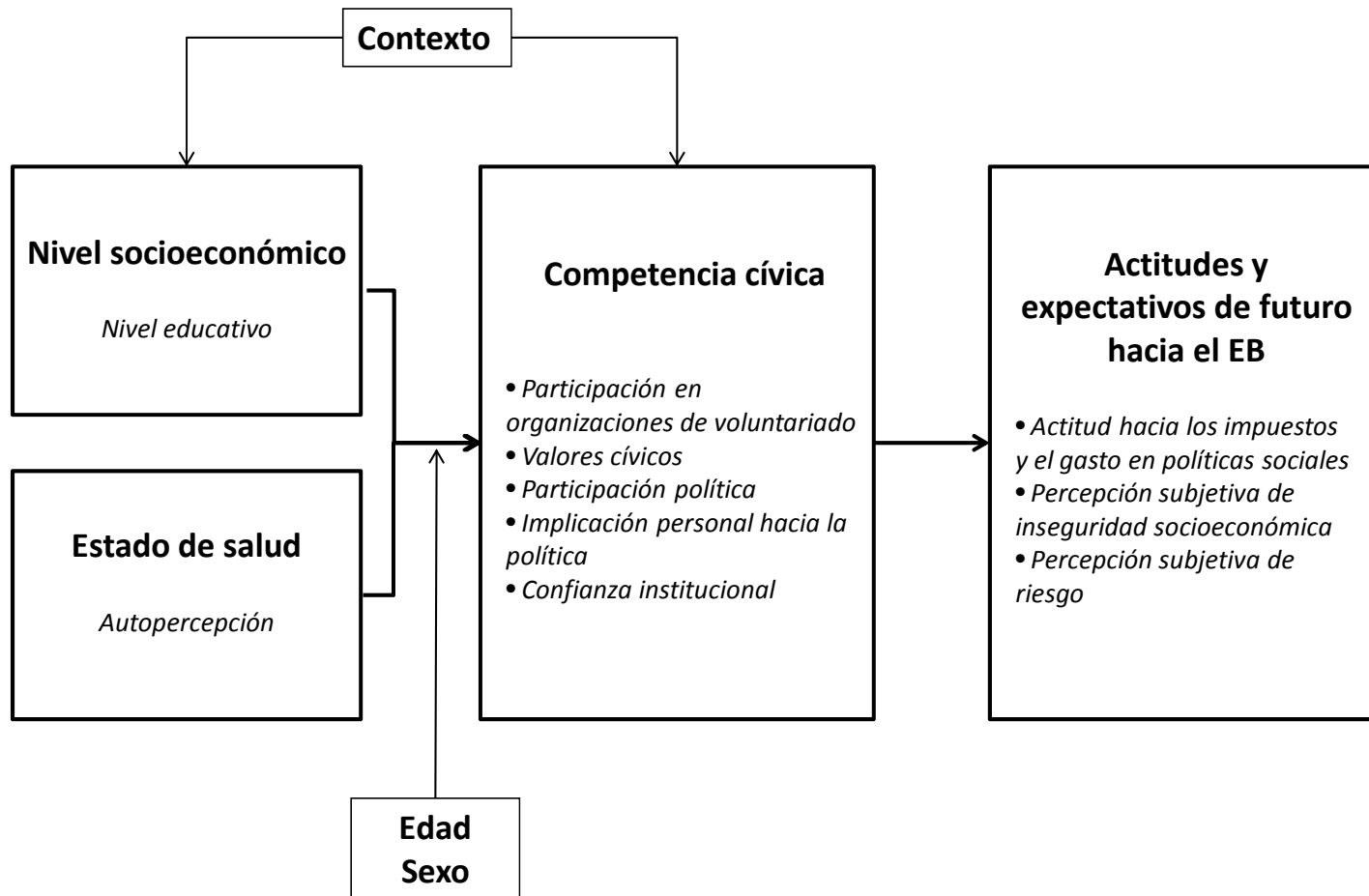
Ya se ha manifestado previamente que *la relación entre el nivel educativo y el estado de salud, y el nivel de competencia cívica*, es uno de los *objetivos específicos* del presente estudio. Considerando la tesis de Milner, también resulta de especial interés ver cuál es la relación entre el nivel de competencia cívica de la ciudadanía, y la actitud hacia el EB, analizando hasta qué punto los ciudadanos son favorables a pagar más impuestos para financiar un mayor gasto en políticas sociales. Finalmente, también se considera relevante explorar *hasta qué punto la competencia cívica influye en las expectativas de futuro de los ciudadanos, analizadas a partir de la percepción subjetiva de inseguridad socioeconómica y de riesgo*.

### **3.2.3. Modelo de análisis propuesto**

El marco conceptual y analítico de esta tesis doctoral se puede resumir en el Gráfico 6. En primer lugar, se desea explorar, mediante una serie de dimensiones e indicadores específicos, la relación que existe entre el nivel educativo y el estado de salud, la competencia cívica, y las actitudes y expectativas de futuro hacia el Estado del Bienestar. Como ya se ha comentado, se tendrán en cuenta además una serie de características individuales como la edad y el sexo. Este marco de relaciones está sujeto también a la influencia de una serie de variables relacionadas con el contexto, que –pese a su importancia- quedan fuera del alcance del presente estudio.



Gráfico 6: Marco conceptual y analítico del estudio “Competencia cívica y actitudes hacia el Estado del Bienestar”



Fuente: Elaboración propia

A partir de este esquema de relaciones entre variables e indicadores, se plantan las hipótesis de trabajo que se detallan en el siguiente apartado.

### **3.3. Hipótesis de trabajo**

**H1:** El nivel educativo y el estado de salud de las personas están relacionados con su nivel de competencia cívica, de tal manera que:

H.1.1. A medida que aumenta el nivel educativo, aumentan los conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones asociadas a una mayor competencia cívica.

H.1.2. El hecho de tener un buen estado de salud, facilita la participación en la vida pública, y por lo tanto, está asociado a un mayor grado de competencia cívica.

**H2:** La actitud hacia el aumento de impuestos y el incremento del gasto en políticas sociales es diferente entre distintos grupos sociales, en función de su mayor o menor competencia cívica.

H.2.1. Las personas con un mayor grado de competencia cívica serían más favorables a la implementación de políticas públicas que contribuyan a reducir la desigualdad. Estas personas se mostrarán dispuestas a pagar más impuestos para que el gobierno pueda incrementar el gasto en políticas sociales.

H.2.2. Por otro lado, y teniendo en cuenta las hipótesis H.1.1. y H.1.2., se espera que las personas con mayor nivel educativo y mejor estado de salud serán más favorables a una subida de impuestos y un aumento del gasto en políticas sociales.

**H3:** Las expectativas de futuro están relacionadas tanto con factores individuales como con factores asociados al contexto. En relación a los factores individuales, las personas que disponen de mayores recursos y competencias deberían tener mejores expectativas de cara a los riesgos y a la inseguridad socioeconómica a la que se pueden enfrentar en el futuro. Por lo tanto, se espera que:

H.3.1. Las personas con un menor grado de competencia cívica tendrán una mayor percepción subjetiva de inseguridad socioeconómica y riesgo en el futuro.

H.3.2. De la misma manera, y considerando también las hipótesis H.1.1. y H.1.2., se espera que las personas con menor nivel educativo y peor estado de salud tendrán una mayor percepción subjetiva de inseguridad socioeconómica y riesgo en el futuro.



## 4. METODOLOGÍA

### 4.1. Elección del método de recogida de datos

La elección del método debe responder al objetivo general del estudio, que es analizar cuál es la relación entre el nivel educativo y el estado de salud de los ciudadanos españoles, su nivel de competencia cívica y determinadas actitudes hacia el Estado del Bienestar. Para ello, se va a utilizar una encuesta, que es una de las metodologías de investigación más utilizadas en el campo de las ciencias sociales. Una excelente introducción a la encuesta como metodología de trabajo se puede encontrar en Alvira (2004).

La aparición de la encuesta como metodología de investigación está relacionada con los movimientos reformistas e intervencionistas que tenían como objetivo el progreso social. El desarrollo de esta metodología ha sido posible gracias a la aparición, a principios del siglo XX, de métodos de muestreo adecuados, y su posterior generalización después de la Segunda Guerra Mundial.

Los dos elementos principales que diferencian a la encuesta del resto de metodologías de investigación son la utilización de cuestionarios estructurados como instrumento básico de recogida de la información, y la selección de una muestra que representa a la población objeto de estudio. Además, la encuesta permite, en comparación con otros métodos, recoger una gran cantidad de información a partir de muchos casos o unidades de análisis distintas.

La elección de una encuesta como método de investigación es adecuada, si lo que se pretende es recoger y describir datos de una población, cuando el tema que es objeto de estudio no está sujeto a deseabilidad social, y pertenece a un ámbito sobre el que ya existen discursos estructurados en la población, y cuando lo que se pretende es contrastar hipótesis o comprobar modelos causales. En cambio, la utilización de la encuesta no es muy apropiada si se quieren investigar las razones, motivos o causas subjetivas del comportamiento humano, si se desea investigar un fenómeno poco conocido, o estudiar poblaciones poco frecuentes y de difícil acceso. Tampoco es una

metodología adecuada para el descubrimiento o la elaboración de nuevas hipótesis o teorías.

Algunas de las limitaciones de la encuesta –presentes también en las metodologías cualitativas- hacen referencia a la falta de objetividad de la información recogida y al hecho de que la selección o elaboración de preguntas del cuestionario refleja y parte en cierta manera de la perspectiva teórica y de unos objetivos fijados previamente por parte del investigador. Por su parte, algunos autores critican el atomismo de las encuestas, es decir, que la información recogida no deja de ser una mera agregación de respuestas individuales que no tienen en cuenta las relaciones sociales ni la estructura social. También se ha afirmado que la encuesta refleja una realidad estática mientras que la realidad social es dinámica. Sin embargo, únicamente métodos como la observación sistemática son capaces de recoger la información de un modo dinámico.

El método de campo predominante hasta los años 70 y 80 fue la entrevista personal. A partir de entonces, el método más utilizado ha pasado a ser la entrevista telefónica por cuestiones de accesibilidad y coste, y más recientemente la autoadministración a través de la red.

### *Las encuestas telefónicas asistidas por ordenador*

Actualmente, la práctica totalidad de las encuestas telefónicas se realizan a través del sistema CATI (*Computer Assisted Telephone Interviewing*), contando con la asistencia de un *software* específico para el manejo y gestión de las llamadas, entrevistas, archivo y análisis de los datos.

Las principales ventajas de la entrevista telefónica son, por un lado, la rapidez en la realización del trabajo de campo y en el análisis de la información recogida. La utilización de un programa informático permite además la detección de posibles inconsistencias, lo cual incrementa la fiabilidad y validez de las respuestas. Por otro lado, el hecho de que los encuestadores no deban desplazarse y la automatización del proceso de depuración de los datos –a través del programa informático- permite un ahorro importante de costes, además de una mayor centralización y control de las

entrevistas, y un entrenamiento y supervisión constante de los entrevistadores (Bosch y Torrente, 1993). Una de los principales inconvenientes de las encuestas telefónicas es la limitación en la longitud y la complejidad del cuestionario (su duración no debería ser mayor de 15 o 20 minutos). Algunas limitaciones adicionales de las encuestas telefónicas se derivan de la creciente implantación de la telefonía móvil en sustitución del teléfono tradicional, la aparición de nuevos operadores de telefonía fija, y la creciente existencia de números de teléfono que no aparecen en las guías, lo cual genera dificultades de cobertura en la población objeto de estudio. Por otra parte, en las encuestas telefónicas se produce un incremento de las tasas de no respuesta, por rechazo y/o ausencia del hogar, así como de la posibilidad que no se complete el cuestionario. Finalmente, se debe tener en cuenta la inversión económica inicial necesaria para la adquisición del equipo informático, el *software* y las líneas telefónicas.

En resumen, una encuesta telefónica es un procedimiento adecuado para la obtención de la información si el cuestionario no es largo ni complejo, y no incluye temas excesivamente sensibles; si se desea obtener la información y realizar el análisis con la mayor rapidez posible; si se dispone del equipamiento informático y telefónico necesarios, y si el presupuesto para la realización de la encuesta no es muy elevado.

Alvira (2004) ha agrupado los diferentes pasos de una encuesta en cinco grandes fases o etapas: el diseño del cuestionario, la selección de la muestra, el desarrollo del trabajo de campo, la preparación de la información y el análisis de los datos. En los siguientes apartados se detalla el trabajo realizado para cada una de estas fases.

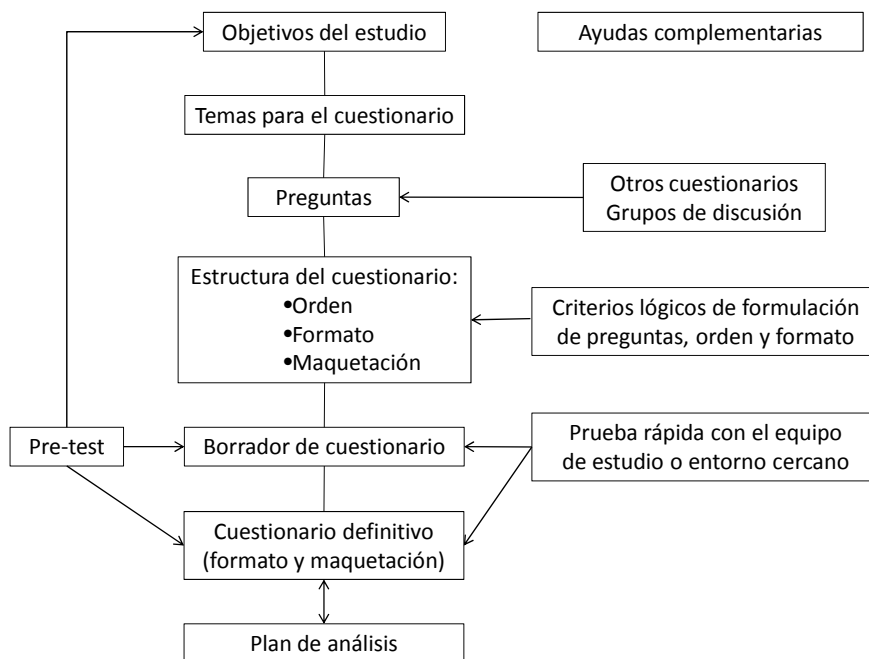
## **4.2. Diseño del cuestionario**

Los objetivos del estudio condicionan, limitan y constituyen la referencia básica para diseñar un buen cuestionario. A partir de los objetivos deben deducirse las áreas temáticas sobre las que se van a desarrollar las preguntas que serán incluidas en el cuestionario.

La estructura de un cuestionario tradicional debería incluir datos relativos al control de la muestra y a la identificación del cuestionario y del estudio, observaciones para el

entrevistador, un apartado para la inclusión de los datos sociodemográficos y el cuerpo de preguntas relacionadas con el tema de estudio. El Gráfico 7 describe el proceso de diseño de un cuestionario:

Gráfico 7: Proceso de diseño de un cuestionario



Fuente: Alvira (2004)

Uno de los elementos clave en el proceso de diseño de un cuestionario, es conseguir un nivel adecuado de abstracción y conceptualización, comprobando que las preguntas están correctamente formuladas y que están redactadas con un lenguaje y una terminología adaptados a la población objeto de estudio. Para ello es necesaria la realización de un pre-test, y recomendable la utilización de grupos de discusión o la inclusión de preguntas utilizadas anteriormente en otros cuestionarios. En relación al orden de las preguntas, resulta conveniente empezar el cuestionario con preguntas fáciles de entender y responder, que permitan establecer una relación de cierta confianza entre entrevistador y entrevistado, y minimizar la posibilidad de que éste último abandone la entrevista. La parte central del cuestionario debería estar integrada por las preguntas sobre aquellos temas y ámbitos más sensibles y menos



motivantes, y en la parte final se deberían incluir nuevamente preguntas sencillas. Se recomienda incluir también en este último bloque del cuestionario las preguntas sociodemográficas. Por último, las preguntas deberían agruparse por temas, y el paso de un bloque a otro debería contextualizarse con un pequeño texto que sirva para introducir a la persona entrevistada en el siguiente grupo de preguntas. En cualquier caso, en preguntas sobre temas políticos y sobre aspectos relacionados con creencias, valores y actitudes, resulta difícil fijar criterios para un determinado orden de las preguntas, ya que éste dependerá de los objetivos del estudio, del contexto de su realización, y de la población a partir de la cual se recogen los datos.

El presente estudio se centra en el análisis de la relación entre el nivel educativo y el estado de salud de los ciudadanos españoles, su nivel de competencia cívica y determinadas actitudes hacia el EB. Para ello, se han utilizado los datos de la encuesta sobre “Alfabetización sanitaria y competencia cívica” realizada por la Fundación Josep Laporte (2011). El cuestionario original utilizado en esta encuesta se incluye en el Anexo 1. Para la elaboración del cuestionario se han utilizado preguntas procedentes de otras encuestas sobre los temas objeto de estudio, así como preguntas elaboradas de manera específica para la encuesta, y redactadas por el equipo investigador.

### **4.3. Selección de la muestra**

Al igual que la elección del método y el diseño del cuestionario, el procedimiento de muestreo está en función de los objetivos del estudio. Sin embargo, también influyen otros factores como las posibilidades de la organización y/o del equipo investigador responsable del estudio, los recursos disponibles y el trabajo de campo. Por su parte, el tamaño de la muestra está determinado tanto por los errores muestrales máximos permitidos, como por el tiempo, el dinero y los recursos organizativos disponibles, de manera que en muchas ocasiones las consideraciones técnicas quedan relegadas por cuestiones más prácticas y cotidianas.

Para este estudio se ha seleccionado una muestra representativa de 3.000 personas de la población española mayor de 18 años y residente en hogares con teléfono. En las encuestas de opinión pública realizadas habitualmente, el tamaño de la muestra suele

oscilar entre los 1.000 y los 2.500 individuos. Éste último valor es el que se considera adecuado en el caso de estudios realizados para el conjunto de la población española. En el caso de encuestas descriptivas transversales, como la utilizada en el marco del presente estudio, se considera que una muestra superior a 2.000 individuos permite disminuir el error muestral.

Se ha realizado un procedimiento de muestreo aleatorio o probabilístico estratificado. La selección de la muestra se llevó a cabo de manera independiente para cada uno de los estratos. La muestra fue segmentada por Comunidad Autónoma (CC.AA.), sexo y edad para aquellas CC.AA. en las que la muestra superaba las 140 encuestas, y segmentada por CC.AA., y agrupadas conjuntamente por sexo y edad para el resto. La Tabla 10 muestra el procedimiento de muestreo utilizado.

Tabla 10: Procedimiento de muestreo polietápico estratificado

<b>Comunidad Autónoma</b>	<b>Muestra</b>
Andalucía	519
Catalunya	478
Comunidad de Madrid	411
Comunitat Valenciana	326
Galicia	187
Castilla y León	170
País Vasco	144
<b>Total</b>	<b>2.235</b>
Canarias	139
Castilla La Mancha	133
Región de Murcia	74
Aragón	88
Principado de Asturias	81
Extremadura	70
Illes Balears	70
Comunidad Foral de Navarra	40
Cantabria	41
La Rioja	19
Ceuta y Melilla	10
<b>Total</b>	<b>765</b>
<b>TOTAL MUESTRA</b>	<b>3.000</b>

*Fuente: Elaboración propia*

El margen de error muestral para el presente estudio fue, con un margen de confianza del 95% y bajo el supuesto de máxima indeterminación ( $p=q=50\%$ ), del  $\pm 1,79\%$  para cada pregunta en la primera fase y de  $\pm 2,2\%$  en la segunda fase. El muestreo polietápico y con estratificación de las unidades de muestreo es, junto al muestreo por conglomerados, es el tipo de muestreo más utilizado para muestras de estudios que se realizan en el conjunto de la población española. Este tipo de muestreo permite estimar y tener en cuenta los márgenes de error que conlleva el hecho de generalizar los resultados de la muestra al conjunto de la población.

Otros problemas habituales derivados del muestreo son los posibles sesgos muestrales y no muestrales. El sesgo muestral se produce durante el proceso de selección de la muestra, y puede ser debido al diseño o al procedimiento utilizados. La tasa de no respuesta puede ser una fuente habitual de sesgos muestrales. Finalmente, el sesgo no muestral hace referencia a los problemas de cobertura de la población. En el caso del presente estudio, y puesto que se trata de una encuesta en la población residente en hogares con teléfono, queda fuera toda la población no residente en viviendas (población residente en cárceles, cuarteles, hospitales, asilos, centros religiosos), así como la población que no dispone de teléfono fijo en el domicilio. Debido a la creciente penetración que ha tenido la telefonía móvil durante los últimos años, éste porcentaje de población es cada vez mayor, lo cual debe ser tenido a la hora de interpretar los resultados de este estudio.

#### **4.4. Desarrollo del trabajo de campo**

Las encuestas fueron realizadas entre el 21 de junio y el 14 de julio de 2011. La duración media de la encuesta a la finalización del trabajo de campo fue de 24 minutos. Las encuestas fueron realizadas por el Institut Opinòmetre, una empresa de estudios de mercado y de opinión pública con sedes en Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca y Valencia. En los estudios que utilizan el sistema CATI, el propio entrevistador introduce las respuestas en un soporte informático que realiza las tareas de corrección de errores, validación y depuración de cuestionarios. No suele ser

necesario un proceso de codificación, puesto que todas las preguntas están precodificadas.

## 4.5. Análisis

En base a los objetivos específicos de esta tesis doctoral, se presenta el modelo de análisis utilizado que permitirá responder a las hipótesis planteadas.

### 4.5.1. Descripción, categorización y operacionalización de las variables de análisis

Como variables de resultado se han utilizado 10 indicadores que miden diferentes dimensiones y aspectos de la competencia cívica, y 3 indicadores que miden aspectos relacionados con las actitudes hacia el EB, tal y como se muestra en la Tabla 11.

Tabla 11: Dimensiones e indicadores utilizados en el modelo de análisis

	Dimensiones	Indicadores
Competencia cívica	Asociacionismo	Participación activa en organizaciones de voluntariado
	Valores cívicos	Importancia otorgada a votar en las elecciones
		Importancia otorgada a seguir la actualidad política
		Importancia otorgada a participar en actividades que benefician al conjunto de la población
	Participación política	Participación política (formas no convencionales) Participación electoral
	Implicación personal hacia la política	Interés en asuntos políticos y sociales Eficacia política interna
	Confianza institucional	Confianza en el gobierno
Confianza en los políticos		
Actitudes hacia el EB	Intensidad del Estado del Bienestar	Actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales
	Expectativas de futuro	Percepción de inseguridad socioeconómica en el futuro
		Percepción de riesgo en el futuro

#### *Variables de competencia cívica*

La **participación activa en organizaciones de voluntariado** se ha medido a través de la siguiente pregunta: *“¿Puede decirme si es miembro activo, miembro no activo o no es miembro de alguna organización de voluntariado?”*, incluida en la Encuesta Europea de Valores. Las categorías de respuesta fueron “Soy miembro activo”, “Soy miembro no activo” y “No soy miembro”. No se ha utilizado la información del cuestionario relativa al tipo de organización de voluntariado. Si bien esta información ha sido considerado

de interés por parte de diferentes autores (Elzo y Castiñeira, 2011), otros (Wallace y Pichler, 2009) han señalado que la distinción entre las tres categorías de respuesta incluidas es suficiente para realizar un buen análisis.

Los indicadores correspondientes a la dimensión de los **valores cívicos** se han medido a través de la siguiente pregunta: *“En su opinión, ¿qué importancia tienen las siguientes acciones o actitudes para ser considerado un buen ciudadano?”*, incluida en el estudio “International Study of Civic and Citizenship Education” Las acciones o actitudes propuestas fueron las siguientes:

- “Votar en las elecciones”
- “Seguir la actualidad política (por ejemplo, a través de los periódicos, la radio, la televisión o Internet)”
- “Participar en actividades que beneficien al conjunto de la población (por ejemplo, asistir a un acto benéfico o realizar una acción de voluntariado)”

Para cada una de las tres acciones o actitudes propuestas se establecieron las siguientes categorías de respuesta: “Muy importante”, “Bastante importante”, “Poco importante” y “Nada importante”.

La **participación política mediante formas no convencionales** se ha medido a través de la siguiente pregunta, adaptada a partir de Thompson, Espluga y Alonso (1999): *“Suponga que el ayuntamiento de su población pretende crear una comisión en la que participe la ciudadanía, para decidir cuáles deben ser las prioridades en políticas sociales. ¿Estaría dispuesto a participar en las reuniones de esta comisión?”*. Las categorías de respuesta fueron las siguientes:

- Estaría dispuesto a compartir la responsabilidad de la decisión, participando con voz y voto.
- Estaría dispuesto a participar con voz pero sin voto.
- Estaría dispuesto a buscar o recibir información, pero sin participar en las reuniones.
- “No me interesaría participar de ninguna manera.

La **participación electoral** se ha medido a través de la pregunta: “¿Votó en las recientes elecciones municipales?” (celebradas en el mes de mayo de 2011, unas semanas antes de la realización del trabajo de campo). Las categorías de respuesta fueron “Sí” y “No”.

El **interés político y social** se ha medido a través de la pregunta: “¿En qué medida está usted interesado en los temas políticos y sociales que afectan a su país?”, incluida en el estudio “International Study of Civic and Citizenship Education”. Las categorías de respuesta fueron “Muy interesado/a”, “Bastante interesado/a”, “Poco interesado/a” y “Nada interesado/a”.

La **eficacia política interna** se ha medido a través de la pregunta: “¿En qué grado se sentiría usted capaz de defender su propio punto de vista sobre un tema político o social controvertido?”, incluida en el “International Study of Civic and Citizenship Education”. Las categorías de respuesta fueron “Muy capaz”, “Bastante capaz”, “Poco capaz” y “Nada capaz”.

Los indicadores correspondientes a la **confianza institucional** se han medido a través de las siguientes preguntas incluidas en el estudio “Confianza en el Sistema Nacional de Salud” (Jovell, Blendon, Navarro et al, 2007):

- “Si ... [el gobierno] tiene un problema de calidad o seguridad de uno de sus productos o servicios, ¿cuánto confía usted en que el gobierno tome la decisión correcta para corregirlo?”.
- “¿Cuánto confía usted en que ... [los políticos] procuran hacer el bien para la sociedad?”

Las categorías de respuesta para las dos preguntas han sido “Mucho”, “Algo” y “Nada”.

### *Variables de actitudes hacia el Estado del Bienestar*

La **actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales** se ha medido a través de la siguiente pregunta: “¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está más de acuerdo?”, incluida en el módulo “Welfare attitudes in a changing Europe” de la Encuesta Social Europea. Las categorías de respuesta fueron “El gobierno debería bajar

los impuestos y gastar menos en políticas sociales” y “El gobierno debería subir los impuestos y gastar más en políticas sociales”.

La **percepción de inseguridad socioeconómica en el futuro** se ha medido a través de la siguiente pregunta: *“En general, ¿cómo cree usted que será su bienestar personal en el futuro comparado con el actual?”*. Ésta pregunta es una adaptación propia realizada a partir de diferentes cuestiones incluidas en el módulo “Welfare attitudes in a changing Europe” de la Encuesta Social Europea y en los barómetros del CIS. Las categorías de respuesta fueron “Mejor”, “Más o menos igual” y “Peor”.

La **percepción de riesgo hacia el futuro** se ha medido a través de la pregunta: *“En general, ¿cómo cree usted que será la vida de sus hijos comparada con la suya?”*. Al igual que la anterior, ésta pregunta es una adaptación propia realizada a partir de diferentes cuestiones incluidas en el módulo “Welfare attitudes in a changing Europe” de la Encuesta Social Europea y en los barómetros del CIS. Las categorías de respuesta fueron “Más segura”, “Igual de segura” y “Menos de segura”.

### *Variables determinantes*

El **nivel educativo** se ha medido a través de la pregunta: *“¿Cuál de los siguientes estudios ha completado?”*. Las categorías de respuesta fueron las siguientes:

- “No sabe leer ni escribir/Sin estudios”
- “Estudios primarios incompletos”
- “Estudios primarios o EGB hasta 5º”
- “Estudios de graduado escolar, EGB hasta 8º, bachiller elemental”
- “Estudios de bachiller superior, BUP, FP o similar”
- “Estudios universitarios medios (périto, ingeniería técnica,...)”
- “Estudios universitarios superiores”

El **estado de salud** se ha medido a través de la pregunta: *“Durante los últimos 12 meses, en general, usted diría que su estado de salud es...”*. Las categorías de respuesta fueron “Muy bueno”, “Bueno”, “Malo” y “Muy malo”. El estado de salud autopercebido



ha sido considerado como un buen indicador del estado de salud general, de mortalidad y de morbilidad (Mossey y Shapiro, 1982; Miilunpulo, Vuori, Oja et al, 1997; Idler y Benyamini, 1997; McGee, Liao, Cao, et al, 1999; Burstrom y Freudlund, 2001).

En el caso del segundo objetivo específico –analizar cómo influyen el nivel educativo, el estado de salud y la competencia cívica, en las actitudes de los ciudadanos hacia el EB-, se han utilizado las variables de competencia cívica descritas anteriormente.

### *Variables de control*

La información sobre el **sexo** de la persona entrevistada ha sido obtenida a través de la pregunta: “¿Estoy hablando con un hombre o una mujer?”.

La información sobre la **edad** fue tratada como una variable continua y obtenida a través de la pregunta: “¿Me podría decir qué edad tiene?”.

En todas las variables de análisis se han incluido las categorías de respuesta “No sabe” y “No contesta”.

### **4.5.2. Método de análisis**

En este trabajo se utilizan diferentes métodos de análisis con la finalidad de responder a las hipótesis de trabajo planteadas.

Los dos primeros objetivos específicos de esta tesis doctoral pretenden analizar la relación existente entre una serie de variables relacionadas con el nivel de estudios, el estado de salud, la competencia cívica y las actitudes hacia el Estado del Bienestar. Para ello, se han utilizado técnicas de estadística descriptiva y un análisis bivariable mediante el test de Chi-Cuadrado para evaluar el grado de dependencia/independencia entre las variables de estudio.

De manera adicional, se ha realizado un análisis de regresión logística multivariable. El modelo de regresión multivariable es un método de análisis cuya utilización en el ámbito de la sociología se ha popularizado durante los últimos años, y resulta muy adecuado para determinar la existencia o ausencia de relación entre dos o más variables independientes ( $X_i$ ) y una variable dependiente ( $Y$ ) de tipo dicotómica, que únicamente admite dos categorías de respuesta mutuamente excluyentes ( $Y=1$  ó  $Y=0$ ).

El modelo también permite medir la magnitud de dicha relación. Los análisis de regresión también ofrecen la posibilidad de valorar el efecto aislado de determinadas variables, y de esta manera verificar que las relaciones aparentes en el análisis bivariable son reales y no se deben al efecto de una tercera variable. En Jovell (2006b) se puede encontrar una buena introducción a este método de análisis, y a la interpretación de los resultados desde una perspectiva sociológica.

La relación entre la variable dependiente y las variables independientes se puede explicar en términos de predicción o determinación, si los valores definidos por las variables independientes preceden en el tiempo al suceso o acontecimiento señalado por la variable dependiente. En el presente estudio, y debido a que las características definidas por ambos tipos de variables se miden al mismo tiempo, esta relación se interpreta en términos de correlación y/o asociación. Diferentes autores sostienen que cuando los datos se obtienen a partir de una encuesta poblacional de carácter transversal (una única medida de opinión en el tiempo) se debería hablar de proporciones o prevalencias de opinión o actitudes más que de probabilidades. Este último término se debería utilizar únicamente en estudios longitudinales o bien en aquellos casos en los que se asume una estabilidad de la medida a lo largo del tiempo.

El modelo se representa habitualmente a través de una función logística exponencial:

$$P(Y=1) = [1 / (1 + e^{-(\alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_m X_m)})]$$

donde “P” es la proporción estimada de que la variable dependiente “Y” sea igual a 1, “α” es el término independiente o constante, “β<sub>i</sub>” representa el coeficiente de regresión asociado a cada de las variables independientes, y “X<sub>i</sub>” representa a las variables independientes. Esta función puede transformarse de forma logarítmica en la siguiente función lineal:

$$\ln [P/(1-P)] = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_m X_m$$

El término “P/1-P” se denomina **odds** y representa la proporción estimada de que la variable dependiente “Y” sea igual a 1, dividida por la proporción estimada complementaria “P (Y=0)”:

$$\text{ods (Y=1)} = P (Y=1) / 1 - P (Y=1)$$

Por lo tanto, la función anterior puede transformarse en:

$$\ln (\text{ods de } Y=1) = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_m X_m$$

La proporción estimada (ods) está, por lo tanto, condicionada o ajustada al conjunto de valores que adoptan las diversas variables independientes incluidas en el modelo de regresión logística.

En el caso de las preguntas dirigidas a analizar el **nivel de competencia cívica**, los resultados se expresan como proporción estimada (ods) de ciudadanos que:

- Participan activamente en organizaciones de voluntariado.
- Consideran importante votar en las elecciones.
- Consideran importante seguir la actualidad política.
- Consideran importante participar en actividades que benefician a toda la población.
- Participan en la política a través de formas no convencionales.
- Participan en las elecciones municipales.
- Tienen interés en asuntos políticos y sociales.
- Tienen eficiencia política interna.
- Confían en el gobierno.
- Confían en los políticos.

Esta relación se expresa a través del siguiente modelo:

$$\begin{aligned} \ln (\text{competencia cívica}) = & \alpha + \beta_1 (\text{nivel estudios}) + \beta_2 (\text{estado salud}) \\ & + \beta_3 (\text{sexo}) + \beta_4 (\text{edad}) \end{aligned}$$

Para simplificar, se ha incluido únicamente el término “ln (competencia cívica)” que representa a las diferentes variables de competencia cívica que deberían ser incluidas de manera independiente en el modelo.

En el caso de la pregunta sobre la **intensidad del EB**, los resultados se expresan como proporción estimada (ods) de ciudadanos que prefieren que el gobierno suba los impuestos y aumente el gasto en políticas sociales:

$$\ln(\text{subir impuestos y gastar más en políticas sociales}) = \alpha + \beta_1 (\text{nivel estudios}) + \beta_2 (\text{estado salud}) + \beta_3 (\text{sexo}) + \beta_4 (\text{edad}) + \beta_i (\text{competencia cívica})$$

En la preguntas relativas a las **expectativas de futuro hacia el Estado del Bienestar**, los resultados se expresan como proporción estimada (ods) de ciudadanos que creen que:

- su bienestar personal será peor en el futuro, comparado con el actual.
- la vida de sus hijos será menos segura comparada con la suya.

$$\ln(\text{bienestar personal peor en el futuro}) = \alpha + \beta_1 (\text{nivel estudios}) + \beta_2 (\text{estado salud}) + \beta_3 (\text{sexo}) + \beta_4 (\text{edad}) + \beta_i (\text{competencia cívica})$$

$$\ln(\text{vida menos segura}) = \alpha + \beta_1 (\text{nivel estudios}) + \beta_2 (\text{estado salud}) + \beta_3 (\text{sexo}) + \beta_4 (\text{edad}) + \beta_i (\text{competencia cívica})$$

De nuevo con el fin de simplificar, en el caso de las preguntas sobre la intensidad del EB y sobre las percepciones subjetivas de inseguridad socioeconómica y riesgo en el futuro, se ha incluido únicamente el término “ $\beta_i$  (competencia cívica)” que representa a las diferentes variables de competencia cívica que deberían ser incluidas conjuntamente en el modelo.

La **razón de ods (RO)** es una medida de la magnitud de la asociación entre dos variables. Una  $RO > 1$  indica la existencia de una relación positiva o directa entre dos variables, mientras que una  $RO < 1$  señala la presencia de una relación negativa o inversa. Una  $RO = 1$  indica la ausencia de relación entre las dos variables.

Una medida adicional en la interpretación de los datos del análisis de regresión logística multivariable es el intervalo de confianza alrededor de la RO. En este estudio se ha utilizado el intervalo de confianza habitual del 95%. Si los resultados del intervalo de confianza no incluyen el valor de 1, ello indica que el valor estimado de RO es estadísticamente significativo al nivel de significación del 0.05 ( $p \leq 0.05$ ).

Ya se ha comentado previamente que el análisis de regresión logística multivariable únicamente admite como variables dependientes dos categorías de respuesta mutuamente excluyentes. Para ello, se han agrupado las diferentes categorías de respuesta para la mayoría de variables de estudio, tal y como se muestra en la Tabla 12. En relación a la participación política mediante formas no convencionales, se han eliminado dos de las cuatro categorías de respuesta originales. Finalmente, la edad ha sido transformada a una variable categórica. Las categorías de respuesta “No sabe” y “No contesta” también han sido eliminadas del modelo. La generación de nuevas variables o la agrupación de variables preexistentes resulta en ocasiones imprescindible para poder aplicar determinadas técnicas de análisis estadístico.

Para el análisis multivariable se ha seguido un proceso de modelización sustantiva. En la construcción y evaluación de los resultados de un modelo de análisis de regresión multivariable, se deben ponderar criterios de significación estadística versus aquellos que valoran la relevancia teórica de las variables seleccionadas. La aproximación estadística intenta comprobar si la inclusión o exclusión de variables independientes en el modelo produce una mejora de la bondad de ajuste y capacidad de determinación de la variable independiente. La modelización sustantiva implica incluir en la interpretación del modelo variables que, aún siendo estadísticamente no significativas, sí son relevantes desde el punto de vista sociológico. Por lo tanto, la posible pérdida de parsimonia en el modelo resultante queda compensada por la mejora en su plausibilidad teórica.

El análisis estadístico ha sido realizado con el programa SPSS versión 12.0.

Tabla 12: Agrupación de las categorías de respuesta en las variables de estudio

Indicador	Categorías de respuesta originales	Categorías de respuesta modificadas
Participación en organizaciones de voluntariado	Miembro activo (1)	Miembro activo (1)
	Miembro no activo (2)	Miembro no activo / No miembro (2) y (3)
	No miembro (3)	
	No sabe (8)	
	No contesta (9)	
Valores cívicos	Muy importante (1)	Muy/bastante importante (1) y (2)
	Bastante importante (2)	
	Poco importante (3)	Poco/nada importante (3) y (4)
	Nada importante (4)	
	No sabe (8)	
No contesta (9)		
Participación política (formas no convencionales)	Sí, con voz y voto (1)	Sí, con voz y voto (1)
	Con voz pero sin voto (2)	No estoy interesado (2)
	Sólo recibir información (3)	
	No estoy interesado (4)	
	No sabe (8)	
No contesta (9)		
Interés en asuntos políticos y sociales	Muy interesado/a (1)	Muy/bastante interesado/a (1) y (2)
	Bastante interesado/a (2)	
	Poco interesado/a (3)	Poco/nada interesado/a (3) y (4)
	Nada interesado/a (4)	
	No sabe (8)	
No contesta (9)		
Eficacia política interna	Muy capaz (1)	Muy/bastante capaz (1) y (2)
	Bastante capaz (2)	
	No demasiado capaz (3)	No demasiado/nada capaz (3) y (4)
	Nada capaz (4)	
	No sabe (8)	
No contesta (9)		
Confianza institucional	Mucho (1)	Sí (1) y (2)
	Algo (2)	
	Nada (3)	No (3)
	No sabe (8)	
	No contesta (9)	
Actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales	El gobierno debería bajar los impuestos y gastar menos en políticas sociales (1)	El gobierno debería bajar los impuestos y gastar menos en políticas sociales (1)
	El gobierno debería subir los impuestos y gastar más en políticas sociales (2)	El gobierno debería subir los impuestos y gastar más en políticas sociales (2)
	No sabe (8)	
	No contesta (9)	
Percepción de inseguridad socioeconómica en el futuro	Mejor (1)	Mejor/ Igual (1) y (2)
	Más o menos igual (2)	
	Peor (3)	Peor (3)
	No sabe (8)	
	No contesta (9)	
Percepción de riesgo en el futuro	Más segura (1)	Más segura / Igual de segura (1) y (2)
	Igual de segura (2)	
	Menos segura (3)	Menos segura (3)
	No sabe (8)	
	No contesta (9)	
Nivel de estudios	"No sabe leer ni escribir/Sin estudios" (1)	Sin estudios o estudios primarios (1), (2) y (3)
	"Estudios primarios incompletos" (2)	
	"Estudios primarios o EGB hasta 5º" (3)	
	"Estudios de graduado escolar, EGB hasta 8º, bachiller elemental" (4)	Estudios básicos o secundarios (4) y (5)
	"Estudios de bachiller superior, BUP, FP o similar" (5)	
	"Estudios universitarios medios (périto, ingeniería técnica,...)" (6)	Estudios universitarios (6) y (7)
	"Estudios universitarios superiores" (7)	
No sabe (8)		
No contesta (9)		
Estado de salud	Muy bueno (1)	Muy bueno/bueno (1) y (2)
	Bueno (2)	
	Malo (3)	Malo/muy malo (3) y (4)
	Muy malo (4)	
	No sabe (8)	
No contesta (9)		
Edad		18-24 años (1)
		25-34 años (2)
	Variable continua	35-49 años (3)
		50-64 años (4)
		Mayor de 64 años (5)

El tercer objetivo específico de esta tesis doctoral pretende distinguir grupos o perfiles de ciudadanos españoles en base a su nivel de competencia cívica y a sus actitudes hacia el EB. Para ello se ha realizado un análisis de correspondencias múltiples y un análisis de clústers.

El análisis de correspondencias es una técnica descriptiva para representar tablas donde se recogen las frecuencias de aparición de dos o más variables cualitativas en un conjunto de elementos. Es un procedimiento para resumir la información contenida en una tabla de contingencia y una manera de representar las variables en un espacio de dimensión menor, de forma análoga al análisis de componentes principales, pero definiendo la distancia entre los puntos de manera coherente con la interpretación de los datos y utilizando la distancia Chi-Cuadrado en lugar de utilizar la distancia euclídea (Peña, 2002). La utilización de métodos geométricos basados en la dispersión de los datos, facilita la asignación y observación de similitudes y diferencias entre un conjunto de variables.

Por su parte, el análisis de clústers permite clasificar a los individuos en diferentes grupos o “tipos ideales”, de acuerdo a la perspectiva sociológica weberiana. El concepto de “tipo ideal” de Weber es un modelo conceptual y analítico que puede utilizarse para comprender la realidad y la estructura social (Weber, 1984). Aunque hipotéticas, estas tipologías son útiles porque permiten interpretar cualquier situación del mundo real mediante su comparación con un “tipo ideal”. El análisis de clústers da como resultado un conjunto de grupos que se caracterizan por tener la máxima varianza intergrupala y la mínima varianza intragrupal. La construcción de los clústers se ha realizado utilizando la metodología K-means.





## 5.RESULTADOS

En la Tabla 13 se muestran las características sociodemográficas de la muestra.

Tabla 13: Características sociodemográficas de la muestra

Variable	Respuesta	n	%
Sexo	Hombre	1371	45,7%
	Mujer	1629	54,3%
Edad	18-24 años	256	8,5%
	25-34 años	473	15,8%
	35-49 años	895	29,8%
	50-64 años	716	23,9%
	> 64 años	660	22%
Estudios	Sin estudios o estudios primarios	692	23,1%
	Estudios básicos o secundarios	1372	45,7%
	Estudios universitarios	917	30,6%
	NS/NC	19	0,6%
Ingresos anuales netos	<15.000 Euros	763	25,4%
	De 15.000 a 30.000 Euros	510	17%
	De 30.000 a 48.000 Euros	221	7,4%
	Más de 48.000 Euros	136	4,5%
	NS/NC	1370	45,7%
Estado de salud	Muy bueno	747	24,9%
	Bueno	1882	62,7%
	Malo	307	10,2%
	Muy malo	50	1,7%
	NS/NC	14	0,4%

Se ha realizado un análisis de la correlación entre las diferentes variables de competencia cívica incluidas en este estudio. Los resultados se muestran en la Tabla 14 e indican que el nivel de correlación, medido a través del coeficiente de correlación de Spearman, es elevado entre algunas variables. En cambio, los datos indican que otros indicadores -como la participación en organizaciones de voluntariado- presentan una correlación muy baja con el resto de variables.

Tabla 14: Correlación de Spearman entre las variables de competencia cívica

	Participación en organizaciones de voluntariado	Importancia votar en las elecciones	Importancia seguir actualidad política	Importancia participar actividades benéficas	Participación política no convencional	Participación electoral	Interés en temas políticos y sociales	Eficacia política interna	Confianza gobierno	Confianza políticos
<b>Participación en organizaciones de voluntariado</b>	1,00	0,01	0,02	0,08	0,10	0,04	0,07	0,08	-0,02	0,03
<b>Importancia votar en las elecciones</b>	0,01	1,00	0,47	0,16	0,06	0,37	0,28	0,11	0,16	0,17
<b>Importancia seguir actualidad política</b>	0,02	0,47	1,00	0,21	0,15	0,20	0,41	0,24	0,15	0,21
<b>Importancia participar actividades benéficas</b>	0,08	0,16	0,21	1,00	0,28	0,07	0,26	0,20	0,11	0,12
<b>Participación política no convencional</b>	0,10	0,06	0,15	0,28	1,00	0,07	0,33	0,37	0,09	0,11
<b>Participación electoral</b>	0,04	0,37	0,20	0,07	0,07	1,00	0,18	0,06	0,07	0,09
<b>Interés en temas políticos y sociales</b>	0,07	0,28	0,41	0,26	0,33	0,18	1,00	0,41	0,16	0,21
<b>Eficacia política interna</b>	0,08	0,11	0,24	0,20	0,37	0,06	0,41	1,00	0,08	0,12
<b>Confianza gobierno</b>	-0,02	0,16	0,15	0,11	0,09	0,07	0,16	0,08	1,00	0,45
<b>Confianza políticos</b>	0,03	0,17	0,21	0,12	0,11	0,09	0,21	0,12	0,45	1,00

## 5.1. Relación entre el nivel educativo y el estado de salud, y el nivel de competencia cívica

A continuación se muestran las tablas de contingencia y los resultados del test Chi-Cuadrado para cada una de las 10 variables de competencia cívica analizadas.

### 5.1.1. Participación en organizaciones de voluntariado

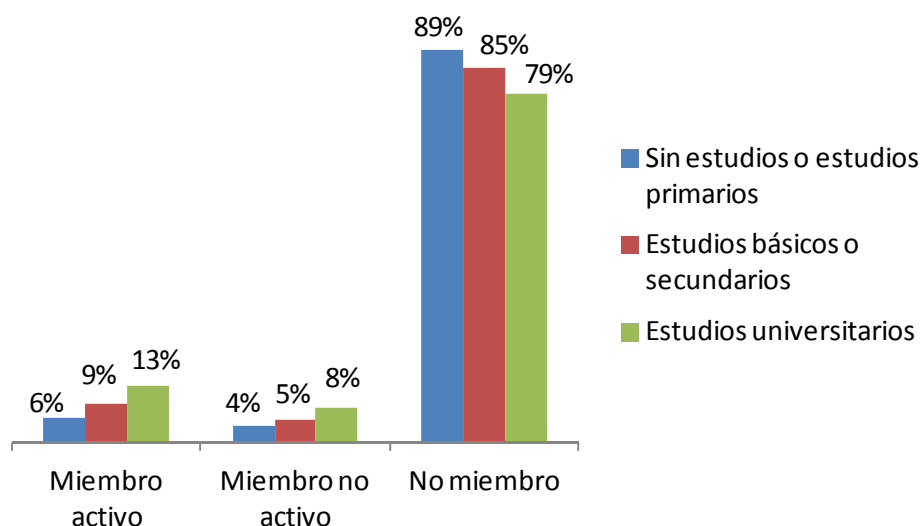
La Tabla 15 muestra los datos del análisis descriptivo correspondiente a la participación en organizaciones de voluntariado. Estos datos indican la escasa proporción de miembros activos (<10%) y de miembros no activos (5,6%). La gran mayoría de los ciudadanos (84,3%) no pertenece a ninguna organización de voluntariado. Se observa una proporción mayor de miembros activos en las personas con un estado de salud bueno o muy bueno, y a medida que aumenta el nivel educativo. Esta proporción es desigual y no sigue una relación lineal en el caso de la edad, mientras que no se observan diferencias en función del género. Los valores del test Chi-Cuadrado indican la posible existencia de una relación entre la participación activa en organizaciones de voluntariado y las variables edad, nivel de estudios y estado de salud.

Tabla 15: Participación en organizaciones de voluntariado

	Miembro activo		Miembro no activo		No soy miembro		NS/NC		P-valor*
	n	%	n	%	n	%	n	%	
<b>Total</b>	283	9,4%	169	5,6%	2529	84,3%	19	0,6%	
<b>Sexo</b>									
Hombre	124	9,0%	79	5,8%	1158	84,5%	10	0,7%	0,439
Mujer	159	9,8%	90	5,5%	1371	84,2%	9	0,6%	
<b>Edad</b>									
18-24 años	29	11,3%	7	2,7%	217	84,8%	3	1,2%	0,027
25-34 años	38	8,0%	24	5,1%	411	86,9%	0	0,0%	
35-49 años	84	9,4%	60	6,7%	746	83,4%	5	0,6%	
50-64 años	74	10,3%	39	5,4%	602	84,1%	1	0,1%	
> 64 años	58	8,8%	39	5,9%	553	83,8%	10	1,5%	
<b>Nivel de estudios</b>									
Sin estudios o estudios primarios	39	5,6%	26	3,8%	619	89,5%	8	1,2%	<0,001
Estudios básicos o secundarios	122	8,9%	72	5,2%	1169	85,2%	9	0,7%	
Estudios universitarios	119	13,0%	70	7,6%	727	79,3%	1	0,1%	
<b>Estado de salud</b>									
Bueno o muy bueno	254	9,7%	147	5,6%	2214	84,2%	14	0,5%	0,033
Malo o muy malo	29	8,1%	20	5,6%	304	85,2%	4	1,1%	
*P-valor para el test de Chi-Cuadrado									

El Gráfico 8 muestra la distribución de la variable analizada en función del nivel de estudios.

Gráfico 8: Participación en organizaciones de voluntariado según nivel de estudios



### 5.1.2. Valores cívicos

La Tabla 16 muestra el análisis descriptivo correspondiente a los tres indicadores utilizados como valores cívicos. Los datos indican que el valor “participar en actividades que benefician al conjunto de la población” es el que se considera importante por una mayor proporción de ciudadanos (82%), seguido de “votar en las elecciones” (77,2%) y “seguir la actualidad política” (63,6%).

La importancia otorgada a votar en las elecciones es más prevalente en personas mayores de 50 años, en personas con estudios universitarios, y en aquellas con un buen estado de salud. Los Gráficos 9 y 10 muestran la proporción que personas que consideran importante votar en las elecciones, en función del nivel de estudios y del estado de salud.

Gráfico 9: Importancia otorgada a votar en las elecciones según nivel de estudios

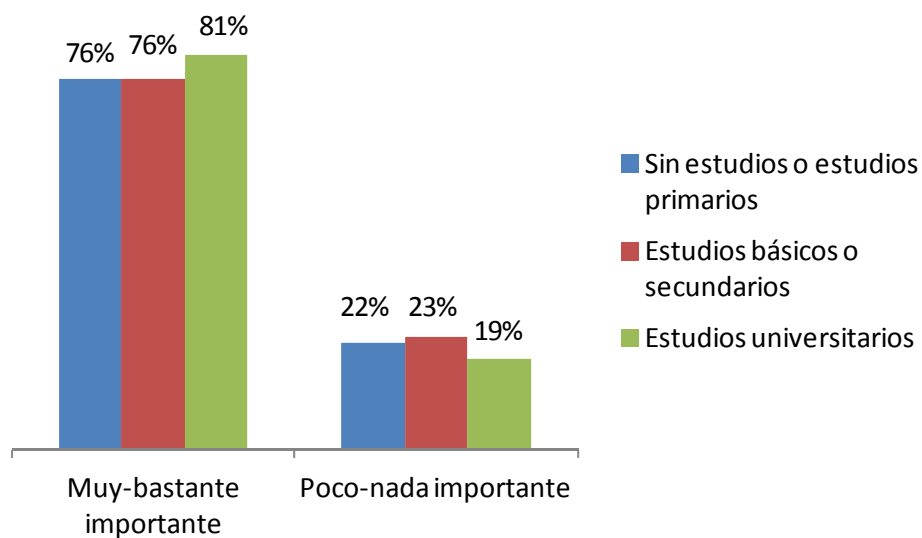
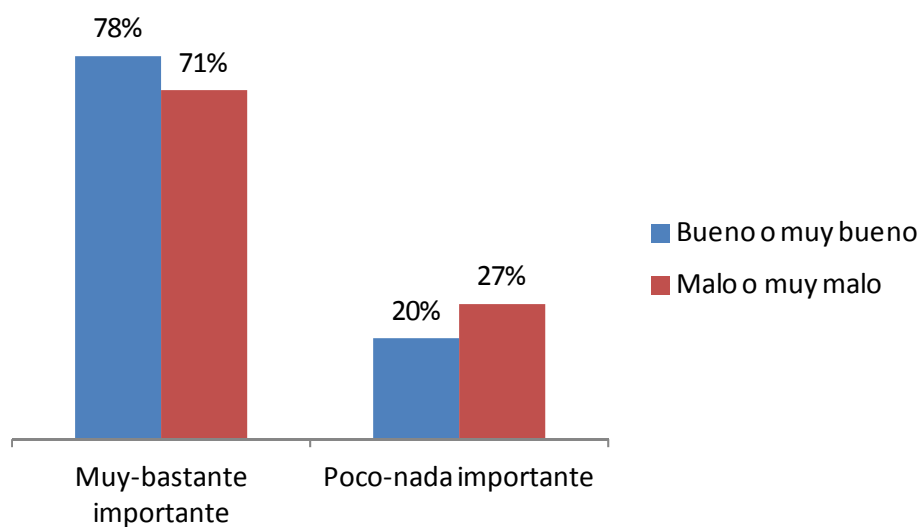


Gráfico 10: Importancia otorgada a votar en las elecciones según estado de salud



En relación a la importancia otorgada a seguir la actualidad política, se observa la inexistencia de una relación lineal con la edad, así como una mayor proporción de personas que lo consideran importante a medida que aumenta el nivel educativo, y en las personas con un buen estado de salud. Los Gráficos 11 y 12 muestran la proporción de ciudadanos que consideran importante seguir la actualidad política, en función del nivel de estudios y del estado de salud.

Gráfico 11: Importancia otorgada a seguir la actualidad política según nivel de estudios

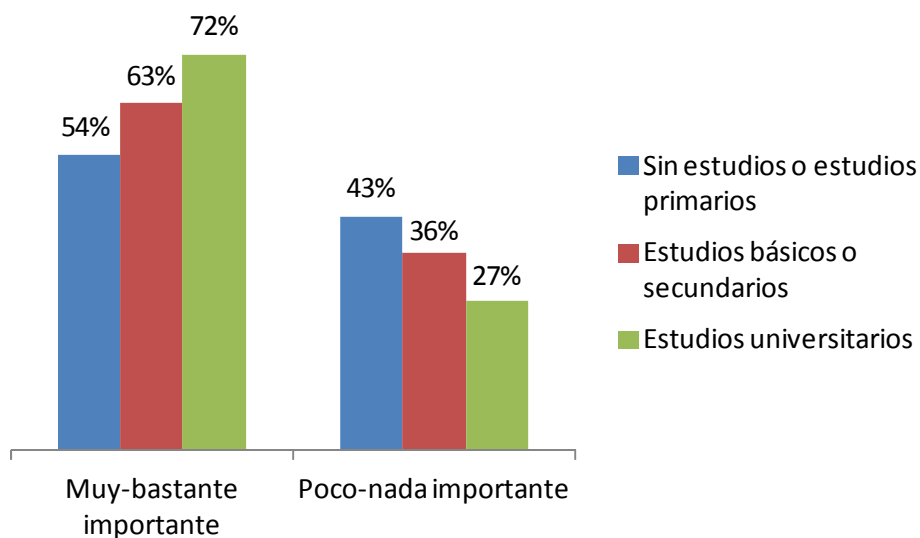
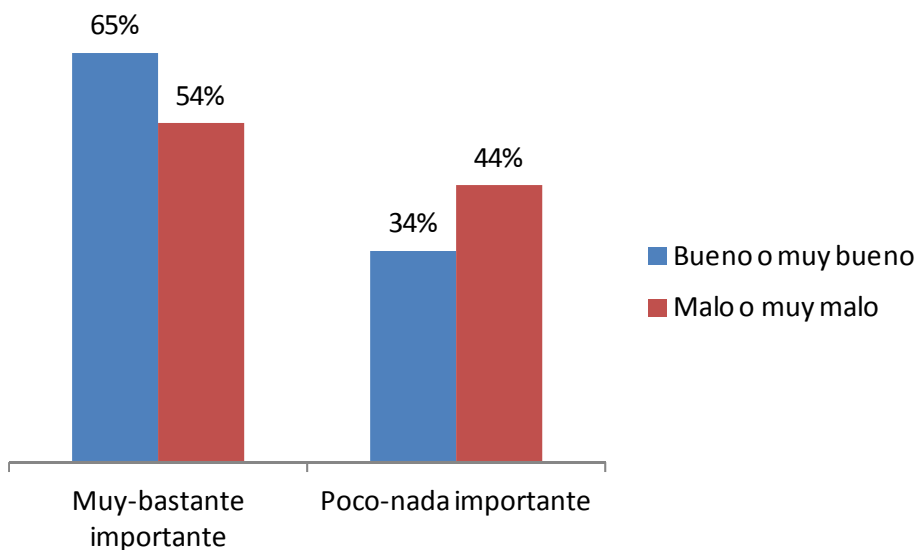
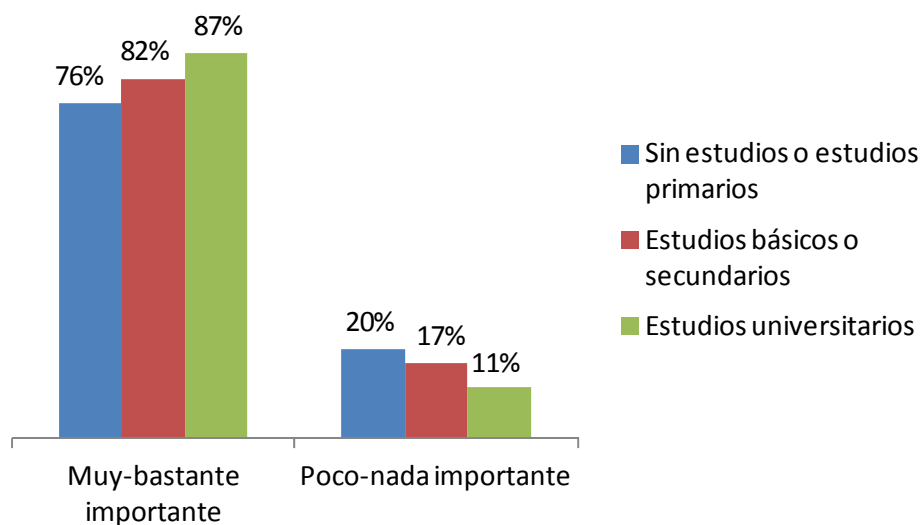


Gráfico 12: Importancia otorgada a seguir la actualidad política según estado de salud



Finalmente, se observa que la proporción de personas que consideran importante participar en actividades que benefician al conjunto de la población es mayor en el caso de las mujeres, a medida que aumenta el nivel educativo y en personas con un buen estado de salud. En cambio, disminuye en el grupo de personas mayores de 64 años. El Gráfico 13 muestra la proporción de ciudadanos que consideran importante participar en actividades que benefician al conjunto de la población, en función del nivel de estudios.

Gráfico 13: Importancia otorgada a participar en actividades que benefician al conjunto de la población según nivel de estudios



Los valores del test Chi-Cuadrado indican la posible existencia de una relación entre la importancia otorgada a los tres indicadores de valores cívicos y las variables edad, nivel de estudios y estado de salud. En el caso de la “importancia otorgada a la participación en actividades que benefician al conjunto de la población”, puede sospecharse además una relación con la variable de género.

Tabla 16: Importancia otorgada a los valores cívicos

	Muy-bastante importante		Poco-nada importante		NS/NC		P-valor*
	n	%	n	%	n	%	
<b>Votar en las elecciones</b>							
<b>Total</b>	2316	77,2%	641	21,4%	43	1,4%	
<b>Sexo</b>							
Hombre	1033	75,3%	317	23,1%	21	1,5%	0,059
Mujer	1283	78,8%	324	19,9%	22	1,4%	
<b>Edad</b>							
18-24 años	198	77,3%	55	21,5%	3	1,2%	<0,001
25-34 años	346	73,2%	119	25,2%	8	1,7%	
35-49 años	657	73,4%	228	25,5%	10	1,1%	
50-64 años	576	80,4%	134	18,7%	6	0,8%	
> 64 años	539	81,7%	105	15,9%	16	2,4%	
<b>Nivel de estudios</b>							
Sin estudios o estudios primarios	525	75,9%	150	21,7%	17	2,5%	0,009
Estudios básicos o secundarios	1040	75,8%	314	22,9%	18	1,3%	
Estudios universitarios	741	80,8%	170	18,5%	6	0,7%	
<b>Estado de salud</b>							
Bueno o muy bueno	2055	78,2%	537	20,4%	37	1,4%	<0,001
Malo o muy malo	254	71,1%	98	27,5%	5	1,4%	
<b>Seguir la actualidad política</b>							
<b>Total</b>	1909	63,6%	1043	34,8%	48	1,6%	
<b>Sexo</b>							
Hombre	881	64,3%	475	34,6%	15	1,1%	0,088
Mujer	1028	63,1%	568	34,9%	33	2,0%	
<b>Edad</b>							
18-24 años	177	69,1%	77	30,1%	2	0,8%	<0,001
25-34 años	286	60,5%	181	38,3%	6	1,3%	
35-49 años	558	62,3%	327	36,5%	10	1,1%	
50-64 años	480	67,0%	227	31,7%	9	1,3%	
> 64 años	408	61,8%	231	35,0%	21	3,2%	
<b>Nivel de estudios</b>							
Sin estudios o estudios primarios	372	53,8%	295	42,6%	25	3,6%	<0,001
Estudios básicos o secundarios	865	63,0%	492	35,9%	15	1,1%	
Estudios universitarios	661	72,1%	249	27,2%	7	0,8%	
<b>Estado de salud</b>							
Bueno o muy bueno	1708	65,0%	881	33,5%	40	1,5%	<0,001
Malo o muy malo	192	53,8%	157	44,0%	8	2,2%	
<b>Participar en actividades que benefician a toda la población</b>							
<b>Total</b>	2460	82,0%	474	15,8%	66	2,2%	
<b>Sexo</b>							
Hombre	1110	81,0%	240	17,5%	21	1,5%	0,007
Mujer	1350	82,9%	234	14,4%	45	2,8%	
<b>Edad</b>							
18-24 años	217	84,8%	34	13,3%	5	2,0%	<0,001
25-34 años	395	83,5%	72	15,2%	6	1,3%	
35-49 años	746	83,4%	132	14,7%	17	1,9%	
50-64 años	591	82,5%	116	16,2%	9	1,3%	
> 64 años	511	77,4%	120	18,2%	29	4,4%	
<b>Nivel de estudios</b>							
Sin estudios o estudios primarios	525	75,9%	138	19,9%	29	4,2%	<0,001
Estudios básicos o secundarios	1120	81,6%	230	16,8%	22	1,6%	
Estudios universitarios	801	87,4%	104	11,3%	12	1,3%	
<b>Estado de salud</b>							
Bueno o muy bueno	2162	82,2%	411	15,6%	56	2,1%	0,017
Malo o muy malo	288	80,7%	60	16,8%	9	2,5%	

\*P-valor para el test de Chi-Cuadrado



### 5.1.3. Participación política no convencional

La Tabla 17 muestra los datos del análisis descriptivo para la participación en una comisión ciudadana creada por el ayuntamiento para decidir sobre cuáles deben ser las prioridades en políticas sociales. Los datos indican que casi la mitad de ciudadanos están interesados en participar con voz y voto, mientras que prácticamente un tercio no se muestran interesados. La proporción de personas interesadas en participar con voz y voto es mayor en los hombres, a medida que aumenta el nivel educativo y en personas con un buen estado de salud. Esta proporción disminuye en el grupo de edad 50-64 años y sobretodo en personas mayores de 64 años. Los valores del test Chi-Cuadrado indican la posible existencia de una relación entre la participación política no convencional y las variables edad, género, nivel de estudios y estado de salud.

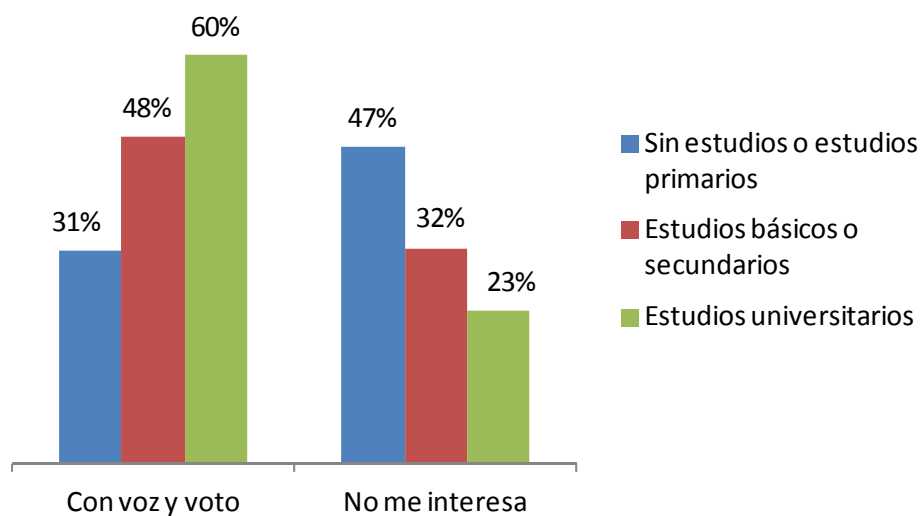
Tabla 17: Participación política no convencional

	Con voz y voto		Con voz pero sin voto		Buscar o recibir información		No me interesa		NS/NC		P-valor*
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
<b>Total</b>	1439	48,0%	163	5,4%	301	10,0%	966	32,2%	131	4,4%	
<b>Sexo</b>											
Hombre	729	53,2%	80	5,8%	112	8,2%	405	29,5%	45	3,3%	<0,001
Mujer	710	43,6%	83	5,1%	189	11,6%	561	34,4%	86	5,3%	
<b>Edad</b>											
18-24 años	138	53,9%	17	6,6%	33	12,9%	63	24,6%	5	2,0%	<0,001
25-34 años	246	52,0%	20	4,2%	50	10,6%	142	30,0%	15	3,2%	
35-49 años	480	53,6%	45	5,0%	93	10,4%	240	26,8%	37	4,1%	
50-64 años	355	49,6%	50	7,0%	80	11,2%	210	29,3%	21	2,9%	
> 64 años	220	33,3%	31	4,7%	45	6,8%	311	47,1%	53	8,0%	
<b>Nivel de estudios</b>											
Sin estudios o estudios primarios	217	31,4%	36	5,2%	63	9,1%	323	46,7%	53	7,7%	<0,001
Estudios básicos o secundarios	661	48,2%	74	5,4%	148	10,8%	434	31,6%	55	4,0%	
Estudios universitarios	551	60,1%	49	5,3%	89	9,7%	207	22,6%	21	2,3%	
<b>Estado de salud</b>											
Bueno o muy bueno	1282	48,8%	143	5,4%	274	10,4%	818	31,1%	112	4,3%	0,002
Malo o muy malo	153	42,9%	18	5,0%	26	7,3%	143	40,1%	17	4,8%	

\*P-valor para el test de Chi-Cuadrado

El Gráfico 14 muestra la proporción de ciudadanos que se muestran interesados en participar con y voto en dicha comisión, en función del nivel de estudios.

Gráfico 14: Participación política no convencional según nivel de estudios



#### 5.1.4. Participación electoral

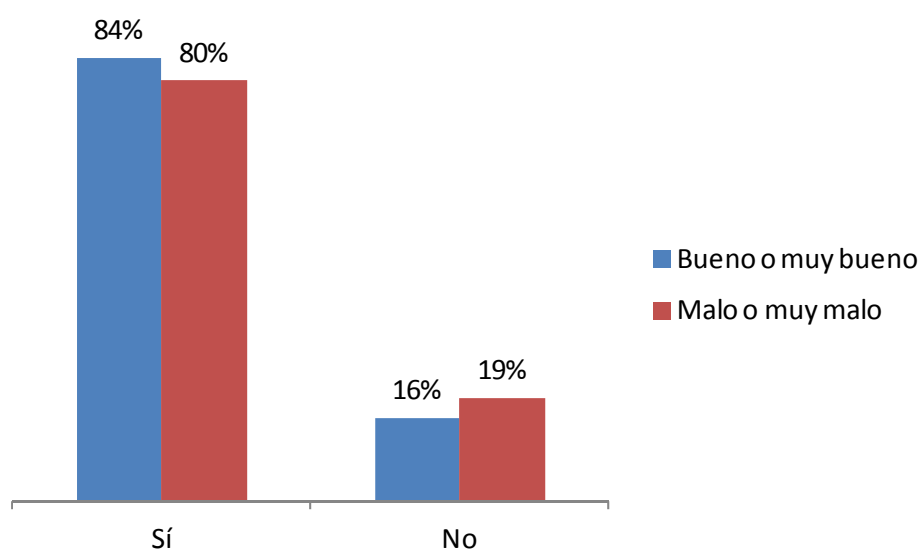
La Tabla 18 muestra los datos del análisis descriptivo para la participación en las últimas elecciones municipales. Se observa una elevada proporción de ciudadanos (83,4%) que afirman haber votado. La proporción de votantes es mayor a partir de los 50 años y en personas con un buen estado de salud. Se puede constatar, asimismo, la inexistencia de una relación lineal entre el voto y el nivel educativo. Los valores del test Chi-Cuadrado indican la posible existencia de una relación entre el voto en las elecciones y las variables edad, nivel de estudios y estado de salud.

Tabla 18: Participación electoral

	Sí		No		NS/NC		P-valor*
	n	%	n	%	n	%	
<b>Total</b>	2501	83,4%	485	16,2%	14	0,5%	
<b>Sexo</b>							
Hombre	1142	83,3%	221	16,1%	8	0,6%	0,180
Mujer	1359	83,4%	264	16,2%	6	0,4%	
<b>Edad</b>							
18-24 años	190	74,2%	65	25,4%	1	0,4%	<0,001
25-34 años	347	73,4%	125	26,4%	1	0,2%	
35-49 años	732	81,8%	156	17,4%	7	0,8%	
50-64 años	641	89,5%	74	10,3%	1	0,1%	
> 64 años	591	89,5%	65	9,8%	4	0,6%	
<b>Nivel de estudios</b>							
Sin estudios o estudios primarios	598	86,4%	90	13,0%	4	0,6%	0,009
Estudios básicos o secundarios	1102	80,3%	264	19,2%	6	0,4%	
Estudios universitarios	786	85,7%	128	14,0%	3	0,3%	
<b>Estado de salud</b>							
Bueno o muy bueno	2207	83,9%	413	15,7%	9	0,3%	0,002
Malo o muy malo	284	79,6%	69	19,3%	4	1,1%	
*P-valor para el test de Chi-Cuadrado							

El Gráfico 15 muestra la proporción de personas que afirman haber participado en las elecciones municipales en función del estado de salud.

Gráfico 15: Participación electoral según estado de salud



### 5.1.5. Interés en asuntos políticos y sociales

La Tabla 19 muestra los datos del análisis descriptivo para el interés en asuntos políticos y sociales. Una elevada proporción de ciudadanos (64,1%) se muestran interesados. Esta proporción es mayor en hombres, en personas con un buen estado de salud y a medida que aumenta el nivel educativo. Disminuye, en cambio, en las personas mayores de 64 años. Los valores del test Chi-Cuadrado indican la posible existencia de una relación entre el interés en asuntos políticos y sociales y todas las variables determinantes y de control analizadas (sexo, edad, nivel de estudios y estado de salud). Los Gráficos 16 y 17 muestran la proporción de personas interesadas en política, en función del nivel de estudios y del estado de salud.

Tabla 19: Interés en asuntos políticos y sociales

	Muy-bastante interesado/a		Poco-nada interesado/a		NS/NC		P-valor*
	n	%	n	%	n	%	
<b>Total</b>	1923	64,1%	1041	34,7%	36	1,2%	
<b>Sexo</b>							
Hombre	935	68,2%	422	30,8%	14	1,0%	<0,001
Mujer	988	60,7%	619	38,0%	22	1,4%	
<b>Edad</b>							
18-24 años	173	67,6%	83	32,4%	0	0,0%	<0,001
25-34 años	297	62,8%	171	36,2%	5	1,1%	
35-49 años	592	66,1%	296	33,1%	7	0,8%	
50-64 años	500	69,8%	208	29,1%	8	1,1%	
> 64 años	361	54,7%	283	42,9%	16	2,4%	
<b>Nivel de estudios</b>							
Sin estudios o estudios primarios	318	46,0%	355	51,3%	19	2,7%	<0,001
Estudios básicos o secundarios	873	63,6%	487	35,5%	12	0,9%	
Estudios universitarios	718	78,3%	194	21,2%	5	0,5%	
<b>Estado de salud</b>							
Bueno o muy bueno	1730	65,8%	871	33,1%	28	1,1%	<0,001
Malo o muy malo	189	52,9%	160	44,8%	8	2,2%	
*P-valor para el test de Chi-Cuadrado							

Gráfico 16: Interés en asuntos políticos y sociales según nivel de estudios

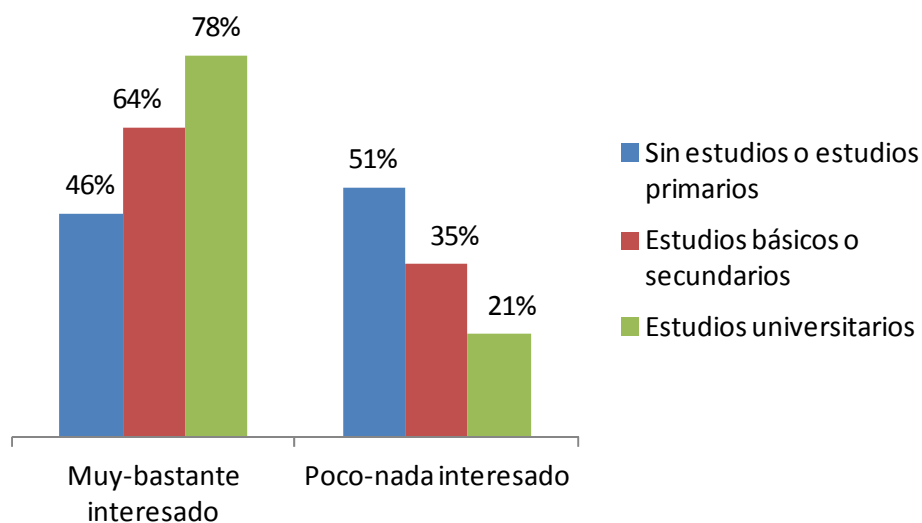
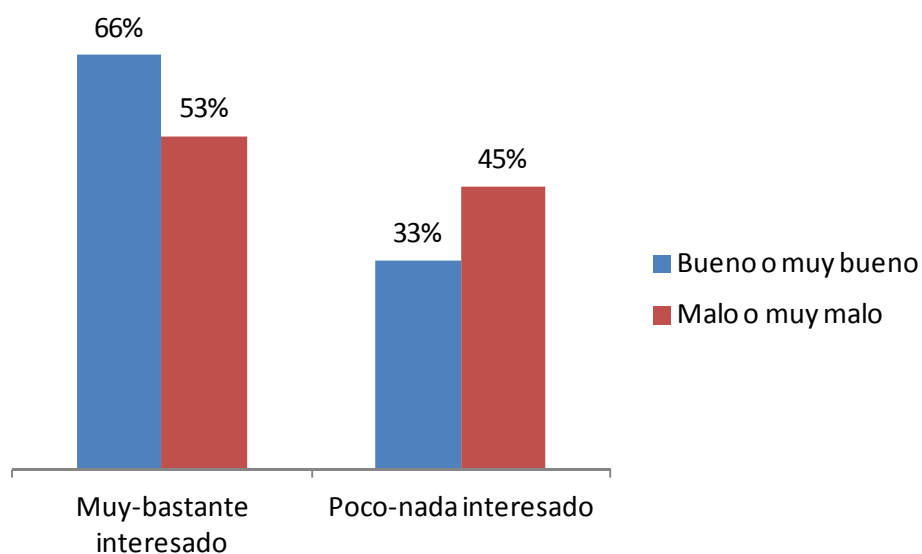


Gráfico 17: Interés en asuntos políticos y sociales según estado de salud



### 5.1.6. Eficacia política interna

La Tabla 20 muestra los datos del análisis descriptivo para la eficacia política interna. Prácticamente un 60% de ciudadanos se consideran capaces de defender su punto de vista sobre un tema político o social controvertido. La tendencia observada es muy similar al interés en asuntos políticos y sociales (mayor proporción de personas con

eficacia política en hombres, personas con estudios secundarios o universitarios y un buen estado de salud, y menor proporción en personas mayores de 64 años). Al igual que en el caso anterior, los valores del test Chi-Cuadrado indican la posible existencia de una relación entre el interés en asuntos políticos y sociales y todas las variables determinantes y de control. Los Gráficos 18 y 19 muestran la proporción de personas que se consideran capaces de defender su punto de vista político, en función del nivel de estudios y del estado de salud.

Tabla 20: Eficacia política interna

	Muy-bastante capaz		Poco-nada capaz		NS/NC		P-valor*
	n	%	n	%	n	%	
<b>Total</b>	1781	59,4%	1107	36,9%	112	3,7%	
<b>Sexo</b>							
Hombre	937	68,3%	397	29,0%	37	2,7%	<0,001
Mujer	844	51,8%	710	43,6%	75	4,6%	
<b>Edad</b>							
18-24 años	159	62,1%	89	34,8%	8	3,1%	<0,001
25-34 años	290	61,3%	173	36,6%	10	2,1%	
35-49 años	593	66,3%	282	31,5%	20	2,2%	
50-64 años	454	63,4%	243	33,9%	19	2,7%	
> 64 años	285	43,2%	320	48,5%	55	8,3%	
<b>Nivel de estudios</b>							
Sin estudios o estudios primarios	250	36,1%	388	56,1%	54	7,8%	<0,001
Estudios básicos o secundarios	823	60,0%	499	36,4%	50	3,6%	
Estudios universitarios	694	75,7%	215	23,4%	8	0,9%	
<b>Estado de salud</b>							
Bueno o muy bueno	1596	60,7%	943	35,9%	90	3,4%	<0,001
Malo o muy malo	177	49,6%	158	44,3%	22	6,2%	
*P-valor para el test de Chi-Cuadrado							

Gráfico 18: Eficacia política interna según nivel de estudios

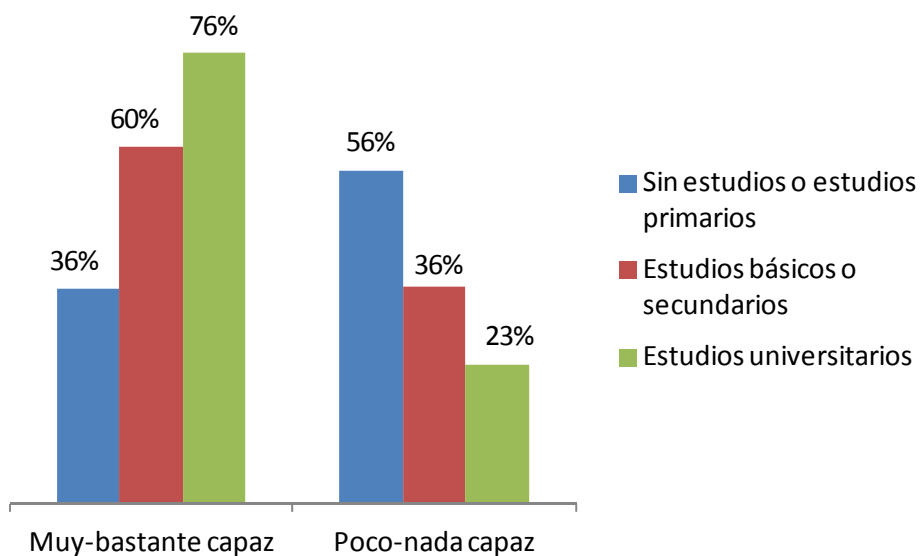
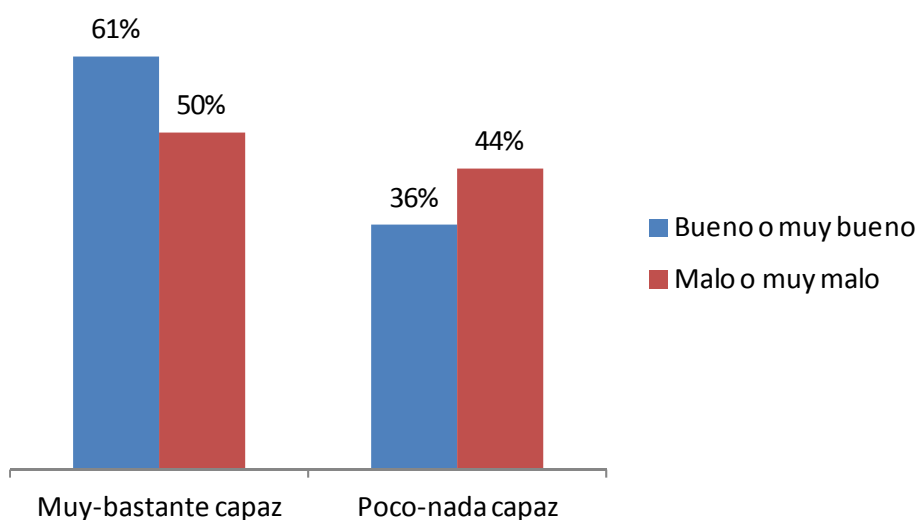


Gráfico 19: Eficacia política interna según estado de salud



### 5.1.7. Confianza institucional

La Tabla 21 muestra los datos del análisis descriptivo para la confianza institucional. Los datos muestran una elevada proporción de ciudadanos que afirman no confiar nada en el gobierno (46,5%) ni en los políticos (50,8%), por encima de las personas que

afirman confiar algo (39,6% en el gobierno, 41,4% en los políticos). Únicamente un 8,9% de los ciudadanos confían mucho en el gobierno, y una proporción todavía menor (3,8%) confía mucho en los políticos. Se puede observar la inexistencia de una relación lineal entre las dos variables de confianza institucional y la edad, así como una mayor proporción de personas que confían (mucho o algo) en el gobierno y en los políticos, a medida que aumenta el nivel de estudios. Los valores del test Chi-Cuadrado sugieren la posible existencia de una relación entre la confianza institucional y todas las variables determinantes y de control. Los Gráficos 20-23 muestran la distribución de la confianza institucional en función del nivel de estudios y del estado de salud.

Tabla 21: Confianza institucional

	Mucho		Algo		Nada		NS/NC		P-valor*
	n	%	n	%	n	%	n	%	
<b>Confianza en el gobierno</b>									
<b>Total</b>	268	8,9%	1187	39,6%	1395	46,5%	150	5,0%	
<b>Sexo</b>									
Hombre	124	9,0%	542	39,2%	663	48,0%	52	3,8%	<0,001
Mujer	144	8,8%	645	39,6%	732	44,9%	108	6,6%	
<b>Edad</b>									<0,001
18-24 años	31	12,1%	106	41,4%	114	44,5%	5	2,0%	
25-34 años	33	7,0%	197	41,6%	231	48,8%	12	2,5%	
35-49 años	90	10,1%	381	42,6%	403	45,0%	21	2,3%	
50-64 años	60	8,4%	296	41,3%	326	45,5%	34	4,7%	
> 64 años	54	8,2%	207	31,4%	321	48,6%	78	11,8%	
<b>Nivel de estudios</b>									<0,001
Sin estudios o estudios primarios	54	7,8%	234	33,8%	326	47,1%	78	11,3%	
Estudios básicos o secundarios	114	8,3%	536	39,1%	667	48,6%	55	4,0%	
Estudios universitarios	98	10,7%	412	44,9%	390	42,5%	17	1,9%	
<b>Estado de salud</b>									0,001
Bueno o muy bueno	235	8,9%	1072	40,8%	1200	45,6%	122	4,6%	
Malo o muy malo	33	9,2%	112	31,4%	186	52,1%	26	7,3%	
<b>Confianza en los políticos</b>									
<b>Total</b>	113	3,8%	1242	41,4%	1525	50,8%	120	4,0%	
<b>Sexo</b>									
Hombre	50	3,6%	566	41,3%	721	52,6%	34	2,5%	0,003
Mujer	63	3,9%	676	41,5%	804	49,4%	86	5,3%	
<b>Edad</b>									<0,001
18-24 años	15	5,9%	117	45,7%	120	46,9%	4	1,6%	
25-34 años	15	3,2%	203	42,9%	252	53,3%	3	0,6%	
35-49 años	34	3,8%	401	44,8%	441	49,3%	19	2,1%	
50-64 años	26	3,6%	289	40,4%	375	52,4%	26	3,6%	
> 64 años	23	3,5%	232	35,2%	337	51,1%	68	10,3%	
<b>Nivel de estudios</b>									<0,001
Sin estudios o estudios primarios	21	3,0%	233	33,7%	363	52,5%	75	10,8%	
Estudios básicos o secundarios	46	3,4%	558	40,7%	735	53,6%	33	2,4%	
Estudios universitarios	46	5,0%	442	48,2%	417	45,5%	12	1,3%	
<b>Estado de salud</b>									<0,001
Bueno o muy bueno	98	3,7%	1122	42,7%	1309	49,8%	100	3,8%	
Malo o muy malo	15	4,2%	116	32,5%	208	58,3%	18	5,0%	
*P-valor para el test de Chi-Cuadrado									



Gráfico 20: Confianza en el gobierno según nivel de estudios

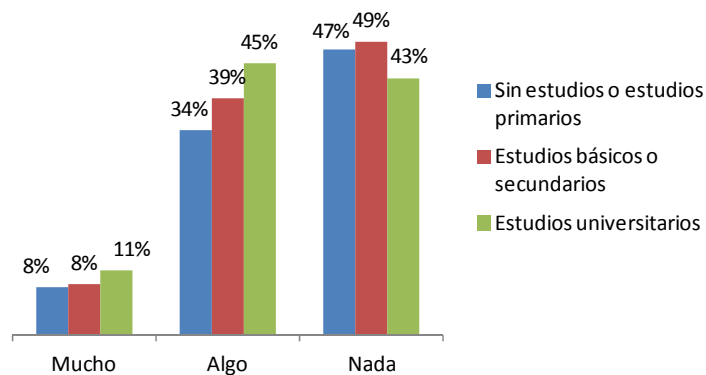


Gráfico 21: Confianza en el gobierno según estado de salud

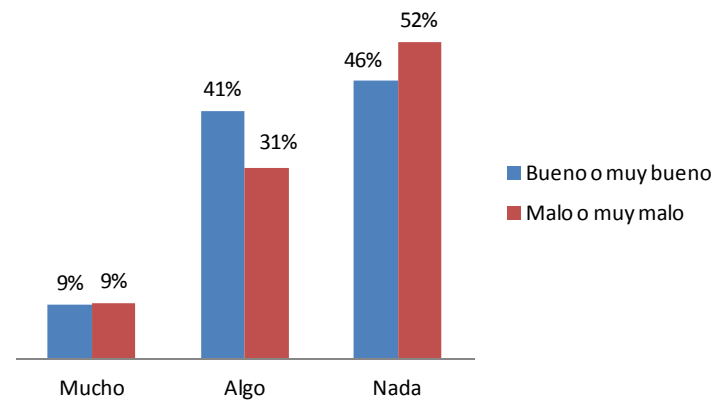


Gráfico 22: Confianza en los políticos según nivel de estudios

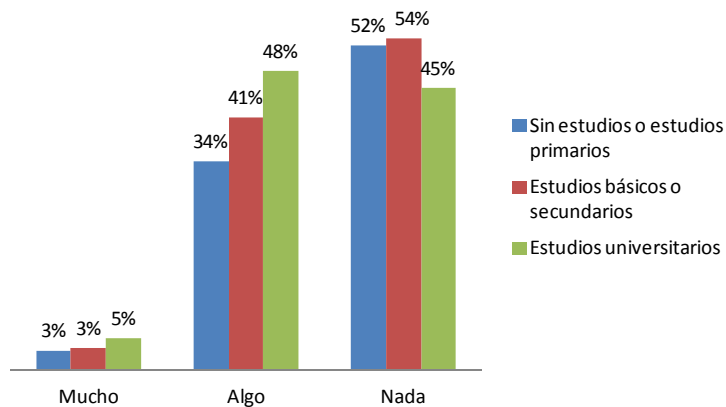
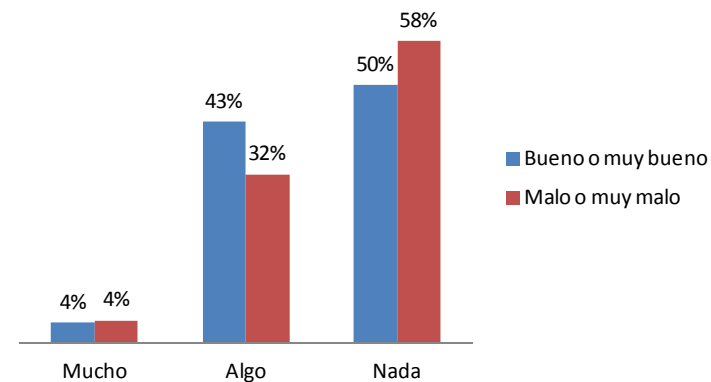


Gráfico 23: Confianza en los políticos según estado de salud



### *Análisis de regresión multivariable*

La Tabla 22 muestra los resultados del análisis de regresión multivariable realizado para todas las variables de competencia cívica. Los diferentes modelos están ajustados para las variables sexo, edad, nivel de estudios y estado de salud. Los resultados se expresan como razón de ods, con un intervalo de confianza del 95%.

En relación a la **participación en organizaciones de voluntariado**, los datos muestran que ser miembro activo está asociado con el nivel de estudios, de manera que la tendencia a ser miembro activo es mayor en personas con estudios básicos y secundarios (RO=2,00 IC: 1,32-3,02), y en estudios universitarios (RO=3,15; IC: 2,07-4,81), en comparación a no tener estudios o tener estudios primarios.

Los datos relativos a los **valores cívicos** muestran que el hecho de considerar importante votar en las elecciones está asociado a todas las variables determinantes y de control analizadas. De esta manera, otorgan más importancia al voto las personas mayores de 64 años (RO=1,99; IC: 1,33-2,98), las personas con estudios básicos o secundarios (RO=1,38; IC: 1,07-1,79) y universitarios (RO=1,84; IC: 1,38-2,44) y las personas con un buen estado de salud (RO=1,58; IC: 1,21-2,05). En cambio, los hombres lo consideran menos importante (RO=0,76; IC: 0,64-0,91). Por su parte, el hecho de considerar importante seguir la actualidad política está asociado a la edad, el nivel de estudios y el estado de salud. Así, otorgan mayor importancia a este valor las personas con estudios básicos o secundarios (RO=1,67; IC: 1,34-2,09) y universitarios (RO=2,61; IC: 2,04-3,33), y aquellas con un buen estado de salud (RO=1,48; IC: 1,17-1,87). En cambio, el grupo de 25-34 años lo considera menos importante (RO=0,64; IC: 0,46-0,89), en comparación al grupo de edad más joven (18-24 años). Finalmente, el hecho de considerar importante la participación en actividades que benefician al conjunto de la población está asociado al género y al nivel de estudios. Otorgan mayor importancia a este valor las personas con estudios universitarios (RO=2,03; IC: 1,48-2,78) y, en cambio, menor importancia los hombres (RO=0,76; IC: 0,62-0,93).

En relación a la **participación política no convencional**, los datos muestran que estar interesado en participar con voz y voto está asociado con el género, la edad y el

nivel de estudios. Este interés es mayor en hombres (RO=1,30; IC: 1,10-1,55), y en personas con estudios básicos y secundarios (RO=1,66; IC: 1,31-2,11) y estudios universitarios (RO=2,88; IC: 2,21-3,74). En cambio, es menor en las personas mayores de 64 años (RO=0,46; IC: 0,32-0,66). Por su parte, la **participación electoral** también está asociada a la edad, pero en este caso la tendencia al voto es mayor en todos los grupos a partir de los 35 años (y de manera particular a partir de los 50 años). El voto también está asociado a tener estudios universitarios (RO=1,60; IC: 1,14-2,24) y un buen estado de salud (RO=1,55; IC: 1,15-2,09).

El **interés en asuntos políticos y sociales** está asociado a todas las variables determinantes y de control. Es mayor en hombres (RO=1,23; IC: 1,04-1,44), personas del grupo de edad 50-64 años (RO=1,50; IC: 1,09-2,07), personas con estudios básicos o secundarios (RO=2,17; IC: 1,74-2,70) y universitarios (RO=4,60; IC: 3,57-5,92), y personas con un buen estado de salud (RO=1,39; IC: 1,10-1,77). El otro indicador relacionado con la implicación personal hacia la política, la **eficacia política interna**, está asociada al género y al nivel de estudios. Se consideran más capaces de defender su punto de vista sobre un tema político o social controvertido los hombres (RO=1,83; IC: 1,56-2,16), y las personas con estudios básicos o secundarios (RO=2,29; IC: 1,83-2,86) y estudios universitarios (RO=4,52; IC: 3,52-5,81).

Finalmente, la **confianza institucional** está relacionada con el nivel de estudios y el estado de salud. Concretamente, confiar en el gobierno (mucho o algo) está asociado al hecho de tener estudios universitarios (RO=1,33; IC: 1,06-1,69) y un buen estado de salud (RO=1,33; IC: 1,05-1,68). De la misma manera, el hecho de confiar en los políticos se asocia también a haber completado estudios universitarios (RO=1,61; IC: 1,27-2,03) y a un buen estado de salud (RO=1,39; IC: 1,09-1,76). Por último, la confianza en los políticos se asocia negativamente con el hecho de pertenecer al grupo de edad 25-34 años (RO=0,73; IC: 0,53-0,99).

Tabla 22: Modelos de regresión multivariable para las variables de competencia cívica

	Participación activa en organizaciones de voluntariado (n=2953)	Importante votar en las elecciones (n=2930)	Importante seguir la actualidad política (n=2924)	Importante participar en actividades benéficas (n=2908)	Participación política no convencional (n=2386)	Interés en asuntos políticos y sociales (n=2935)	Participación electoral (n=2958)	Eficacia política interna (n=2859)	Confianza en el gobierno (n=2823)	Confianza en los políticos (n=2853)
	RO (IC)	RO (IC)	RO (IC)	RO (IC)	RO (IC)	RO (IC)	RO (IC)	RO (IC)	RO (IC)	RO (IC)
<b>Nivel de estudios</b>										
Sin estudios o estudios primarios	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)
Estudios básicos o secundarios	2.00 (1.32-3.02)**	1.38 (1.07-1.79)*	1.67 (1.34-2.09)***	1.26 (0.96-1.66)	1.66 (1.31-2.11)***	2.17 (1.74-2.70)***	1.06 (0.78-1.45)	2.29 (1.83-2.86)***	0.99 (0.79-1.23)	1.12 (0.90-1.40)
Estudios universitarios	3.15 (2.07-4.81)***	1.84 (1.38-2.44)***	2.61 (2.04-3.33)***	2.03 (1.48-2.78)***	2.88 (2.21-3.74)***	4.60 (3.57-5.92)***	1.60 (1.14-2.24)**	4.52 (3.52-5.81)***	1.33 (1.06-1.69)*	1.61 (1.27-2.03)***
<b>Estado de salud</b>										
Malo o muy malo	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)
Bueno o muy bueno	1.08 (0.72-1.63)	1.58 (1.21-2.05)**	1.48 (1.17-1.87)**	0.99 (0.73-1.35)	1.12 (0.86-1.45)	1.39 (1.10-1.77)**	1.55 (1.15-2.09)**	1.13 (0.88-1.45)	1.33 (1.05-1.68)*	1.39 (1.09-1.76)**
<b>Sexo</b>										
Mujer	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)
Hombre	0.83 (0.64-1.07)	0.76 (0.64-0.91)**	0.93 (0.79-1.08)	0.76 (0.62-0.93)**	1.30 (1.10-1.55)**	1.23 (1.04-1.44)*	0.92 (0.75-1.12)	1.83 (1.56-2.16)***	0.89 (0.77-1.03)	0.88 (0.75-1.02)
<b>Edad</b>										
18-24 años	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)
25-34 años	0.61 (0.36-1.02)	0.76 (0.53-1.10)	0.64 (0.46-0.89)***	0.77 (0.50-1.21)	0.74 (0.51-1.07)	0.76 (0.54-1.05)	0.91 (0.64-1.29)	0.90 (0.64-1.25)	0.78 (0.57-1.06)	0.73 (0.53-0.99)*
35-49 años	0.79 (0.50-1.24)	0.83 (0.59-1.16)	0.75 (0.55-1.02)	0.86 (0.57-1.29)	0.88 (0.63-1.24)	0.99 (0.73-1.33)	1.63 (1.16-2.27)**	1.21 (0.89-1.64)	0.97 (0.73-1.28)	0.89 (0.67-1.18)
50-64 años	1.03 (0.65-1.63)	1.37 (0.96-1.98)	1.09 (0.79-1.50)	0.86 (0.56-1.31)	0.87 (0.61-1.24)	1.50 (1.09-2.07)*	3.17 (2.17-4.65)***	1.33 (0.97-1.82)	0.94 (0.70-1.26)	0.81 (0.60-1.08)
> 64 años	1.17 (0.71-1.94)	1.99 (1.33-2.98)**	1.19 (0.84-1.68)	0.82 (0.52-1.28)	0.46 (0.32-0.66)***	1.13 (0.81-1.59)	3.65 (2.38-5.58)***	0.89 (0.63-1.24)	0.74 (0.54-1.02)	0.80 (0.58-1.11)

\*p<0.05; \*\*p<0.01; \*\*\*p<0.001

**Resumen de resultados:**

El primer objetivo específico de esta tesis doctoral era analizar la **relación que existe entre el nivel educativo y el estado de salud de los ciudadanos españoles, y su nivel de competencia cívica.**

Los resultados del análisis muestran que:

- El **nivel de estudios** está asociado a todas las dimensiones de competencia cívica analizadas. En comparación a las personas sin estudios o con estudios primarios, las personas con un nivel educativo más elevado manifiestan un mayor grado de competencia cívica en la participación en organizaciones de voluntariado, los valores cívicos, la implicación personal hacia la política, la participación política y la confianza institucional. Estos resultados confirman la hipótesis de trabajo H.1.1. Por lo tanto, a medida que aumenta el nivel educativo, aumentan los conocimientos, habilidades, actitudes y motivaciones asociadas a una mayor competencia cívica.
- El **estado de salud** está asociado a seis de las diez de las variables de competencia cívica analizadas. En comparación a aquellas que tienen un estado de salud malo, las personas con un buen estado de salud consideran más importante votar en las elecciones y seguir la actualidad política, manifiestan un mayor interés por los asuntos políticos y sociales, votan más en las elecciones, y confían en el gobierno y los políticos. Estos resultados confirman parcialmente la hipótesis de trabajo H.1.2., que establece una relación entre un buen estado de salud y un mayor grado de competencia cívica.

Aunque no forma parte de los objetivos específicos de esta tesis doctoral, se ha analizado también la **relación entre las variables sociodemográficas edad y género, y el grado de competencia cívica.**

- El **género** está asociado a cinco de las variables de competencia cívica analizadas. En comparación a las mujeres, los hombres consideran menos importante votar en las elecciones y participar en actividades que beneficien al conjunto de la población. En cambio, muestran mayor interés en los asuntos políticos y sociales, en la participación política no convencional y manifiestan una mayor eficacia política interna.
- La **edad** está asociada a seis de las variables de competencia cívica analizadas. En comparación al grupo de edad 18-24 años:
  - Las personas de 25 a 34 años son los que menos importancia otorgan a seguir la actualidad política y los que menos confían en los políticos.
  - A partir de los 35 años aumenta la participación en las elecciones municipales.
  - El grupo de edad 50-64 años es el más interesado en temas políticos y sociales.
  - Las personas mayores de 64 años consideran más importante votar en las elecciones y votan más en las elecciones municipales. En cambio, están menos interesados en la participación política no convencional.



## 5.2. Actitudes hacia el EB

### 5.2.1. Actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales

#### *Influencia de las variables determinantes y de control*

La Tabla 23 muestra los datos del análisis descriptivo para la actitud de los ciudadanos sobre los impuestos y el gasto en políticas sociales, en función de las variables determinantes y de control (nivel de estudios, estado de salud, edad y sexo). Los datos muestran que prácticamente la mitad (48%) de personas se muestran partidarias de que el gobierno baje impuestos y gaste menos en políticas sociales, mientras que una cuarta parte (26%) prefiere que el gobierno suba impuestos y gaste más en políticas sociales. El resto de ciudadanos (26%) no se posiciona ante esta pregunta. La proporción de personas favorables a una subida impositiva y un mayor gasto social es más elevada en los hombres, a medida que aumenta el nivel de estudios y en las personas con un buen estado de salud. No se observa una relación lineal con la edad. Los valores del test Chi-Cuadrado sugieren la posible existencia de una relación entre la actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales, y todas las variables determinantes y de control. Los Gráficos 24 y 25 muestran la actitud de los ciudadanos ante esta cuestión, en función del nivel de estudios y del estado de salud.

Tabla 23: Actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales según las variables determinantes y de control

	Menos impuestos y menor gasto en políticas sociales		Más impuestos y mayor gasto en políticas sociales		NS/NC		P-valor*
	n	%	n	%	n	%	
<b>Total</b>	1428	47,6%	792	26,4%	780	26,0%	
<b>Sexo</b>							
Hombre	570	41,6%	440	32,1%	361	26,3%	<0,001
Mujer	858	52,7%	352	21,6%	419	25,8%	
<b>Edad</b>							
18-24 años	150	58,6%	70	27,3%	36	14,0%	<0,001
25-34 años	269	56,9%	119	25,2%	85	18,0%	
35-49 años	386	43,1%	277	30,9%	232	25,9%	
50-64 años	302	42,2%	199	27,8%	215	30,0%	
> 64 años	321	48,6%	127	19,2%	212	32,1%	
<b>Nivel de estudios</b>							
Sin estudios o estudios primarios	403	58,2%	99	14,3%	190	27,4%	<0,001
Estudios básicos o secundarios	695	50,7%	344	25,1%	333	24,2%	
Estudios universitarios	321	35,0%	344	37,5%	252	27,4%	
<b>Estado de salud</b>							
Bueno-muy bueno	1225	47,0%	723	28,0%	681	25,5%	<0,001
Malo-muy malo	195	55,0%	67	19,0%	95	27,0%	

\*P-valor para el test de Chi-Cuadrado

Gráfico 24: Actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales según nivel de estudios

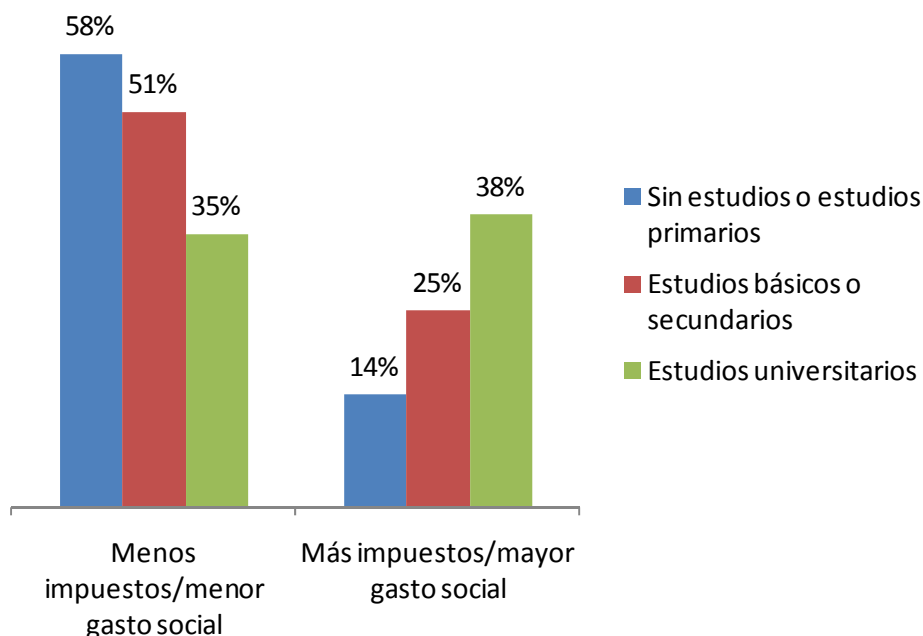
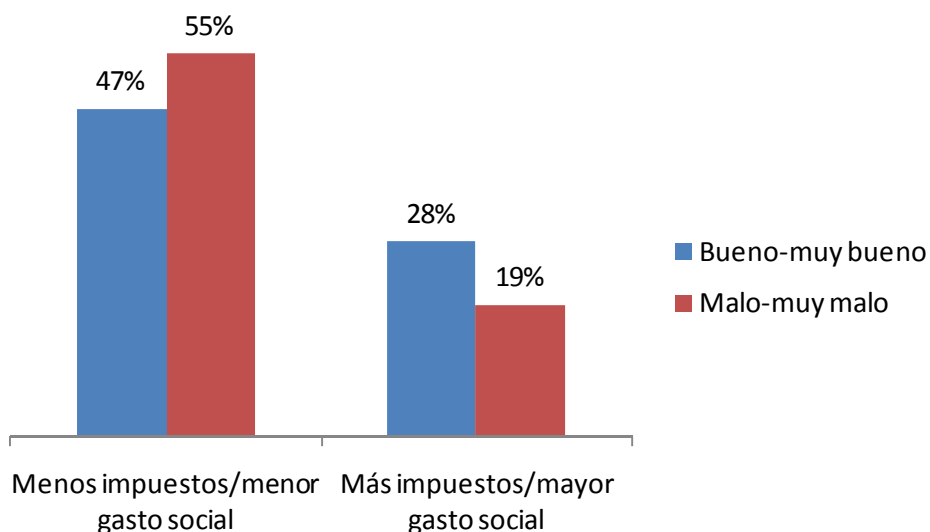




Gráfico 25: Actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales según estado de salud



### *Influencia de las variables de competencia cívica*

La Tabla 24 muestra los datos del análisis descriptivo para la actitud de los ciudadanos sobre los impuestos y el gasto en políticas sociales, en función de las variables de competencia cívica. La proporción de personas favorables a una subida impositiva y un mayor gasto social es más elevada en todos los grupos que representan un nivel alto de competencia cívica: miembros activos de organizaciones de voluntariado, personas que otorgan importancia a los valores cívicos, interesadas en la participación política no convencional, que votan más en las elecciones, con interés y eficacia política y que confían en el gobierno y en los políticos. Los valores del test Chi-Cuadrado permiten sospechar la posible existencia de una relación entre la actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales, y todas las variables relacionadas con la competencia cívica que se han analizado. Los Gráficos 26 a 34 muestran la actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales, en función de las variables de competencia cívica.

Tabla 24: Actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales  
según las variables de competencia cívica

	Menos impuestos y menor gasto en políticas sociales		Más impuestos y mayor gasto en políticas sociales		NS/NC		P-valor*
	n	%	n	%	n	%	
<b>Total</b>	1428	47,6%	792	26,4%	780	26,0%	
<b>Participación en organizaciones de voluntariado</b>							
Miembro activo	110	39,0%	92	33,0%	81	29,0%	<0,001
Miembro no activo-no miembro	1311	49,0%	696	26,0%	691	26,0%	
<b>Importancia de votar en las elecciones</b>							
Muy-bastante importante	1078	47,0%	648	28,0%	590	25,0%	0,003
Poco-nada importante	332	52,0%	140	22,0%	169	26,0%	
<b>Importancia de seguir la actualidad política</b>							
Muy-bastante importante	826	43,0%	583	31,0%	500	26,0%	<0,001
Poco-nada importante	576	55,0%	206	20,0%	261	25,0%	
<b>Importancia de participar en actividades benéficas</b>							
Muy-bastante importante	1114	45,0%	676	27,0%	670	27,0%	0,001
Poco-nada importante	279	59,0%	106	22,0%	89	19,0%	
<b>Participación política no convencional</b>							
Con voz y voto	625	43,0%	446	31,0%	368	26,0%	<0,001
No me interesa	509	53,0%	202	21,0%	255	26,0%	
<b>Participación electoral</b>							
Sí	1152	46,0%	688	28,0%	661	26,0%	0,003
No	271	56,0%	102	21,0%	112	23,0%	
<b>Interés en asuntos políticos y sociales</b>							
Muy-bastante interesado	794	41,0%	607	32,0%	522	27,0%	<0,001
Poco-nada interesado	624	60,0%	180	17,0%	237	23,0%	
<b>Eficacia política interna</b>							
Muy-bastante capaz	735	41,0%	567	32,0%	479	27,0%	<0,001
Poco-nada capaz	652	59,0%	215	19,0%	240	22,0%	
<b>Confianza en el gobierno</b>							
Mucho	108	40,0%	103	38,0%	57	21,0%	<0,001
Algo	473	40,0%	426	36,0%	288	24,0%	
Nada	774	55,0%	244	17,0%	377	27,0%	
<b>Confianza en los políticos</b>							
Mucho	44	39,0%	43	38,0%	26	23,0%	<0,001
Algo	495	40,0%	427	34,0%	320	26,0%	
Nada	829	54,0%	300	20,0%	396	26,0%	

\*P-valor para el test de Chi-Cuadrado

Gráfico 26: Actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales según **importancia otorgada a votar en las elecciones**

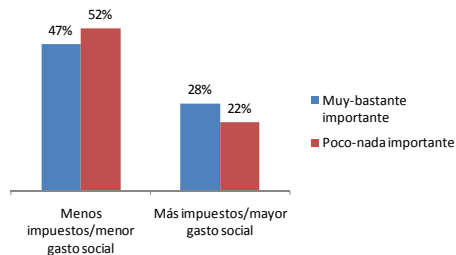


Gráfico 27: Actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales según **importancia otorgada a seguir la actualidad política**

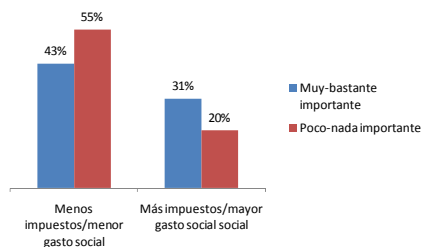


Gráfico 28: Actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales según **importancia otorgada a participar en actividades benéficas**

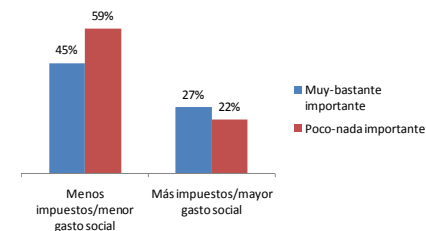


Gráfico 29: Actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales según la **participación política no convencional**

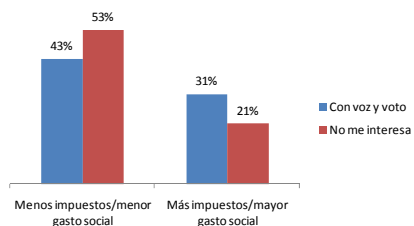


Gráfico 30: Actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales según la **participación electoral**

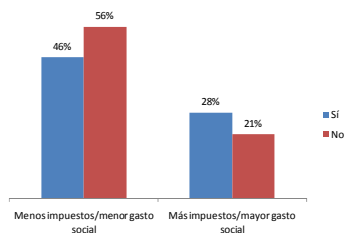


Gráfico 31: Actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales según el **interés en asuntos políticos y sociales**

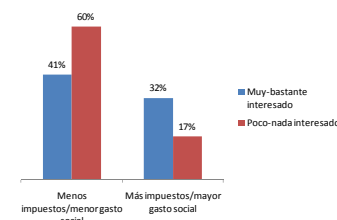


Gráfico 32: Actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales según la **eficacia política interna**

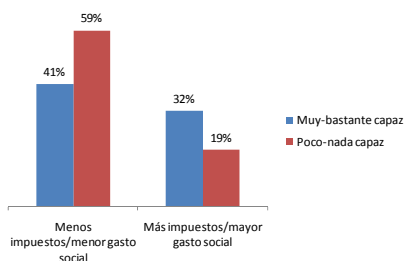


Gráfico 33: Actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales según la **confianza en el gobierno**

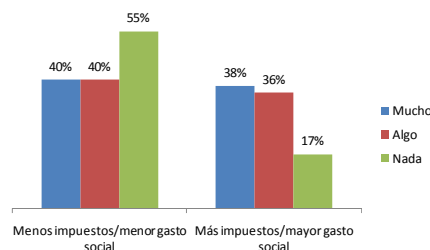
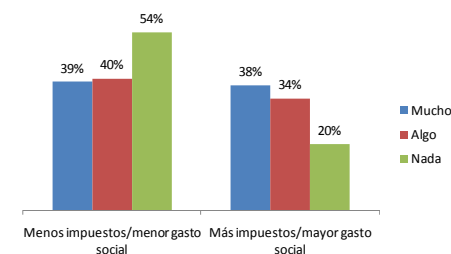


Gráfico 34: Actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales según la **confianza en los políticos**



La Tabla 25 muestra los resultados del análisis de regresión multivariable realizado para la actitud hacia los impuestos y el gasto en política social, ajustado para cada una de las variables de competencia cívica (modelos 1-10) y las variables sexo, edad, nivel de estudios y estado de salud. Los resultados se expresan como razón de ods para una actitud favorable a que el gobierno suba impuestos y aumente el gasto en política social, con un intervalo de confianza del 95%.

Los datos muestran que una actitud favorable a más impuestos y mayor gasto social está asociada a todas las dimensiones relacionadas con la competencia cívica que se han analizado, excepto la participación activa en organizaciones de voluntariado. Así, se muestran favorables las personas que consideran importante votar en las elecciones (RO=1,43; IC: 1,13-1,81), seguir la actualidad política (RO=1,73; IC: 1,41-2,12) y participar en actividades que benefician al conjunto de la población (RO=1,52; IC: 1,17-1,96); las personas interesadas en la participación política no convencional (RO=1,44; IC: 1,16-1,79) y que votan más en las elecciones municipales (RO=1,52; IC: 1,17-1,98); las personas con interés en temas políticos (RO=2,05; IC: 1,66-2,52) y que se consideran capaces de defender su punto de vista sobre un tema política o social (RO=1,69; IC: 1,38-2,08); las personas que confían algo (RO=2,91; IC: 2,37-3,58) y mucho (RO=2,89; IC: 2,09-3,99) en el gobierno; y también las personas que confían algo (RO=2,29; IC: 1,88-2,78) y mucho (RO=1,64; IC: 1,64-4,15) en los políticos.

Asimismo, también se muestran más partidarios de una subida de impuestos y un incremento del gasto social los hombres; las personas mayores de 35 años, las personas con estudios básicos o secundarios y universitarios, y las personas con un buen estado de salud.

Tabla 25: Modelos de regresión multivariable para la actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales

	Modelo 1 (n=2188) RO (IC)	Modelo 2 (n=2178) RO (IC)	Modelo 3 (n=2171) RO (IC)	Modelo 4 (n=2156) RO (IC)	Modelo 5 (n=1767) RO (IC)	Modelo 6 (n=2184) RO (IC)	Modelo 7 (n=2192) RO (IC)	Modelo 8 (n=2148) RO (IC)	Modelo 9 (n=2108) RO (IC)	Modelo 10 (n=2118) RO (IC)
<b>Indicadores de alfabetización cívica</b>										
<b>Asociacionismo</b>										
Miembro no activo o no miembro	1 (referencia)									
Miembro activo	1.36 (0.99-1.85)									
<b>Importancia de votar en las elecciones</b>										
Poco-nada importante		1 (referencia)								
Muy-bastante importante		1.43 (1.13-1.81)**								
<b>Importancia de seguir la actualidad política</b>										
Poco-nada importante			1 (referencia)							
Muy-bastante importante			1.73 (1.41-2.12)***							
<b>Importancia de participar en actividades benéficas</b>										
Poco-nada importante				1 (referencia)						
Muy-bastante importante				1.52 (1.17-1.96)**						
<b>Participación política no convencional</b>										
No interesado/a en participar					1 (referencia)					
Interesado/a en participar con voz y voto					1.44 (1.16-1.79)**					
<b>Participación electoral</b>										
No						1 (referencia)				
Sí						1.52 (1.17-1.98)**				
<b>Interés en asuntos políticos y sociales</b>										
Poco-nada interesado/a							1 (referencia)			
Muy-bastante interesado/a							2.05 (1.66-2.52)***			
<b>Eficacia política interna</b>										
Poco-nada capaz								1 (referencia)		
Muy-bastante capaz								1.69 (1.38-2.08)***		
<b>Confianza en el gobierno</b>										
Nada									1 (referencia)	
Algo									2.91 (2.37-3.58)***	
Mucho									2.89 (2.09-3.99)***	
<b>Confianza en los políticos</b>										
Nada										1 (referencia)
Algo										2.29 (1.88-2.78)***
Mucho										2.61 (1.64-4.15)***
<b>Indicadores sociodemográficos</b>										
<b>Nivel de estudios</b>										
Sin estudios o estudios primarios	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)
Estudios básicos o secundarios	2.16 (1.61-2.90)***	2.11 (1.57-2.83)***	2.02 (1.50-2.72)***	2.05 (1.53-2.76)***	1.99 (1.43-2.75)***	1.97 (1.46-2.65)***	2.20 (1.64-2.94)***	1.97 (1.46-2.66)***	2.24 (1.65-3.06)***	2.27 (1.67-3.10)***
Estudios universitarios	4.68 (3.43-6.39)***	4.58 (3.36-6.24)***	4.20 (3.07-5.74)***	4.40 (3.22-6.02)***	4.27 (3.02-6.04)***	3.97 (2.89-5.44)***	4.71 (3.46-6.42)***	4.02 (2.92-5.54)***	4.63 (3.34)***	4.76 (3.43-6.60)***
<b>Estado de salud</b>										
Malo o muy malo	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)
Bueno o muy bueno	1.47 (1.08-2.02)*	1.45 (1.06-1.99)*	1.44 (1.05-1.97)*	1.45 (1.06-1.98)*	1.84 (1.18-2.86)**	1.38 (1.00-1.90)*	1.46 (1.06-1.99)*	1.44 (1.05-1.97)*	1.42 (1.02-1.98)*	1.28 (0.93-1.77)
<b>Sexo</b>										
Mujer	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)
Hombre	1.73 (1.44-2.08)***	1.72 (1.43-2.08)***	1.70 (1.41-2.04)***	1.73 (1.44-2.09)***	1.60 (1.30-1.96)***	1.65 (1.37-1.99)***	1.70 (1.42-2.05)***	1.60 (1.32-1.93)***	1.79 (1.48-2.18)***	1.81 (1.49-2.19)***
<b>Edad</b>										
18-24 años	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)
25-34 años	0.89 (0.61-1.29)	0.89 (0.61-1.29)	0.92 (0.64-1.34)	0.89 (0.61-1.28)	0.83 (0.55-1.26)	0.93 (0.64-1.35)	0.88 (0.61-1.28)	0.91 (0.63-1.32)	0.98 (0.67-1.43)	1.00 (0.68-1.45)
35-49 años	1.56 (1.12-2.18)**	1.57 (1.13-2.20)**	1.63 (1.17-2.28)**	1.59 (1.14-2.22)**	1.49 (1.03-2.15)*	1.59 (1.13-2.22)**	1.52 (1.09-2.12)*	1.60 (1.14-2.25)**	1.68 (1.19-2.37)**	1.73 (1.23-2.44)**
50-64 años	1.73 (1.22-2.46)**	1.71 (1.20-2.43)**	1.75 (1.23-2.49)**	1.73 (1.22-2.47)**	1.54 (1.04-2.28)*	1.68 (1.18-2.39)**	1.64 (1.15-2.34)**	1.75 (1.22-2.50)**	1.86 (1.29-2.68)**	1.89 (1.32-2.72)**
> 64 años	1.55 (1.04-2.29)*	1.49 (1.01-2.22)*	1.58 (1.06-2.34)*	1.61 (1.08-2.39)*	1.61 (1.04-2.49)*	1.59 (1.07-2.37)*	1.49 (1.01-2.22)*	1.68 (1.13-2.51)*	1.78 (1.17-2.69)**	1.76 (1.17-2.66)**

\*p&lt;0.05; \*\*p&lt;0.01; \*\*\*p&lt;0.001

**Resumen de resultados:**

El segundo objetivo específico de esta tesis doctoral era analizar cómo influyen el nivel educativo, el estado de salud y la competencia cívica, en las actitudes y expectativas de futuro de los ciudadanos hacia el EB.

En relación a la **actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales**, los resultados del análisis muestran que:

- La **competencia cívica** está asociada a la actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales en nueve de las diez variables analizadas. Así, son más favorables a que el gobierno suba impuestos y aumente el gasto en políticas sociales las personas que consideran importantes los valores cívicos, las personas interesadas en la participación política no convencional y que votan más en las elecciones municipales, las personas con interés y eficacia política, y las personas que confían en el gobierno y en los políticos. Estos resultados confirman de manera casi unánime la hipótesis de trabajo H.2.1. Por lo tanto, las personas con un mayor grado de competencia cívica se muestran más dispuestas a pagar a más impuestos para que el gobierno pueda incrementar el gasto en políticas sociales.
- El **nivel de estudios** está asociado a la actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales. En comparación a las personas sin estudios o con estudios primarios, las personas con un nivel educativo más elevado manifiestan una mayor preferencia hacia una subida impositiva y un incremento del gasto social.
- El **estado de salud** está asociado a la actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales. En comparación a aquellas que tienen un estado de salud malo, las personas con un buen estado de salud son más favorables a que el gobierno suba impuestos y aumente el gasto social.

Estos resultados confirman la hipótesis de trabajo H.2.2. Por lo tanto, las personas con mayor nivel educativo y mejor estado de salud son más favorables a una subida de impuestos y un aumento del gasto en políticas sociales.

Aunque no forma parte de los objetivos específicos de esta tesis doctoral, se ha analizado también la **relación entre las variables sociodemográficas edad y género, y la actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales**.

- El **género** está asociado a la actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales. En comparación a las mujeres, los hombres son más partidarios de pagar más impuestos a cambio de un mayor gasto en políticas sociales.
- La **edad** está asociada a la actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales. En comparación al grupo de edad 18-24 años, todos los grupos de edad a partir de los 35 años son más favorables a una subida de impuestos y un mayor gasto en políticas sociales.

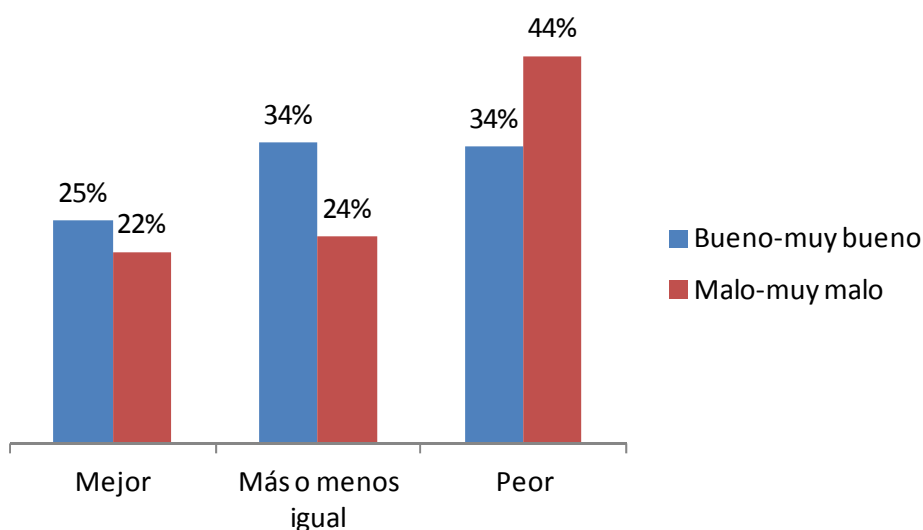
### 5.2.2. Percepción de inseguridad socioeconómica en el futuro

La Tabla 26 muestra los datos del análisis descriptivo para la percepción de inseguridad socioeconómica en el futuro, en función de las variables determinantes y de control. Más de un tercio de ciudadanos (35,1%) cree que su bienestar personal en el futuro será peor, una tercera parte (33%) cree que será más o menos igual, y una cuarta parte (24,9%) cree que será mejor. La proporción de personas pesimistas es mayor entre aquellas con un estado de salud malo, y a partir de los 35 años. No se observa una relación lineal con el nivel de estudios. Los valores del test Chi-Cuadrado sugieren la posible existencia de una relación entre la percepción de inseguridad socioeconómica en el futuro, y las variables edad, nivel de estudios y estado de salud. El Gráfico 35 muestra la percepción de la ciudadanía en función del estado de salud.

Tabla 26: Percepción de inseguridad socioeconómica en el futuro, en función de las variables determinantes y de control

	Mejor		Más o menos igual		Peor		NS/NC		P-valor*
	n	%	n	%	n	%	n	%	
<b>Total</b>	747	24,9%	990	33,0%	1054	35,1%	209	7,0%	
<b>Sexo</b>									
Hombre	357	26,0%	447	32,6%	483	35,2%	84	6,1%	0,403
Mujer	390	23,9%	543	33,3%	571	35,1%	125	7,7%	
<b>Edad</b>									
18-24 años	99	38,7%	79	30,9%	72	28,1%	6	2,3%	<0,001
25-34 años	173	36,6%	160	33,8%	124	26,2%	16	3,4%	
35-49 años	223	24,9%	275	30,7%	333	37,2%	64	7,2%	
50-64 años	142	19,8%	240	33,5%	285	39,8%	49	6,8%	
> 64 años	110	16,7%	236	35,8%	240	36,4%	74	11,2%	
<b>Nivel de estudios</b>									
Sin estudios o estudios primarios	142	20,5%	215	31,1%	246	35,5%	89	12,9%	<0,001
Estudios básicos o secundarios	371	27,0%	454	33,1%	459	33,5%	88	6,4%	
Estudios universitarios	229	25,0%	317	34,6%	341	37,2%	30	3,3%	
<b>Estado de salud</b>									
Bueno-muy bueno	667	25,4%	902	34,3%	889	33,8%	171	6,5%	<0,001
Malo-muy malo	78	21,8%	84	23,5%	158	44,3%	37	10,4%	
*P-valor para el test de Chi-Cuadrado									

Gráfico 35: Percepción de inseguridad socioeconómica en el futuro según estado de salud



La Tabla 27 muestra los datos del análisis descriptivo para la percepción de inseguridad socioeconómica en el futuro, en función de las variables de competencia cívica. Se puede observar que, excepto en el caso de la participación en las elecciones municipales y el interés en temas políticos, existe una mayor proporción de personas pesimistas en casi todos los grupos que representan un bajo nivel de competencia cívica: miembros no activos o no miembros de organizaciones de voluntariado, personas que no consideran importantes los valores cívicos, personas no interesadas en la participación política no convencional, con baja eficacia política y que no confían en el gobierno ni en los políticos. Los valores del test Chi-Cuadrado sugieren la posible existencia de una relación entre la percepción de inseguridad socioeconómica en el futuro, y todas las variables relacionadas con la competencia cívica. Los Gráficos 36 y 37 muestran la distribución de la percepción de inseguridad socioeconómica en el futuro, en función de la confianza institucional.



Tabla 27: Percepción de inseguridad socioeconómica en el futuro, en función de las variables de competencia cívica

	Mejor		Más o menos igual		Peor		NS/NC		P-valor*
	n	%	n	%	n	%	n	%	
<b>Total</b>	747	24,9%	990	33,0%	1054	35,1%	209	7,0%	
<b>Participación en organizaciones de voluntariado</b>									
Miembro activo	82	29,0%	108	38,2%	82	29,0%	11	3,9%	0,012
Miembro no activo-no miembro	658	24,4%	876	32,5%	968	35,9%	196	7,3%	
<b>Importancia de votar en las elecciones</b>									
Muy-bastante importante	601	25,9%	780	33,7%	774	33,4%	161	7,0%	<0,001
Poco-nada importante	139	21,7%	201	31,4%	263	41,0%	38	5,9%	
<b>Importancia de seguir la actualidad política</b>									
Muy-bastante importante	493	25,8%	648	33,9%	653	34,2%	115	6,0%	<0,001
Poco-nada importante	246	23,6%	327	31,4%	386	37,0%	84	8,1%	
<b>Importancia de participar en actividades benéficas</b>									
Muy-bastante importante	619	25,2%	839	34,1%	837	34,0%	165	6,7%	<0,001
Poco-nada importante	115	24,3%	131	27,6%	194	40,9%	34	7,2%	
<b>Participación política no convencional</b>									
Con voz y voto	408	28,4%	480	33,4%	491	34,1%	60	4,2%	<0,001
No me interesa	193	20,0%	312	32,3%	353	36,5%	108	11,2%	
<b>Participación electoral</b>									
Sí	608	24,3%	833	33,3%	878	35,1%	182	7,3%	<0,001
No	137	28,2%	155	32,0%	170	35,1%	23	4,7%	
<b>Interés en asuntos políticos y sociales</b>									
Muy-bastante interesado	489	25,4%	650	33,8%	685	35,6%	99	5,1%	<0,001
Poco-nada interesado	255	24,5%	332	31,9%	357	34,3%	97	9,3%	
<b>Eficacia política interna</b>									
Muy-bastante capaz	503	28,2%	581	32,6%	611	34,3%	86	4,8%	<0,001
Poco-nada capaz	222	20,1%	375	33,9%	412	37,2%	98	8,9%	
<b>Confianza en el gobierno</b>									
Mucho	77	28,7%	94	35,1%	77	28,7%	20	7,5%	<0,001
Algo	315	26,5%	459	38,7%	348	29,3%	65	5,5%	
Nada	321	23,0%	395	28,3%	584	41,9%	95	6,8%	
<b>Confianza en los políticos</b>									
Mucho	41	36,3%	37	32,7%	25	22,1%	10	8,8%	<0,001
Algo	346	27,9%	444	35,7%	388	31,2%	64	5,2%	
Nada	342	22,4%	474	31,1%	604	39,6%	105	6,9%	

\*P-valor para el test de Chi-Cuadrado

Gráfico 36: Percepción de inseguridad socioeconómica en el futuro según la confianza en el gobierno

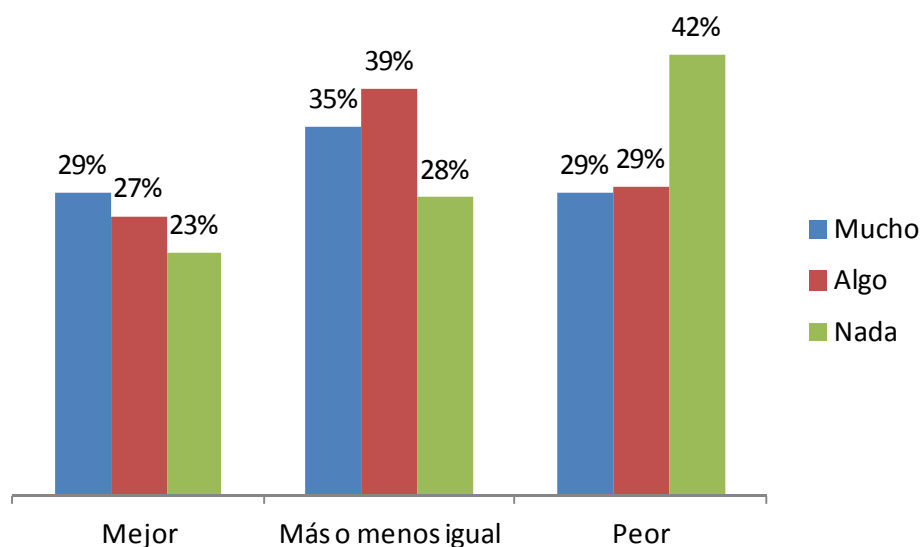
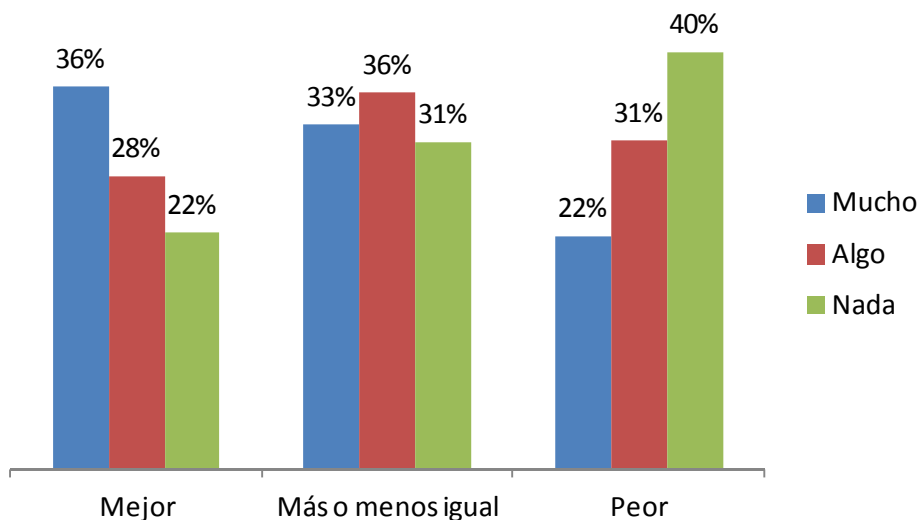


Gráfico 37: Percepción de inseguridad socioeconómica en el futuro según la confianza en los políticos



La Tabla 28 muestra los resultados del análisis de regresión multivariable realizado para la percepción de inseguridad socioeconómica en el futuro, ajustado para cada una de las variables de competencia cívica (modelos 1-10) y las variables sexo, edad, nivel de estudios y estado de salud. Los resultados se expresan como razón de ods para la percepción de que el bienestar personal será peor en el futuro, con un intervalo de confianza del 95%.

Los datos muestran que una peor percepción está asociada a siete de las diez variables de competencia cívica analizadas. Creen que su bienestar personal será peor en el futuro los miembros no activos o no miembros de organizaciones de voluntariado (RO=1,52; IC: 1,15-2,00), las personas que no consideran importante votar en las elecciones (RO=1,40; IC: 1,16-1,69) ni participar en actividades que benefician a toda la población (RO=1,36; IC: 1,10-1,68), las personas no interesadas en la participación política no convencional (RO=1,27; IC: 1,05-1,52), con una baja eficacia política (RO=1,23; IC: 1,04-1,46) y las que no confían nada en el gobierno (RO=1,90; IC: 1,41-2,56) ni en los políticos (RO=2,39; IC: 1,50-3,81). Asimismo, también se muestran pesimistas las personas con un estado de salud malo y todos los grupos de edad a partir de los 35 años.

Tabla 28: Modelos de regresión multivariable para la percepción de inseguridad socioeconómica en el futuro

	Modelo 1 (n=2748) OR (IC)	Modelo 2 (n=2733) OR (IC)	Modelo 3 (n=2727) OR (IC)	Modelo 4 (n=2711) OR (IC)	Modelo 5 (n=2220) OR (IC)	Modelo 6 (n=2741) OR (IC)	Modelo 7 (n=2755) OR (IC)	Modelo 8 (n=2677) OR (IC)	Modelo 9 (n=2645) OR (IC)	Modelo 10 (n=2676) OR (IC)
<b>Indicadores de alfabetización cívica</b>										
<b>Asociacionismo</b>										
Miembro no activo o no miembro	1.52 (1.15-2.00)**									
Miembro activo	1 (referencia)									
<b>Importancia de votar en las elecciones</b>										
Poco-nada importante		1.40 (1.16-1.69)**								
Muy-bastante importante		1 (referencia)								
<b>Importancia de seguir la actualidad política</b>										
Poco-nada importante			1.18 (1.00-1.39)							
Muy-bastante importante			1 (referencia)							
<b>Importancia de participar en actividades benéficas</b>										
Poco-nada importante				1.36 (1.10-1.68)**						
Muy-bastante importante				1 (referencia)						
<b>Participación política no convencional</b>										
No interesado/a en participar					1.27 (1.05-1.52)*					
Interesado/a en participar con voz y voto					1 (referencia)					
<b>Participación electoral</b>										
No						1.05 (0.85-1.30)				
Sí						1 (referencia)				
<b>Interés en asuntos políticos y sociales</b>										
Poco-nada interesado/a							1.01 (0.85-1.20)			
Muy-bastante interesado/a							1 (referencia)			
<b>Eficacia política</b>										
Poco-nada capaz								1.23 (1.04-1.46)*		
Muy-bastante capaz								1 (referencia)		
<b>Confianza en el gobierno</b>										
Nada									1.90 (1.41-2.56)***	
Algo									1.04 (0.77-1.41)	
Mucho									1 (referencia)	
<b>Confianza en los políticos</b>										
Nada										2.39 (1.50-3.81)***
Algo										1.59 (0.99-2.54)
Mucho										1 (referencia)
<b>Indicadores sociodemográficos</b>										
<b>Nivel de estudios</b>										
Sin estudios o estudios primarios	0.85 (0.67-1.09)	0.83 (0.65-1.06)	0.84 (0.65-1.07)	0.87 (0.68-1.11)	0.88 (0.67-1.15)	0.89 (0.69-1.14)	0.88 (0.69-1.12)	0.83 (0.64-1.06)	0.87 (0.68-1.12)	0.84 (0.65-1.08)
Estudios básicos o secundarios	0.85 (0.71-1.02)	0.84 (0.70-1.01)	0.84 (0.70-1.01)	0.85 (0.71-1.02)	0.83 (0.68-1.01)	0.87 (0.72-1.04)	0.86 (0.72-1.03)	0.86 (0.72-1.03)	0.83 (0.69-1.00)	0.84 (0.70-1.01)
Estudios universitarios	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)
<b>Estado de salud</b>										
Malo o muy malo	1.61 (1.26-2.05)***	1.55 (1.21-1.97)***	1.55 (1.22-1.98)***	1.63 (1.28-2.08)***	1.50 (1.15-1.95)**	1.58 (1.24-2.02)***	1.59 (1.25-2.02)***	1.59 (1.25-2.04)***	1.46 (1.14-1.88)**	1.56 (1.22-2.00)***
Bueno o muy bueno	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)
<b>Sexo</b>										
Mujer	1.05 (0.89-1.23)	1.04 (0.89-1.23)	1.04 (0.89-1.22)	1.04 (0.88-1.22)	0.98 (0.82-1.17)	1.03 (0.88-1.21)	1.04 (0.89-1.22)	1.02 (0.87-1.20)	1.06 (0.90-1.25)	1.05 (0.90-1.24)
Hombre	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)
<b>Edad</b>										
18-24 años	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)
25-34 años	0.89 (0.63-1.25)	0.87 (0.61-1.23)	0.89 (0.63-1.26)	0.94 (0.66-1.33)	0.81 (0.55-1.19)	0.90 (0.64-1.27)	0.89 (0.63-1.26)	0.89 (0.63-1.26)	0.85 (0.60-1.21)	0.85 (0.60-1.20)
35-49 años	1.60 (1.17-2.18)**	1.57 (1.15-2.15)**	1.58 (1.16-2.16)**	1.69 (1.23-2.31)	1.61 (1.14-2.29)**	1.59 (1.16-2.16)**	1.59 (1.17-2.17)**	1.56 (1.14-2.13)**	1.58 (1.15-2.17)**	1.55 (1.13-2.12)**
50-64 años	1.78 (1.29-2.45)***	1.79 (1.30-2.47)***	1.80 (1.31-2.48)***	1.86 (1.34-2.57)***	1.68 (1.17-2.41)**	1.76 (1.28-2.43)**	1.76 (1.28-2.43)**	1.76 (1.28-2.43)**	1.76 (1.27-2.44)**	1.76 (1.27-2.43)**
> 64 años	1.64 (1.16-2.32)**	1.68 (1.18-2.37)**	1.63 (1.15-2.30)**	1.66 (1.17-2.35)**	1.41 (0.96-2.07)	1.57 (1.11-2.21)*	1.59 (1.12-2.24)**	1.56 (1.10-2.21)*	1.51 (1.06-2.15)*	1.53 (1.08-2.17)*

\*p&lt;0.05; \*\*p&lt;0.01; \*\*\*p&lt;0.001

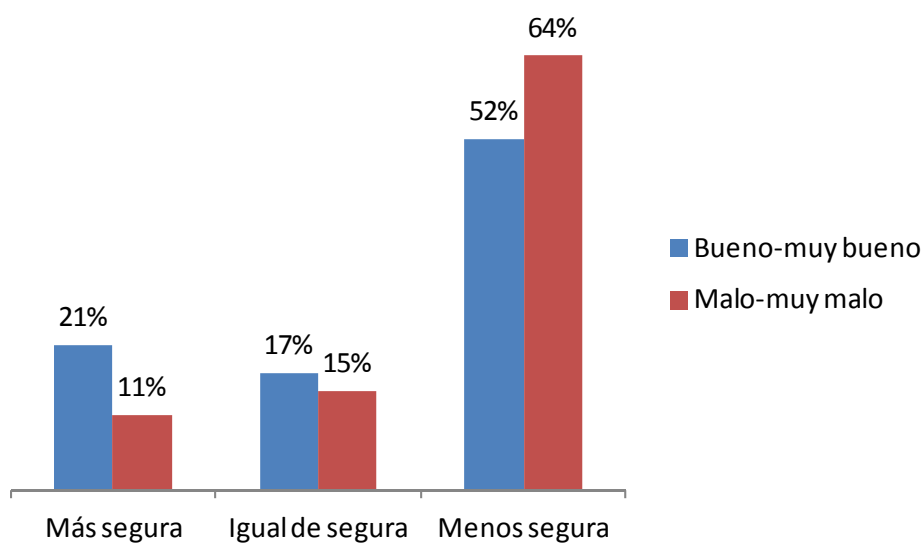
### 5.2.2. Percepción de riesgo en el futuro

La Tabla 29 muestra los datos del análisis descriptivo para la percepción de riesgo en el futuro, en función de las variables determinantes y de control. Más de la mitad de ciudadanos (53,1%) cree que la vida de sus hijos será menos segura comparada con la suya, un 17% cree que será igual de segura y una quinta parte (20,0%) cree que será más segura. La proporción de personas pesimistas es mayor en las mujeres, en las personas con un estado de salud malo y aumenta con la edad excepto en el grupo de más de 64 años. No se observa una relación clara con el nivel de estudios. Los valores del test Chi-Cuadrado sugieren la posible existencia de una relación entre la percepción de riesgo, y todas las variables determinantes y de control. El Gráfico 38 muestra la percepción de riesgo en función del estado de salud.

Tabla 29: Percepción de riesgo en el futuro, en función de las variables determinantes y de control

	Más segura		Igual de segura		Menos segura		NS/NC		P-valor*
	n	%	n	%	n	%	n	%	
<b>Total</b>	601	20,0%	504	16,8%	1593	53,1%	302	10,1%	
<b>Sexo</b>									
Hombre	308	22,5%	244	17,8%	689	50,3%	130	9,5%	0,002
Mujer	293	18,0%	260	16,0%	904	55,5%	172	10,6%	
<b>Edad</b>									
18-24 años	77	30,1%	54	21,1%	99	38,7%	26	10,2%	<0,001
25-34 años	116	24,5%	103	21,8%	212	44,8%	42	8,9%	
35-49 años	181	20,2%	160	17,9%	474	53,0%	80	8,9%	
50-64 años	118	16,5%	93	13,0%	444	62,0%	61	8,5%	
> 64 años	109	16,5%	94	14,2%	364	55,2%	93	14,1%	
<b>Nivel de estudios</b>									
Sin estudios o estudios primarios	130	18,8%	88	12,7%	371	53,6%	103	14,9%	<0,001
Estudios básicos o secundarios	282	20,6%	220	16,0%	738	53,8%	132	9,6%	
Estudios universitarios	183	20,0%	193	21,0%	476	51,9%	65	7,1%	
<b>Estado de salud</b>									
Bueno-muy bueno	559	21,3%	450	17,1%	1357	51,6%	263	10,0%	<0,001
Malo-muy malo	39	10,9%	52	14,6%	228	63,9%	38	10,6%	
*P-valor para el test de Chi-Cuadrado									

Gráfico 38: Percepción de riesgo en el futuro según estado de salud



La Tabla 30 muestra los datos del análisis descriptivo para la percepción de riesgo en el futuro, en función de las variables de competencia cívica. La proporción de personas que creen que la vida será menos segura en el futuro crece a medida que disminuye la confianza en las instituciones, y también es ligeramente mayor en las personas que no otorgan importancia a los valores cívicos y que muestran una baja implicación personal hacia la política, medida a través del interés y la eficacia política interna. Los valores del test Chi-Cuadrado sugieren la posible existencia de una relación entre la percepción de riesgo y todas las variables relacionadas con la competencia cívica. Los Gráficos 39 y 40 muestran la distribución de la percepción de riesgo, en función de la confianza institucional.

Tabla 30: Percepción de riesgo en el futuro, en función de las variables de competencia cívica

	Más segura		Igual de segura		Menos segura		NS/NC		P-valor*
	n	%	n	%	n	%	n	%	
<b>Total</b>	601	20,0%	504	16,8%	1593	53,1%	302	10,1%	
<b>Participación en organizaciones de voluntariado</b>									
Miembro activo	58	20,5%	58	20,5%	151	53,4%	16	5,7%	0,014
Miembro no activo-no miembro	540	20,0%	441	16,3%	1435	53,2%	282	10,5%	
<b>Importancia de votar en las elecciones</b>									
Muy-bastante importante	486	21,0%	401	17,3%	1205	52,0%	224	9,7%	<0,001
Poco-nada importante	108	16,8%	98	15,3%	370	57,7%	65	10,1%	
<b>Importancia de seguir la actualidad política</b>									
Muy-bastante importante	407	21,3%	339	17,8%	993	52,0%	170	8,9%	0,012
Poco-nada importante	186	17,8%	157	15,1%	580	55,6%	120	11,5%	
<b>Importancia de participar en actividades benéficas</b>									
Muy-bastante importante	509	20,7%	411	16,7%	1308	53,2%	232	9,4%	<0,001
Poco-nada importante	78	16,5%	82	17,3%	259	54,6%	55	11,6%	
<b>Participación política no convencional</b>									
Con voz y voto	329	22,9%	256	17,8%	751	52,2%	103	7,2%	<0,001
No me interesa	160	16,6%	145	15,0%	525	54,3%	136	14,1%	
<b>Participación electoral</b>									
Sí	503	20,1%	424	17,0%	1331	53,2%	243	9,7%	<0,001
No	96	19,8%	80	16,5%	255	52,6%	54	11,1%	
<b>Interés en asuntos políticos y sociales</b>									
Muy-bastante interesado	407	21,2%	336	17,5%	1014	52,7%	166	8,6%	<0,001
Poco-nada interesado	185	17,8%	167	16,0%	562	54,0%	127	12,2%	
<b>Eficacia política interna</b>									
Muy-bastante capaz	390	21,9%	306	17,2%	942	52,9%	143	8,0%	<0,001
Poco-nada capaz	190	17,2%	185	16,7%	605	54,7%	127	11,5%	
<b>Confianza en el gobierno</b>									
Mucho	77	28,7%	57	21,3%	104	38,8%	30	11,2%	<0,001
Algo	270	22,7%	252	21,2%	559	47,1%	106	8,9%	
Nada	217	15,6%	181	13,0%	865	62,0%	132	9,5%	
<b>Confianza en los políticos</b>									
Mucho	39	34,5%	23	20,4%	34	30,1%	17	15,0%	<0,001
Algo	268	21,6%	263	21,2%	600	48,3%	111	8,9%	
Nada	265	17,4%	201	13,2%	913	59,9%	146	9,6%	

\*P-valor para el test de Chi-Cuadrado

Gráfico 39: Percepción de riesgo en el futuro según confianza en el gobierno

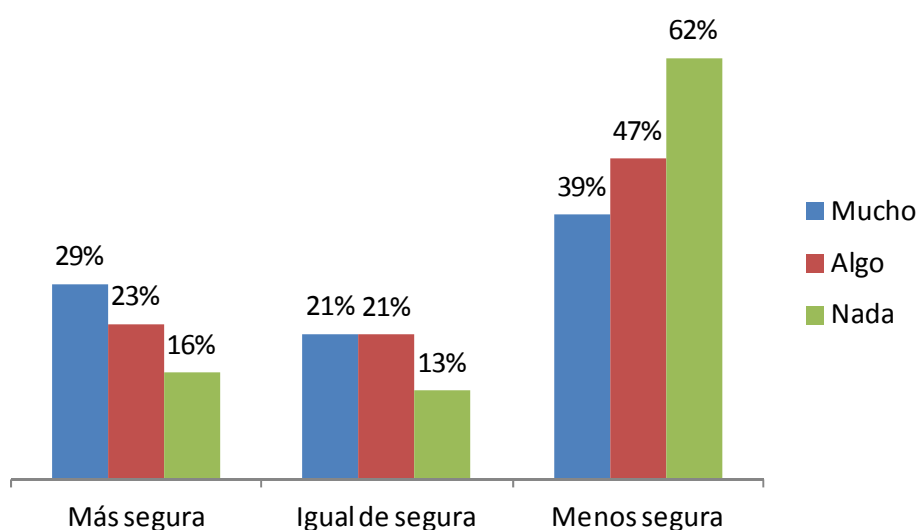
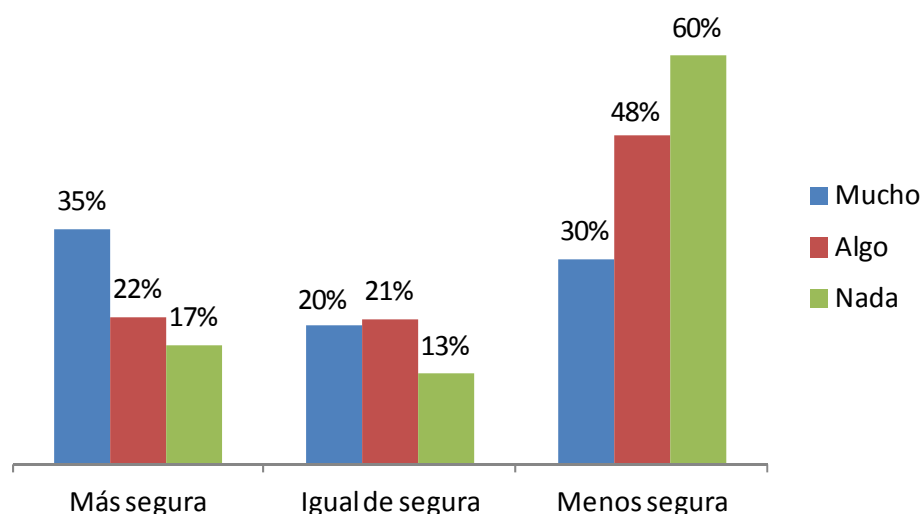


Gráfico 40: Percepción de riesgo en el futuro según confianza en los políticos



La Tabla 31 muestra los resultados del análisis de regresión multivariable realizado para la percepción de riesgo hacia el futuro, ajustado para cada una de las variables de competencia cívica (modelos 1-10) y las variables sexo, edad, nivel de estudios y estado de salud. Los resultados se expresan como razón de ods para la percepción de que la vida será menos segura en el futuro, comparada con la actual, con un intervalo de confianza del 95%.

Los datos muestran que una mayor percepción de riesgo en el futuro está asociada a cinco de las diez variables de competencia cívica analizadas. Creen que la vida de sus hijos será menos segura en el futuro, comparada con la actual, las personas que no consideran importante votar en las elecciones (RO=1,42; IC: 1,16-1,73) ni seguir la actualidad política (RO=1,29; IC: 1,09-1,53), no interesadas en la participación política no convencional (RO=1,25; IC: 1,03-1,50), que confían algo (RO=1,44; IC: 1,08-1,93) o nada (RO=2,96; IC: 2,21-3,96) en el gobierno, y que confían algo (RO=2,23; IC: 1,43-3,49) o nada en los políticos (RO=3,78; IC: 2,42-5,90), en comparación con las personas que afirman confiar mucho. También se muestran más temerosos las mujeres, las personas mayores de 35 años y aquellas con un estado de salud malo. La percepción de inseguridad no está asociada con el nivel de estudios.

Tabla 31: Modelos de regresión multivariable para la percepción de riesgo en el futuro

	Modelo 1 (n=2656) OR (IC)	Modelo 2 (n=2642) OR (IC)	Modelo 3 (n=2636) OR (IC)	Modelo 4 (n=2622) OR (IC)	Modelo 5 (n=2148) OR (IC)	Modelo 6 (n=2644) OR (IC)	Modelo 7 (n=2662) OR (IC)	Modelo 8 (n=2591) OR (IC)	Modelo 9 (n=2557) OR (IC)	Modelo 10 (n=2581) OR (IC)
<b>Indicadores de alfabetización cívica</b>										
<b>Participación en organizaciones de voluntariado</b>										
Miembro no activo o no miembro	1.13 (0.87-1.47)									
Miembro activo	1 (referencia)									
<b>Importancia de votar en las elecciones</b>										
Poco-nada importante		1.42 (1.16-1.73)**								
Muy-bastante importante		1 (referencia)								
<b>Importancia de seguir la actualidad política</b>										
Poco-nada importante			1.29 (1.09-1.53)**							
Muy-bastante importante			1 (referencia)							
<b>Importancia de participar en actividades benéficas</b>										
Poco-nada importante				1.13 (0.90-1.41)						
Muy-bastante importante				1 (referencia)						
<b>Participación política no convencional</b>										
No interesado/a en participar					1.25 (1.03-1.50)*					
Interesado/a en participar con voz y voto					1 (referencia)					
<b>Participación electoral</b>										
No						1.14 (0.92-1.42)				
Sí						1 (referencia)				
<b>Interés en asuntos políticos y sociales</b>										
Poco-nada interesado/a							1.13 (0.95-1.35)			
Muy-bastante interesado/a							1 (referencia)			
<b>Eficacia política interna</b>										
Poco-nada capaz								1.11 (0.94-1.32)		
Muy-bastante capaz								1 (referencia)		
<b>Confianza en el gobierno</b>										
Nada									2.96 (2.21-3.96)***	
Algo									1.44 (1.08-1.93)*	
Mucho									1 (referencia)	
<b>Confianza en los políticos</b>										
Nada										3.78 (2.42-5.90)***
Algo										2.23 (1.43-3.49)***
Mucho										1 (referencia)
<b>Indicadores sociodemográficos</b>										
<b>Nivel de estudios</b>										
Sin estudios o estudios primarios	0.93 (0.72-1.20)	0.90 (0.70-1.16)	0.90 (0.70-1.16)	0.95 (0.73-1.22)	1.00 (0.75-1.32)	0.92 (0.71-1.19)	0.93 (0.73-1.20)	0.93 (0.72-1.21)	0.95 (0.73-1.24)	0.91 (0.70-1.18)
Estudios básicos o secundarios	1.15 (0.96-1.38)	1.14 (0.95-1.36)	1.13 (0.94-1.35)	1.16 (0.97-1.39)	1.11 (0.91-1.36)	1.13 (0.94-1.36)	1.14 (0.95-1.37)	1.16 (0.97-1.39)	1.09 (0.90-1.31)	1.09 (0.90-1.31)
Estudios universitarios	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)
<b>Estado de salud</b>										
Malo o muy malo	1.67 (1.28-2.17)***	1.60 (1.23-2.09)**	1.61 (1.23-2.10)***	1.71 (1.31-2.24)***	1.63 (1.22-2.18)**	1.60 (1.22-2.08)**	1.60 (1.23-2.09)***	1.65 (1.26-2.16)***	1.53 (1.16-2.01)**	1.66 (1.26-2.19)***
Bueno o muy bueno	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)
<b>Sexo</b>										
Mujer	1.34 (1.14-1.58)***	1.38 (1.17-1.62)***	1.33 (1.13-1.56)**	1.35 (1.15-1.58)***	1.30 (1.08-1.55)**	1.34 (1.14-1.58)***	1.34 (1.15-1.58)***	1.32 (1.12-1.55)**	1.40 (1.19-1.65)***	1.42 (1.21-1.68)***
Hombre	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)
<b>Edad</b>										
18-24 años	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)	1 (referencia)
25-34 años	1.27 (0.91-1.76)	1.24 (0.89-1.72)	1.26 (0.91-1.74)	1.32 (0.95-1.83)	1.24 (0.86-1.79)	1.25 (0.90-1.73)	1.27 (0.91-1.75)	1.25 (0.90-1.74)	1.18 (0.85-1.65)	1.15 (0.83-1.61)
35-49 años	1.86 (1.38-2.51)***	1.82 (1.35-2.46)***	1.82 (1.35-2.46)***	1.92 (1.42-2.59)***	1.90 (1.36-2.67)***	1.87 (1.38-2.52)***	1.86 (1.38-2.51)***	1.86 (1.37-2.51)***	1.79 (1.32-2.44)***	1.72 (1.27-2.34)***
50-64 años	2.85 (2.07-3.91)***	2.90 (2.11-3.98)***	2.90 (2.11-3.98)***	2.90 (2.11-3.98)***	2.68 (1.87-3.82)***	2.87 (2.09-3.93)***	2.90 (2.11-3.98)***	2.88 (2.09-3.96)***	2.86 (2.06-3.95)***	2.81 (2.03-3.88)***
> 64 años	2.42 (1.72-3.42)***	2.43 (1.73-3.43)***	2.41 (1.71-3.40)***	2.50 (1.77-3.53)***	2.23 (1.52-3.27)***	2.43 (1.72-3.42)***	2.44 (1.73-3.44)***	2.34 (1.66-3.32)***	2.28 (1.60-3.25)***	2.38 (1.67-3.39)***
*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001										



**Resumen de resultados:**

En relación a las **expectativas de futuro hacia el Estado del Bienestar**, los resultados de nuestro análisis muestran que:

- La **competencia cívica** está asociada a la **percepción de inseguridad socioeconómica en el futuro** en siete de las diez variables analizadas. Creen que su bienestar personal será peor en el futuro los miembros no activos o no miembros de organizaciones de voluntariado, las personas que no consideran importante votar en las elecciones ni participar en actividades que benefician a toda la población, las personas no interesadas en la participación política no convencional, con una baja eficacia política y las que no confían nada en el gobierno ni en los políticos.
- La **competencia cívica** está asociada a la **percepción de riesgo en el futuro** en cinco de las diez variables de competencia cívica analizadas. Creen que la vida de sus hijos será menos segura en el futuro, comparada con la actual, las personas que no consideran importante votar en las elecciones ni seguir la actualidad política, las no interesadas en la participación política no convencional, y las que confían algo o nada en el gobierno y en los políticos -en comparación con las personas que afirman confiar mucho-.

Estos resultados confirman parcialmente la hipótesis de trabajo H.3.1. Por lo tanto, las personas con un menor grado de competencia cívica tienen una mayor percepción subjetiva de inseguridad socioeconómica y riesgo en el futuro, en función de la variable analizada.

- El **nivel de estudios** no está asociado a la percepción de inseguridad socioeconómica ni tampoco a la percepción de riesgo en el futuro.
- El **estado de salud** está asociado a la percepción de inseguridad socioeconómica y riesgo en el futuro. En comparación a aquellas que tienen un buen estado de salud, las personas con un estado de salud malo creen que su bienestar personal será peor en el futuro, y que la vida de sus hijos será menos segura comparada con la actual.

Estos resultados confirman la hipótesis de trabajo H.3.2. en el caso del estado de salud. Las personas con un peor estado de salud tienen una mayor percepción de riesgo e inseguridad socioeconómica en el futuro.

En cambio, los resultados rechazan la hipótesis H.3.2. en el caso del nivel educativo. Las personas con menor educativo no tienen una mayor percepción de inseguridad socioeconómica y riesgo en el futuro.

Aunque no forma parte de los objetivos específicos de esta tesis doctoral, se ha analizado también la **relación entre las variables sociodemográficas edad y género, y la percepción de inseguridad socioeconómica y riesgo en el futuro.**

- El **género** está asociado a la percepción de riesgo en el futuro. En comparación a los hombres, las mujeres creen que la vida de sus hijos será menos segura en el futuro, comparada con la suya.
- La **edad** está asociada a la percepción de inseguridad y riesgo en el futuro. En comparación al grupo de edad 18-24 años, todos los grupos de edad a partir de los 35 años creen que su bienestar personal será peor en el futuro, y que la vida de sus hijos será menos segura comparada con la actual.



### **5.3. Una tipología de los ciudadanos españoles en base a las variables de análisis**

En esta última sección, se presenta una tipología de los ciudadanos españoles en base a las diferentes variables analizadas. Para ello se ha realizado un análisis de correspondencias múltiples y un análisis de clústers, que nos permiten clasificar a los individuos en diferentes grupos que se caracterizan por tener la máxima varianza intergrupala y la mínima varianza intragrupal.

Para este análisis se han contemplado las siguientes variables:

- Variables de competencia cívica (participación en organizaciones de voluntariado, importancia de votar en las elecciones, importancia de seguir la actualidad política, importancia de participar en actividades que beneficien al conjunto de la población, participación política no convencional, participación electoral, interés en temas políticos y sociales, eficacia política interna, confianza en el gobierno y confianza en los políticos).
- Actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales
- Percepción de inseguridad socioeconómica en el futuro
- Percepción de riesgo hacia el futuro

También se incluyen, como variables suplementarias, la edad, el sexo, el nivel de estudios y el estado de salud.

#### **5.3.1. Análisis de correspondencias múltiples**

La Tabla 32 muestra la distribución de los niveles de respuesta para cada una de las variables incluidas en el análisis de correspondencias. Se han eliminado del modelo cuatro variables que no aportan información y no contribuyen a explicar la varianza intergrupala: la participación electoral, la eficacia política interna, la percepción de inseguridad socioeconómica, y la percepción de riesgo en el futuro. Tampoco se han incluido las categorías de respuesta “No sabe/No contesta”. El número total de personas incluidas en el análisis es de 1950.

Tabla 32: Distribución de los niveles de respuesta para las variables incluidas en el análisis de correspondencias múltiples

Variable	Categoría de respuesta	Nº personas
Participación en organizaciones de voluntariado	Miembro activo	177
	Miembro no activo	106
	No miembro	1667
Importancia de votar en las elecciones	Muy importante	1006
	Bastante importante	529
	Poco importante	251
	Nada importante	164
Importancia de seguir la actualidad política	Muy importante	637
	Bastante importante	644
	Poco importante	451
	Nada importante	218
Importancia de participar en actividades que benefician a toda la población	Muy importante	913
	Bastante importante	706
	Poco importante	202
	Nada importante	129
Participación política no convencional	Con voz y voto	1004
	Con voz pero sin voto	125
	Sólo recibir información	206
	No me interesa participar	615
Interés en asuntos políticos y sociales	Muy interesado/a	492
	Bastante interesado/a	808
	Poco interesado/a	415
	Nada interesado/a	235
Confianza en el gobierno	Mucho	190
	Algo	831
	Nada	929
Confianza en los políticos	Mucho	80
	Algo	850
	Nada	1020
Actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales	Más impuestos y mayor gasto social	1224
	Menos impuestos y menor gasto social	726

A partir de la descomposición de los valores propios en el análisis de correspondencias múltiples, se puede extraer que las tres primeras dimensiones, contribuyen a explicar el 23,69% de varianza acumulada. En el Gráfico 41 se muestra la representación gráfica de las variables en las dos primeras dimensiones del análisis de correspondencias

múltiples. El Anexo 2 incluye cuatro gráficos en los que se incluyen éstas variables de competencia cívica, junto a las variables suplementarias utilizadas.

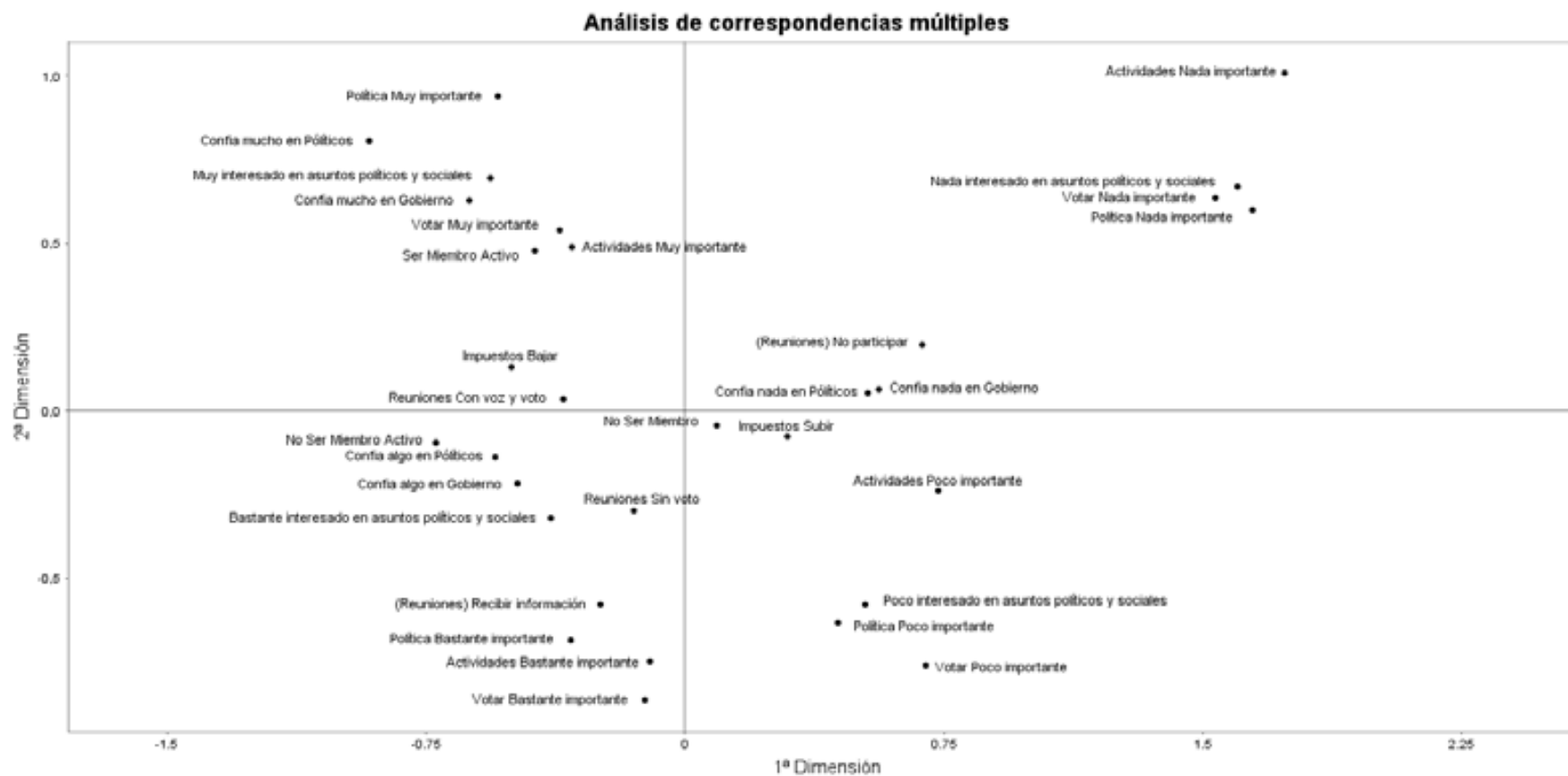
La Tabla 33 muestra las características sociodemográficas de las personas que han respondido “No sabe/No contesta” en alguna de las 9 variables activas de competencia cívica incluidas en el análisis de correspondencias (n=1050). Los datos muestran que la proporción de respuestas “No sabe” o “No contesta” es mayor en las mujeres (58%) respecto a los hombres (42%) y aumenta de forma muy relevante con la edad. Así, esta proporción prácticamente no supera el 10% en los menores de 35 años, mientras que aumenta hasta prácticamente un tercio de la población, en el caso de las personas mayores de 64 años.

En relación al nivel de estudios, se observa que la mayor proporción de respuestas NS/NC corresponde a personas con estudios básicos y secundarios (41,5%). Finalmente, casi 2 de cada 3 personas de personas que manifiestan tener un buen estado de salud han respondido NS/NC en alguna de las preguntas relacionadas con las variables de competencia cívica.

Tabla 33: Análisis sociodemográfico de los individuos no considerados en el análisis de correspondencias múltiples

Variable	n (%)
<b>Total</b>	1050 (100,0%)
<b>Sexo</b>	
Hombre	442 (42,1%)
Mujer	608 (57,9%)
<b>Edad</b>	
De 18 a 24	52 (5,0%)
De 25 a 34	109 (10,4%)
De 35 a 49	290 (27,6%)
De 50 a 64	271 (25,8%)
Mayor 64	328 (31,2%)
<b>Nivel de estudios</b>	
Sin estudios o primarios	315 (30,0%)
Estudios básicos o secundarios	436 (41,5%)
Estudios universitarios	292 (27,8%)
NS/NC	7 (0,7%)
<b>Estado de salud</b>	
Muy Bueno	236 (22,5%)
Bueno	665 (63,3%)
Malo	122 (11,6%)
Muy malo	22 (2,1%)
NS/NC	5 (0,5%)

Gráfico 41: Representación gráfica de las variables en las dos primeras dimensiones del análisis de correspondencias múltiples



### 5.3.2. Análisis de clústers

A continuación se ha realizado un análisis de clústers que permite clasificar a todos los individuos incluidos en el análisis (n=1950). En los Gráficos 42, 43 y 44 se muestran la representación gráfica de los individuos según un ajuste de los clústers con dos, tres y cuatro centros de gravedad, respectivamente.

Gráfico 42: Representación de los individuos en 2 clústers

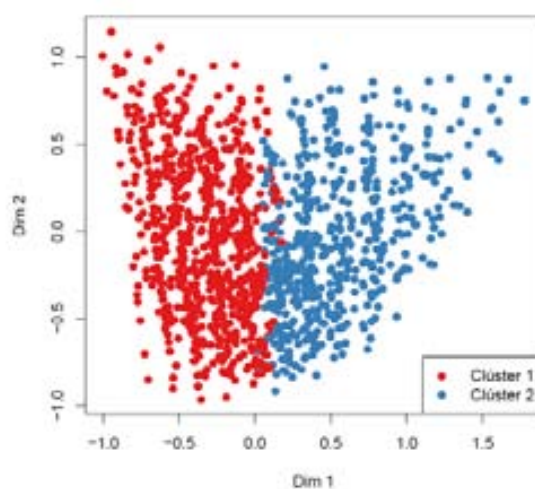


Gráfico 43: Representación de los individuos en 3 clústers

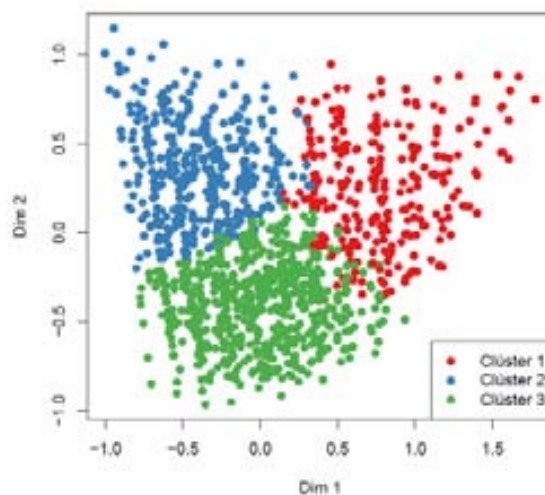
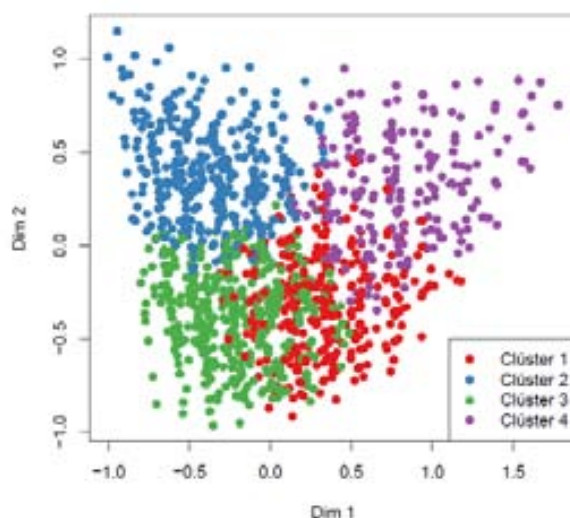


Gráfico 44: Representación de los individuos en 4 clústers



La representación de los diferentes modelos muestra que el modelo representado en la Gráfico 43, con los clústers ajustados a tres centros de gravedad, es el que permite describir un mayor número de grupos que se reconocen como lo máximo de homogéneos internamente y lo máximo de heterogéneos entre sí, manteniendo una elevada varianza intergrupala y una baja varianza intragrupal. La Tabla 34 muestran la composición de cada uno de los clústers incluidos en los diferentes modelos.

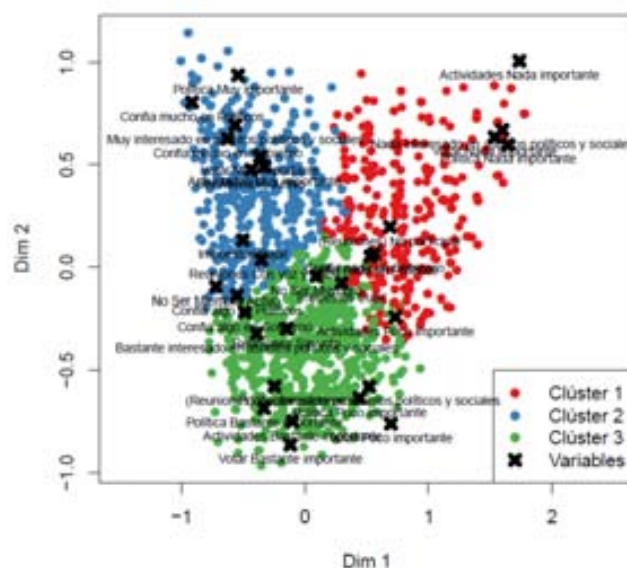
Tabla 34: Composición de los clústers

	Modelo de 2 clústers n (%)	Modelo de 3 clústers n (%)	Modelo de 4 clústers n (%)
<b>Clúster 1</b>	1205 (61,8%)	350 (17,9%)	386 (19,8%)
<b>Clúster 2</b>	745 (38,2%)	708 (36,3%)	652 (33,4%)
<b>Clúster 3</b>	-	892 (45,7%)	630 (32,3%)
<b>Clúster 4</b>	-	-	282 (14,5%)
<b>Total</b>	1950 (100%)	1950 (100%)	1950 (100%)

El Gráfico 45 muestra la representación de los clústers ajustada a tres centros de gravedad, en la que se han incluido las variables del análisis de correspondencias múltiples.



Gráfico 45: Representación de los clústers ajustada a tres centros de gravedad, incluyendo las variables del análisis de correspondencias múltiples



Finalmente, en el Gráfico 46 se representa una tipología formada por los tres clústers que nos permiten clasificar a la población en función de las diferentes variables de competencia cívica. Se observa un gradiente de mayor a menor competencia cívica que sigue un sentido contrario a las agujas de un reloj. En la parte superior izquierda se sitúa un primer grupo formado por 708 individuos (36,3% de la población), del que forman parte aquellos individuos que podemos denominar **“comprometidos”**. Este grupo incluye a aquellas personas que son miembros activos de organizaciones de voluntariado, así como las que consideran muy importante votar en las elecciones, seguir la actualidad política y participar en actividades que beneficien al conjunto de la población. También forman parte de este grupo las personas muy interesadas en asuntos políticos y sociales, las que confían mucho en el gobierno y en los políticos, y aquellas que, en relación a la comisión ciudadana sobre gasto en políticas sociales, desean participar con voz y voto.

En la parte inferior se sitúa un segundo grupo formado por 892 individuos (45,7% de la población), del que forman parte los individuos que podemos denominar **“indefinidos”**. En este grupo el nivel de interés en asuntos políticos y sociales, así como el grado de importancia que se otorga a los valores cívicos (votar en las elecciones, seguir la actualidad política y participar en actividades que benefician a toda la

población), oscila entre “poco” y “bastante”. También podemos incluir en este grupo a aquellas personas que, en relación a la comisión ciudadana sobre gasto en políticas sociales, solamente desean recibir información o participar con voz pero sin voto.

Finalmente, en la parte superior derecha se sitúa un tercer grupo formado por 350 individuos (17,9% de la población), en el que podemos incluir a los individuos denominados “**apáticos**”. Este último grupo incluye a las personas que no consideran nada importantes los valores cívicos (votar en las elecciones, seguir la actualidad política o participar en actividades que beneficien al conjunto de la población), que no se muestran nada interesados en asuntos políticos y sociales, no desean participar en ningún modo en la comisión ciudadana y no confían nada en el gobierno o en los políticos.

Existen una serie de perfiles de difícil ubicación, puesto que se sitúan gráficamente en el espacio que separa a alguno de estos grupos. Estos perfiles corresponden a los miembros no activos y a los no miembros de las organizaciones de voluntariado, así como a las personas que confían algo en el gobierno o en los políticos.

La actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales también merece un comentario adicional. Así, mientras que la actitud favorable a bajar impuestos y disminuir el gasto en políticas sociales se sitúa claramente en el grupo de los “comprometidos”, la actitud contraria (más impuestos y mayor gasto en políticas sociales) está en el espacio que separa a los individuos “indefinidos” de los individuos “apáticos”. Curiosamente, este resultados contrastan con los obtenidos a partir del análisis descriptivo y del análisis de regresión multivariable, que relacionaba la actitud favorable a la subida de impuestos y a incrementar el gasto en políticas sociales, con un mayor grado de competencia cívica. Es probable que las limitaciones de las técnicas utilizadas en este apartado (análisis de correspondencias múltiples y análisis de clústers) –y que explican únicamente un pequeño porcentaje de la varianza total acumulada-, junto al elevado porcentaje de respuestas “No sabe” o “No contesta” que obtiene esta pregunta, contribuyan a explicar esta discrepancia.

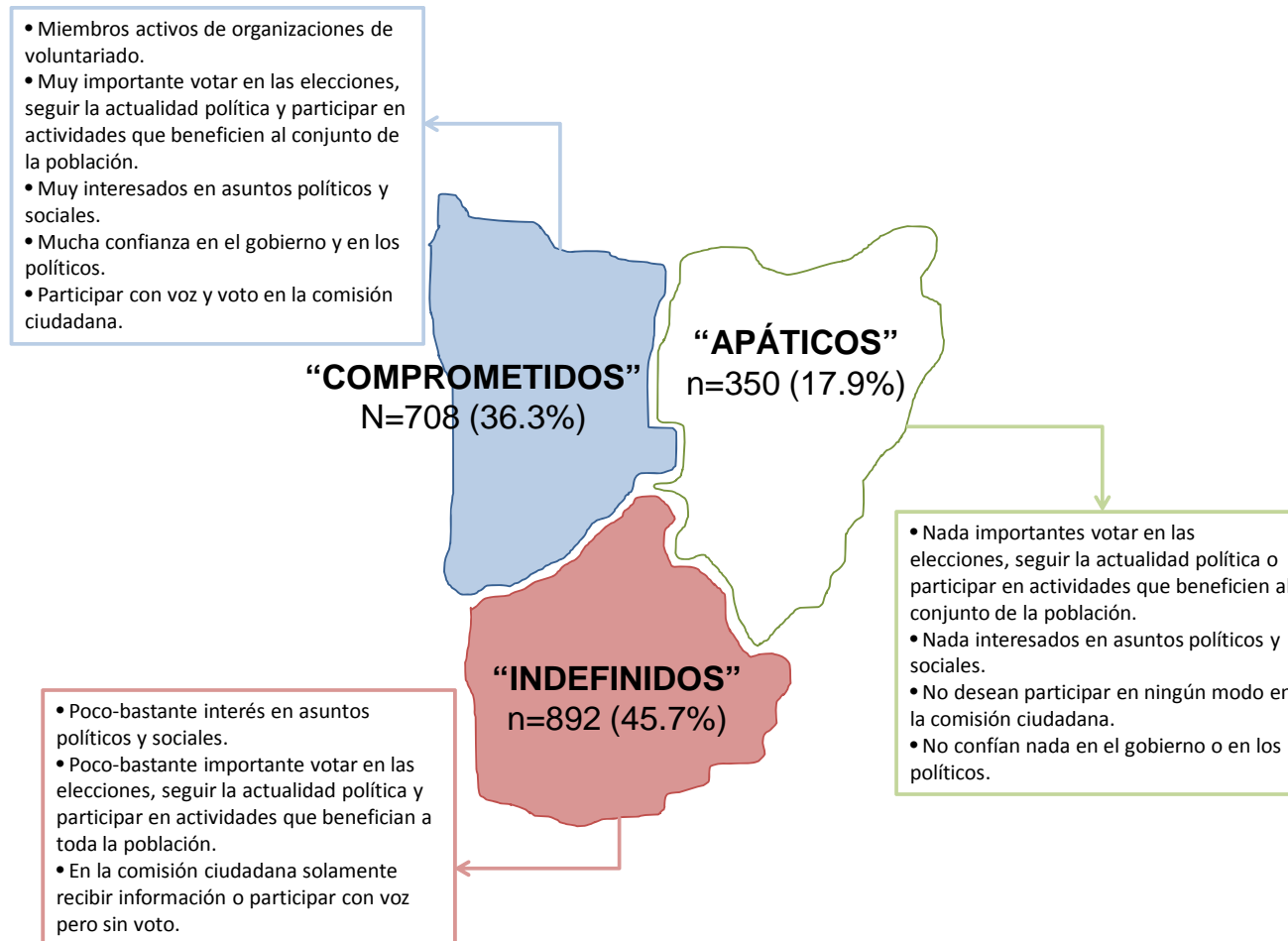
La tabla 35 muestra las características sociodemográficas de cada uno de los grupos para el modelo de 3 clústers. Los datos muestran una mayor proporción de mujeres en

el grupo de “indefinidos” y ligeramente mayor en el grupo de “comprometidos”. La mayor proporción de personas sin estudios o con estudios primarios se observa en el grupo de “apáticos”, mientras que la mayor proporción de personas con estudios universitarios se observa en el grupo de “comprometidos”. En el grupo de “apáticos” también se puede observar una mayor proporción de personas con un estado de salud malo, en comparación con los otros dos grupos. No se observa una tendencia clara en relación a la edad.

Tabla 35: Descripción sociodemográfica de los clústers ajustados a tres centros de gravedad

	Clúster 1 ("Apáticos")		Clúster 2 ("Comprometidos")		Clúster 3 ("Indefinidos")	
	n	%	n	%	n	%
<b>Total</b>	350	100	708	100	892	100
<b>Sexo</b>						
Hombre	181	51,7%	344	48,6%	404	45,3%
Mujer	169	48,3%	364	51,4%	488	54,7%
<b>Edad</b>						
De 18 a 24	26	7,4%	83	11,7%	95	10,7%
De 25 a 34	65	18,6%	112	15,8%	187	21,0%
De 35 a 49	118	33,7%	208	29,4%	279	31,3%
De 50 a 64	71	20,3%	163	23,0%	211	23,7%
Mayor 64	70	20,0%	142	20,1%	120	13,5%
<b>Nivel de estudios</b>						
Sin estudios o primarios	100	28,6%	122	17,2%	155	17,4%
Estudios básicos o secundarios	172	49,1%	317	44,8%	447	50,1%
Estudios universitarios	77	22,0%	266	37,6%	282	31,6%
NS/NC	1	0,3%	3	0,4%	8	0,9%
<b>Estado de salud</b>						
Bueno-muy bueno	294	84,0%	643	90,8%	791	88,7%
Malo-muy malo	53	15,1%	64	9,0%	96	10,8%
NS/NC	3	0,9%	1	0,1%	5	0,6%

Gráfico 46: Tipología de ciudadanos españoles en base a las variables de competencia cívica



## 6. DISCUSIÓN

En esta tesis doctoral se ha pretendido explorar, mediante una serie de dimensiones e indicadores específicos, la relación que existe entre el nivel educativo y el estado de salud, la competencia cívica, y las actitudes y expectativas de futuro hacia el EB. Se han tenido en cuenta además características sociodemográficas como la edad y el sexo. A continuación, se van a discutir los resultados obtenidos con las aportaciones que han realizado otros autores en diferentes estudios.

### 6.1. Influencia del nivel educativo y el estado de salud en la competencia cívica

#### 6.1.1. Las dimensiones de la competencia cívica: comentarios generales

Los resultados de este estudio han mostrado que el nivel de correlación es desigual entre las diferentes variables de competencia cívica. Así, esta correlación es elevada entre algunas variables, pero en cambio es muy baja entre otras. Diferentes estudios sobre el capital social han mostrado que, si bien las variables que lo integran tienden a correlacionar entre sí de manera positiva, el grado de correlación es generalmente bajo (Putnam, 2000; Narayan y Cassidy, 2001; OECD, 2001; Rothstein, 2001). Por su parte, Hoskins ha desarrollado dos indicadores compuestos de competencia cívica, a partir de los estudios CIVED y ICCS, mediante la utilización del coeficiente Alfa de Cronbach para medir la fiabilidad de la escala de medida (Hoskins, Villalba, Van Nijlen, et al, 2008; Hoskins, Villalba y Saisana, 2012).

Los datos obtenidos muestran que, en relación a la **participación en organizaciones de voluntariado**, la proporción de miembros activos es inferior al 10%, menos del 6% de la población son miembros no activos, y la gran mayoría de ciudadanos (casi un 85%) manifiestan no ser miembros. Morales y Mota (2006) han mostrado que los ciudadanos españoles tienen en general un grado de implicación bajo en las asociaciones. Los datos del estudio CIDE muestran que en el año 2002, el 51% de la población española no estaba implicada en ninguna asociación, el 16% está implicada

de manera pasiva y el 33% está implicada de una manera activa. Otro estudio de Rafael Vázquez (2011) con datos del CIS correspondientes al año 2005, muestra que la mayoría de españoles no realizan ningún tipo de actividad específica en las asociaciones, más allá de la mera afiliación.

En relación a los **valores cívicos**, los datos muestran que más de tres cuartas partes (77,2%) de la población consideran que para ser buen ciudadano es importante votar en las elecciones, un 70% considera importante seguir la actualidad política y un 82% considera importante participar en actividades que benefician al conjunto de la población. Un estudio reciente de Jaime Castillo (2009) ha analizado las concepciones empíricas de la ciudadanía en Europa, con el fin de identificar cuáles son los conceptos de “buen ciudadano”. Los resultados de su estudio permiten clasificar los valores cívicos en dos grandes grupos. Así, valores como “formarse una opinión independiente”, “obedecer las leyes” y “votar en las elecciones” son, en este orden, las afirmaciones que obtienen un mayor grado de acuerdo entre los ciudadanos. En cambio, la ciudadanía otorga una menor importancia a valores como “participar activamente en política” y “ser activo en organizaciones voluntarias”. Según el autor, a partir de éstos resultados se desprende que las dimensiones de la ciudadanía a las cuales se atribuye mayor importancia corresponden a los valores cívicos individuales, por encima de los deberes cívicos asociativos que se realizan de forma colectiva. Los datos del estudio publicado por Vázquez (2011) refuerzan esta idea y muestran que la participación pública -ya sea a través de organizaciones voluntarias o de cualquier otra actividad socio-política- se encuentra a la cola de los elementos que conformarían la imagen del buen ciudadano.

La **participación política** se ha medido a través de la participación mediante formas no convencionales y la participación en las elecciones municipales. En relación a la participación política no convencional, un 48% manifiesta estar interesado en participar con voz y voto, un 5% está interesado en participar con voz pero sin voto, un 10% únicamente desea buscar o recibir información, y un 32% no se muestra interesado en participar de ninguna manera. Las respuestas, por lo tanto, están muy polarizadas en la primera y la cuarta opción (participar con voz y voto / no participar

de ninguna manera). Aunque el interés y conocimiento general de los ciudadanos españoles por los mecanismos de participación no convencionales parece haber aumentado durante los últimos años, el estudio anteriormente mencionado de Vázquez (2011) muestra su escaso conocimiento de formas participativas alternativas al margen de los partidos políticos, el voto o la misma participación en asociaciones. De esta manera, la mayor parte de españoles afirma no conocer los jurados ciudadanos (60,9%), los foros de debate y discusión (67,3%), los consejos ciudadanos (82,4%), los planes comunitarios (84,5%) o los presupuestos participativos (87,2%).

En relación a la participación electoral, un 83% afirma haber votado en las elecciones municipales del mes de mayo de 2011. Este porcentaje de voto es muy superior a la participación real en estas mismas elecciones, situada en el 66,2% (MIR, 2011). En los anteriores comicios, celebrados en el año 2007, la participación había sido del 64%. Según distintos autores, la participación electoral en diferentes países europeos ha disminuido durante las últimas décadas (Norris, 2002; Franklin, 2004). Esta tendencia ha sido relacionada con la creciente desconfianza en parlamentos, gobiernos y partidos políticos (Pharr, Putnam y Dalton, 2000).

En relación a la **implicación personal hacia la política**, un 64% de la población manifiesta tener mucho o bastante interés por los asuntos políticos y sociales que afectan al país, mientras que casi un 38% muestra poco o ningún interés. Por otro lado, casi el 60% de ciudadanos se muestra muy o bastante capaz de defender su punto de vista sobre un tema político o social controvertido, mientras que el 37% se considera poco o nada capaz. Estos datos contrastan con los aportados por la Cuarta Encuesta Europea de Valores en España, los cuales muestran una relevancia decreciente de la política en todos los aspectos en la vida de las personas, e indican que el número de personas que manifiestan un alto interés por la política en España está entre los más bajos de Europa y ha disminuido desde 1999 (Bartolomé, 2010; Galais, 2008; Bonet, Martín y Montero, 2006). Otros datos procedente de la misma encuesta señalan que únicamente un 5,4% de los ciudadanos considera la política muy importante en la vida, y casi un 75% considera que es “poco” o “nada” importante, si bien hay que tener en cuenta que la pregunta se realiza en relación a otros temas como la familia o el

trabajo. Éstos últimos autores señalan que únicamente un 20 % de los españoles dice tener interés por la política, y que éste interés no ha sufrido grandes oscilaciones durante el período 1983-2002. Por su parte, y según los datos del barómetro del CIS correspondientes al mes de junio de 2011 (CIS, 2011b), el 24,2% de los ciudadanos están muy-bastante interesados por la política, el 20,3% está algo interesado, y el 55,2% están poco o nada interesados.

Finalmente, los datos relativos a la **confianza institucional** muestran que un 49% de la población confía en que el gobierno tome la decisión correcta para corregir un problema de calidad o seguridad (un 9% de la población confía mucho y 40% confía algo), mientras que el 47% afirma no confiar nada. En anteriores encuestas realizadas por la Fundación Josep Laporte (2006 y 2009), en las cuales se había incluido la misma pregunta, el porcentaje de personas que afirman confiar en el gobierno fue del 54% y del 42%, respectivamente. El nivel de confianza en la clase política es todavía más bajo, en comparación a la confianza en el gobierno. El porcentaje de personas que confía mucho en que los políticos procuran hacer el bien para la sociedad no llega al 4%. En las encuestas realizadas por la Fundación Josep Laporte (2006 y 2009) que incluían esta pregunta, este porcentaje fue del 11% y del 8%, respectivamente.

El bajo nivel de confianza en el gobierno y en los políticos que muestran los resultados de este trabajo siguen una tendencia similar a la de otros estudios. Así, Bonet, Martín y Montero (2006) muestran que en España los niveles de confianza en los partidos políticos y en los políticos son especialmente bajos, en comparación con otros países europeos. Menos de una quinta parte de la población española parece confiar en los partidos, y un porcentaje aún menor parece confiar en los políticos. Por su parte, los datos de la Cuarta Encuesta de Valores en su aplicación a España muestran que, en general, la confianza en las instituciones políticas es escasa (Bartolomé, 2010). Sólo un 5,5% de la población española tiene mucha confianza en el parlamento, y un 10% no tiene ninguna confianza. En cuanto a la confianza en el gobierno, un 32% afirma confiar bastante o mucho –sólo el 4,7% confía mucho-, y el 62% muestra poca o ninguna confianza –el 20% no confía nada-. Finalmente, los partidos políticos son una de las instituciones que gozan de menor confianza por parte de los ciudadanos. El



porcentaje de personas que confían mucho no llega al 2%, y solamente el 15% afirma tener bastante confianza. Prácticamente el 80% confía poco o nada en los partidos políticos –más del 30% no muestra ninguna confianza-.

Los datos ofrecidos por los barómetros del CIS también muestran el bajo nivel de confianza en la política, tanto para las fechas en las que fue realizada la encuesta del presente estudio (junio-julio 2011) como en el más reciente (mayo 2012). Así, el tercer mayor problema que existe en España, según los ciudadanos, son la clase política y los partidos políticos, solamente por detrás del paro y de los problemas de índole económica (CIS, 2011b y 2011c; CIS, 2012a). Y según el barómetro correspondiente al mes de junio de 2011, el 85,6% de los ciudadanos consideran que la corrupción política está muy o bastante extendida, siendo la sanidad y la educación los ámbitos en los que los ciudadanos creen que está menos extendida.

### **6.1.2. Influencia del nivel educativo**

En esta tesis doctoral se ha utilizado el nivel educativo como indicador del nivel socioeconómico, en lugar de la variable correspondiente al nivel de ingresos anuales brutos en el hogar. Esto es debido a tres motivos principales. En primer lugar, la proporción de respuestas “No sabe” o “No contesta” en la pregunta sobre el nivel de ingresos es del 46%. Esto implicaría, en el caso de utilizar los datos correspondientes a esta pregunta, una pérdida de prácticamente la mitad de la muestra de cara al posterior análisis. En segundo lugar, el nivel educativo ha sido utilizado como indicador del estatus socioeconómico en diferentes estudios relacionados con el capital social (Sundquist y Yang, 2007). Y finalmente, ambas variables muestran un nivel de correlación significativo (coeficiente de correlación de Spearman=0,5), lo cual puede producir un posible efecto de colinealidad. Ello podría dificultar la estimación o producir estimaciones imprecisas en la influencia separada del nivel educativo y del nivel de ingresos. Por ello, en el presente se ha excluido el nivel de ingresos económicos como variable independiente. La exclusión de variables independientes del modelo es una de las estrategias que se deben considerar para solucionar los problemas de multicolinealidad (Jovell 2006b).

Este estudio ha mostrado que el nivel de estudios está correlacionado con todas las dimensiones de competencia cívica analizadas. En comparación a las personas sin estudios o con estudios primarios, las personas con un mayor nivel educativo muestran una participación más activa en organizaciones de voluntariado, otorgan más importancia a los valores cívicos, muestran mayor interés en temas políticos y sociales, y mayor eficacia política, están más interesados en la participación política mediante formas no convencionales, participan más en las elecciones, y muestran más confianza en el gobierno y en los políticos.

Numerosos estudios realizados en el ámbito de la literatura sobre ciencias políticas y sociales muestran una evidente relación entre el nivel educativo de los individuos y diferentes formas de competencia cívica (Converse, 1972; Marsh y Kaase, 1979; Nie, Junn y Stehlik-Barry, 1996; Putnam, 1993 y 2000). Así, los resultados de diferentes trabajos desarrollados durante los últimos 40 años muestran un efecto positivo del nivel educativo en aspectos como la participación electoral (Dee, 2003; Milligan, 2003; Campbell, 2006), la actitud y la competencia cívica (Almond y Verba, 1963), el conocimiento político (Milligan et al, 2003; Gronlund y Milner, 2006), o la participación en la vida asociativa y comunitaria (Putnam, 2000:186; Dee, 2003; Campbell, 2006).

Almond y Verba (1963) se refieren también al nivel educativo como la variable sociodemográfica que tiene una mayor influencia sobre las actitudes de la población hacia la política. Algunos investigadores (Wolfinger y Rosenstone, 1980; Nie y Hillygius, 2001) han mostrado que ésta influencia del nivel educativo se mantiene cuando se controlan variables relacionadas con el trabajo o con los ingresos, mediante modelos de regresión multivariable. En una línea similar, Caínzos (2010) ha mostrado que la relación positiva entre nivel de estudios y participación atraviesa todas las formas de acción política y se pone de manifiesto de manera particularmente clara cuando se controlan los efectos de la clase social, la edad y el sexo. También Hoskins y D'Hombres (2008) señalan que el nivel educativo, especialmente más allá del nivel secundario, promueve el compromiso cívico, y que ésta relación se mantiene cuando se controlan diferentes variables como el número de personas en el hogar, el estado civil, y los ingresos económicos para el conjunto familiar. Estos autores concluyen en

su investigación que el nivel educativo tiene una relación causal y directa sobre la competencia cívica.

Por su parte, Jaime Castillo (2009) ha mostrado, en su estudio sobre actitudes cívicas en Europa, que aquellas personas con un mayor nivel educativo también manifiestan un mayor grado de compromiso normativo y comunitario (Jaime Castillo, 2009). En cambio, Letki (2003) no ha encontrado diferencias en lo que se refiere a la adhesión a normas sociales, en función del nivel educativo.

La relación entre el nivel educativo y el capital social ha sido apuntada por Van Oorschot y Finsveen (2010). Otros autores muestran que, independientemente del nivel de ingresos, las personas con un mayor nivel educativo participan más en la vida asociativa, están más implicadas en actividades de voluntariado (Hodgkinson and Weitzman, 1996; Brehm y Rahn, 1997; Wilson y Musick, 1998), y muestran un mayor nivel de confianza social (Newton, 1999).

Siedler (2007) también ha mostrado una asociación positiva entre el nivel educativo y diferentes indicadores de compromiso cívico, si bien coincide con Dee (2003) en la dificultad de establecer una relación causal, debido al efecto de variables relacionadas con las características individuales o familiares que afectan de manera simultánea tanto al nivel educativo como al compromiso cívico. Miligan et al (2004) en el Reino Unido, y Touya (2006) en España llegan a una conclusión similar.

En el caso de España, y en lo que respecta al asociacionismo, Morales, Mota y Pérez-Nievas (2006) sugieren que a mayor nivel educativo, mayor tendencia a estar implicado en alguna asociación, a colaborar con un número mayor de asociaciones y a implicarse de manera más activa en las mismas. No obstante, estos autores también han señalado que la influencia de los recursos educativos sería desigual en función del tipo de asociación. Así, el nivel educativo sería más importante y determinante para la colaboración en asociaciones recreativas y de perfil político-institucional, en comparación con el resto de asociaciones.

Por su parte, Ferrer, Medina y Torcal (2006) señalan que a excepción del voto – considerada la actividad que implica menos costes y recursos individuales-, el resto de

formas de participación política están relacionadas con los ingresos económicos y con el nivel educativo. Es decir, a mayor disposición de recursos individuales en términos de educación y de ingresos, mayor predisposición a participar en actividades políticas no electorales. Finalmente, la Cuarta Encuesta Europea de Valores, en su aplicación a España, muestra que no existe una relación clara entre el nivel de estudios y el nivel de confianza en el gobierno (Narvaiza, 2010).

### **6.1.3. Influencia del estado de salud**

Este estudio también ha mostrado que el estado de salud está asociado a seis de las diez variables de competencia cívica analizadas. Así, en comparación a aquellas que tienen un estado de salud malo, las personas con un buen estado de salud consideran más importante votar en las elecciones y seguir la actualidad política, manifiestan un mayor interés por los asuntos políticos y sociales, votan más en las elecciones, y confían en el gobierno y los políticos. En cambio, no se ha encontrado una relación para el resto de variables de competencia cívica: participación activa en organizaciones de voluntariado, importancia otorgada a la participación en actividades que benefician al conjunto de la población, participación política no convencional y eficacia política interna.

Tal y como se ha comentado, la percepción del estado de salud es una variable ampliamente utilizada en la literatura y ha mostrado ser un buen indicador del estado de salud. Sin embargo, la mayor parte de estudios que han analizado la relación entre algunas variables de competencia cívica y estado de salud han utilizado éste último como variable dependiente.

Diferentes autores han mostrado una correlación entre algunos indicadores de capital social y el estado de salud (Kawachi, Kennedy y Glass, 1999; Rose, 2000; Blakely, Kennedy y Kawachi, 2001; Subramanian, Kawachi y Kennedy, 2001; Subramanian, Kim y Kawachi, 2002; Veenstra, 2002; Carlson, 2004; Lindstrom, 2004). Blakely, Kennedy y Kawachi (2001) muestran que las desigualdades en la participación política están asociadas a un peor estado de salud autopercibido, y sugieren como posible explicación que éstas desigualdades ejercerían un sesgo hacia las políticas que se

aplican con posterioridad. Por su parte, Poortinga (2006a, 2006b y 2006c) encontró una asociación entre la confianza social y el estado de salud autopercebido en un estudio realizado en Inglaterra, pero no entre asociacionismo y estado de salud. En cambio, éste último autor, en otro estudio comparativo posterior de ámbito europeo, no encontró ninguna asociación entre el estado de salud y las dos dimensiones analizadas del capital social (la confianza social y el asociacionismo). En cambio, Kawachi, Kennedy y Glass (1999) sí encontraron esta asociación tanto para la confianza social como para la participación.

Ahnquist, Wamala y Lindstrom (2012) han mostrado que un bajo nivel de capital social, medido a través de la participación en actividades sociales, la confianza interpersonal y la confianza institucional, está asociado a un peor estado de salud autopercebido. Kim, Subramanian y Kawachi (2006) muestran que tanto el capital social de vínculo como el capital social de puente, también están relacionados con el estado de salud autopercebido. Estos resultados contrastan con los de Kavanagh, Turrell y Subramanian (2006), que no encontraron ningún efecto de la confianza social o la confianza institucional. Finalmente, un estudio de Engström, Mattsson, Järleborg et al (2008) muestra que la asociación entre el capital social y el estado de salud disminuye a medida que se aplican variables de control.

Una buena parte de los estudios mencionados sugieren una relación causal entre el capital social y el estado de salud. La posibilidad de que exista una relación inversa ha sido señalada por Ahnquist, Wamala y Lindstrom (2012). De esta manera, las personas con un mejor estado de salud tendrían más posibilidades de obtener mayores ingresos y de participar en actividades sociales. Por contra, una persona enferma dispondría de menores recursos económicos y sufriría un mayor aislamiento social, precisamente porque la enfermedad limita su capacidad para participar en actividades comunitarias.

#### **6.1.4. Influencia de las características sociodemográficas**

##### *Influencia de la edad*

Esta investigación ha mostrado que la edad está asociada a seis de las variables de competencia cívica analizadas. En comparación al grupo de edad 18-24 años, las

personas de 25 a 34 años son los que menos importancia otorgan a seguir la actualidad política y los que menos confían en los políticos. A partir de los 35 años aumenta la participación en las elecciones municipales, y las personas mayores de 64 años consideran más importante votar en las elecciones y votan más en las elecciones municipales. En cambio, están menos interesados en la participación política no convencional. Los datos de este estudio muestran que la relación entre edad y competencia cívica no es lineal y varía en función de la variable analizada. Se observa que a medida que aumenta la edad, las personas son más favorables a mecanismos tradicionales de participación.

Algunos autores afirman que la edad es uno de los elementos que determina en mayor grado aspectos relacionados con la beneficiencia o la participación en organizaciones de voluntariado, aunque esta relación está en función del tipo de participación (Lane, 1959; Verba, Nie y Kim, 1978; Barnes, Kaase et al, 1979; Parry, Moyser y Day, 1992; Burns, Schlozman y Verba, 2001; Dalton, 2002). Algunos autores han señalado que los jóvenes españoles destacan, respecto a colectivos de mayor edad y a los jóvenes de otros países, por sus altos niveles de abstención y su baja tendencia a implicarse en asociaciones (Anduiza, 2001; Morales, 2003).

Nuestro estudio no ha encontrado una relación entre la edad y la participación activa en organizaciones de voluntariado, o bien en la importancia otorgada a la participación en actividades que benefician al conjunto de la población. Los datos aportados por la literatura muestran que la relación entre edad y participación en asociaciones puede variar mucho en función del tipo de asociación y del contexto. Por ejemplo, Morales, Mota y Pérez-Nievas (2006) muestran que las personas de mediana edad tienen niveles más elevados de participación en asociaciones, y son los más jóvenes o los más ancianos quienes menos participan. Este hecho se produce en casi todas las formas de colaboración asociativa, excepto en lo que se refiere a la realización de trabajo voluntario y a la implicación en asociaciones recreativas, donde la participación es mayor entre los más jóvenes. Éste último colectivo muestran una creciente predisposición a realizar trabajo voluntario hasta los 30-40 años, y pasada esta edad la dedicación disminuye, de manera que en los ancianos es mucho menor que en los

adolescentes. En cambio, los mayores de 65 años destacan por su implicación en asociaciones de servicios a colectivos, y en menor medida, en las de orientación social, pero al mismo tiempo son los menos implicados prácticamente en el resto de formas de colaboración asociativa.

En el caso de la donación de dinero, el nivel máximo de colaboración se produce en edades mucho más avanzadas (50-65 años) y se mantiene después entre los ancianos en niveles sustancialmente mayores a los de los más jóvenes (Morales, Mota y Pérez-Nievas, 2006). Por lo tanto, la edad afecta a la manera en cómo se participa en la comunidad y en la vida asociativa. Esta misma tendencia se ha encontrado en otros estudios (Verba y Nie, 1972; Verba, Nie y Kim, 1978) y se ha explicado por aspectos relacionados con el ciclo vital de las personas. Los resultados están en línea con los presentados por Jennings y Markus (1988), que muestran que las personas más ancianas se van alejando progresivamente de las formas de participación más activas, pero no necesariamente de toda participación en los asuntos públicos, y su nivel de implicación no es menor cuando se realiza a través de donativos.

Por otro lado, algunos autores han señalado que con la edad aumenta la participación a través de formas más convencionales como el voto. El hecho de que las personas de mayor edad voten más es coherente con los resultados de la literatura clásica sobre participación electoral (Lane, 1959; Campbell, Converse y Miller, 1960; Verba, Nie y Kim, 1978). La edad parece ejercer, en cambio, un efecto desmovilizador en aquellas formas no convencionales de participación, o aquellas que requieren unos elevados costes físicos, como las actividades de protesta, la participación de consumo y la realización de contactos con políticos y redes (Ferrer, Medina y Torcal, 2006). En este sentido, Christoforou afirma que aunque la relación entre la edad y el capital social no es lineal, existe una tendencia a que la gente mayor muestre más adhesión a las normas sociales (Letki, 2003; Van Oorschot y Arts, 2005).

El presente estudio ha mostrado que el grupo de edad 50-64 años es el más interesado en temas políticos y sociales. Galais (2012) ha señalado que el porcentaje de jóvenes españoles muy o bastante interesados es muy escaso. Los jóvenes se sienten más ajenos a los procesos políticos que los ciudadanos adultos, mientras que éstos últimos

se sentirían más integrados en la sociedad y más vinculados a las normas y restricciones propias de su situación. Sin embargo, en el caso de las personas mayores, Galais (2012) argumenta que su interés por la política decrece nuevamente debido al momento del ciclo vital en el que se encuentran. Por lo tanto, la edad mantiene una relación con el interés por la política que tiene un punto de inflexión en la edad madura. Por su parte, los datos de la Cuarta Encuesta Europea de Valores muestran que los grupos de edad 18-24 años, 25-34 años y 45-54 años consideran mayoritariamente a la política como “no muy importante”, mientras que en el grupo de 35-44 años, así como a partir de los 55 años, la respuesta dominante es “nada importante”. Finalmente, Galais (2012) también ha señalado que la “apatía política” que tradicionalmente se atribuye a la generación actual de jóvenes españoles puede ser debida a que se les compara de manera habitual con la generación anterior -los actuales adultos de 50 años-, que vivieron la fase más mobilizadora de la transición post-franquismo, lo cual posibilitó unos niveles de interés y compromiso político excepcionales.

### *Influencia del género*

En relación al género, los datos han mostrado que el género está asociado a cinco de las variables de competencia cívica analizadas. En comparación a las mujeres, los hombres consideran menos importante votar en las elecciones y participar en actividades que benefician al conjunto de la población. En cambio, muestran mayor interés en los asuntos políticos y sociales, en la participación política no convencional y manifiestan una mayor eficacia política interna. No se ha encontrado una relación entre el género y la participación activa en organizaciones de voluntariado, la importancia otorgada al seguimiento de la actualidad política, la participación en las elecciones municipales y la confianza institucional.

Estos datos son concordantes con los aportados por otros investigadores. Algunos estudios indican que en la mayoría de países europeos, las diferencias en el nivel de asociacionismo entre hombres y mujeres son poco significativas (Morales, 2006). En relación a los elementos que configuran la imagen del buen ciudadano, Vázquez (2011) ha mostrado que excepto en la adopción de posturas críticas hacia el sistema político y



económico, en el resto de casos (ayudar a las personas que se encuentran en peor situación, votar en las elecciones, no evadir impuestos, participar en organizaciones y asociaciones, y cumplir con las leyes y normas) las mujeres les otorgan una mayor importancia que los hombres. Éste último autor también señala que el conocimiento que los hombres afirman tener sobre mecanismos de participación política no convencionales es mayor respecto a las mujeres.

Otros autores como señalan que el género está asociado a una participación desigual en los asuntos públicos (Morales, Mota y Pérez-Nievas, 2006). Así, los hombres tienden a ser más participativos respecto a las mujeres (Welch, 1977; Verba, Nie y Kim, 1978), aunque estas diferencias se han reducido cada vez más debido a la progresiva incorporación de la mujer al trabajo y al incremento de su nivel educativo (Parry, Moyser y Day, 1992; Schlozman, Burns, Verba et al, 1995; Burns, Schlozman y Verba, 2001). Una buena parte de estos mismos estudios sugieren que las diferencias no son significativas en la actualidad en aspectos como la participación electoral.

Por otra parte, los datos de la cuarta Encuesta Europea de Valores muestran que –en concordancia con nuestros resultados– los hombres manifiestan un mayor interés por la política y tienden a considerarla, en comparación con las mujeres, más importante (Bartolomé, 2010). Por su parte, Christoforou (2004) sugiere que los hombres tienden a estar más implicados en redes sociales formales, así como a mostrar más confianza social. Las mujeres, en cambio, tienden en mayor medida a participar en redes sociales informales y a mostrar mayor adhesión a las normas sociales y a los valores cívicos compartidos (Moore, 1990). La falta de tradición participativa de la mujer en la vida pública ha sido la hipótesis establecida por Vázquez (2011) para explicar esta diferencia de comportamiento en función del género.

## **6.2. Actitudes hacia el Estado del Bienestar**

### **6.2.1. Actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales**

Los datos de esta investigación han mostrado que prácticamente la mitad de la ciudadanía es más partidaria de una reducción impositiva ligada a una disminución del

gasto en políticas sociales, mientras que una cuarta parte es más favorable a un aumento de los impuestos y del gasto en políticas sociales. El 25% restante no se posiciona respecto a esta cuestión.

Según la Encuesta de Opinión Pública y Política Fiscal (CIS, 2011a), realizada en el mes de julio de 2011 –en el mismo período que la encuesta del presente estudio–, cuando se pregunta la opinión sobre “más impuestos y mejora de los servicios públicos y de las prestaciones sociales” o “menos impuestos y reducción de los servicios públicos y de las prestaciones sociales”, la mayoría de ciudadanos (51,4%) se sitúan en una posición intermedia (entre 4-6, en una escala de 0 a 10). Entre el resto de ciudadanos, se observa una proporción ligeramente superior (23,5%) de ciudadanos que prefieren más impuestos y aumentar el gasto social, en comparación con los que prefieren menos impuestos y reducir el gasto social (18%).

Otros datos de un reciente estudio realizado por el Gabinete de Estudios Sociales y Opinión Pública (GESOP, 2011) mediante entrevistas a 1.000 ciudadanos españoles durante el mes de septiembre de 2011, muestra que ante la dicotomía impuestos o recortes para equilibrar los presupuestos públicos, un 61% opta por disminuir el gasto público, mientras que un 23% prefiere subir la presión fiscal, un 7,5% opta por las dos opciones anteriores aplicadas de manera conjunta y un 8% no se posiciona.

Diversos trabajos que han analizado las encuestas desarrolladas por el CIS entre 1989 y 2005 muestran que los ciudadanos españoles apoyan un Estado del Bienestar extenso e intensivo (Arriba, Calzada y Del Pino, 2006; Calzada, 2007), y que la mayoría de españoles son partidarios de pagar más impuestos para garantizar los servicios proporcionados por el Estado. Calzada (2001), utilizando datos del *International Social Survey Programme* correspondiente al año 1996, muestra que un 42,9% de los españoles (frente a un 33,2%) elegirían aumentar los servicios públicos y prestaciones sociales, y considerando únicamente a los que opinan sobre el tema (quitando a los NS/NC) las diferencias son aún mayores. Y en un estudio anterior, Alvira y García (1984) señalan que la mayoría de ciudadanos españoles, ante la disyuntiva de gastar más, menos o lo mismo en algunos servicios públicos, se mostraba partidaria de un

aumento. Sin embargo, estas preferencias descendían radicalmente cuando se introducía la posibilidad de pagar más impuestos para financiar estos servicios.

La serie de estudios realizados por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF, 2011) muestra que entre los ciudadanos españoles predomina la idea de que se recibe poco en relación con lo que se paga en impuestos. Es decir, que el esfuerzo tributario es superior a lo que se recibe vía capítulos de gasto del presupuesto público. En esta línea, la Encuesta de Opinión Pública y Política Fiscal (CIS, 2011a), muestra que la mayoría de ciudadanos (53,9%) creen que los impuestos son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos. Sin embargo, una proporción relevante (34,2%) cree que los impuestos son algo que el Estado obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué. Asimismo, la mayoría de ciudadanos (61,5%) consideran que –teniendo en cuenta los servicios públicos y prestaciones sociales existentes– la sociedad se beneficia poco o nada de lo que se paga al Estado en impuestos y cotizaciones, y el 59,1% de ciudadanos creen que el Estado les da menos de lo que paga en impuestos y cotizaciones. Otros datos del mismo estudio señalan que más de la mitad de ciudadanos (54,5%) cree que en España se paga mucho en impuestos, y un 82,8% no creen que los impuestos se cobren con justicia, es decir, que no paga más quien más tiene. Finalmente, un 84,1% cree que en España existe mucho o bastante fraude fiscal. En este sentido, Díez (1998) argumenta que una de las características de las actitudes hacia el sistema fiscal español es la amplia percepción de fraude y mal funcionamiento.

Por su parte, Alvira, García y Delgado (2000) consideran que esta desconexión entre el beneficio individual de los servicios públicos y el sacrificio necesario mediante el pago de impuestos ha contribuido, junto al incremento de la desconfianza institucional, a un balance personal negativo del sistema fiscal.

Los resultados de este estudio han mostrado que la competencia cívica está asociada a la actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales en 9 de las 10 variables analizadas. Así, son favorables a que el gobierno suba impuestos y aumente el gasto en políticas sociales las personas que consideran importantes los valores cívicos, las personas interesadas en la participación política no convencional y que votan más en

las elecciones municipales, las personas con interés y eficacia política, y las personas que confían en el gobierno y en los políticos. No se ha observado, en cambio, una relación con la participación en organizaciones de voluntariado. Estos datos se han obtenido con las variables sexo, edad, nivel educativo y estado de salud controladas.

Los datos de estudio muestran también que todas las variables determinantes y de control (género, edad, nivel de estudios y estado de salud), están asociadas a la actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales. Así, en comparación a las personas sin estudios o con estudios primarios, las personas con un nivel educativo más elevado manifiestan una mayor preferencia hacia una subida impositiva y un incremento del gasto social. También son más favorables a que el gobierno suba impuestos y aumente el gasto social las personas con un buen estado de salud, los hombres y los grupos de edad a partir de los 35 años -en comparación al grupo de edad 18-24 años-.

Calzada (2011) ha estudiado la relación entre el interés y conocimiento de la ciudadanía sobre temas políticos y su opinión sobre aspectos relacionados con la financiación de servicios públicos de bienestar. Los datos de su estudio muestran que las personas con un elevado nivel de información e interés en asuntos políticos son más favorables a un aumento de la fiscalidad que permita un desarrollo más amplio de políticas sociales. Esta relación se observa incluso cuándo se controlan diferentes variables como la edad, el género, la educación y el nivel de ingresos de la unidad familiar.

Por otro lado, diversos autores han analizado la importancia de la confianza institucional en el apoyo de los ciudadanos hacia el EB (Steinmo, 1994; Rothstein, 1998; Rose 1991; Rothstein y Steinmo, 2002). Estos autores señalan como hipótesis que las personas que confían en las instituciones serían partidarias de un aumento del gasto social, mientras que las personas que no confían serían más favorables a su reducción. Svallfors (2011) ha aportado datos empíricos que apoyan esta hipótesis.

Calzada (2011) también señala que la inclusión de referencias específicas a aspectos económicos en preguntas relacionados con la actitud hacia el EB, tiene como consecuencia un incremento significativo en el porcentaje de respuestas “No Sabe” o “No Contesta” por parte de personas con un nivel bajo de información o interés en

asuntos políticos. Las encuestas del Instituto de Estudios Fiscales (IEF, 2011) también muestran que existe una proporción significativa de ciudadanos que no contestan cuando se realizan preguntas sobre impuestos. En este sentido, Alvira, García y Delgado (2000) han mostrado que la proporción de personas que habla poco o nada de la relación entre servicios públicos e impuestos pagados disminuye a medida que aumenta el nivel educativo.

Saunders (2010) afirma que, en comparación a los programas selectivos, los programas sociales de carácter universal reciben un mayor apoyo político por parte de la ciudadanía, por el hecho de que los beneficios están repartidos más ampliamente en la población. Esta opinión es compartida por Svallfors, quien señala que éstos programas de carácter universal son apoyados por amplios colectivos que incluyen la clase media y personas con un elevado nivel educativo (Svallfors, 1997).

Por su parte, los trabajos de Arriba, Calzada y Del Pino (2006) sobre las actitudes de la ciudadanía entre 1985 y 2005 muestran que la opinión sobre la intensidad del EB está en función de su posición ideológica y de su nivel de estudios, de manera que son más favorables al intervencionismo estatal las personas que se consideran de izquierdas y aquellas con un mayor nivel educativo. El nivel educativo muestra además un efecto lineal en la ecuación impuestos-servicios, de manera que a medida que se eleva el nivel educativo es mayor la proporción de personas que prefieren pagar más impuestos si ello implica un aumento del gasto en prestaciones y servicios públicos. Estos resultados están en línea con los datos obtenidos en el presente estudio.

Por su parte, Calzada (2007) ha señalado que las personas más jóvenes, correspondiente al grupo 18-29 años, son los más favorables a la intervención estatal en la provisión de servicios de bienestar. Finalmente, el estudio del GESOP (2011) mencionado anteriormente muestra que los jóvenes y las personas con menos estudios son los más contrarios a los recortes.

### **6.2.2. Expectativas de futuro hacia el Estado del Bienestar**

Los datos del presente estudio han mostrado que más de un tercio de la ciudadanía (35%) cree que su bienestar personal será peor en el futuro, un tercio cree que será

más o menos igual, y una cuarta parte considera que será mejor. Los ciudadanos son todavía más pesimistas en relación a la percepción de riesgo. Un 53% considera que la vida de sus hijos será menos segura en el futuro, comparada con la actual; un 19% que será igual de segura, y un 20% que será más segura.

Según el barómetro del CIS realizado en julio de 2011 (coincidiendo con las fechas de realización de la encuesta del presente estudio), el 18,2% de ciudadanos considera que su situación económica personal dentro de un año será mejor, un 58,8% cree que será igual y un 13,1% cree que será peor (CIS, 2011c). En el barómetro más reciente (mayo 2012), los ciudadanos se muestran todavía más pesimistas: el 16,9% de ciudadanos considera que su situación económica personal dentro de un año será mejor, un 50,8% cree que será igual y un 22,7% cree que será peor (CIS, 2012a). Por su parte, el último Índice de Confianza del Consumidor (CIS, 2012b), correspondiente también al mes de mayo de 2012, muestra que el 15,4% de los ciudadanos creen que la situación económica de su familia será mejor dentro de 6 meses, el 42,1% cree que será igual y el 34,5% cree que será peor.

Mau, Mewes y Schöneck (2012) han analizado, utilizando datos del módulo “Welfare attitudes in a changing Europe” correspondiente a la cuarta ronda de la Encuesta Social Europea, la percepción subjetiva de riesgo y el temor a la pérdida de seguridad en el puesto de trabajo, de bienestar material y de la provisión de atención sanitaria. Los resultados de sus estudios muestran que, en el caso de España, un 30% de la población considera probable que durante los próximos 12 meses esté en situación de desempleo durante al menos cuatro semanas consecutivas, un 29% de la población cree que habrá algunos períodos de tiempo en los que no dispondrá de suficiente dinero para cubrir todas las necesidades del hogar, y el 5% cree que no recibirá la asistencia sanitaria que necesite en el caso de encontrarse enfermo.

Los datos de esta investigación han mostrado que la competencia cívica está asociada a la percepción de inseguridad socioeconómica en el futuro en 7 de las 10 variables analizadas. Así, creen que su bienestar personal será peor en el futuro los miembros no activos o no miembros de organizaciones de voluntariado, las personas que no consideran importante votar en las elecciones ni participar en actividades que

benefician a toda la población, las personas no interesadas en la participación política no convencional, con una baja eficacia política interna, y las que no confían nada en el gobierno ni en los políticos. Por otro lado, la competencia cívica está asociada a la percepción de riesgo en el futuro en 5 de las 10 variables de competencia cívica analizadas. Así, creen que la vida de sus hijos será menos segura en el futuro, comparada con la actual, las personas que no consideran importante votar en las elecciones ni seguir la actualidad política, las no interesadas en la participación política no convencional, y las que confían algo o nada en el gobierno y en los políticos -en comparación con las personas que afirman confiar mucho-.

Por lo tanto, la relación entre competencia cívica y las expectativas de futuro hacia el EB va cambiando en función de las variables de análisis consideradas. Las únicas variables de competencia cívica asociadas a ambos indicadores relacionados con las expectativas de futuro hacia el EB son la importancia otorgada al voto, la participación política no convencional y la confianza institucional. Las personas que no confían en el gobierno ni en los políticos tienen peores expectativas, tanto en relación a la percepción de inseguridad socioeconómica, como a la percepción de riesgo en el futuro. Estos datos se han obtenido con las variables sexo, edad, nivel educativo y estado de salud controladas.

Los datos de este estudio muestran que el género, la edad y el estado de salud están asociados a las expectativas de futuro hacia el EB. No se ha encontrado ninguna relación, en cambio, con el nivel educativo. Así, las personas con un estado de salud malo y todos los grupos de edad a partir de los 35 años –en comparación al grupo de edad 18-24 años- creen que su bienestar personal será peor en el futuro, y que la vida de sus hijos será menos segura comparada con la actual. En relación a la percepción de riesgo, las mujeres se muestran más pesimistas que los hombres.

No se han encontrado estudios en la literatura que hayan estudiado la relación entre diferentes variables de competencia cívica y las expectativas de futuro hacia el EB. En relación a la influencia de las características sociodemográficas, algunos autores han establecido una clara relación entre el nivel educativo y la inseguridad, de manera que las personas con un mayor nivel educativo accederían a puestos de trabajo de mayor

seguridad y remuneración, lo cual se traduce en una menor percepción de inseguridad (Näswall y De Witte, 2003; Maurin y Postel-Vinay, 2005; Green, 2009). Diferentes estudios han mostrado que las desigualdades sociales están ampliamente correlacionadas con la percepción de inseguridad (Anderson, Mikulic', Vermeulen, et al, 2009; Wilkinson y Pickett, 2009). Mau, Mewes y Schöneck (2012), en cambio, no han encontrado una relación entre la percepción de inseguridad socioeconómica y factores como la desigualdad de ingresos o la tasa de desempleo, pero sí una correlación con el nivel educativo.

En relación a la edad, algunos investigadores sugieren una correlación positiva entre la edad y la inseguridad (Osberg, 1998; Erlinghagen, 2008; Green, 2009). En cambio, otros autores han señalado que las personas más jóvenes se enfrentan a mayores y distintas inseguridades en el futuro (Blossfeld, Buchholz, Hofäcker et al, 2007). Y, por su parte, Fullertor y Wallace (2007) han señalado un relación no lineal entre edad e inseguridad, de manera que los valores más elevados de inseguridad se observarían en personas de mediana edad. Mau, Mewes y Schöneck (2012) también señalan la inexistencia de una relación lineal entre edad e inseguridad, si bien afirma que el grupo de 56 a 65 años es el que muestra una mayor percepción de inseguridad socioeconómica, en comparación al grupo de 15 a 25 años.

En el caso del género, Green (2009) ha señalado que las mujeres tienen una mayor percepción de inseguridad socioeconómica en comparación a los hombres, y lo atribuye a las desigualdades de género relacionadas con el acceso y las condiciones del mercado laboral. En cambio, Mau, Mewes y Schöneck (2012) no han encontrado tales diferencias.

### **6.3. Una tipología de ciudadanos españoles en base a su competencia cívica**

En este estudio se ha propuesto una tipología de ciudadanos integrada por tres grupos o "clústers". Los resultados muestran un gradiente en el nivel de competencia cívica de la ciudadanía española, medido a través de una serie de indicadores relacionados con la participación en organizaciones de voluntariado, los valores cívicos, la participación



política, la implicación personal hacia la política y la confianza institucional. Este gradiente ha permitido distinguir un grupo de ciudadanos “comprometidos” -que muestran un mayor nivel de competencia cívica-, y un grupo de “apáticos” –éstos últimos con el nivel más bajo de competencia cívica-. Se identifica también un grupo de ciudadanos “indefinidos” que se sitúa en un espacio intermedio entre los dos anteriores. Este gradiente tiene un sentido contrario al movimiento de las agujas de un reloj. Asimismo, permite observar una mayor proporción de personas sin estudios o con estudios primarios, y de personas con un estado de salud malo, dentro del grupo de “apáticos”, mientras que la mayor proporción de personas con estudios universitarios se observa en el grupo de “comprometidos”.

Diferentes autores han elaborado tipologías de ciudadanos que incluyen algunos elementos relacionados con la competencia cívica. Así, Antonio M. Jaime Castillo (2009) ha elaborado una tipología en base a las orientaciones cívicas de la ciudadanía en el ámbito europeo (ver Tabla 36), que distingue entre el grado de regulación normativa en la primera dimensión, y el grado de integración comunitaria en la segunda dimensión. Así, las orientaciones incluidas en la tipología se construyen a partir de la combinación de las visiones de la ciudadanía configuradas por el modelo de ciudadanía liberal clásica y el modelo de ciudadanía participativa, respectivamente. Este autor distingue un primer grupo de ciudadanos caracterizados por la “apatía política”, con un bajo grado de vinculación hacia las normas políticas de la sociedad y un bajo nivel de compromiso comunitario. Un segundo grupo está formado por ciudadanos con una “orientación cívica pura”, que consideran que las normas comunes deben ser respetadas y que es necesaria una implicación activa en las cuestiones políticas. Esta orientación enlazaría con la tradición del republicanismo cívico y de la política del bien común defendida por Sandel (2008). El tercer grupo estaría formado por las personas definidas como “instrumentalistas”, que no tienen una orientación comunitaria y consideran que las normas deben ser respetadas de cara al interés individual. Finalmente, existe un último grupo formado por ciudadanos que rechazan las normas comunitarias, pero cuya orientación comunitaria les lleva a implicarse en los procesos de transformación política o social. Para éste último grupo, la forma más

importante de participación política es la que se produce al margen de los mecanismos formales y tradicionales del sistema político.

Tabla 36: Tipología de orientaciones cívicas

Compromiso normativo	Compromiso comunitario	
	Bajo	Alto
Bajo	Apatía política	Democracia radical. Críticos
Alto	Democracia liberal. Instrumentalismo	Participación cívica. Republicanismo.

*Fuente: Jaime Castillo (2009)*

Por su parte, Javier Elzo (2010) ha elaborado también una tipología de ciudadanos españoles atendiendo a sus sistemas de valores, a partir de los datos obtenidos en la Cuarta Encuesta Europea de Valores del año 2008 en su aplicación a España. Este mismo autor ya había realizado previamente otra tipología de los ciudadanos españoles a partir de la Encuesta Europea de Valores correspondiente al año 1999. En esta tipología más reciente, el autor diferencia cinco clústers o grupos que pueden situarse en torno a dos ejes explicativos. Uno de estos ejes divide a los españoles en grupos en función de su grado de implicación en la vida social de su país, su grado de solidaridad con los demás, su preocupación por la vida política y su nivel de confianza institucional. Así, se pueden identificar, en el polo de los “implicados”, a los grupos denominados “comprometidos y modernos” y “tradicionales y familistas”. En el polo opuesto de la “desimplicación” se encontrarían los grupos denominados “disfrutadores y postmodernos”, “ventajistas y privatistas”, y “autoritarios”.

Finalmente, es necesario señalar que la tipología que se ha elaborado y presentado en esta tesis doctoral es una de las posibles tipologías que se podrían realizar de la sociedad española. Como señala Elzo (2010:261), “la utilización de preguntas distintas, o de la mismas preguntas en otro contexto, seguramente darían lugar a otras tipologías completamente distintas”. Por otro lado, la denominación de los grupos creados es un ejercicio subjetivo y que puede resultar discutible, según el mismo Elzo, “dado el riesgo de etiquetaje y simplificación que conlleva” pero a la vez necesario, ya que “para describir los diferentes grupos se acaban utilizando calificativos que los acaban etiquetando, de una manera u otra”.

## 7. CONCLUSIONES

### 7.1. Respecto a los objetivos marcados

El concepto “competencia cívica” es utilizado en la literatura -al igual que otros términos similares como compromiso cívico, ciudadanía activa, capital social o alfabetización cívica-, para referirse al conjunto de características que definen a las personas que participan activamente en la vida política y comunitaria. En el presente estudio se ha pretendido analizar en qué medida la competencia cívica de un individuo está relacionada con el nivel educativo y el estado de salud, y en qué medida la competencia cívica influye en las actitudes y expectativas de futuro hacia el Estado del Bienestar.

Para ello, se han utilizado los datos de la encuesta sobre alfabetización cívica y sanitaria realizada por la Fundación Josep Laporte y el Foro Español de Pacientes durante los años 2010 y 2011 a una muestra de 3.000 personas de la población española mayor de 18 años y residente en hogares con teléfono.

Los resultados obtenidos muestran que:

- El **nivel de estudios** está claramente asociado al desarrollo de la competencia cívica, y a la actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales. A medida que aumenta el nivel educativo, se observa un mayor grado de competencia cívica (en las diez variables analizadas) y una preferencia hacia un aumento de los impuestos y un incremento del gasto en políticas sociales. No se ha observado ninguna asociación entre el nivel de estudios y la percepción de inseguridad socioeconómica o riesgo en el futuro.
- El **estado de salud** está asociado a buena parte de las variables de competencia cívica (a seis de las diez analizadas), así como a la actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales, y a las expectativas de futuro hacia el EB. Las personas con un buen estado de salud consideran más importante votar en las elecciones y seguir la actualidad política, manifiestan un mayor interés en la

política, votan más en las elecciones, y confían en el gobierno y los políticos. No se ha observado una asociación con el resto de indicadores de competencia cívica. Por otro lado, las personas con un buen estado de salud son más favorables a que el gobierno suba impuestos y aumente el gasto social. Finalmente, las personas con un estado de salud malo tienen una mayor percepción de inseguridad socioeconómica y riesgo en el futuro.

- El **género** está asociado parcialmente a la competencia cívica (a cinco de las diez variables analizadas), a la actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales y también a las expectativas de futuro hacia el EB. Las mujeres consideran más importantes los valores cívicos, y en cambio los hombres muestran un mayor interés por los temas relacionados con la política. No se ha observado una asociación con la confianza institucional. Los hombres son más partidarios de pagar más impuestos a cambio de un mayor gasto en políticas sociales. Las mujeres muestran una mayor percepción de riesgo en el futuro.
- La **edad** está asociada también a la competencia cívica (a seis de sus variables), a la actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales, y a las expectativas de futuro hacia el EB. A medida que aumenta la edad, se observa una mayor preferencia por los mecanismos tradicionales de participación política. El grupo de mayor edad es el menos interesado por las formas no convencionales de participación. El grupo de edad 50-64 años es el más interesado en temas políticos y sociales. A partir de los 35 años de edad, los ciudadanos son más favorables a una subida de impuestos y un mayor gasto en políticas sociales, y tienen una mayor percepción de inseguridad hacia el futuro.
- La **competencia cívica** está asociada a la **actitud hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales** en casi todas las variables analizadas. Son favorables a que el gobierno suba impuestos y aumente el gasto en políticas sociales las personas que consideran importantes los valores cívicos, las personas interesadas en la participación política no convencional y que votan más en las

elecciones municipales, las personas con interés y eficacia política, y las personas que confían en el gobierno y en los políticos.

- No se ha podido establecer una relación clara entre la **competencia cívica** y las **expectativas de futuro hacia el Estado el Bienestar**, puesto que ésta relación cambia según la variable de análisis considerada. Creen que su bienestar personal será peor en el futuro, y que la vida de sus hijos será menos segura en el futuro comparada con la actual, las personas que no consideran importante votar en las elecciones, no interesadas en la participación política no convencional, y que no confían en el gobierno ni en los políticos.

El presente estudio pretende representar una contribución al análisis de la relación entre el nivel educativo y el estado de salud, por un lado, y diferentes dimensiones de la competencia cívica. También aporta información relevante sobre la influencia de la competencia cívica en las actitudes hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales, así como en las expectativas de futuro hacia el EB.

El amplio apoyo que los ciudadanos “cívicos”, con un elevado nivel educativo y un buen estado de salud, otorgan a las políticas de bienestar constituye un elemento de reflexión en un momento en el que se apela a la corresponsabilidad de la ciudadanía y en un contexto de crisis económica y amplios recortes en servicios públicos como la educación y la sanidad. Otro aspecto relevante del estudio es la importancia que la desafección política, medida a través de la confianza institucional, parece tener en la configuración de las actitudes hacia el EB y en la mayor percepción de inseguridad por parte de la ciudadanía.

Finalmente, el análisis ha permitido elaborar una tipología de ciudadanos en función de sus características respecto a las variables clave del estudio, a partir de la cual se sugiere la pertinencia de estrategias dirigidas a promover el desarrollo de la competencia cívica.

## **7.2. Implicaciones para las políticas públicas**

Los resultados obtenidos permiten observar una serie de implicaciones para las políticas públicas.

### **7.2.1. La desafección política y la participación ciudadana**

Los resultados de este estudio han puesto de manifiesto un elevado grado de desconfianza por parte de la ciudadanía en el gobierno y en los políticos. Existe un amplio consenso en la literatura en relación al declive de la confianza institucional (Milner, 2002; Jovell, 2007; De la Torre, 2007). Durante los últimos años se vienen produciendo una serie de fenómenos (creciente abstencionismo electoral, descenso de afiliaciones en partidos, desconfianza hacia las instituciones públicas, ...) relacionados con lo que se ha venido a denominar “desafección política” y que reflejan una serie de situaciones paradójicas. Una primera paradoja se puede observar cuando se constata que la democracia se extiende por diferentes países de todo el mundo, mientras en las democracias más maduras crece la desilusión hacia el proceso democrático (Giddens, 1999; Mouffe, 2000).

Si atendemos a los resultados obtenidos que indican la relación entre nivel educativo y competencia cívica, surgen dos nuevas paradojas. Por un lado, el incremento general de los niveles educativos en los países europeos no ha ido acompañado de un aumento en el grado de compromiso cívico en el conjunto de la sociedad, especialmente en formas tradicionales de participación. Por otro lado, algunos fenómenos como el descenso en la participación electoral se producen sobretudo en las generaciones más jóvenes, que son generalmente las que tienen un mayor nivel educativo, han crecido en un período histórico de normalidad democrática, y dominan nuevos repertorios de acción y movilización social que reducen significativamente los costes de la acción colectiva. Según Galais (2012), se ha asentado una cierta creencia respecto a que la creciente pasividad política es una de las principales características de una juventud española consentida y cortoplacista.

Algunos autores han señalado que la confianza institucional contribuye a entender porqué los ciudadanos prefieren unos mecanismos de participación respecto a otros (Ferrer, Medina y Torcal, 2006). Los ciudadanos que confían más en las instituciones políticas tienden a utilizar en mayor medida los mecanismos de participación tradicionales como el voto. En cambio, las personas críticas con el funcionamiento de las instituciones y escépticas respecto a los mecanismos de representación tradicionales prefieren mecanismos no convencionales de participación, como las actividades de protesta. Estos mismos autores han señalado que el aumento de la desconfianza hacia las instituciones puede incentivar la participación política mediante formas distintas a los mecanismos tradicionales de representación, y contribuir de esta manera a promover la innovación democrática y la transformación de la relación entre los ciudadanos y el poder político. De esta manera, la existencia de ciudadanos “críticos” puede ser positiva y suponer un reto de adaptación para las instituciones democráticas en busca de estructuras, procesos y resultados que sean percibidos de manera satisfactoria por la ciudadanía, y que encajen con los valores mayoritarios socialmente aceptados (Del Pino, 2004). Finalmente, otro elemento a considerar es la introducción de nuevas formas de participación democrática que garanticen una mayor rendición de cuentas por parte de las instituciones (Sandel, 2008).

Jovell (2007) considera que desde el punto de vista de la psicología, la confianza está determinada por la existencia de una expectativa hacia una persona o una institución, en la que se confía de que se va a comportar y a actuar de forma intencionada con la finalidad de satisfacer dicha expectativa. Esta confianza es más necesaria desde posiciones de vulnerabilidad y desconocimiento, es decir, desde situaciones en las que existe una asimetría de poder y/o información entre la parte que confía y la que es confiable. Un ejemplo de este tipo de confianza es la que se deposita en los médicos, y, en general, en los expertos. Los pacientes confían en los médicos y en los servicios de salud porque éstas asimetrías de conocimiento no permiten generalmente a los primeros estar en condiciones de juzgar las decisiones que adoptan los segundos. Los pacientes confían en que sus médicos sean competentes y sepan aplicar el mejor conocimiento y experiencia en el tratamiento de la enfermedad. Las personas también necesitan confiar en que las personas y las instituciones sean justas y sepan

administrar sus decisiones con justicia. Y los ciudadanos necesitan confiar en que los gobiernos sabrán actuar de forma apropiada ante las situaciones de crisis. Por su parte, Subirats (1999) señala que la confianza es un elemento determinante en momentos de volatilidad financiera, para apuntalar procesos de desarrollo económico, reforzar vínculos sociales, favorecer la cooperación y ofrecer una mayor previsibilidad y certidumbre.

Aunque no se ha analizado en el presente estudio, resulta interesante mostrar algún dato relativo a la confianza social en España, que parece haber empeorado durante los últimos años. Así, siete de cada diez personas no creen que se pueda confiar en la mayoría de la gente, y el único grupo donde más del 50% cree que sí se puede confiar es el que está integrado por personas con estudios universitarios (Setién, 2010). Según este autor, la seguridad que proporciona el conocimiento tal vez conduce a la confianza en la vida y también en los demás. En cualquier caso, Jovell (2012a) señala que una sociedad que tiene un problema de confianza es una sociedad que desarrolla tensiones emocionales, ansiedad y temor.

Los resultados de este estudio también han mostrado una elevada percepción de inseguridad y riesgo en el futuro por parte de los ciudadanos, y que –excepto en el caso de la confianza institucional- ésta percepción no está claramente asociada a la falta de competencia cívica ni a un bajo nivel educativo. Una posible explicación sería la gran influencia que pueden tener tanto la desconfianza institucional como la grave crisis económica que atraviesa actualmente España, en las expectativas de futuro de los ciudadanos. Esta influencia sería mayor que la que pueden tener los recursos y competencias personales que permiten a los ciudadanos hacer frente al devenir de sus vidas. La realización de estudios cualitativos que permitan ahondar en las razones o motivaciones de la ciudadanía, el diseño de estudios de tipo longitudinal que permitan establecer una relación de causalidad entre las variables de análisis, o la influencia que puede tener la confianza –en sus distintas formas- en el resto de variables de competencia cívica, son posibles líneas de estudio a tener en cuenta para el futuro.



### 7.2.2. El discurso político de la corresponsabilidad

La exigencia de una mayor responsabilidad cívica ha sido utilizada para legitimar programas de reforma y reestructuración de servicios públicos y de bienestar (Michailakis y Schirmer, 2010). En el discurso político de los últimos años se hace cada vez más referencia –especialmente en el ámbito de la educación y de la salud- a la necesidad de la corresponsabilidad de la ciudadanía, lo cual supone un cambio desde la responsabilidad colectiva del EB hacia la responsabilidad individual. Este aumento de expectativas hacia la responsabilidad individual ha obtenido un eco cada vez mayor en los medios de comunicación, lo cual ha contribuido a su creciente legitimación. Como ejemplo, el *National Centre for Priority Setting in Health Care* de Suecia elaboró una propuesta para despriorizar la atención sanitaria en el caso de aquellas personas que no cuidan de manera adecuada su salud y/o que siguen estilos de vida poco saludables o conductas de riesgo (Michailakis y Schirmer, 2010). Éstos últimos autores han señalado que este cambio –desde la responsabilidad colectiva a la responsabilidad individual- proporciona una solución política al problema de la limitación de recursos y proporciona al sistema político la vía para reorganizar la distribución de recursos y servicios sanitarios mediante la redefinición de los derechos y de los deberes de los pacientes.

La participación corresponsable en un ámbito como la salud implica el desarrollo de la competencia cívica y también de la denominada “alfabetización sanitaria”, entendida como “la capacidad de las personas para obtener, procesar y entender la información básica sobre la salud y los servicios sanitarios que necesitan para tomar decisiones apropiadas” (Institute of Medicine, 2004). De esta manera, cabe preguntarse sobre la ética de una transferencia de responsabilidad si ésta no viene acompañada de elementos que faciliten la participación de los pacientes en la toma de decisiones.

De esta manera, considerando la complejidad asociada a los sistemas sanitarios y al manejo de una enfermedad, en un contexto en el que se atribuye una creciente responsabilidad de la salud a la persona, y se anuncian recortes en la provisión de la asistencia sanitaria pública, se pueden crear asimetrías de información y conocimiento que promuevan un aumento de la desigualdad. En este sentido, Jovell (2012b) ha

señalado la posible creación de un nuevo sistema de estratificación social que, en lugar de radicar en las posibilidades económicas individuales, esté basado en el acceso y el manejo de información y conocimiento por parte de los ciudadanos.

Por otro lado, éstas asimetrías de conocimiento también pueden generar un problema del denominado “riesgo moral”, un concepto introducido por Kenneth Arrow en el vocabulario económico y que hace referencia a la delegación de responsabilidad. El riesgo moral describe una situación en la que un individuo puede actuar de manera diferente en función de si está expuesto o no a las consecuencias de sus propias acciones. Las consecuencias del riesgo moral son fácilmente visibles en el ámbito económico, y en situaciones concretas como la toma de una póliza de seguros, o la adquisición de un depósito o de acciones en una entidad bancaria. Aquellas personas que confían su dinero en un banco o adquieren acciones de una multinacional están delegando la responsabilidad por el buen manejo de las inversiones, lo cual expone a los responsables de estas instituciones al riesgo moral de tomar decisiones a cuyas consecuencias no están totalmente expuestos (Arrow, 1971).

En el ámbito colectivo, ésta transferencia de responsabilidad también debería estar acompañada de un cambio en los modelos de gobernanza que permita a los ciudadanos y a sus representantes participar también en las decisiones colectivas, tanto a nivel micro –los centros de salud o las escuelas- como a nivel macro –las políticas sanitarias y educativas-. No obstante, y como el autor del presente estudio ha descrito en un trabajo anterior, tras el discurso político de la participación hay un deseo de colaboración que contribuya a la provisión de servicios de bienestar que no pueden ser proporcionados por la Administración, pero sin que ésta participación se haga extensiva a los órganos de toma de decisiones políticas (Blancafort, 2009).

Por su parte, Calzada (2001) ha sugerido que la discordancia entre el amplio apoyo de los ciudadanos al EB y la baja posición que ocupa España en cuanto a políticas sociales, podría ser debido a un problema de articulación y/o representación de intereses, que podría deberse a la falta de vías de participación o una no utilización de estas vías. Este último punto estaría relacionado con la desafección política.

### 7.2.3. La “brecha” de la competencia cívica

Los datos de este estudio han mostrado un gradiente de competencia cívica que permite distinguir tres grupos de ciudadanos “comprometidos” –con una mayor proporción de personas con estudios universitarios-, “indefinidos” y “apáticos” –éstos últimos con una mayor proporción de personas sin estudios o estudios primarios, y de personas con un estado de salud malo.

Estos datos plantean un debate sobre la naturaleza de los procesos de participación ciudadana. En este sentido, si se desea contar con una representación amplia del conjunto de la ciudadanía, se debe tener en cuenta la existencia de un perfil poblacional con un nivel socioeconómico bajo, un estado de salud malo, y un bajo nivel de competencia cívica, y que no parece estar dispuesto ni interesado en formar parte de este proceso participativo ni a ejercer un elevado grado de compromiso hacia la vida pública (al menos en las circunstancias actuales). Dicho de otro modo, algunos procesos de participación ciudadana pueden implicar la exclusión de algunos grupos de la población, si únicamente se tiene en cuenta a los ciudadanos que se muestran interesados.

De la Torre (2007) se ha referido a la aparición de un nuevo tipo de actor político, el “ciudadano reflexivo”, que decide ser activo (o reactivo) en el espacio público, y que lo hace de una manera diferente a la del prototipo tradicional de ciudadano comprometido ideológicamente que encontraba en la esfera de la política institucional el ámbito preferente de expresión. Este “ciudadano reflexivo” no participa de manera constante y uniforme, sino que lo hace en función de los temas concretos que en cada momento se están tratando.

Por su parte, diferentes autores como Khane y Spote (2008) han destacado la importancia de desarrollar experiencias de aprendizaje cívico, por su elevado impacto en el compromiso individual hacia la participación comunitaria. Pateman (1989) ha afirmado que una cultura y una sociedad realmente democráticas requieren de una ciudadanía habituada a participar en los distintos ámbitos de su vida, incluidos aquellos más próximos, como la familia, la escuela, o las asociaciones locales, y que son los que le capacitarán más adelante para participar en ámbitos más complejos. Y

estudios realizados por Verba et al (1995) y Campbell (2006) también han señalado la importancia de realizar acciones de voluntariado en una edad temprana, destacando su efecto positivo en el nivel de participación comunitaria durante la vida adulta.

Sin embargo, el debate sobre el aprendizaje o la educación cívica suele estar limitado al período de escolarización. Martínez Martín (2006) afirma que una formación universitaria de calidad debería incorporar de manera sistemática y rigurosa situaciones de aprendizaje ético y de formación ciudadana. Y algunos autores como Milner advierten que pocos países invierten en la alfabetización cívica de la población adulta:

*“En lo que se refiere a la alfabetización cívica, aquello que se aprende como adulto es más importante que aquello que se aprende durante la juventud en la escuela. Y el aprendizaje no se limita a cursos: actividades como la lectura de periódicos y la visita regular a bibliotecas son de gran importancia para incrementar el nivel de alfabetización cívica de una población” (Milner (2002:117-118)*

Una de las referencias internacionales en el ámbito de la educación de adultos son los denominados “*study circles*” que se desarrollan habitualmente en Suecia, y que contribuyen a la adquisición de una actitud crítica hacia aspectos básicos de la actualidad diaria. (Milner, 2002:123).

#### **7.2.4. La competencia cívica y el apoyo al Estado del Bienestar**

Los datos del análisis multivariable también han mostrado que estas personas “comprometidas”, con niveles educativos superiores y un buen estado de salud, son precisamente los más favorables al aumento de impuestos y el incremento del gasto en políticas sociales.

Algunos autores han señalado que todas las políticas públicas deben estar dirigidas a la resolución de un problema público y representan la respuesta a una situación de la realidad social “juzgada políticamente como inaceptable” (Subirats, Knoepfel, Larrue et al, 2008:35). Los resultados del presente estudio aportan algunos elementos adicionales de reflexión, mostrando la paradoja consistente en que el desarrollo de políticas sociales recibe el apoyo mayoritario de personas que tienen un elevado grado

de competencia cívica, un nivel educativo alto y un buen estado de salud. En cambio, las personas con un bajo nivel de competencia cívica, sin estudios o con estudios primarios, y con un estado de salud malo son las que en mayor medida rechazan el incremento del gasto en políticas sociales.

Milner considera que el nivel de alfabetización cívica de una población refleja la proporción de ciudadanos de una comunidad que tienen las competencias necesarias para ejercer una ciudadanía informada y activa y es el elemento principal que distingue a las sociedades más igualitarias, que promueven la distribución igualitaria de recursos tanto materiales como no materiales o intelectuales. Estas sociedades más igualitarias son las que dedican un mayor porcentaje del PIB al gasto en políticas sociales, y corresponden también a aquellas que han mantenido un modelo de EB sostenible en el tiempo. Sin embargo, la reducción de las desigualdades en los elementos que definen el capital social o la competencia cívica no ha sido generalmente un objetivo explícito de las políticas de bienestar.

Por otro lado, la confianza –tanto la social como la institucional influye de manera relevante en las actitudes de la ciudadanía hacia el EB. En aquellos países cuyo nivel de confianza en el gobierno es bajo, los ciudadanos no están dispuestos a pagar más impuestos para obtener unos servicios de bienestar proporcionados por un gobierno en el cual no confían.

Una segunda reflexión, derivada de la primera, podría plantear si los gobiernos favorables a la reforma del EB mediante la introducción de recortes en las políticas sociales, desean una ciudadanía participativa e informada que pueda ser más favorable al desarrollo de políticas de bienestar. En este sentido, algún autor como Gert Biesta (2009) ha afirmado que el aprendizaje cívico se concibe como un proceso individual -no colectivo- y un modelo de socialización que contribuye a reproducir el “status quo” político, y se pregunta si la idea de competencia cívica contribuye a promover la acción política y la ciudadanía crítica, o bien si su función principal es “domesticar” al ciudadano.

Por último, los datos de este estudio han mostrado una elevada proporción de respuestas “No sabe” y “No contesta” en la pregunta sobre las preferencias de la

ciudadanía hacia los impuestos y las políticas sociales. Una posible consecuencia de ello, apuntada por Martín (2005), sería que la opinión de las personas con un bajo nivel de interés e información sobre temas políticos serían más fácilmente manipulables y aceptarían más fácilmente discursos políticos fatalistas sobre la viabilidad futura del EB y la necesidad de introducir recortes en las políticas sociales.

### **7.2.5. Las políticas públicas en educación y salud: ¿gasto o inversión?**

La provisión de un sistema de educación pública y de un sistema sanitario accesible a toda la ciudadanía constituyen quizás los dos elementos principales de cualquier modelo de EB. Según los datos aportados por el Instituto de Estudios Fiscales, la educación y la sanidad son los servicios públicos mejor valorados por los ciudadanos españoles, y los que –en su opinión– contribuyen más a la creación de riqueza. Esta valoración se mantiene prácticamente constante desde hace 10 años (IEF, 2011). Esta tendencia también se puede observar en los resultados correspondientes la Cuarta Encuesta de Valores en su aplicación a España (Elzo y Silvestre, 2010). Por otra parte, según los resultados de diferentes encuestas realizadas por la Fundación Josep Laporte (2006, 2009 y 2011), los españoles valoran de manera muy positiva a los profesionales que trabajan en el ámbito de la salud y la enseñanza, pero en cambio valoran muy negativamente a las instituciones y a los políticos que se encargan de gestionar estos mismos servicios.

En relación a la financiación de la sanidad, Jovell (2012b) sostiene que aunque se pueda racionalizar el gasto público en sanidad, éste tiene un suelo que no se podrá sobrepasar, por lo que el problema fundamental será cómo obtener los ingresos necesarios para cubrir de forma justa y apropiada todas las necesidades de salud. Pese a la percepción de dudas respecto a la justificación de la fiscalidad por parte de la ciudadanía, la sanidad y la educación son –en opinión de los españoles–, los servicios públicos que más justifican el pago de impuestos y también del que los ciudadanos realizan un peor uso (IEF, 2011). En este sentido, los datos de la encuesta sobre alfabetización sanitaria y competencia cívica (Fundación Josep Laporte, 2011), en la que se basa este estudio, muestran que prácticamente el 80% de ciudadanos consideran que la población no realiza un uso adecuado de los servicios de urgencias.

Ya se ha comentado en un apartado anterior de esta tesis doctoral que los investigadores Wilkinson y Pickett (2009b) han evaluado los múltiples estudios científicos que analizan la relación entre el nivel de desigualdad social y la salud de la población. Jovell (2012b) ha señalado que el sistema sanitario público es necesario ahora más que nunca como corrector de la desigualdad y de la protección social, y también que la mejora de la salud de la población se ve favorecida por la corrección de las desigualdades económicas asociadas a mejoras en el nivel de educación. La sanidad pública garantiza la existencia de un espacio comunitario compartido que permite cultivar los valores de la solidaridad y el sentido de comunidad propios del civismo democrático, contribuye a mantener la cohesión social, y promueve un significado compartido de la salud como un bien común que forma parte de la dignidad individual de las personas.

Las políticas sociales en educación y sanidad implican gasto social pero también generan un progreso social que contribuye a la cohesión social. Además, y como ha mostrado este estudio, las personas con mayor nivel educativo y mejor estado de salud tienen un mayor grado de competencia cívica y compromiso hacia la vida pública. Sidiqqi, Kawachi, Berkman, et al (2007), utilizando los datos del informe PISA correspondiente al año 2000, han concluido que, generalmente, aquellos países con una elevada tradición en prestaciones sociales son los que obtienen los mejores rendimientos educativos.

Todo ello plantea las consecuencias de una reducción drástica del gasto público en aquellas políticas que son capaces de generar progreso social, como la educación y la sanidad. Según Wilkinson y Pickett (2009a), una política centrada en la contención del gasto público y en una baja fiscalidad, pero que no sea capaz de evitar la desigualdad, acabará necesitando dinero público para paliar el aumento de los problemas. Como ejemplo, el gasto público en mantenimiento de prisiones en los Estados Unidos ha crecido seis veces más rápido que el de educación desde 1980, cuando las desigualdades sociales y económicas empezaron a aumentar con rapidez (Justice Policy Institute, 2002). Las desigualdades provocan que la gente se preocupe por el futuro y por su inseguridad, y su reducción permite mejorar la calidad de vida de todos sus

integrantes. Las desigualdades también influyen en el contexto y en las vías que definen el desarrollo de la competencia cívica y de la confianza en las instituciones en las cuales deberá participar un ciudadano (Abu El-Haj, 2009; Levinson, 2009).

Uno de los retos actuales debería ser proporcionar una buena educación cívica a estudiantes de diferentes procedencias y con distintos recursos económicos. Los estudiantes de escuelas que se encuentran en comunidades económicamente favorecidas están más fácilmente expuestos a buenas prácticas de educación cívica (Campbell, 2005; Kahne y Middaugh, 2008). Diferentes investigaciones (Zaff, Kawashima-Ginsberg y Lin, 2011) muestran que el hecho de vivir en un barrio pobre del entorno urbano está asociado a un menor nivel de compromiso cívico, y a la existencia de más barreras para desarrollar una identidad cívica. Del Pino (2005) señala que el deterioro de lo público promueve que los ciudadanos de las clases más favorecidas –que generalmente también corresponden a los más ilustrados- huyan de la enseñanza pública. También añade que la solución para evitar el deterioro de la educación pública no es utilizar el argumento de la libre elección –algunos pueden elegir pero no muchas familias no pueden hacerlo-, sino promover políticas que aseguren la presencia voluntaria y comprometida porque una escuela o un hospital público sean el mejor sitio donde trabajar.

La educación pública contribuye a garantizar la igualdad de oportunidades y mejora la empleabilidad de las generaciones futuras. James Heckman, profesor de la Universidad de Chicago y premio Nobel de Economía, ha mostrado que las inversiones en educación durante la primera infancia tienen un retorno superior al 7% de su coste íntegro (Heckman, 2004). Y según Taylor-Gooby, la inversión en políticas educativas puede contribuir al incremento del capital humano y social y favorecer la adquisición de habilidades sociales, el establecimiento de vínculos sociales y fortalecer el compromiso de la ciudadanía con los valores y las normas comunes. Por otro lado, las políticas que promueven servicios públicos y de bienestar de calidad, y que a la vez promueven una mayor igualdad, contribuyen a aumentar la confianza de la ciudadanía en el gobierno (Taylor-Gooby, 2009).



Subirats (1999:19) señala que España “no tiene una concepción de lo público como un ámbito de responsabilidad colectiva, ni tampoco dispone de una presencia fuerte, estructurada y responsable de la sociedad civil”. Por ello, y de acuerdo a De la Torre (2007), la democracia es el sistema político que menos puede desentenderse de la educación de los individuos, ya que necesita que actúen como ciudadanos, como sujetos responsables, interesados notablemente en el funcionamiento de la “cosa pública”. La educación pública ha sido considerada un ascensor social que contribuya a reducir las desigualdades y a aumentar la confianza social y en las instituciones.

En palabras de Nicholas D. Kristof (2011):

*“We can pay for prisons or we can pay, less,  
for early childhood education to help build  
a fairer and more equitable nation”*

*[“Podemos escoger gastar el dinero en prisiones o gastarlo,  
en menos cantidad, en educación en la primera infancia,  
para ayudar a construir un país más justo y mejor”].*

## **7.3. Aportaciones y limitaciones del estudio**

### **7.3.1. Aportaciones del estudio**

Este estudio confirma las conclusiones de anteriores investigaciones que han establecido una relación clara entre el nivel educativo de los ciudadanos y diferentes elementos relacionados con la competencia cívica.

Hasta donde se ha podido investigar, el presente estudio representa una primera aportación –al menos en España- en lo que se refiere al análisis de la relación entre el estado de salud como variable independiente y diferentes dimensiones de la competencia cívica. Si bien diferentes estudios han mostrado previamente una relación entre elementos como el capital social y el estado de salud, éste último ha sido habitualmente utilizado como variable dependiente, y se han incluido un número muy reducido de indicadores de capital social.

Otra contribución importante de este trabajo es la utilización de diferentes dimensiones de la competencia cívica, con el fin de analizar su influencia en las actitudes hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales. Los pocos estudios previos que han analizado esta relación se han limitado a la utilización de muy pocas dimensiones, como la confianza institucional o el interés y/o conocimiento sobre temas políticos.

Los resultados obtenidos aportan información relevante que sugiere una relación entre un nivel educativo elevado, un buen estado de salud y la competencia cívica, por un lado, y una actitud favorable hacia el aumento de impuestos y un mayor gasto en políticas sociales. Este elemento debería ser tomado en consideración en un momento de crisis económica como el actual, en el que se reclama la máxima corresponsabilidad por parte de la ciudadanía y se producen, a su vez, importantes recortes en servicios públicos como la educación y la sanidad, que gozan de gran apoyo por parte de la población.

Otro aspecto novedoso del presente estudio lo constituye el análisis de la influencia que tiene la competencia cívica en la configuración de los riesgos y expectativas de

futuro de la ciudadanía hacia el futuro del EB. Los resultados muestran el papel relevante que desempeña la creciente desconfianza institucional en el aumento de la percepción de inseguridad socioeconómica y riesgo en el futuro.

Finalmente, este trabajo ha presentado una tipología de la ciudadanía española que muestra un gradiente en los elementos que definen el grado de competencia cívica. Los resultados sugieren –en un contexto generalizado de crisis económica, desafección política y llamadas a la corresponsabilidad ciudadana-, la necesidad de desarrollar estrategias que promuevan el desarrollo de la competencia cívica, tanto durante la fase de escolarización como durante la fase adulta del ciclo vital.

### **7.3.2. Limitaciones del estudio**

La realización de esta tesis doctoral ha puesto de manifiesto diferentes limitaciones metodológicas y también relativas a la imposibilidad de responder a todos los interrogantes que se han planteado.

Este estudio ha utilizado como método de campo una encuesta telefónica, lo cual supone algunas limitaciones importantes. En primer lugar, las dificultades de cobertura derivadas del creciente número de personas que no disponen de teléfono fijo. En segundo lugar, la necesidad de acotar el número de preguntas con el fin que el cuestionario no sea demasiado largo ni complejo. Por ello, el número de dimensiones relacionadas con la competencia cívica y con las actitudes y expectativas de futuro hacia el EB es necesariamente reducido, lo cual no ha permitido tener en cuenta algunos elementos adicionales de análisis que hubieran resultado de interés. Por otro lado, no se han utilizado algunas variables que la literatura considera relevantes para analizar las actitudes hacia el EB, como la clase social subjetiva o la situación laboral.

Los resultados obtenidos a partir de modelos de regresión multivariable aplicados a diseños de tipo transversal, como es el caso del presente estudio, deben limitar su interpretación al carácter exploratorio y descriptivo de este tipo de estudios.

Al distinguir el contexto en que se producen los diseños de carácter transversal y longitudinal, la interpretación de la relación existente entre las variables en este

estudio se debe realizar en términos de correlación o asociación. En cambio, en estudios longitudinales se utilizan los conceptos de efecto, predicción o determinación al referirse a la influencia de una o más variables independientes en la dependiente. En este sentido, el hecho de que el presente estudio tenga un diseño transversal -y no longitudinal- no permite asumir una relación de causalidad entre las variables de estudio.

La utilización de un protocolo de análisis cerrado y de indicadores cuantificables, pone de relieve el problema del discurso manifiesto, que puede generar un cierto sesgo en los posicionamientos de la ciudadanía relacionados con las dimensiones incluidas en el estudio. Además, la disponibilidad de indicadores se ha visto limitada por el hecho de que el grueso de la encuesta estaba dirigida a obtener información para una investigación más amplia, de la que el presente trabajo constituye un subproducto, lo cual ha disminuido la posibilidad de incluir preguntas que hubieran sido pertinentes, especialmente respecto al ámbito de la estructura social de las personas encuestadas.

Por otro lado, las encuestas de opinión suelen cuantificar experiencias y opiniones cuya subjetividad dificulta la valoración de su validez, por lo que se debe tomar en consideración la variabilidad de la opinión pública al valorar aquellos aspectos que dependen de la subjetividad del entrevistado, y cuya veracidad o fiabilidad no se puede comprobar. Por ejemplo, aunque el estado de salud autopercebido ha sido ampliamente utilizado como indicador del estado de salud, está basado en una percepción subjetiva -y no objetiva- sobre cómo una persona percibe su salud. Por su parte, algunos autores han sugerido que los años de educación no reflejan la calidad de la escolarización.

#### **7.4. Líneas futuras de investigación**

Para finalizar este apartado, se apuntan diferentes líneas de investigación que pueden ser tenidas en cuenta de cara al futuro.

Una posible línea de investigación adicional podría estar centrada en la investigación de las motivaciones y razonamientos personales que promueven la competencia cívica y las actitudes y expectativas de futuro hacia el EB, mediante la utilización de técnicas

cualitativas. Ello permitiría una mejor comprensión de los datos obtenidos de manera cuantitativa, y aportaría una visión más subjetiva y mayor riqueza en el análisis.

Los resultados de este estudio han mostrado que el nivel de correlación entre las diferentes variables de competencia cívica analizadas es muy heterogéneo. Diferentes autores han justificado previamente la necesidad de utilizar indicadores que midan diferentes dimensiones relacionadas con la competencia cívica. Si bien ha quedado fuera del alcance del presente estudio, el análisis detallado de la correlación entre las diferentes dimensiones de la competencia cívica puede ser un área de interés para el futuro.

Otra posible línea de investigación es la utilización de modelos multinivel para realizar un análisis de la relación entre las variables de estudio en diferentes Comunidades Autónomas. Los modelos multinivel permiten trabajar con grupos, aunque no se tenga el mismo número de casos por grupo, y aunque el número de casos no sea suficientemente amplio como para realizar un análisis independiente.

Existe un importante número de estudios comparativos en el ámbito internacional que han analizado las diferencias entre diferentes países, tanto en variables relacionadas con la competencia cívica, como en las actitudes de la ciudadanía hacia el Estado del Bienestar. Sin embargo, la posible relación entre diferentes aspectos de la competencia cívica y las actitudes hacia el EB, desde una perspectiva comparada, no ha sido objeto de la investigación académica. En este sentido, analizar cómo puede ser esta relación en diferentes contextos –por ejemplo, en países que representen diferentes modelos de EB- se apunta como una línea de investigación relevante.

Por otra parte, los datos disponibles también permiten desarrollar en el futuro una línea de investigación para analizar la relación entre la percepción de inseguridad socioeconómica y riesgo en el futuro, y las actitudes de la ciudadanía hacia los impuestos y el gasto en políticas sociales.

Finalmente, diferentes autores han señalado que la confianza social puede tener un papel relevante en el apoyo ciudadano de políticas de bienestar universales, así como en la percepción de riesgo e inseguridad en el futuro. Por otro lado, el cuestionario

original utilizado para la elaboración de esta tesis doctoral incluye algunas preguntas sobre el grado de felicidad autopercebida o la confianza de la ciudadanía en algunas instituciones privadas. Si bien éstos aspectos han quedado fuera del alcance del presente estudio, una línea de investigación interesante –señalada con anterioridad- puede ser la integración de estos elementos en el marco conceptual -ya explorado en este estudio- de la relación entre la confianza en las instituciones públicas y las actitudes y expectativas de futuro hacia el EB.

## 8. BIBLIOGRAFIA

- Abu El-Haj, T. R. (2009). Becoming citizens in an era of globalization and transnational migration: Re-imagining citizenship as critical practice. *Theory into practice*, 48, 274-282.
- Ackerman, B., y Fishkin, J. (2003). Deliberation day. En Fishkin, J., y Laslett, P. (Eds.), *Debating Deliberative Democracy* (pp 7-30). Oxford: Blackwell Publishing.
- Adelantado, J., Noguera, J. A., y Rambla, X. (2000). El marco de análisis: Las relaciones complejas entre estructura social y políticas sociales. En J. Adelantado (Coord.), *Cambios en el Estado del Bienestar. Políticas sociales y desigualdades en España* (pp 23-61). Barcelona: Icària-UAB.
- Ahnquist, J., Wamala, S., y Lindstrom, M. (2012). Social determinants of health – A question of social or economic capital? Interaction effects of socioeconomic factors on health outcomes. *Social Science and Medicine*, 74, 930-939.
- Alderson, A. S. y Nielsen, F. (2002). Globalization and the Great U-Turn: Income Inequality Trends in 16 OECD Countries. *American Journal of Sociology*, 107, 1244-1299.
- Allmendinger, J. y Leibfried, S. (2003). Education and the welfare state: The four worlds of competence production. *European Journal of Social Policy*, 13(1), 63-81.
- Almond, G. A., y Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton: Princeton University Press.
- Alvira, F. (2004). *La encuesta: una perspectiva general metodológica*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Alvira, F., y García, J. (1984). Sociedad y gasto público. *Presupuesto y Gasto Público*, nº18.
- Alvira, F., García, J., y Delgado, M. L. (2000). *Sociedad, impuestos y gasto público: la perspectiva del contribuyente*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas: Siglo XXI de España.
- Amadeo, J.-A., Torney-Purta, J., Lehmann, R., Husfeldt, V., y Nikolova, R. (2002). *Civic knowledge and engagement: An IEA study of upper secondary students in sixteen countries*. Amsterdam: IEA.
- Anderson, C. J., y Guillory, C. A. (1997). Political institutions and satisfaction with democracy: A cross-national analysis of consensus and majoritarian systems. *The American political science review*, 91(1), 66-81.
- Anderson, R., Mikulić, B., Vermeylen, G., Lyly-Yrjanainen, M. y Zigante, V. (2009). *Second European Quality of Life Survey: Overview*. Dublin: European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions.
- Anduiza, E. (2001). *Actitudes, valores y comportamientos políticos de los jóvenes españoles y europeos*. Madrid: Injuve.
- Anheier, H. (2004): *Civil society: Measurement, evaluation and policy*. London: Civicus.
- Araujo, C. (2000). República e democracia. *Lua Nova*, 51, 5-30.

- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the Royal Town Planning Institute*, 57, 176-182.
- Arriba, A., Calzada, I., Del Pino, E. (2006). *Las actitudes de los españoles hacia el Estado de Bienestar (1985-2005)*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Arrow, K. J. (1971). *Essays in the Theory of Risk-Bearing*. Chicago: Markham Pub. Co.
- Arts, W. A. y Gelissen, J. (2010). Models of the Welfare State. En F. G. Castles, S. Leibfried, J. Lewis, H. Obinger y C. Pierson (Eds.), *The Oxford Handbook of the Welfare State* (pp 569-583). Oxford: Oxford University Press.
- Audigier, F. (1993). *Teaching about society, passing on values*. Strasbourg Cedex: Council of Europe.
- Babones, S. J. (2008). Income inequality and population health: correlation and causality. *Social Science and Medicine*, 6(7), 1614-1626.
- Bäckström, A., y Edlund, J. (2012). *Understanding the Link between Trust in Public Institutions and Welfare Policy Preferences: On the Role of Market Institutions for Uncovering a supposed Relationship*. Working Paper 4/2012. Department of Sociology, Umea University.
- Banks, J., Marmot, M., Oldfield, Z., Smith, J. P. (2006). Disease and disadvantage in the United States and in England. *JAMA*, 295, 2037-2045.
- Barber, B. (1984). *Strong democracy, participatory politics for a new age*. Berkeley: University of California Press.
- Barnes, S., Kaase, M., et al (1979). *Political Action: Mass Participation in Five Western Democracies*. London: Sage.
- Baron, S., Field, J., y Schuller, T. (2000): *Social capital: critical perspectives*. New York: Oxford University Press.
- Bartolomé, E. (2010). Apoyo político en España en 2008. En J. Elzo., y M. Silvestre (Dirs.), *Un individualismo placentero y protegido. Cuarta Encuesta Europea de Valores en su aplicación a España* (pp 185-212). Bilbao: Publicaciones de la Universidad de Deusto.
- Bauman, Z. (2002). *Modernidad líquida*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Beck, U. (1986). *La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad*. Barcelona: Paidós.
- Bellah, R. N. (1999). Is There a Common American Culture? Diversity, Identity and Morality in American Public Life. En Swatos, W. H., y Wellman, J. K. (Eds.), *The Power of Religious Publics: Staking Claims in American Society* (pp 53-68). Westport: Praeger.
- Benedicto, J. (1997). Las bases culturales de la ciudadanía democrática en España. En P. Del Castillo y I. Crespo (Eds.), *Cultura política, enfoques teóricos y análisis empíricos*. Valencia: Tirant lo Blanch.
- Bennett, S. E. (1986). Apathy in America 1960-1984: Causes and Consequences of Citizen Political Indifference. Dobbs Ferry, NY: Transnational Publishers.
- Bennett S. E. (1988). Know-nothings revisited: the meaning of political ignorance today. *Social Science Quarterly*, 69, 476-490.
- Bennett, S. E., Flickinger, R. S., Baker, J. R., Rhine, S., y Bennett, L. M. (1996). The impact of personal characteristics and mass media exposure on citizens' knowledge of foreign affairs: A five nation study. *Harvard International Journal of Press/Politics* 1, 2 (Spring), 10-21.



- Benoit, K. y Laver, M. (2006). *Party Policy in Modern Democracies*. London: Routledge.
- Berkman, L. F., y Glass, T. (2000). Social integration, social networks, social support, and health. En L. F. Berkman y I. Kawachi (Eds.) *Social Epidemiology* (137-173). New York: Oxford University Press.
- Biesta, G. (2009). What kind of citizenship for European higher education? Beyond the competent active citizen. *European Educational Research Journal*, 8(2), 146-158.
- Blakely, T. A., Kennedy, B. P., y Kawachi, I. (2001). Socioeconomic inequality in voting participation and self-rated health. *American Journal of Public Health*, 91(1), 99-104.
- Blancafort, S. (2009). *Gobernanza y participación en el Sistema Nacional de Salud: Visión y expectativas de pacientes y usuarios*. Fundación Salud, Innovación y Sociedad. Documento de trabajo nº35.
- Blekesauane, M., y Quadagno, J. (2003). Public attitudes toward Welfare State policies: A comparative analysis of 24 nations. *European Sociological Review*, 19(5), 415-427.
- Blossfeld, H.-P., Buchholz, S., Hofäcker, D., Hofmeister, H., Kurz, K. y Mills, M. (2007). *Globalisierung und die Veränderung sozialer Ungleichheiten in modernen Gesellschaften*. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse des GLOBALIFE-Projektes', *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 59, 667-691.
- Bobek, D. L., Zaff, J., Li, Y., y Lerner, R. M. (2009). Cognitive, emotional, and behavioral components of civic action: Towards an integrated measure of civic engagement. *Journal of Applied Development Psychology*, 30, 615-627.
- Böhnke, P. (2008). Does Society Matter? Life Satisfaction in the Enlarged Europe. *Social Indicators Research*, 87, 189-210.
- Bonet, J. (2006). La vulnerabilidad relacional: Análisis del fenómeno y pautas de intervención. *REDES-Revista hispana para el análisis de redes sociales*, 11(4).
- Bonet, E., Martín, I., y Montero, J. R. (2006). Actitudes políticas de los españoles. En J. R. Montero, J. Font y M. Torcal (Coords.), *Ciudadanos, asociaciones y participación en España* (pp 105-132). Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Bonoli, G. (1997). Classifying welfare states: A two-dimensional approach. *Journal of Social Policy*, 26(3), 351-372.
- Bosch, J. C., y Torrente, D. (1993). *Encuestas telefónicas y por correo*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Cuadernos Metodológicos, nº9.
- Botton, A. D. (2004). *Ansiedad por el estatus*. Madrid: Taurus.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. En J. Richardson (Ed.), *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education* (pp 241-258). New York: Greenwood.
- Brady, D., Beckfield, J. and Zhao, W. (2007). The consequences of economic globalization for affluent democracies. *Annual Review of Sociology*, 33, 13-34.
- Brehm, J., y Rahn, W. (1997). Individual level evidence for the causes and consequences of social capital. *American Journal of Political Science*, 41, 888-1023.
- Brooks, C. y Manza, J. (2007). *Why Welfare States Persist: The Importance of Public Opinion in Democracies*. Chicago: University of Chicago Press.

- Brown, C., Eichengreen, B. J. y Reich, M. (Eds.). (2010). *Labour in the Era of Globalization*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Brugué, Q., Font, J. y Gomà, R. (2003): Participación y democracia: asociaciones y poder local. En M. J. Funes y R. Adell: *Movimientos sociales: cambio social y participación*. Madrid: UNED.
- Burchell, B. (1993). A new way of analyzing labour market flows using work history data. *Work, Employment and Society*, 7, 237-258.
- Burns, N. Schlozman, K. L. y Verba, S. (2001). *The Private Roots of Public Action. Gender, Equality and Political Participation*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Burstrom, B., y Freudlund, P. (2001). Self-rated health: Is it as good predictor of subsequent mortality among adults in lower as well as in higher classes? *Journal of Epidemiology and Community Health*, 55, 836-840.
- Busemeyer, M. R. y Nikolai, R. (2010). Education. En F. G. Castles, S. Leibfried, J. Lewis, H. Obinger y C. Pierson (Eds.), *The Oxford Handbook of the Welfare State* (pp 494-508). Oxford: Oxford University Press.
- Caínzos, M. (2010). ¿Ciudadanos desiguales? Clase, educación y participación política en Europa. En M. Torcal (Ed.), *La ciudadanía europea en el siglo XXI: Estudio comparado de sus actitudes, opinión pública y comportamiento políticos* (pp 265-316). Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Calzada, I. (2001). Tan lejos, tan cerca...Actitudes hacia el Estado del Bienestar en Suecia y en España. *Política y sociedad*, 38, 97-112.
- Calzada, I. (2007). ¿Qué Estado del Bienestar queremos? Las opiniones de los ciudadanos sobre cómo son y cómo deberían ser nuestras políticas sociales. *Zerbitzuan: Revista de Servicios Sociales del Gobierno Vasco* 42, 103-114.
- Calzada, I. (2011). *Apolitical attitudes to the Welfare State*. Ponencia presentada en el Congreso Midwest Political Science Association -MPSA-. Chicago, 31 marzo-3 abril.
- Campbell, A. (1962). The passive citizen. *Acta Sociologica*, VI (fasc. 1-2), 9-21.
- Campbell, A., Converse, P. E., Miller, W. E., y D. E. Stokes. (1960). *The American Voter*. New York: Wiley.
- Campbell, D. E. (2005). Voice in the classroom. *How open classroom environment facilitates adolescents' civic development*. CIRCLE Working Paper 28.
- Campbell, D. E. (2006) What is Education's Impact on Civic and Social Engagement? En Desjardins, R., y Schuller, T. (Eds), *Measuring the Effects of Education on Health and Civic Engagement*. Proceedings of the Copenhagen Symposium (pp 25-126). Paris: CERI y OCDE.
- Carlson, P. (2004). The European health divide: A matter of financial or social capital? *Social Science and Medicine*, 59(9), 1985-1992.
- Casado, D. (Ed.) (1995). *Organizaciones voluntarias en España*. Barcelona: Hacer Editorial.
- Cassel, C., y Lo, C. C. (1997). Theories of Political Literacy. *Political Behavior*, 19(4), 317-335.
- Castles, F. G. (Ed.) (1993). *Families of Nations: Patterns of Public Policy in Western Democracies*. Aldershot: Dartmouth.
- Castles, F. G. (1994). On religion and public Policy: Does catholicism make a

- difference? *European Journal of Political Research*, 25(1), 19-40.
- Charles, C., y DeMaio, S. (1993). Lay participation in health care decisions making: A conceptual framework. *Journal of health politics, policy and law*, 18(4), 881-904.
- Chong, D., Citrin, J., y Conley, P. (2001). When self-interest matters. *Political Psychology*, 22(3), 541-570.
- Chung, H. y Van Oorschot, W. (2011). Institutions versus market forces: Explaining the employment insecurity of European individuals during the (beginning of the) financial crisis. *Journal of European Social Policy*, 21, 287-301.
- CIS (2011a). *Encuesta de Opinión Pública y Política Fiscal*. Centro de Investigaciones Sociológicas. Estudio nº 2910.
- CIS (2011b). *Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas*. Estudio nº 2905 (junio).
- CIS (2011c). *Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas*. Estudio nº 2909 (julio).
- CIS (2012a). *Barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas*. Estudio nº 2944 (mayo).
- CIS (2012b). *Índice de Confianza del Consumidor*. Centro de Investigaciones Sociológicas. Estudio nº 2945.
- Citrin, J., y Muste, C. (1999). Trust in Government. En J. P. Robinson, P. R. Shaver y L. S. Wrightsman (Eds.), *Measures of Political Attitudes*. New York: Academic Press.
- Coleman, J (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. *The American Journal of Sociology*, 94, S95-S120.
- Conover, P. J., Crewe, I. M., y Searing, D. D. (1991). The nature of citizenship in the United States and Great Britain: empirical comments on theoretical themes. *Journal of Politics*, 53(3), 800-834.
- Converse, P. (1972). Change in the American Electorate. En A. Campbell y P. Converse (Eds.), *The Human Meaning of Social Change*. New York: Russell Sage.
- Cook, F. y Barrett E. J. (1992). *Support for the American Welfare State: Views of Congress and the Public*. New York: Columbia University Press.
- Coughlin, R. M. (1979). Social policy and ideology: Public opinion in eight rich nations. *Comparative Social Research*, 2, 3-40.
- Council of Europe (2005). *Concerted development of social cohesion indicators: Methodological guide*. Strasbourg: Council of Europe.
- Crick, B. (2003). The English Citizenship Order 1999: Context, Content and Presuppositions. En Lockyer, A., Crick, B., y Annette, J. (Eds.), *Education for democratic citizenship* (pp 15-29). Aldershot: Ashgate.
- Cusack, T. R., Iversen, T., y Rehm, P. (2006). Risks at work: The demand and supply sides of government redistribution. *Oxford Review of Economic Policy*, 22(3), 365-389.
- Dalton, R. (2002). *Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced Industrial Democracies*. New York: Seven Bridges Press.
- De la Torre, F. (2007). *Participació ciutadana: El compromís amb la vida pública*. ESADE y Fundació Lluís Carulla. Colecció Observatori dels Valors. Barcelona: Barcino.
- Dee, T. (2003). *Are There Civic Returns to Education?* NBER Working Paper Series,

- Working Paper 9588. National Bureau of Economic Research.
- Del Pino, E. (2004). *Los ciudadanos y el Estado: Las actitudes de los españoles hacia las Administraciones y las políticas públicas*. Madrid: Instituto Nacional de Administración Pública.
- Del Pino, E. (2005). Qué hacer con un insostenible Estado del Bienestar. *Cinco Días*, 6 de julio.
- Del Pino, E. (2007). Las actitudes de los españoles hacia la reforma del Estado de Bienestar. *Política y Sociedad*, 44(2): 185-208.
- Del Pino, E. (2009). Recortes sociales, más fáciles en tiempos de crisis. *Cinco Días*, 25 de mayo.
- Delli Carpini, M., y Keeter, S. (1996). *What Americans Know About Politics and Why it Matters?* New Haven, CT: Yale University.
- Díez, M. (1998). La relación con el estado: la cultura fiscal y las actitudes hacia lo público. *Sistema*, 144, 5-40.
- Douglas, M. y Wildavsky, A. (1982). *Risk and Culture: An Essay on the Selection of Technological and Environmental Dangers*. Berkeley, CA: University of California Press.
- Downs, A. (1957). *An Economic Theory of Democracy*. New York: Harper and Row.
- Easton, D. (1965). *A System Analysis of Political Life*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Edlund, J. (2006). Trust in the capability of the Welfare State and general Welfare State support: Sweden 1997-2002. *Acta Sociologica*, 49(4), 395-417.
- Education Council (2001). *The concrete future objectives of education and training systems*. Report from the Education Council to the European Council. Brussels, 14 february 2001. Brussels: European Council.
- Education Council (2007). *Council Conclusions on a Coherent Framework of Indicators and Benchmarks for Monitoring Progress towards the Lisbon Objectives in Education and Training*. Legal agreement by the member states of the Council of the European Union. Brussels.
- Elster, J. (1990). Selfishness and Altruism. En J. Mansbridge (Ed.), *Beyond Self-Interest* (pp 44-52). Chicago: University of Chicago Press.
- Elzo, J. (2010). Una tipología de los españoles de 2008, atendiendo a sus sistemas de valores. En J. Elzo., y M. Silvestre (Dir.), *Un individualismo placentero y protegido. Cuarta Encuesta Europea de Valores en su aplicación a España* (pp 251-298). Bilbao: Publicaciones de la Universidad de Deusto.
- Elzo, J., y Castiñeira, A. (2011). *Valors tous en temps durs*. Barcelona: Editorial Barcino.
- Engström, K., Mattsson, F., Järleborg, A., y Hallqvist, J. (2008). Contextual social capital as a risk factor for poor self-rated health: A multilevel analysis. *Social Science & Medicine*, 66, 2268-2280.
- Erlinghagen, M. (2008). Self-perceived job insecurity and social context: A multi-level analysis of 17 European countries. *European Sociological Review*, 24, 183-197.
- Espina, A. (2002). Bienestar: Sociología y reforma. *Revista de Libros*, 66, 15-18.
- Esping-Andersen, G. (1993). *Los tres mundos del Estado del Bienestar*. Valencia: Edicions Alfons El Magnànim.
- Esping-Andersen, G. (2002). *Why We Need a New Welfare State*. Oxford: Oxford University Press.

- Ferrer, M., Medina, L., y Torcal, M. (2006). La participación política: factores explicativos. En J. R. Montero, J. Font y M. Torcal (Eds.), *Ciudadanos, asociaciones y participación en España*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Feingold, E. (1977). Citizen Participation: A Review of the Issues. En Metsch, J. M., Rosen, H., y Levey, S. (Eds.), *The consumer and the health care system: Social and managerial perspectives*. New York: Spectrum Publications.
- Ferrera, M. (1995). Los Estados de bienestar del sur en la Europa Social. En S. Sarasa y L. Moreno (Comp.) *El Estado del Bienestar en la Europa del Sur* (pp: 85-109). Madrid: CSIC.
- Ferrera, M. (1996). The "Southern" model of welfare state in social Europe. *Journal of European Social Policy*, 6(1), 17-37.
- Ferrera, M. (2010). The South European Countries. En F. G. Castles, S. Leibfried, J. Lewis, H. Obinger y C. Pierson (Eds.), *The Oxford Handbook of the Welfare State* (pp 616-629). Oxford: Oxford University Press.
- Fiske, S. T., y Taylor, S. E. (1991). *Social cognition*. New York: McGraw-Hill.
- Flanagan, C. A. (2003). Trust, identity, and civic hope. *Applied Developmental Science*, 7, 165-171.
- Flanagan, C. A. (2004). Volunteerism, leadership, political socialization and civic engagement. En R. M. Lerner y L. Steinberg (Eds.), *Handbook of Adolescent Psychology* (pp 721-746). Hoboken, NJ: Wiley.
- Font J., Montero, J.R., y Torcal, M. (2006). Ciudadanos, asociaciones y activistas. En J. R. Montero, J. Font, y M. Torcal (Eds.), *Ciudadanos, asociaciones y participación en España* (pp 25-43). Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Frank, R. H. (1999). *Luxury Fever*. New York: Free Press.
- Franklin, M. N. (2004). *Voter turnout and the dynamics of electoral competition in established democracies since 1945*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fukuyama, F. (1996): *Trust: The social virtues and the creation of prosperity*. London: Penguin Books.
- Fullerton, A. S. and Wallace, M. (2007). Traversing the flexible turn: US workers' perceptions of job security, 1977-2002. *Social Science Research*, 36, 201-221.
- Fundación Josep Laporte (2006). *Confianza en el Sistema Nacional de Salud*. Disponible en: [www.fbjoseplaporte.org](http://www.fbjoseplaporte.org).
- Fundación Josep Laporte (2009). *Derechos y deberes de los usuarios del sistema sanitario*. Disponible en: [www.fbjoseplaporte.org](http://www.fbjoseplaporte.org).
- Fundación Josep Laporte (2011). *Alfabetización sanitaria y competencia cívica*. Disponible en: [www.fbjoseplaporte.org](http://www.fbjoseplaporte.org).
- Funes, M. J. (1994). Procesos de socialización y participación comunitaria. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 74, 173-188.
- Furedi, F. (2006). *Culture of Fear Revisited: Risk-taking and the Morality of Low Expectation*. London: Continuum.
- Gabriel, O. W. (1995). Political Efficacy and Trust. En J. W. Van Deth y E. Scarbrough (Eds.), *The Impact of Values*. Oxford: Oxford University Press.
- Gabriel, O. W. y Van Deth, J. W. (1995). Political Interest. En J. W. Van Deth y E. Scarbrough (Eds.), *The Impact of Values* (pp. 390-411). Oxford: Oxford University Press.

- Galais, C. 2008. *¿Socialización o contexto? La implicación política subjetiva de los españoles (1985-2006)*. Tesis doctoral. Departamento de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Autónoma de Barcelona.
- Galais, C. (2012). ¿Cada vez más apáticos? El desinterés político juvenil en España en perspectiva comparada. *Revista Internacional de Sociología*, 70(1), 107-127.
- Galston, W. A. (2001). Political knowledge, political engagement and civic education. *Annual Review of Political Science*, 4, 217-234.
- Garrett, G. (1998). Global Markets and National Politics: Collision Course or Virtuous Circle? *International Organization*, 52, 787-824.
- Gautié, J. y Schmitt, J. (Eds.). (2010). *Low Wage Work in the Wealthy World*. New York: Russell Sage Foundation.
- Gelissen, J. (2000). Popular Support for Institutionalized Solidarity: A Comparison Between European Welfare States. *International Journal of Social Welfare*, 9(4), 285-300.
- Gerhold, L. (2009). *Umgang mit makrosozialer Unsicherheit: Zur individuellen Wahrnehmung und Bewältigung gesellschaftlich-politischer Phänomene*. Lengerich: Pabst.
- GESOP (2011). *La mayoría de españoles querían votar la reforma constitucional*. El Periódico, 27 de septiembre. <http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/mayoria-espanoles-querian-votar-reforma-constitucional-1162339>.
- Gilbert, N. (2002). *Transformation of the Welfare State: The Silent Surrender of Public Responsibility*. New York: Oxford University Press.
- Giddens, A. (1999). *Consecuencias de la modernidad*. Madrid: Alianza Editorial.
- Giddens, A. (2007). *Sociología*. Madrid: Alianza Editorial.
- Glennerster, H. (2009). Understanding the Finance of Welfare: What it Costs and How to Pay for It. Bristol: Policy Press.
- Glennerster, H. (2010). The Sustainability of Western Welfare States. En F. G. Castles, S. Leibfried, J. Lewis, H. Obinger y C. Pierson (Eds.), *The Oxford Handbook of the Welfare State* (pp 689-702). Oxford: Oxford University Press.
- Goul Andersen, J. (1999). Changing Labor Markets, New Social Divisions and Welfare States Support. En Svallfors, S. y Taylor-Gooby, P. (Eds.) *The End of the Welfare State? Responses State Retrenchment* (pp 12-23). London: Routledge.
- Green, F. (2009). Subjective employment insecurity around the world. *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society*, 2, 343-363.
- Grönlund, K. (2003). *Knowledge and Turnout: A Comparative Analysis*. Paper presented at the 2nd ECPR General Conference, Marburg, Germany.
- Grönlund, K., y Milner, H. (2006). The determinants of political knowledge in comparative perspective. *Scandinavian Political Studies*, 29,(4), 386-406.
- Gutiérrez Sastre, M. (2005): *La participación en los servicios públicos de bienestar*. Madrid: Consejo Económico Social. Colección Estudios.
- Gyford, J. (1991). *Citizens, consumers and councils. Local Government and the Public*. London: Macmillan.
- Hacker, J. S. (2006). *The Great Risk Shift: The Assault on American Jobs, Families, Health Care, and Retirement-And How You*

- Can Fight Back*. Oxford: Oxford University Press.
- Haller, M. and Hadler, M. (2006). How Social Relations and Structures Can Produce Happiness and Unhappiness: An International Comparative Analysis. *Social Indicators Research*, 75, 169-216.
- Hasenfeld, Y., y Rafferty, J. A. (1989). The determinants of public attitudes toward the Welfare State. *Social Forces*, 67(4), 1027-1048.
- Heckman, J. J. (2004). Invest in the very young. En: R. E. Tremblay, R. G. Barr, R. De V. Peters, (Eds.), *Encyclopedia on Early Childhood Development* [en línea] (pp 1-2). Montreal, Quebec: Centre of Excellence for Early Childhood Development. Disponible en: <http://www.child-encyclopedia.com/documents/HeckmanAN Gxp.pdf>.
- Hess, R. D. y Torney-Porta, J. (1967). *The Development of Political Attitudes in Children*. Chicago: Aldine.
- Hirschman, A. O. (1970). *Exit, Voice and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations and States*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Hoskins, B. L. (2006). *A Framework for the Creation of Indicators on Active Citizenship and on Education and Training for Active Citizenship*. ISPRA. European Commission.
- Hoskins, B., y D'Hombres, B. (2008). Does formal education have an impact on active citizenship behaviour? *European Educational Research Journal*, 7(3), 386-402.
- Hoskins, B. L., Villalba, E., Van Nijlen, D., y Barber, C. (2008). *Measuring Civic Competence in Europe: A Composite Indicator based on IEA Civic Education Study 1999 for 14-Year-Olds in School*. CRELL research paper, EUR 23210.
- Luxembourg: Official Publications of the European Communities.
- Hoskins, B. L., y Mascherini, M. (2009). Measuring active citizenship through the development of a composite indicator. *Social Indicators Research*, 90, 459-488.
- Hoskins, B. L., y Deakin Crick, R. (2010). Competences for Learning to Learn and Active Citizenship: different currencies or two sides of the same coin? *European Journal of Education*, 45(1), 120-137.
- Hoskins, B. L., Barber, C., Van Nijlen, D., y Villalba, E. (2011). Comparing Civic Competence among European Youth: Composite and Domain-Specific Indicators Using IEA Civic Education Study Data. *Comparative Education Review*, 55(1), 82-110.
- Hoskins, B. L., Villalba, C., y Saisana, M. (2012). *The 2011 Civic Competence Composite Indicator (CCCI-2): Measuring Young People's Civic Competence across Europe Based on the IEA International Citizenship and Civic Education Study*. Ispra, Italy, European Commission, 100pp. (doi:10.2788/67938).
- Howard, M. M. (2003). *The weakness of civil society in post-communist Europe*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Howe, P. 2002. Where have all the voters' gone? *Inroads* 12.
- Howell, J., y Pearce, J. (2002). *Civil society and development. A critical exploration*. London: Lynne Rienner Publishers.
- Huckfeldt, R. R. (1979). Political participation and the neighborhood social context. *American Journal of Political Science* (August): 579-592.
- Huckfeldt, R. R. (1979). *Politics in Context: Assimilation and Conflict in Urban Neighborhoods*. New York: Agathon Press.

- Hyman, H. H. (1959). *Political Socialization*. New York: Free Press.
- Idler, E. L., y Benyamini, Y. (1997). Self-rated health and mortality: A review of twenty-seven community studies. *Journal of Health and Social Behavior*, 38, 21-37.
- IEF (2011). *Opiniones y actitudes fiscales de los españoles en el 2010*. Instituto de Estudios Fiscales. Doc. N°9/11.
- IGOP (2006). *La dimensión racional de la exclusión social y las políticas de protección social*. Disponible en: <http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/51875.pdf>
- Inglehart, R. (1997). *Modernization and Postmodernization*. Princeton: Princeton University Press.
- Inglehart R. F., y Welzel, C. (2005). *Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence*. New York: Cambridge University Press.
- Institute of Medicine (2004). *Health literacy: a prescription to end confusion*. Washington DC: National Academies Press.
- Irish Taskforce on Active Citizenship (2007): *The Concept of Active Citizenship*. Dublin: Secretariat of the Taskforce on Active Citizenship.
- Iversen, T. y Soskice, D. (2001). An asset theory of social policy preferences. *American Political Science Review*, 95(4), 875-893.
- Iversen, T. y Stephens, J. D. (2008). Partisan politics, the welfare state, and three worlds of human capital formation. *Comparative Political Studies*, 41(4/5), 600-637.
- Jackman. R. W. (1987). Political institutions and voter turnout in the industrial democracies. *American Political Science Review*, 81, 405-424.
- Jacoby, W. (2000). Issue framing and public opinion on government spending. *American Journal of Political Science*, 44(4), 750-767.
- Jaime Castillo, A. M. (2009). Actitudes cívicas y dimensiones de la ciudadanía democrática en Europa. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 125, 47-80.
- Janoski, T., y Wilson, J. (1995). Pathways to volunteerism: Family socialization and status transmissions models. *Social Forces*, 74, 271-292.
- Jennings, M. K., Van Deth, J. W., et al (1990). *Continuities in Political Action: A longitudinal Study of Political Orientations in Three Western Democracies*. Berlin: Walter de Gruyter.
- Jennings, M. K., y Stoker, L. (2004). Social trust and civic engagement across time and generations. *Acta Politica*, 39, 342-379.
- Jovell, A. J. (2006a). El paciente del futuro. *Anales del Sistema Sanitario de Navarra*, 29(Supl.3), 85-90.
- Jovell, A. J. (2006b): *Análisis de regresión logística*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Cuadernos Metodológicos, nº15.
- Jovell, A. J. (2007). *La confianza: En su ausencia, no somos nadie*. Barcelona: Plataforma Editorial.
- Jovell, A. J., Blendon, R. J., Navarro, M. D., Fleischfresser, C., Benson, J. M., Desroches, C. M., Weldon, K. J. (2007). Public trust in the Spanish health-care system. *Health Expectations*, 10(4), 350-7.
- Jovell, A. J. (2012a). *El metge social: Apunts per a una medicina humanista. Canvi social i sanitat*. Barcelona: Proteus.
- Jovell, A. J. (2012b). *Te puede pasar a ti: La sanidad pública beneficia a todos*. Barcelona: Proteus.



- Jover, G., y Naval, C. (2008). Transformed Institutions – Transformed Citizenship Education: Remarks on the current situation in Spain. *Journal of Social Science Education*, 6(2), 29-39.
- Justice Policy Institute (2002). *Cellblocks or classrooms?* Disponible en: <http://www.justicepolicy.org/article.php?id=14>.
- Kaase, M. (1990). Mass Participation. En Jennings, M. K., Van Deth, J. W., et al (1990). *Continuities in Political Action: A longitudinal Study of Political Orientations in Three Western Democracies*. Berlin: Walter de Gruyter.
- Kawachi, I., Kennedy, B. P., y Glass, R. (1999). Social capital and self-rated health: A contextual analysis. *American Journal of Public Health*, 89(8), 1187-1193.
- Knoke, D. (1990). *Political Networks. The Structural Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Korpi, W. y Palme, J. (1998). The paradox of redistribution and strategies to equality: Welfare State institutions, inequality, and poverty in the Western countries. *American Sociological Review*, 63, 5, 661-687.
- Kristof, N. D. (2011). *Occupy the Classroom*. The New York Times, 19 de octubre. Disponible en: [http://www.nytimes.com/2011/10/20/opinion/occupy-the-classroom.html?\\_r=1&ref=nicholasdkristof](http://www.nytimes.com/2011/10/20/opinion/occupy-the-classroom.html?_r=1&ref=nicholasdkristof)
- Leighley, J. E. (1990). Social interaction and contextual influences on political participation. *American Politics Quarterly*, 18, 459-475.
- Lemke, M., y Gonzales, P. (2006). *U. S. Student and Adult Performance on International Assessments of Educational Achievement. Findings from the Condition of Education 2006*. National Center for Education Statistics, Institute of Education Sciences. U. S. Department of Education. Disponible en: <http://nces.ed.gov/pubs2006/2006073.pdf>.
- Leon, D. A., Vagero, D., y Olausson, P. O. (1992). Social class differences in infant mortality in Sweden: comparison with England and Wales. *BMJ*, 305, 687-691.
- Levinson, M. (2009). Taking action: What we can do to address the civic engagement gap. *Social Studies Review*, 48, 33-36.
- Lin, N. (2000). Inequality in social capital. *Contemporary Sociology*, 29(6), 785-795.
- Luskin, R. C. (1990). Explaining Political Sophistication. *Political Behavior*, 1, 331-362.
- Kaase, M. (1999). Interpersonal trust, political trust and non-institutionalised political participation. *West European Politics*, 22, 1-21.
- Kahne, J., y Middaugh, E. (2008). *Democracy for some: The civic opportunity gap in high school*. CIRCLE Working Paper 59.
- Kahne, J., y Sporte, S. (2008). Developing citizens: the impact of civic learning opportunities on students' commitment of civic participation. *American Educational Research Journal*, 45(3), 738-766.
- Kalleberg, A. L. (2009). Precarious work, insecure workers: Employment relations in transition. *American Sociological Review*, 74, 1-22.
- Kawachi, I., Kennedy, B., y Glass, R. (1999). Social capital and self-rated health: Contextual analysis. *American Journal of Public Health*, 89(8), 1187-1193.
- Kawachi I., y Berkman, L. F. (2000). Social cohesion, social capital and health. En L. F. Berkman y I. Kawachi (Eds.) *Social*

*Epidemiology*. New York: Oxford University Press.

Kitschelt, H. y Rehm, P. (2006). New Social Risk and Political Preferences. En K. Armingeon y G. Bonoli (Eds.), *The Politics of Post-Industrial Welfare States: Adapting Postwar Social Policies to New Social Risks* (pp 52-82). London: Routledge.

Kulin, J. y Svallfors, S. (2011). Class, values, and attitudes towards redistribution: A European comparison. *European Sociological Review*, 1-13.

Kumlin, S. (2007a). Overloaded or Undermined? European Welfare States in the Face of Performance Dissatisfaction. En S. Svallfors (Ed.), *The Political Sociology of the Welfare State*. Stanford: Stanford University Press.

Kumlin, S. (2007b). The Welfare State. Values, Policy Preferences, and Performance evaluations. En R. J. Dalton y H-D. Klingemann (Eds.), *The Oxford Handbook of Political Behavior*. Oxford: Oxford University Press.

Lane, R. E. (1959). *Political Life: Why and how People Get Involved in Politics*. New York: Free Press.

Lauglo, J., y Oia, T. (2008). Education and civic engagement among Norwegian youth. *Policy future in education*, 6(2), 203-223.

Layard, R. (2005). *La felicidad: Lecciones de una nueva ciencia*. Madrid: Taurus.

Leitch Review of Skills. (2006). *Prosperity for all in the Global Economy: World Class Skills*. London: HM Treasury.

Levinson, M. (2009). Taking action: What we can do to address the civic engagement gap. *Social Studies Review*, 48, 33-66.

Levy, J. D. (2010). Welfare Retrenchment. En F. G. Castles, S. Leibfried, J. Lewis, H. Obinger y C. Pierson (Eds.), *The Oxford*

*Handbook of the Welfare State* (pp 552-565). Oxford: Oxford University Press.

Liebfried, S. (1992). Towards a European welfare state? On integrating poverty regimes into the European Community. En Z. Ferge y J. E. Kolberg (Eds.) *Social Policy in a Changing Europe* (pp 245-279). Frankfurt: Campus.

Lijphart, A. (1997). Unequal participation: Democracy's unresolved dilemma. *American Political Science Review*, 91, 1-14.

Lindstrom, M. (2004). Social capital, the miniaturization of community and self-reported global and psychological health. *Social, Science and Medicine*, 59(3), 595-607.

Listhaug, O. (1995). The Dynamics of Trust in Politicians. En H. D. Klingemann y D. Fuchs (Eds.), *Citizens and the State*. Oxford: Oxford University Press.

Lutkus, A. D., y Weiss, A. R. (2007). *The Nation's Report Card: Civics 2006*. Washington, DC: U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics.

Mainguet, C., y Baye, A. (2006) Defining a framework of indicators to measure the social outcomes of learning. En R. Desjardins, y T. Schuller (Eds), *Measuring the Effects of Education on Health and Civic Engagement*. Proceedings of the Copenhagen Symposium (pp 153-162). Paris: CERI y OECD.

Mansbridge, J. (Ed.) (1990). *Beyond Self-Interest*. Chicago: The University of Chicago Press.

Marsh, A. y Kaase, M. (1979). Background of political action. En Barnes S. H. y Kaase, M. (Eds), *Political Action and Mass participation in Five Western Democracies*. Beverly Hills: Sage Publications.

- Martí, J. (2006): *Tècniques participatives per al debat grupal: Eines per a la participació ciutadana*. Barcelona: Diputació de Barcelona.
- Martín, I. (2005). *Contending Explanations about Interest in Politics in Two new Democracies: Greece and Spain*. Working Paper 52/2005. Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de Madrid. Madrid.
- Martínez Martín, M. (2006). Formación para la ciudadanía y educación superior. *Revista Iberoamericana de Educación*, 42, 85-102.
- Mau, S. (2003). *The Moral Economy of Welfare States: Britain and Germany Compared*. London: Routledge.
- Maurin, E. and Postel-Vinay, F. (2005). The European job security gap. *Work and Occupations*, 32, 229–252
- McGee, D. L. Liao, Y., Cao, G. y Cooper, R. S. (1999). Self-reported health status and mortality in a multiethnic US cohort. *American Journal of Epidemiology*, 149(1), 41-46.
- Mendenhall, R., Kalil, A. y Spindel, L. J. (2008). Job loss at mid-life: Managers and executives face the “New Risk Economy”. *Social Forces*, 87, 185-209.
- Merelman, R. (1986). Revitalizing Political Socialization. En M. Herman (Ed.), *Political Psychology*. San Francisco: Jossey Bass.
- Mettler, S. y Soss, J. (2004). The consequences of public policy for democratic citizenship: Bridging policy studies and mass politics. *Perspectives on Politics*, 2(1), 55-73.
- Michailakis, D. y Schirmer, W. (2010). Agents of their health? How the Swedish Welfare State introduces expectations of individual responsibility. *Sociology of Health & Illness*, 32(6), 930-947.
- Miilunpulo, S., Vuori, I., Oja, P., Pasanen, M., Urponen, H. (1997). Self-rated health status as a health measure: the predictive value of self-reported health status on the use of physician services and on mortality in the working-age population. *Journal of Clinical Epidemiology*, 50(5), 517-528.
- Milberg, W. y Winkler, D. (2010). Economic insecurity in the new wave of globalization: Offshoring and the labour share under varieties of capitalism. *International Review of Applied Economics*, 24, 285-308.
- Milner, H. (2002). *Civic Literacy: How Informed Citizens Make Democracy Work*. Hanover, NH: University Press of New England.
- MIR (2011). *Resultados de las Elecciones Locales 2011*. Disponible en: [http://elecciones.mir.es/resultados2011/99MU/DMU99999TO\\_L1.htm](http://elecciones.mir.es/resultados2011/99MU/DMU99999TO_L1.htm). Ministerio del Interior.
- Montero, J. R., Font, J., y Torcal, M. (2006). *Ciudadanos, asociaciones y participación en España*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Montero, J. R., Westholm, A., y Van Deth, J. W. (2007). Conclusion: The Realization of Democratic Citizenship in Europe. En J. W. Van Deth, J. R. Montero, y A. Westholm (Eds.), *Citizenship and Involvement in European Democracies: A Comparative Analysis* (pp 415-438). London: Routledge.
- Morales, L. (2003). *Ever less engaged citizens? Associational membership and political participation in Spain*. Working Paper 20, ICPS.
- Morales, L. (2006). *Instituciones, movilización y participación política*. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
- Morales, L., y Mota, F. (2006). El asociacionismo en España. En J. R. Montero, J. Font y M. Torcal (Eds.),

- Ciudadanos, asociaciones y participación en España* (pp 77-104). Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Morales, L., Mota, F., y Pérez-Nievas, S. (2006). La participación en asociaciones: factores individuales. En J. R. Montero, J. Font, y M. Torcal (Coords.) *Ciudadanos, asociaciones y participación política en España* (pp: 157-182). Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Moreno, L. (2000). The Spanish development of Southern European Welfare. En S. Kuhnle (Ed.) *Survival of the European Welfare State* (pp 146-165). London: Routledge.
- Mossey, J. M. y Shapiro, E. (1982). Self-rated health: a predictor of mortality among the elderly. *American Journal of Public Health*, 72(8), 800-808.
- Mota, F. (1999) La realidad asociativa en España. En J. Subirats (Ed.), *¿Existe sociedad civil en España?* (pp 37-64). Madrid: Fundación Encuentro.
- Mouffe, C. (2000). *The Democratic Paradox*. London: Verso.
- Muñoz de Bustillo, R. (2000). Retos y restricciones del Estado de Bienestar en el cambio de siglo. En R. Muñoz de Bustillo (Ed.) *El Estado de Bienestar en el cambio de siglo* (pp 50-108). Madrid. Alianza.
- Narayan, D., y Cassady, M. (2001). A dimensional approach to measuring social capital: development and validation of a social capital inventory. *Current Sociology*, 49(2), 59-102.
- Narvaiza, J. L. (2010). Confianza en las instituciones y justificación de comportamientos. En J. Elzo., y M. Silvestre (Dirs.), *Un individualismo placentero y protegido. Cuarta Encuesta Europea de Valores en su aplicación a España* (pp 213-250). Bilbao: Publicaciones de la Universidad de Deusto.
- Näswall, K. y De Witte, H. (2003) 'Who feels insecure in Europe? Predicting job insecurity from background variables. *Economic and Industrial Democracy*, 24, 189-215.
- Naval, C., y Jover, G. (2006). The research on moral and civic education in the Spanish educational theory – Evolution and current trends. *Journal of Social Science Education*, 5,(2), 93-104.
- NCOC (2012). *The Civic Health Index. National Conference on Citizenship*. Disponible en: <http://www.ncoc.net/CHI>.
- Newton, K. (2007). Social and Political Trust. En R. J. Dalton y H-D. Klingemann (Eds.), *The Oxford Handbook of Political Behavior*. Oxford: Oxford University Press.
- Newton, K., y Norris, P. (2000). Confidence in Public Institutions: Faith, Culture, or Performance. En S. Pharr y R. D. Putnam (Eds.), *Disaffected Democracies: What's Troubling the Trilateral Countries?* Princeton: Princeton University Press.
- Nie, N. H., Junn, J., y Stehlik-Barry, K. (1996). *Education and Democratic Citizenship in America*. Chicago: University of Chicago Press.
- Nie, N. H., y Hillygus, S. (2001). Education and Democratic Citizenship. En D. Ravitch y J. P. Viteri (Eds.), *Making Good Citizens: Education and Civil Society*. New Haven: Yale University Press.
- Niemi, R. y Junn, J. (1998). *Civic education: What makes students learn?* New Haven: Yale University Press.
- Norris, P. (1996). Does Television Erode Social Capital? A Reply to Putnam. *Political Science and Politics*, 29(3), 474-480.
- Norris, P. (Ed.) (1999). *Critical Citizens. Global support for Democratic Governance*. Oxford: Oxford University Press.

- Norris, P. (2002). *Democratic Phoenix: Reinventing political activism*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Noya, F. J. (1999). El valor de la ambivalencia. Las actitudes ante la meritocracia, la igualdad y el Estado de Bienestar en España en perspectiva comparada. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 86/99, 185-221.
- Nye, J., Zelikow, P., y King, D. (Eds.) (1997). *Why People Don't Trust Government*. Cambridge: Harvard University Press.
- Obinger, H. y Wagschal, U. (2010). Social Expenditure and Revenues. En F. G. Castles, S. Leibfried, J. Lewis, H. Obinger y C. Pierson (Eds.), *The Oxford Handbook of the Welfare State* (pp 333-352). Oxford: Oxford University Press.
- Obradovic, J., y Masten, A. (2007). Developmental antecedents of young adult civic engagement. *Applied Developmental Science*, 11, 2-19.
- OECD (2000). *Literacy in the Information Age: Final Report of the International Adult Literacy Survey*. Paris: OCDE. Disponible en: <http://www.oecd.org/dataoecd/48/4/41529765.pdf>.
- OECD (2001). *The Well-Being of Nations: the Role of Human and Social Capital*. Paris: OECD.
- OECD (2005). *Definition and Selection of Competences (DeSeCo): Theoretical and Conceptual Foundations: Strategy Paper*. Paris: OECD.
- OECD (2008a). *Revenue Statistics 1965-2006*. Paris: OECD.
- OECD (2008b). *Education at a glance*. Paris: OECD.
- OECD (2009). *Private Pensions Outlook 2008*. Paris: OECD.
- OECD (2012). *Literacy, Numeracy and Solving Problem in Technology-Rich Environments - Framework for the OECD Survey of Adult Skills*. Disponible en: [http://www.oecd.org/document/28/0,3746,en\\_2649\\_201185\\_44429596\\_1\\_1\\_1\\_1,00.html](http://www.oecd.org/document/28/0,3746,en_2649_201185_44429596_1_1_1_1,00.html).
- Oliver, J. (2007). *Affluenza*. London: Vermilion.
- Olson, M., Jr. (1971). *The Logic of Collective Action. Public Goods and the Theory of Groups*. New York: Schocken Books.
- Osberg, L. (1998). *Economic Insecurity*. SPRC Discussion Paper, 88. Sydney: Social Policy Research Centre.
- Pacek, A., y Radcliff, B. (2008). Assessing the Welfare State: The politics of happiness. *Perspectives on Politics*, 6, 267-277.
- Pacheco, J. S., y Plutzer, E. (2007). Stay in school, don't become a parent: Teen life transitions and cumulative disadvantages for voter turnout. *American Politics Research*, 35, 32-56.
- Parry, G., Moyser, G., y Day, N. (1992). *Political Participation and Democracy in Britain*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Peña, D. (2002). *Análisis de datos multivariantes*. Madrid: McGraw Hill.
- Petterson, P. (2001). Welfare state legitimacy: Ranking, rating, paying: the popularity and support for Norwegian welfare programmes in the mid 1990s. *Scandinavian Political Studies*, 24(1), 27-49.
- Pharr, S. J., y Putnam, R. D. (2000). *Disaffected Democracies: What's Troubling the Trilateral Countries?* Princeton: Princeton University Press.
- Pharr S. J., Putnam, R. D., y Dalton, R. J. (2000). Trouble in the advanced

democracies? A quarter-century of declining confidence. *Journal of democracy*, 11, 5-25.

Pierson, P. (1995). *Dismantling the welfare state? Reagan, Thatcher and the politics of retrenchment*. Cambridge: Cambridge University Press.

Pierson, P. (2001). Post-Industrial Pressures on the Mature Welfare States". En P. Pierson (Ed.) *The New Politics of the Welfare State* (80-103), Oxford: Oxford University Press.

Poortinga, W. (2006a). Social capital: An individual or collective resource for health? *Social Science and Medicine*, 62(2), 292-302.

Poortinga, W. (2006b). Social relations or social capital? Individual and community health effects of bonding social capital. *Social Science and Medicine*, 63(1), 255-270.

Poortinga, W. (2006c). Do health behaviours mediate the association between social capital and health? *Preventive Medicine*, 63(11), 2835-2846.

Popkin S. L., Dimock, M. A. (1999). Political Knowledge and Citizen Competence. En S. K. Elkin & K. E. Soltan 1999, *Citizen Competence and Democratic Institutions* (pp. 117-146). University Park: Penn. State University Press.

Putnam, R. D. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press.

Putnam, R. D. (1996). The strange disappearance of civic America. *Policy* 12:3-15.

Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.

QCA (1998). *Education for Citizenship and the Teaching of Democracy in Schools (The Crick Report)*. London: Qualifications and Curriculum Authority.

Quillian, L. (1995). Prejudice as a response to perceived group threat: population composition and anti-immigrant and racial prejudice in Europe. *American Sociological Review*, 60, 586-611.

Radcliff, B. (2001). Politics, markets and life satisfaction: The political economy of human happiness. *American Political Science Review*, 95, 939-952.

Ranci, C. (Ed.). (2010). *Social Vulnerability in Europe: The New Configuration of Social Risks*. Houndmills, Palgrave: Macmillan.

Rodríguez Cabrero, G., y Codorniú, J. M. (Eds.) (1996). *Las entidades voluntarias en España. Institucionalización, estructura económica y desarrollo asociativo*. Madrid: Ministerio de Asuntos Sociales; 1996.

Roller, E. (1992). *Einstellungen der Bürger zum Wohlfahrtsstaat der Bundesrepublik Deutschland [The Citizens' Attitudes to the (West)German Welfare State]*. Opladen: Westdeutscher Verlag.

Rose, R. (1991). Is American Public Policy Exceptional? En B. E. Shafer (Ed.), *Is America Different? A New Look at American Exceptionalism*. Oxford: Clarendon Press.

Rose, R. (2000). How much does social capital add to individual health? A survey study of Russians. *Social Science and Medicine*, 51, 1421-1435.

Rothstein, B. (1998). *Just Institutions Matter. The Moral and Political Logic of the Universal Welfare State*. Cambridge: Cambridge University Press.

Rothstein, B. (2000). Trust, social dilemmas and collective memories. *Journal of Theoretical Politics*, 12(4), 477-501.

- Rothstein, B. (2001). Social capital in the social democratic welfare state. *Politics and Society*, 29(2), pp 207-241.
- Rothstein, B. (2011) Can markets be expected to prevent themselves from self-destruction? *Regulation & Governance* 5,(4), 387-404.
- Rothstein, B. y Steinmo, S. (2002). (Eds.). *Restructuring the Welfare State: Political Institutions and Policy Change*. New York: Palgrave.
- Rothstein, B., y Teorell, J. (2008). What is quality of government? A theory of impartial government institutions. *Governance*, 21(2): 165-190.
- Rothstein, B., y Uslaner, E. M. (2005). *All for All: Equality and Social Trust*. LSE Health and Social Care Discussion Paper Series. London: London School of Economics and Political Science.
- Ruiz Olabuénaga, J. I. (2001). *El voluntariado en España*. Documentación social, 122, 67-84.
- Rychen, D. S., y Salganik, L. H. (Eds.) (2001). *Defining and Selecting Key Competences*. Seattle, Toronto, Bern, Göttingen: Hogrefe & Huber Publishers.
- Sabbagh, C., y Vanhuyse, P. (2006). Exploring attitudes towards the welfare state: students' views in eight democracies. *Journal of Social Policy*, 35(4), 607-628.
- Safrit, D. R., y Lopez, J. (2001). Exploring Hispanic American involvement in community leadership through volunteerism. *Journal of Leadership Studies*, 7, 3-19.
- Sandel, M. J. (2008). *Filosofía pública: Ensayos sobre moral en política*. Barcelona: Marbot.
- Sanz, R. (2002). *El cinismo político de la ciudadanía española. Una propuesta analítica para su estudio*. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas. Colección "Opiniones y Actitudes".
- Saunders, P. (1990). *A Nation of Home Owners*. London: Unwin Hyman.
- Saunders, P. (2010). Inequality and Poverty. En F. G. Castles, S. Leibfried, J. Lewis, H. Obinger y C. Pierson (Eds.), *The Oxford Handbook of the Welfare State* (pp 526-538). Oxford: Oxford University Press.
- Scheepers, P., Gijsberts, M., y Coenders, M. (2002). Ethnic exclusionism in European countries: Public opposition to civil rights for legal migrants as a response to perceived ethnic threat', *European Sociological Review*, 18, 17-34.
- Schlozman, K. L., Burns, N., Verba, S., y Donahue, J. (1995). Gender and citizen activity: is there a different voice? *American Journal of Political Science*, 39, 267-293.
- Schmitter, P. C. (2001). Parties Are not what they once Were. En L. Diamond y R. Gunther (Eds.), *Political Parties and Democracy*. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
- Schulz, W., Ainley, J., Fraillon, J., Kerr, D., y Losito, B. (2010). *ICCS 2009 International Report. Civic knowledge, attitudes, and engagement among lower-secondary school students in 38 countries*. Amsterdam: IEA. Disponible en: [http://www.iea.nl/fileadmin/user\\_upload/Publications/Electronic\\_versions/ICCS\\_2009\\_International\\_Report.pdf](http://www.iea.nl/fileadmin/user_upload/Publications/Electronic_versions/ICCS_2009_International_Report.pdf).
- Setién, M. L. (2010). Bienestar individual, confianza en los demás y actitudes hacia la inmigración. En J. Elzo., y M. Silvestre (Dirs.), *Un individualismo placentero y protegido. Cuarta Encuesta Europea de Valores en su aplicación a España* (pp 185-212). Bilbao: Publicaciones de la Universidad de Deusto.

- Sidiqqi, A., Kawachi, I., Berkman, L., Subramanian, R. V. y Hertzman, C. (2007). Variation of socioeconomic gradients in children's developmental health across advanced Capitalist societies: analysis of 22 OECD nations. *International Journal of Health Services*, 37(1), 63-87.
- Siedler, T. (2007). *Schooling and Citizenship: evidence from compulsory schooling reforms*. IZA Discussion Papers 2573. Institute for the Study of Labor.
- Sihvo, T., y Uusitalo, H. (1995). Attitudes towards the welfare state have several dimensions. *Scandinavian Journal of Social Welfare* 4, 215-223.
- Slomczynski, K. M., y Shabad, G. (1998). Can support for democracy and the market be learned in school? A natural experiment in post-communist Poland. *Political Psychology*, 19, 749-779.
- Smetana, J., y Metzger, A. (2005). Family and religious antecedents of civic involvement in middle class African American late adolescents. *Journal of Research on Adolescence*, 15, 325-352.
- Smith, E. S. (1999). The effects of investments in the social capital of youth on political and civic behavior in young adulthood: A longitudinal analysis. *Political Psychology*, 20(3), 553-580.
- Sniderman, P. M., Fletcher, J. E., Russell, P. H., y Tetlock, P. E. (1996). *The Clash of Rights: Liberty, Equality, and Legitimacy in Pluralist Democracy*. New Haven: Yale University Press.
- Stansfeld, S. A. (1999). Social support and social cohesion. En M. Marmot, y R. G. Wilkinson (Eds.), *Social Determinants of Health* (pp 175-178). Oxford: Oxford University Press.
- Steinmo, S. (1994). Rethinking American Exceptionalism: Culture or Institutions? En L. Dodd y C. Jillson (Eds.), *The Dynamics of American Politics*. Boulder, CO: Westview Press.
- Stephan, W. S. y Stephan, C. W. (2000). An Integrated Threat Theory of Prejudice. En S. Oskamp (Ed.), *Reducing Prejudice and Discrimination* (pp 23-46). Mahwah, NJ: Erlbaum,
- Subirats, J. (Ed.) (1999) *¿Existe sociedad civil en España?* Madrid: Fundación Encuentro.
- Subirats, J., Knoepfel, P., Larrue, C., y Varone, F. (2008). *Análisis y gestión de políticas públicas*. Barcelona: Ariel.
- Subramanian, S. V., Kawachi, I., y Kennedy, B. P. (2001). Does the state you live in make a difference? Multilevel analysis of self-rated health in the US. *Social Science and Medicine*, 53(1), 9-19.
- Subramanian, S. V., Kim, D. J. y Kawachi, I. (2002). Social trust and self-rated health in US communities: a multilevel analysis. *Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Medicine*, 79(4), Suppl. 1, S21-S34.
- Sundquist, K., y Yang, M. (2007). Linking social capital and self-rated health: A multilevel analysis of 11,175 men and women in Sweden. *Health & Place*, 13(2), 324-334.
- Svallfors, S. (1989). *Vem älskar välfärdsstaten? Attityder, organiserade intressen och svensk välfärdspolitik [Who loves the Welfare State? Attitudes, Organized Interests and Swedish Welfare Policies]*. Lund: Arkiv.
- Svallfors, S. (1991). The Politics of Welfare Policy in Sweden: Structural Determinants and Attitudinal Cleavages. *British Journal of Sociology* 42(4), 609-634.
- Svallfors, S. (1997). Worlds of welfare and attitudes to redistribution: A comparison of



- eight western nations. *European Sociological Review*, 13, 3, 283-304.
- Svallfors, S. (Ed.) (2007). *The Political Sociology of the Welfare State: Institutions, Social Cleavages and Orientations*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Svallfors, S. (2010). Public Attitudes. En F. G. Castles, S. Leibfried, J. Lewis, H. Obinger y C. Pierson (Eds.), *The Oxford Handbook of the Welfare State* (pp 241-251). Oxford: Oxford University Press.
- Svallfors, S. (2011). *Government quality, redistributive attitudes, and attitudes to welfare policies: A European comparison*. Working paper.
- Svallfors, S. y Taylor-Gooby, P. (Eds.) (1999). *The End of the Welfare State? Responses State Retrenchment*. London: Routledge.
- Swank, D. (2002). *Global Capital, Political Institutions, and Policy Change in Developed Welfare States*. New York: Cambridge University Press.
- Tahlin, M. (2008). *Asset specificity, labor market outcomes, and policy preferences*. Ponencia presentada en el SOFI SWS Seminar (Swedish Institute for Social Research, Stockholm University). Stockholm, marzo.
- Tarrow, S. (1997). *El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid: Alianza.
- Taylor-Gooby, P. (1985). *Public Opinion, Ideology, and State Welfare*. London: Routledge & Kegan Paul.
- Taylor-Gooby, P. (1999). "Hollowing out" versus The New Interventionism. Public Attitudes and Welfare Futures. En S. Svallfors y P. Taylor-Gooby (Eds.), *The End of the Welfare State? Responses State Retrenchment* (pp 1-12). London: Routledge.
- Taylor-Gooby, P. (2001). Sustaining State Welfare in Hard Times: Who Will Foot the Bill? *Journal of European Social Policy*, 11(2), 133-147.
- Taylor-Gooby, P. (2009). *Political Legitimacy and Social Citizenship*. Paper prepared for the Social Policy Association Annual Conference. June-July 2009.
- Thompson, Espluga y Alonso (1999): La realidad sobre la participación de los ciudadanos en la atención sanitaria: motivaciones para implicarse. *Revista de Calidad Asistencial*, 6(14), 600-601.
- Tocqueville, A. (1989). *La democracia en América*, tomos 1 y 2. Madrid: Aguilar.
- Topf, R. (1995). Beyond Electoral Participation. En H-D. Klingemann y D. Fuchs (Eds.), *Citizens and the State*. Oxford: Oxford University Press.
- Torcal, M. (2006). Political Disaffection and Democratization History in New Democracies. En M. Torcal, y J. R. Montero (Eds.), *Political Desaffection in Contemporary Democracies: Social Capital, Institutions and Politics* (pp 197-223). London: Routledge.
- Torcal, M., y Lago, I. (2006). Political participation, information, and accountability: some consequences of political disaffection in new democracies. En M. Torcal, y J. R. Montero (Eds.), *Political Desaffection in Contemporary Democracies: Social Capital, Institutions and Politics* (pp. 308-331). London: Routledge.
- Torcal, M., Montero, J. R. y Teorell, J. (2006). La participación política en España: modos y niveles en perspectiva comparada. En J. R. Montero, J. Font y M. Torcal (Coords.), *Ciudadanos, asociaciones y participación en España* (pp 47-76). Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.

- Torney-Purta, J., Schwille, J., y Amadeo, J.-A. (Eds.). (1999). *Civic education across countries: Twenty-four national case studies from the IEA Civic Education Project*. Amsterdam: IEA.
- Torney-Purta, J., Lehmann, R., Oswald, H., y Schulz, W. (2001). *Citizenship and education in twenty-eight countries: Civic knowledge and engagement at age fourteen*. Amsterdam: IEA.
- Torney-Purta, J., y Vermeer Lopez, S. (2006). *Developing Citizenship Competencies from Kindergarten through Grade 12: A Background Paper for Policymakers and Educators*. Denver, CO: Education Commission of the States.
- Touya, D. M. (2006). *Can we teach civic attitudes?* Estudios sobre la economía Española. Fundación de Estudios de Economía Aplicada.
- Trilling, B., y Fadel, C. (2009). *21st Century Skills: Learning for life in Our Times*. New York, NY: John Wiley.
- Tulloch, J. y Lupton, D. (2003). *Risk and Everyday Life*. London: Sage.
- Unión Europea (2006). *Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea del 18 diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente (2006/962/CE)*. *Diario Oficial de la Unión Europea*. Disponible en: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:es:PDF>.
- Uslaner, E. M. (2002). *The Moral Foundations of Trust*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Uslaner, E. M. (2008). Trust as a Moral Value. En D. Castiglione, J. W. Van Deth, y G. Wolleb (Eds.), *Handbook of Social Capital* (pp 101-121). Oxford: Oxford University Press.
- Uslaner, E. M. (2010). Trust and the economic crisis of 2008. *Corporate Reputation Review*, 13 (2), 110-123.
- Vagero, D., y Lundberg, O. (1989). Health inequalities in Britain and Sweden. *Lancet*, 2, 35-36.
- Van Deth, J. W. (1990). Interests in Politics. En M. K. Jennings, y J. W. Van Deth (Eds.), *Continuities in Political Action. A Longitudinal Study on Political Orientations in Three Western Democracies* (pp 45-65). Berlin: W. de Gruyter.
- Van Deth, J. W. (1997). Introduction: Social Involvement and Democratic Politics. En J. W. Van Deth (Ed.), *Private Groups and Public Life: Social Participation, Voluntary Associations and Political Involvement in Representative Democracies*. London: Routledge.
- Van Deth, J. W., Montero, J. R., y Westhom, A. (Eds.) (2007). *Citizenship and Involvement in European Democracies: A Comparative Analysis*. London: Routledge.
- Van Kersbergen, K. (2000). The Declining Resistance of Welfare States to Change? En S. Kuhnle (Ed.) *Survival of the European Welfare State* (pp 19-36). London: Routledge.
- Van Oorschot, W. (2006a). Values and Attitudes. En T. Fitzpatrick, N. Manning, J. Midgley, H-J. Kwon, G. Pascall (Eds.), *The International Encyclopedia of Social Policy* (pp 138-139). London: Routledge.
- Van Oorschot, W. (2006b). Who should get what, and why? On deservingness criteria and the conditionality of solidarity among the public? *Journal of European Social Policy*, 16(1), 23-42.
- Van Oorschot, W., y Finsveen, E. (2010): Does the welfare state reduce inequalities in people's social capital? *International Journal of Sociology and Social Policy*, 30(3/4), 192-193.

- Van Oorschot, W. y Meuleman (2012): Welfarism and the multidimensionality of welfare state legitimacy: Evidence from the Netherlands, 2006. *International Journal of Social Welfare*, 21, 79-93.
- Vázquez, R. (2011). Participación cívica, mujeres y asociacionismo en España. *Psicología Política*, 42, 69-88.
- Veenstra, G. (2002). Social capital and health (plus wealth, income inequality and regional health governance). *Social Science and Medicine*, 58, 615-622.
- Veldhuis, R. (1997). *Education for Democratic Citizenship: Dimensions of Citizenship, Core Competencies, Variables, and International Activities*. Strasbourg: Council of Europe. ERIC ED 430 867.
- Verba, S. y Nie, N. H. (1972). *Participation in America: Political democracy and social equality*. New York: Harper and Row.
- Verba, S., Nie, N. H., y Kim, J. (1978). *Participation and Political Equality: A Seven-Nation Comparison*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Verba, S., Scholzman, K., y Brady H. (1995). *Voice and Equality: Civic voluntarism in American Politics*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- WAE (2011). *Welfare Attitudes in a Changing Europe: Module template with background information, survey questions to be used in ESS Round 4*. Disponible en: [www.europeansocialsurvey.org](http://www.europeansocialsurvey.org).
- Wagschal, U. (2005). *Steuerpolitik und Steuerreformen im internationalen Vergleich. Eine Analyse der Ursachen und Blockaden [Tax Policies and Tax Reforms in International Comparison. An Analysis of Driving Forces and Blockades]*. Münster: LIT.
- Wallace, C., y Pichler, F. (2009). More participation, happier society? A comparative study of civil society and the quality of life. *Social Indicators Research*, 93, 255-274.
- Wattenberg, M. P. (2002). *Where Have all the Voters Gone?* Harvard University Press. Cambridge, MA.
- Weber, M. (1984). *Economía y sociedad*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Weerd, de M., Gemmeke, M., Righter, J., y van Rij, C. (2005). *Indicators for Monitoring Active Citizenship and Citizenship Education*. Final Report. Amsterdam: Regioplan/European Commission.
- Weinert, F. E. (2001). Concept of competence: A Conceptual Clarification. En D. S. Rychen, y L. H. Salganik (Eds.), *Defining and Selecting Key Competences* (pp 45-65). Seattle, Toronto, Bern, Göttingen: Hogrefe & Huber Publishers.
- Welch, S. (1977). Women as Political Animals? A test of some explanations for male-female political participation differences. *American Journal of Political Science*, 4, 711-730.
- Westheimer, J., y Kahne, J. (2003). What kind of citizen? Political choices and educational goals. *Campus Compact Reader*, 1-13.
- Westholm, A., Lindquist, A., y Niemi, R. (1990). Education and the Making of the Informed Citizen: Political Literacy and the Outside World. En O. Ichilov (Ed.), *Political Socialization, Education and Democracy* (pp 177-204). New York: Columbia University.
- Wilkinson, R. y Marmot, M. (2006). *Social Determinants of Health: the Solid Facts*. Copenhagen: World Health Organization.
- Wilkinson, R. y Pickett, K. (2006). Income inequality and population health: a review and explanation of the evidence. *Social Science and Medicine*, 62(7), 1768-84.

- Wilkinson, R. y Pickett, K. (2009a). *Desigualdad: Un análisis de la (in)felicidad colectiva*. Madrid: Turner.
- Wilkinson, R. y Pickett, K. (2009b). Income inequality and social dysfunction. *Annual Review of Sociology*, 35, 493-511.
- Wolfinger, R., y Rosenstone, S. (1980). *Who Votes?* New Haven: Yale University Press.
- Woolcock, M. (1998). Social capital and economic development: Toward a theoretical synthesis and policy framework. *Theory and Society*, 27(2), 151-208.
- Zaff, J. F., Youniss, J., y Gibson, C. M. (2009). *An inequitable invitation to citizenship. Non-college-bound youth and civic engagement*. Denver, CO: Phylanthropy for Active Civic Engagement.
- Zaff, J. F., Boyd, M., Li, Y., Lerner, J. V., y Lerner, R. M. (2010). Active and engaged citizenship: Multi-group and longitudinal factorial analysis of an integrated construct of civic engagement. *Journal of Youth and Adolescence*, 39, 736-750.
- Zaff, J. F., Hart, D., Flanagan, C. A., Youniss, J., y Levine, P. (2010). Developing civic engagement within a civic context. En A. M. Freund y M. E. Lamb (Eds.), *The Handbook of Life-Span Development*, vol. 2. Hoboken, NJ: Wiley.
- Zaff, J. F., Kawashima-Ginsberg, K., y Lin, E. S. (2011). Advances in Civic Engagement Research: Issues of Civic Measures and Civic Context. En R. M. Lerner, J. V. Lerner, y J. B. Benson (Eds.), *Advances in Child Development and Behavior* (pp 273-308). New York: Academic Press.
- Zaller, J. R. (1992). *The Nature and Origins of Mass Opinion*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Zarcadoolas, C., Pleasant, A., y Greer, D. (2006). *Advancing Health Literacy: A Framework for Understanding and Action*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

## 9. ANEXOS

### 9.1. Cuestionario sobre alfabetización sanitaria y competencia cívica

Buenos/as días/tardes,

- Estamos realizando una encuesta desde la Fundación Josep Laporte y la Universidad Autónoma de Barcelona sobre alfabetización sanitaria y cívica. La encuesta se realizará en 3.000 ciudadanos españoles y su contribución sería de gran utilidad para mejorar el conocimiento que se tiene sobre las percepciones, opiniones y conductas de la población en estos temas. ¿Sería tan amable de contestar unas preguntas al respecto? La información será tratada con la máxima confidencialidad y no durará más de XX minutos.
- Sí. Muchas gracias.
- No. Muchas gracias.

#### (Sección A: alfabetización sanitaria)

*Entrevistador:* Ahora continuaremos con unas preguntas sobre salud y sobre dónde encuentra la información que necesita.

**1. ¿En general, suele buscar información sobre temas de salud?**

- Sí (pasar a pregunta 5)
- No (pasar a pregunta 6)
- No sabe
- No contesta

**2. ¿Cuál es el motivo principal por el que busca información sobre salud? (señale una sola respuesta)**

- a) Buscar información general sobre una enfermedad determinada
- b) Resolver dudas sobre síntomas, tratamientos o pruebas diagnósticas
- c) Evitar tener que ir al médico
- d) Mejorar sus hábitos de vida
- e) Conocer la experiencia de otras personas que tienen su enfermedad o la de un familiar
- f) Otro motivo: \_\_\_\_\_ (indíquelo)
- g) No sabe
- h) No contesta

**3. ¿Cómo valoraría la calidad de la información de salud de las siguientes fuentes de información?**

	Muy buena	Buena	Regular	Mala	No sabe	No contesta
a) Médico o enfermera						
b) Farmacéutico/a						
c) Familiares o amigos						
d) Libros o revistas						
e) TV						
f) Asociaciones de pacientes						
g) Internet						

**4. En general, ¿cómo diría que es la información que obtiene de las siguientes personas o lugares (muy difícil de entender, difícil de entender, fácil de entender o muy fácil de entender?)**

	Muy fácil de entender	Fácil de entender	Difícil de entender	Muy difícil de entender	No sabe	No contesta
a) Información <u>oral</u> que le da el profesional sanitario (médico o enfermera)						
b) Información <u>escrita</u> que le da el profesional sanitario (médico o enfermera)						
c) Un recordatorio para realizar una visita médica o prueba						
d) Un prospecto de un medicamento						
e) Una etiqueta de alimentación						
f) Explicación escrita para recoger una muestra de orina o tomarse un medicamento						
g) Un informe médico (un certificado, informe de alta, etc.)						

**5. Indique su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones**

	Totalmente de acuerdo	Algo de acuerdo	Algo en desacuerdo	Totalmente en desacuerdo	No sabe	No contesta
a) La salud depende, en gran medida, del cuidado que se tenga de uno mismo/a						
b) Mantener una buena salud depende de la suerte más que de otra cosa						
c) Dejo que sea el médico el que tome las decisiones más adecuadas para mi salud						
d) En general, es mejor cuidar de uno mismo que tener que ir al médico						

**6. Indique lo seguro que se siente Ud. en las siguientes situaciones**

	Muy seguro	Seguro	Poco seguro	Nada seguro	No sabe	No contesta
a) Tomar la temperatura con un termómetro						
b) Entender las instrucciones para tomar un medicamento correctamente						
c) Ayudar a un familiar a seguir su tratamiento adecuadamente						
d) Mantener una dieta saludable o hacer ejercicio regularmente						

**7. Respecto a las siguientes actitudes y comportamientos durante una visita al médico, indique la frecuencia con la que Ud. ...**

	Muy a menudo	A menudo	Pocas veces	Nunca	No sabe	No contesta
a) Escribe las preguntas que quiere hacer al médico						
b) Explica al profesional todos los síntomas que ha notado						
c) Lleva la documentación necesaria a la visita médica						
d) Pregunta todo aquello que no ha entendido						

**8. ¿Con qué frecuencia suele realizar las siguientes acciones?**

	Muy a menudo	A menudo	Pocas veces	Nunca	No sabe	No contesta
a) Al menor síntoma o dolor acude a su médico						
b) Al menor síntoma o dolor acude a urgencias						
c) Suele tomarse algún medicamento que ya tenga, si no se encuentra bien						
d) Suele pensar en su salud y en cómo se encuentra						



**9. En general, ¿cuál sería su grado de acuerdo con las siguientes afirmaciones?**

	Totalmente de acuerdo	Algo de acuerdo	Algo en desacuerdo	Totalmente en desacuerdo	No sabe	No contesta
a) En su última visita médica, entendió todo lo que el doctor o la enfermera dijeron						
b) Tuvo alguna pregunta sobre su salud o la de un familiar que le hubiera gustado comentar pero no lo hizo						
c) Resuelve sus preguntas con el farmacéutico cuando no puede hacerlo con su médico						
d) Tuvo que pedir ayuda para entender la información escrita que le facilitaron en el centro de salud						
e) Dispone del conocimiento necesario sobre su enfermedad						
f) Cuando ha tomado un medicamento no ha tenido dudas para tomarlo						
a) Cuando ha acudido a la visita médica ha pensado que el profesional no le ha escuchado						

**10. Hablando en términos generales, ¿Podría indicar si conoce ...?**

	Sí	No	No sabe	No contesta
a) Cómo realizar primeros auxilios				
b) Los riesgos de hacerse una radiografía				
c) Sus derechos como paciente				
d) Alguna carta de derechos de los pacientes				
e) Sus derechos como consumidor				
f) Un documento de voluntades anticipadas				
g) Para qué sirve el consentimiento informado antes de realizar una prueba o de ser operado quirúrgicamente				

**11. En general, ¿cree que la población hace un uso adecuado de los servicios de urgencias?**

- Sí
- No
- Ns
- Nc

**(Sección B: alfabetización cívica y participación social)**

*Entrevistador: A continuación, le haré unas preguntas sobre su participación social y su grado de bienestar y satisfacción.*

**12. En general, usted diría que es...**

- Muy feliz
- Bastante feliz
- No muy feliz
- Nada feliz
- No sabe
- No contesta

**13. ¿Puede usted decirme si es miembro activo, miembro no activo o no es miembro de alguna organización de voluntariado?**

- Soy miembro activo
- Soy miembro no activo
- No soy miembro
- No sabe
- No contesta

**En caso afirmativo, por favor especifique cuál:.....**

**14. En su opinión, ¿qué importancia tienen las siguientes acciones o actitudes para ser un buen ciudadano?**

	Muy importante	Bastante importante	Poco importante	Nada importante	NS	NC
Votar en las elecciones						
Seguir la actualidad política (por ejemplo a través de los periódicos, la radio, la televisión o Internet)						
Participar en actividades que benefician al conjunto de la población (por ejemplo, asistir a un acto benéfico o realizar una acción de voluntariado)						

**15. Suponga que el ayuntamiento de su población pretende crear una comisión en la que participe la ciudadanía, para decidir cuáles deben ser las prioridades en políticas sociales. ¿Estaría dispuesto usted a participar en las reuniones de esta comisión?**

- Estaría dispuesto a compartir la responsabilidad de la decisión, participando con voz y voto.
- Estaría dispuesto a participar con voz pero sin voto.
- Estaría dispuesto a buscar o recibir información, pero sin participar en las reuniones.
- No me interesaría participar de ninguna manera.
- No sabe
- No contesta

**En caso afirmativo, ¿cree usted que se debería cumplir algún requisito para participar? (por ejemplo, tener un nivel educativo mínimo, haber participado en otras ocasiones o haber ejercido un cargo público)**

- Sí
- No
- No sabe
- No contesta

**16. ¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está más de acuerdo?**

- El gobierno debería bajar los impuestos y gastar menos en políticas sociales.
- El gobierno debería subir los impuestos y gastar más en políticas sociales.
- No sabe
- No contesta

**17. ¿En qué medida está usted interesado/a por los asuntos políticos y sociales que afectan a su país?**

- Muy interesado/a
- Bastante interesado/a
- Poco interesado/a
- Nada interesado/a
- No sabe
- No contesta

**18. ¿Votó en las recientes elecciones municipales?**

- Sí
- No
- No sabe
- No contesta

**19. ¿En qué grado se sentiría usted capaz de defender su propio punto de vista sobre un tema político o social controvertido?**

- Muy capaz
- Bastante capaz
- No demasiado capaz
- Nada capaz

**20. Utilizando una escala de 1 a 10, siendo el 1 “muy poco” y el 10 “mucho”, cuánto cree usted que sabe acerca de la Unión Europea, sus políticas, sus instituciones.**

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10

**21. En general, ¿cómo cree usted que será su bienestar personal en el futuro comparado con el actual?**

- Mejor
- Más o menos igual
- Peor
- No sabe
- No contesta

**20. En general, ¿cómo cree usted que será la vida de sus hijos comparada con la suya?**

- Más segura
- Igual de segura
- Menos segura
- No sabe
- No contesta

**21. Si (lea cada ítem, ejemplo: el gobierno) tiene un problema en la calidad o seguridad de uno de sus productos o servicios, ¿confía usted que tomarán la decisión correcta para corregirlo? ¿diría usted que confía mucho, algo o nada en que así lo harán?**

	Mucho	Algo	Nada	No sabe	No contesta
Gobierno					
Compañías de aviación					
Hospitales públicos					
Compañías farmacéuticas					
Bancos					
RENFE					
Universidades					
Medios de comunicación					
Centros de salud o atención primaria públicos					
Compañías de teléfonos					

**22. ¿Cuánto confía usted en que [lea cada ítem, ejemplo: los periodistas) procuran hacer el bien para la sociedad? ¿diría usted que confía mucho, algo o nada en que lo hacen?**

	Mucho	Algo	Nada	No sabe	No contesta
Periodistas					
Políticos					
Médicos de atención primaria o de cabecera					
Médicos de hospital					
Abogados					
Economistas					
Profesores de educación básica y bachiller					
Profesores de Universidad					
Compañías de teléfonos					

**23. ¿Cuánto confía usted en que (lea cada ítem, ejemplo: las enfermeras) están haciendo su trabajo de forma responsable respondiendo a las necesidades de atención sanitaria de los pacientes? ¿diría usted que confía mucho, algo o nada?**

	Mucho	Algo	Nada	No sabe	No contesta
Enfermeras					
Médicos de atención primaria o de cabecera					
Dentistas					
Farmacéuticos					
Médicos de hospital público					
Compañías farmacéuticas					
Gobierno de su comunidad autónoma					
Gobierno español					
Mutuas o compañías privadas de seguros médicos					

**24. En nuestro país, ¿cree usted que la cantidad de dinero empleada en atención sanitaria es excesiva, más o menos la adecuada o insuficiente?**

- Excesiva
- Más o menos la adecuada
- Insuficiente
- No sabe
- No contesta

**25. Si el gobierno no tuviera suficiente dinero para pagar todos los servicios de atención sanitaria necesarios en España. ¿estaría usted de acuerdo o en desacuerdo con que el gobierno pidiera a las personas atendidas que pagaran...**

	De acuerdo	En desacuerdo	No sabe	No contesta
1 euro por receta médica				
2 euros por una visita al médico de atención primaria o de cabecera				
10 euros por estancia hospitalaria				
Aumentar los impuestos directos o del IRPF				
Aumentar los impuestos del alcohol y el tabaco				
Aumentar los impuestos de la electricidad y la gasolina				

**(Sección C: estado de salud)**

*Entrevistador: Continuaremos con unas preguntas sobre su estado de salud.*

**26. Durante los últimos 12 meses, en general, ¿usted diría que su estado de salud es muy bueno, bueno, malo o muy malo?**

- a) Muy bueno
- b) Bueno
- c) Malo
- d) Muy malo
- e) No sabe
- f) No contesta

**27. Durante los últimos 12 meses, ¿ha tenido alguna incapacidad, minusvalía, enfermedad o dolencia que le impidiera participar plenamente en el trabajo, la escuela, el trabajo doméstico o en otras actividades durante más de 10 días seguidos?**

- a) Sí
- b) No → Pasa a Datos Demográficos
- c) No sabe
- d) No contesta

- ¿Qué tipo de dolencia, enfermedad o problema de salud ha tenido? Pasar a 46 (en caso de padecer una enfermedad crónica)

(Entrevistador/a: Anote con detalle)\_\_\_\_\_

**28. ¿Dispone de un plan de cuidados escrito para realizar un mejor manejo de su condición de salud?**

- a) Sí→ Pasa a 30
- b) No
- c) No sabe
- d) No contesta

**29. ¿Con que frecuencia sigue su plan de cuidados?**

- a) Muy frecuentemente
- b) Frecuentemente
- c) Nunca
- d) No sabe
- e) No contesta

**(Sección D: datos demográficos y socioeconómicos)**

*Entrevistador: finalizaremos con unas preguntas generales.*

**30. ¿Me podría decir cuál es su edad?**

\_\_\_\_\_ Años

**31. Sexo**

- a) Masculino
- b) Femenino

**32. Lengua materna**

-----

**33. Otros idiomas que habla**

-----

**34. Lugar de nacimiento**

- a) Ciudad:-----
- b) País: -----

*(Si el entrevistado procede de un país extracomunitario, preguntar al entrevistado):*

- Año de llegada a España:

**37.**

**¿Cuál es su situación civil?**

- a) Soltero/a
- b) Casado/a o en pareja
- c) Viudo/a
- d) Separado/a / Divorciado/a
- e) Otras situaciones: \_\_\_\_\_
- f) No sabe
- g) No contesta

**38. ¿Cuál de los siguientes estudios ha completado?**

- a) No sabe leer, ni escribir y sin estudios
- b) Estudios primarios incompletos
- c) Estudios primarios o EGB hasta 5º
- d) Estudios de graduado escolar, EGB hasta 8º, bachiller elemental o similar
- e) Estudios de bachiller superior, BUP, FP o similar
- f) Estudios universitarios medios (périto, ingeniería técnica, escuelas universitarias o similar)
- g) Estudios universitarios superiores (ingeniería superior, licenciatura o doctorado)
- h) No sabe
- i) No contesta

**39. ¿En cuál de los siguientes grupos situaría los ingresos anuales netos de su hogar durante el último año fiscal, considerando las aportaciones de todos los miembros del mismo?**

- a) Menos de 6.000 euros
- b) De 6.000 a 12.000 euros
- c) De 12.001 a 15.000 euros
- d) De 15.001 a 24.000 euros
- e) De 24.001 a 30.000 euros
- f) De 30.001 a 36.000 euros
- g) De 36.001 a 48.000 euros
- h) Más de 48.000 euros
- i) No sabe
- j) No contesta

**40. Actualmente, ¿cuál es su situación laboral?**

- a) Trabajador por cuenta propia o ajena
- b) En paro
- c) Jubilado
- d) Incapacidad laboral
- e) Estudiante
- f) Ama de casa
- g) Otro: \_\_ (indíquelo)
- h) No sabe
- i) No contesta

**41. ¿Cuántas personas viven en su domicilio contándole a usted?**

-----

**Muchas gracias por su colaboración**



## 9.2. Resultados del análisis de correspondencias múltiples para la competencia cívica y las variables sociodemográficas

Figura 33 Representación gráfica de las variables del análisis de correspondencias múltiples y el sexo como variable suplementaria.



Figura 34: Representación gráfica de las variables del análisis de correspondencias múltiples y la edad como variable suplementaria.



Figura 35: Representación gráfica de las variables del análisis de correspondencias múltiples y el nivel de estudios como variable suplementaria.

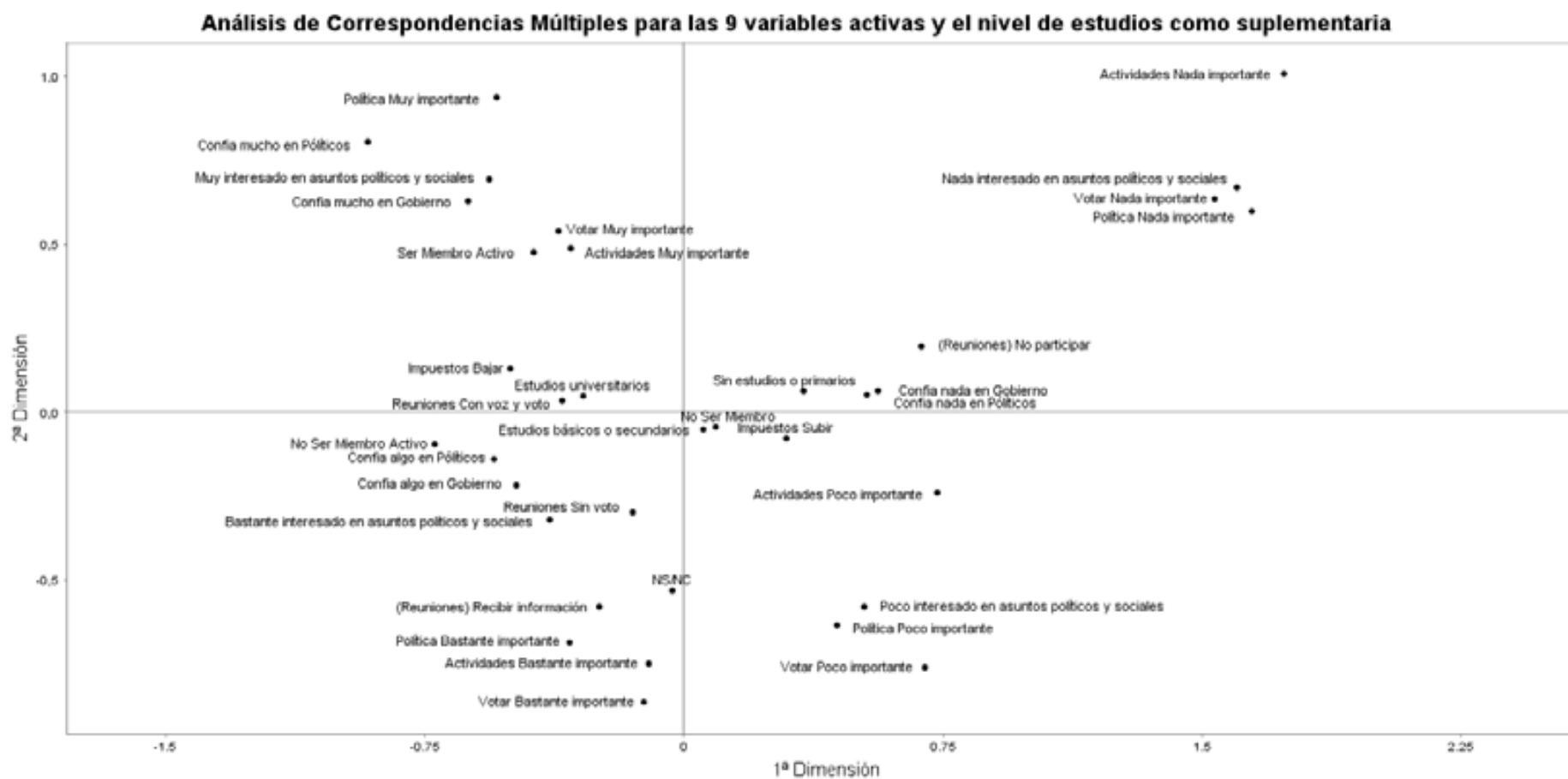


Figura 36: Representación gráfica de las variables del análisis de correspondencias múltiples y el estado de salud como variable suplementaria.

